

EL DERECHO EDUCATIVO EN VENEZUELA



Alfonso J. Arena V.

Alfonso J. Arena V.

EL DERECHO EDUCATIVO EN VENEZUELA

*Prólogo de la Dra. María Sofía Barrios F. Profesora de la
cátedra de Derecho Romano I y II. Coordinadora
Académica de la Escuela de Derecho Universidad Santa
María. Caracas - Venezuela.*

Título: *El Derecho Educativo en Venezuela.*

Autor: *Alfonso José Arena Vargas*

Año: *2014*

País: *Venezuela*

Depósito legal: lfi25220143402722

ISBN: 978-980-12-7584-8

Para citas en referencias Bibliográficas:

Arena V, Alfonso J. (2014). *El Derecho Educativo en Venezuela*. Ed.
Arenas V. Aragua, Venezuela: Autor.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o procedimiento sin la autorización del autor

Dedicado

*A mi madre:
Dra. Arcadia L. Vargas.*

.

*A mí estimada Amiga
Dra. María Sofía Barrios*

*A todos mis Amigos y Profesores del Doctorado
En Ciencias de la Educación (ULAC).*

*A todos aquellos Maestros y Profesores quienes ejercen la Carrera
Pedagógica con Ética, Moral y el Ánimo Incansable,
pero necesario para cambiar a la sociedad
venezolana y construir un mejor futuro.*

In Memoriam

Mi padre José Arenas Gallardo

Mi abuelo Dr. Miguel Arenas Martín

*Quienes a causa de la Guerra Civil Española, se vieron en la
Obligación de abandonar Europa, pero tuvieron la maravillosa
Oportunidad de conocer Venezuela y vivir en ella
Hasta sus últimos días...*

“Los padres son los primeros y principales educadores de sus propios hijos, y en este campo tienen incluso una competencia fundamental: son educadores por ser padres. Comparten su misión educativa con otras personas e instituciones, como la Iglesia y el Estado. Sin embargo, esto debe hacerse siempre aplicando correctamente el principio de subsidiariedad”.

***Juan Pablo II
Carta a las Familias (1994).***

ÍNDICE

	Págs.
INTRODUCCIÓN.....	13
CAPITULO I	
Los Sujetos de Derecho Educativo.....	39
CAPITULO II	
Perspectiva Internacional del Derecho Educativo.....	51
CAPITULO III	
El Derecho Educativo y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.....	93
CAPITULO IV	
El Derecho Educativo y la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.....	119
CAPITULO V	
El Derecho Educativo y los Medios Alternativos, para la Resolución de los Conflictos en el Ámbito Escolar.....	183
CAPITULO VI	
Los Acuerdos de Convivencia, Redacción y Legitimación....	243
CAPITULO VII	
La Gestión Escolar, Comunidad Educativa, Organización Estudiantil y Formación Permanente.....	267

CAPITULO VIII

El Derecho Educativo y el Ejercicio de la Profesión Docente...	281
--	-----

CONCLUSIONES	347
---------------------------	-----

BIBLIOGRAFIA	355
---------------------------	-----

ANEXO I

Glosario de Términos.....	359
---------------------------	-----

ANEXO II

Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente Gaceta Oficial N° 5.496. Extraordinario de Fecha: 31 de Octubre del 2000.....	395
--	-----

PRÓLOGO

Asumo una seria responsabilidad aun cuando sea a título de prólogo, al tratarse de una obra de un extraordinario y preocupado colega y amigo Alfonso J. Arena V. Estudioso de la Ciencia del Derecho y, específicamente del Derecho Educativo en Venezuela.

El libro, es el fruto de un estudio serio y profundo, en donde el lector podrá darse una idea acerca de la importancia del Derecho a la Educación, como derecho universal que el Estado está obligado a garantizar de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al igual que el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Por ello el Derecho Educativo, está concebido como una rama del derecho destinada a regular el contexto pedagógico. Sin embargo, aún faltan recursos que orienten a los involucrados en el hecho educativo, en relación con el ejercicio del derecho en esta importante área.

El autor, por otra parte, precisa en su obra el estudio del Derecho Educativo en Venezuela, a través de un compendio que organiza y armonizar, la multitud de disposiciones existentes en nuestra Constitución, y las distintas leyes de nuestro ordenamiento jurídico, relacionadas con el tema, y la perspectiva internacional del Derecho Educativo, así como otros instrumentos jurídicos de carácter internacional, de manera de darles cohesión y coherencia, en cuanto a la praxis, debido a que los mismos, son imprescindibles para quienes necesitan tener, tanto visión global como detalles del Derecho Educativo.

Este libro nos adentra en un análisis profundo de lo importante que es el estudio del Derecho Educativo, desarrollando así, las herramientas para aplicar en el mejoramiento en la calidad educativa de docentes y estudiantes, y el fortalecimiento de la gestión escolar, comunidad educativa, entre otros.

Así como lo expresa el autor, el “Derecho Educativo se sustenta en el estudio, de todo el conjunto de normas existentes en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, legislación educativa, e incluso las disposiciones jurídicas de las diversas áreas del derecho, a fin de alcanzar el objeto de regular la convivencia escolar, desde todos los ámbitos tanto institucionales como socio-pedagógicos”. Realmente, las precedentes afirmaciones conducen a la exigencia e imperiosa necesidad que ha de producirse un cambio en el pensamiento legal, por las incidencias de las nuevas postulaciones en las ciencias jurídicas, las cuales han de afrontar el desarrollo pedagógico respondiendo a sus necesidades, pero proyectándose sobre el hombre para satisfacer sus aspiraciones auténticas, aún inexpresivas, al objeto de que el Derecho, pueda adecuarse a la vida y a su verdadera esencia: la defensa de la dignidad humana.

En fin, mucho me honra la distinción de mi amigo Alfonso J. Arena V, debido a que nos une la misma pasión por el Derecho, y he de expresar, sin temor a equivocación: Que recomiendo esta interesante obra que enriquece y aumenta nuestra literatura jurídica, para su lectura y disfrute.

***Dra. .María Sofía Barrios
Coordinadora Académica de la Escuela de Derecho
Universidad Santa María y Profesora de la cátedra de
Derecho Romano I y II.***

Caracas, septiembre 2014.

INTRODUCCIÓN

El Derecho Educativo, está concebido como una rama del derecho destinada a regular el hecho pedagógico. En este contexto, cabe destacar que estas normas que versan sobre el derecho a la educación y la cultura, forman parte del sistema doctrinario de los Derechos Humanos. Por esta importante razón, se tiene como punto de vital importancia que el derecho a la educación, es uno de los principales derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al igual que los derechos civiles y políticos.

Haciendo énfasis en el estudio de los Derechos Humanos, se tienen diversas teorías doctrinarias que los agrupan o subdividen en generaciones, para el desarrollo teórico-conceptual. Sin embargo, se hace necesario aclarar que la estructura doctrinaria de los Derechos Humanos, no guarda relación con la importancia jurídica, o con el hecho imperativo de la protección y garantías que los mismos determinen. Debido a que todos los Derechos Humanos, son indivisibles e interdependientes, por lo que no existe una

importancia jerárquica real en relación con la aplicación de normas vinculantes, en las respectivas áreas de protección.

De acuerdo a lo descrito, se puede precisar otro punto de vital importancia, el cual está constituido, por el hecho de que la educación en la actualidad, es una de las bases fundamentales para el desarrollo de todos los países del mundo. En tal sentido, la garantía del derecho a una educación digna, de calidad, y sustentada en los principios humanos, es la llave que abre las puertas al entendimiento y la comprensión de los demás derechos, mencionados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En el acontecer actual de la República Bolivariana de Venezuela, se precisa un gran número de instrumentos jurídicos que establecen principios doctrinarios y normas de carácter vinculante, en pro de garantizar la protección de los Derechos Humanos. Sin embargo, aun faltan recursos pedagógicos que orienten a los involucrados en el hecho educativo, en relación con el ejercicio del derecho en esta importante área.

Por otra parte, cabe destacar que los Derechos Humanos, al igual que el Derecho Educativo, no son ramas estáticas dentro de las ciencias jurídicas. Por lo que la principal característica, es la ejecución del mismo en un contexto dinámico, participativo, y que no solo incorpore instrumentos jurídicos coercitivos. Sino que además, impulse un desarrollo fundado en el estudio del contexto educativo, y la transformación de las realidades sociales.

En este ámbito, el derecho deja de estar limitado a las normas o a la ejecución de medidas que determinen una responsabilidad civil, penal o administrativa, según sea el caso, para adaptarse a nuevos procedimientos y formas de ejecución, presentes en actos administrativos, actos conciliatorios o medidas pedagógicas, las cuales en la mayoría de los casos son aplicadas por docentes o directores, y no por las instancias judiciales o administrativas.

Adicionalmente, los estudiantes, los padres, madres o representantes, también están incluidos en el ejercicio del Derecho Educativo. Debido a que dentro de las garantías establecidas en el marco del derecho a la educación, debe existir el consenso, tanto en el compromiso de educar a los

niños, niñas o adolescentes en un ambiente sano y de armonía, como en la aprobación de normas de convivencia, u otros instrumentos destinados a orientar la conducta de los estudiantes, mediante sanciones que tengan una finalidad pedagógica.

En tal medida, se puede considerar que el Derecho Educativo es una rama del derecho, más arraigada en el activismo y la participación que en las regulaciones normativas de orden jurídico-positivista.

Los acuerdos de convivencia, son una de las fuentes primarias que sustentan el ejercicio del Derecho Educativo. Por ello, todos los actores que hacen vida en las instituciones educativas, directores, docentes, estudiantes, consejos educativos, consejos estudiantiles, e incluso los representantes. Deben ser tomados en cuenta para la construcción, la discusión y legitimación de las normas que se estipulen, de la misma forma que puede observarse en los contratos sinalagmáticos, (respetando la condición bilateral o multilateral existente en el acuerdo). Por tal razón, el directivo no impone las reglas a seguir, sino que todos aportan cláusulas, en

las que ambas partes (Estudiantes y Directivo), adquieren derechos y contraen obligaciones.

En el caso de las normas escolares, se destaca la articulación de las mismas con el marco jurídico, establecido en la legislación vigente, el cual tiene por objeto, dar un valor imperativo a las normas en el ámbito de las relaciones entre los estudiantes y la institucionalidad del plantel. Por ello, es común que en los acuerdos de convivencia de las diversas instituciones educativas, se realicen citas textuales, en las que se indiquen normas positivas, y se explique el origen o las razones por las que se implementan las regulaciones que versan en el mencionado instrumento.

En este mismo orden de ideas, se destaca que las normas fijadas en los acuerdos de convivencia, tienen el valor moral asignado por el proceso pedagógico, en el que las sanciones parten de la necesidad de enseñar, destacando una carencia de poder coercitivo. En esta medida, se orienta a incentivar la conciencia de los estudiantes y no al control sancionatorio.

Los acuerdos de convivencia, deben tener una limitación determinada por el ordenamiento jurídico establecido en la legislación vigente, esto quiere decir, que no todo lo que consideremos como faltas disciplinarias debe ser regulado por el instrumento, o por el hecho de estar previsto en el acuerdo, deba estar sujeto a medios alternativos para la resolución de los conflictos.

De conformidad con lo expuesto anteriormente, se precisa la importancia de remitirnos a la legislación en diversas áreas del derecho, civil, penal, administrativo, entre otras, con la finalidad de verificar que las posibles faltas disciplinarias, no constituyan hechos punibles, o que acarreen una responsabilidad civil o administrativa.

En los casos, en que la legislación vigente, nos determine que se puede estar en presencia de hechos punibles, la acción o medida exclusiva de aplicación deberá limitarse solo a poner al presunto responsable a la orden del Ministerio Público, de forma directa o indirecta, mediante la intervención de sus órganos auxiliares (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas CICPC, u otras instancias policiales).

Las instituciones educativas, no sancionan, no castigan y en este orden conceptual, todo delito, debe remitirse a las autoridades. Sin embargo, existen muchas acciones que pueden ser objeto de medios alternativos para la resolución de conflictos. (La conciliación, la mediación, las medidas pedagógicas) y cuando se habla del término, (medidas pedagógicas) se refiere al hecho no de castigar, sino de proponer una estrategia para que un estudiante, repare el daño ocasionado. En este sentido, las acciones de reparación del daño, deben ir acompañadas de un aprendizaje, y debe complementar el proceso pedagógico.

Los medios para la posible reparación de un daño causado por un estudiante, deben ser siempre fines lícitos, enmarcados en la moral, las buenas costumbres y deben retroalimentar la ética del docente. Lo que permite, evidenciar que en cada hecho, en el que un estudiante cometa una falta disciplinaria, se debe poner en práctica un recurso destinado al aprendizaje.

Por ejemplo: *Un estudiante, escribe un grafiti en las paredes de la institución, El docente, el directivo y el representante en un acto conciliatorio, acuerdan que el estudiante*

deberá reparar el daño, no solo aportando económicamente para contribuir con la solución al problema, sino que además, deberá colaborar con el mantenimiento de dicha área, de forma que implique un esfuerzo del estudiante, que permita fortalecer el sentido de pertinencia hacia la institución, y la reflexión del porque de la medida, permitiendo así el aprendizaje.

En consecuencia, se llega a la conclusión de que la sanción, no es coercitiva, debido a que no reprime al estudiante, ni lo priva de ningún derecho. La acción se centra en el acto de enseñar y de corregir una conducta negativa.

Los acuerdos de convivencia, establecen normas que en su mayoría, han sido aprobadas en colectivo, bien sea mediante asambleas educativas o por consulta a los representantes y estudiantes en reuniones extraordinarias. De acuerdo a este argumento, se puede precisar que los estudiantes, aportan ideas de lo que creen que está mal, y de cómo debe desarrollarse la sana convivencia en el plantel. Sin embargo, es inevitable que los estudiantes incurran en hechos, que violenten los acuerdos, aun cuando hayan participado en su construcción. Por lo que, se hace énfasis en el hecho de que

la sanción determine una oportunidad de reflexión, después de la acción.

En relación a la legitimación de las normas de convivencia, cabe destacar que las mismas, deben ser revisadas minuciosamente, tanto por el directivo, docentes y por las instancias correspondientes, como en el caso de la República Bolivariana de Venezuela.

Por ejemplo:

El Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. (CMDNNA).

Siendo la instancia antes mencionada, la encargada de garantizar la defensa de los derechos difusos y colectivos, en materia de protección de niños, niñas y adolescentes.

Al referirse a derechos difusos y colectivos, se entiende que estamos en presencia de todos aquellos derechos, que deben ser garantizados a todos los estudiantes en general. La concepción jurídica de la expresión: (difusos y colectivos). Representa no solo los intereses de un grupo de estu-

diantes, o de un colectivo correspondiente a una institución. En este caso, se quiere significar que el reconocimiento del derecho o garantía, versa sobre todos los estudiantes de todas las instituciones educativas en general.

Como se ha mencionado, el Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CMDNNA), es el ente competente para la legitimación de normas de convivencia, Pero ¿Por qué? La respuesta es algo simple, pero en algunos momentos puede representar confusión. Las normas de convivencia son instrumentos totalmente institucionales y regulan la sana convivencia de un determinado plantel educativo.

Por ello, en algunas circunstancias, es posible que a estas normas, se les llegue a considerar como equiparables a las clausulas de un contrato entre dos o más partes. Sin embargo, los derechos difusos y colectivo son de orden general y en ellos, se destaca la importancia de los acuerdos de convivencia, en la regulación del comportamiento de los estudiantes de las diversas instituciones educativas, lo que representa un interés superior para el Estado. Debido a que mediante las disposiciones establecidas en este instrumento, se

regulan las condiciones que rigen el derecho de los niños, niñas y adolescentes, y su relación con el hecho educativo.

En este sentido, el derecho de los estudiantes representa un interés superior, al igual que el derecho a la educación, lo que determina que violentar una garantía o derecho de un estudiante en una institución educativa, mediante un acto administrativo, es equiparable a violentar el derecho de los estudiantes, como un derecho difuso y colectivo. Por ello, el Estado venezolano determina la protección general de los derechos mencionados de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA).

En otro orden de ideas, no podemos confundir el Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CMDNNA), con el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (CPNNA), debido a que el primero centra sus funciones en la garantía de los derechos difusos y colectivos, y el segundo, en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero de forma individualizada o particular.

El Derecho Educativo, puede decirse que funciona como un instrumento de regulación de la actividad educati-

va, a lo interno de cada institución. Sin embargo, contribuye con el desarrollo del conjunto de normas de todas las instituciones educativas. Por esta razón, se le considera como un elemento que orienta la transformación de la sociedad, aun cuando actualmente, no se define a la sociedad en general como Sujeto de Derecho Educativo. En este orden de ideas, se destacan múltiples dimensiones que orientan el desarrollo de este importante derecho, las cuales a su vez, se sustentan en argumentos, antropológicos, sociales, educativos, culturales y jurídicos, que permiten explicar los fundamentos de esta importante rama del derecho.

Entre los fundamentos antropológicos, se destaca el hacer humano y el desarrollo de la actividad del hombre, como centro de las políticas que sustentan la transformación del estudiante en un ciudadano, en una persona con conciencia de lo jurídico, de las normas que regulan su existencia, su hacer de vida y su desarrollo como hombre o mujer que hace vida en un entorno social con los demás.

En lo social, se orienta al estudiante en su formación ciudadana como principio elemental para el desarrollo de una nueva sociedad, que actúa en función del respeto de la

ley, de forma consciente y evidencia el progreso socio-cultural de los ciudadanos.

En el contexto pedagógico, el Derecho Educativo, aporta una idea clara y precisa de cómo se debe orientar al estudiante, para que mediante su ejercicio se organice un aprendizaje que fortalezca el hecho educativo, desde el fenómeno que implica la influencia del derecho en la educación. Entendiendo que el derecho, siempre estará presente en todas las etapas de la vida escolar, y que el mismo, permite mejorar la convivencia, mediante el respeto de los Derechos Humanos.

En lo cultural, se entiende que el derecho aporta mejores condiciones para la vida y la sociedad, garantizando, no solo el acceso a la cultura, su goce y disfrute, sino además, el desarrollo socio-cultural que promueve las transformaciones sociales, desde el hacer humano y su relación con el contexto educativo, que a su vez, permite al hombre ser creador de su propia cultura, desde el respeto de sus tradiciones, usos y costumbres.

En lo jurídico, se precisa como argumento primordial, el desarrollo legislativo, que facilita el ejercicio del De-

recho Educativo en el ámbito escolar, garantizando así, su aplicación en un modelo multidimensional, transversal, dinámico y participativo. En este contexto, se destaca que en la República Bolivariana de Venezuela, existen actualmente un gran número de instrumentos que garantizan la aplicación del Derecho Educativo, no solo desde el ámbito escolar, sino que además, estos instrumentos hacen posible regular otros contextos, no determinados por el ejercicio de la profesión docente.

El Derecho Educativo, regula el hecho pedagógico desde todos los ámbitos de acción. Por ello, no se centra en la relación (docente-estudiante), o en la relación: (docente-estudiante-directivo). Debido a que la institución en el desarrollo de sus funciones, se articula con diversos sectores de la comunidad, tales como: Organizaciones Comunitarias, Grupos Vecinales, Agrupaciones Culturales, Grupos Deportivos, el Comercio Cercano a las Instituciones Educativas, Representantes, Instituciones del Estado, Personal no Docente (Obreros y Administrativos), entre otros.

De acuerdo con esta importante realidad, que se evidencia al estudiar el contexto de cualquier plantel educativo,

se puede observar que la escuela, el liceo, el preescolar, la universidad, o academias de artes u oficios, se articulan con la comunidad, y establecen relaciones muy estrechas con ella.

En este sentido, de las relaciones existentes entre escuela y comunidad, surgen derechos que deben garantizarse y se contraen obligaciones entre los diversos sujetos de derecho. En muchos casos, esta relación entre la institución y las personas, sean naturales o jurídicas, se establece de forma permanente y los derechos u obligaciones, surgen de igual manera. Sin embargo, se pueden establecer de forma eventual relaciones con otros sectores o entes externos, pero con bases jurídicas que permitan otorgar derechos y contraer obligaciones.

La legislación educativa Venezolana, se deriva de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), como norma suprema. Sin embargo, la Carta Magna, tiene su origen en el proceso constituyente de 1999, y en este proceso político-jurídico, se tomaron como referencia instrumentos nacionales e internacionales, pertinentes con el propósito de construir una propuesta jurídica, que respondie-

ra a las realidades sociales, educativas, éticas, morales, étnicas, de libertades y derechos que necesitaba la sociedad venezolana. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), se sustenta en los derechos y garantías, establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y el principio de libertad y determinación de los pueblos, inspirado por las ideas del libertador Simón Bolívar, tal como puede evidenciarse en su preámbulo citado a continuación:

El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana; con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible

de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad; en ejercicio de su poder originario representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y en referendo democrático, decreta la siguiente¹.

En relación a la presente cita, se destaca que la Carta Magna decretada por la Asamblea Nacional Constituyente, establece el reconocimiento de los derechos que la legislación venezolana anterior a 1999, no garantizaba en su totalidad, de acuerdo con las garantías previstas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El modelo educativo venezolano, carecía de gratuidad y era necesario, un cambio de las estructuras jurídicas que permitiera, el goce del derecho a la educación para todos los ciudadanos, de conformidad con los tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos.

En este mismo orden de ideas, se precisa que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, in-

¹ Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Caracas, jueves 19 de febrero de 2009. Gaceta Oficial: N°5.908 Extraordinario. Preámbulo.

corpora un amplio contenido en materia de Derechos Humanos, y garantiza la aplicación de los convenios y tratados internacionales, suscritos y ratificados por la república, tal como lo indica la siguiente cita:

Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público².

En relación con este argumento, se precisa que la legislación venezolana, debe evolucionar y abrir pasó a la creación de nuevos instrumentos jurídicos, que no solo permitan garantizar el respeto de los Derechos Humanos, desde una concepción jurídica realmente objetiva, sino que además, fortalezca la articulación de las normas de Derecho Interno, en concordancia con los tratados, convenciones y pactos internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, los cuales de acuerdo con nuestra norma suprema, adquieren rango constitucional.

² Ibídem., art. 23

En referencia con el artículo 23 de la Carta Magna, se menciona la importancia que los pactos y tratados internacionales, suscritos y ratificados por el Estado venezolano, tienen en relación con el desarrollo del Derecho Educativo. Aun cuando ya se ha explicado que este derecho, tiene su ámbito de acción en las instituciones educativas y en las comunidades cercanas a las mismas, hay un elemento jurídico muy relevante que interviene en el desarrollo teórico y jurídico de dicha relación. Este elemento, es la influencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la legislación interna.

Como se menciona anteriormente, el Derecho Educativo, deriva del derecho a la educación, como eje central para la interpretación y comprensión de los demás Derechos Humanos. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, influye en las diversas ramas del Derecho Interno venezolano, cuando el Estado, suscribe y ratifica los tratados y pactos internacionales, dando una perspectiva internacional al Derecho Educativo.

Los tratados y pactos internacionales en materia de Derechos Humanos, suscritos y ratificados, no solo forman

parte de la doctrina que permite desarrollar una concepción de lo que debe regular el Derecho Educativo, en todos los países, sino que además, pueden ser vinculantes en los tribunales nacionales, cuando las normas de Derecho Interno vigente, no regulen una determinada área del derecho, o cuando las mismas dejen un vacío legal. De conformidad con lo expuesto, se observa como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es complementario del Derecho Interno.

La perspectiva internacional del Derecho Educativo, nace con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y otros instrumentos jurídicos de carácter internacional, tales como:

- a) La Convención Relativa a la Lucha Contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza de 1960.
- b) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, entrada en vigor: 3 de enero de 1976.

- c) La Convención sobre los Derechos del Niño Adoptada y abierta a la firma y ratificada por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990.

Todos estos instrumentos jurídicos suscritos y ratificados por el Estado venezolano.

Los tratados internacionales, una vez suscritos por el poder ejecutivo, son revisados y sometidos al análisis jurídico, por parte del poder legislativo de la República Bolivariana de Venezuela, quien debe dar el paso a la ratificación.

En este orden de ideas, la Asamblea Nacional, debe promulgar una ley aprobatoria en Gaceta Oficial, para ratificar el pacto o tratado internacional, bien sea en todas sus partes, o estableciendo sus reservas de acuerdo con la decisión mayoritaria de los diputados o diputadas de la Asamblea Nacional.

La legislación interna de la República Bolivariana de Venezuela, parte de la constitución como su norma jurídica suprema, en donde se garantizan los principales derechos

entre los que destacan por su importancia, los derechos educativos, establecidos desde el artículo 98, hasta el artículo 111, sin pasar por alto, el artículo 78 de la CRBV, en el que se establecen los derechos de los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derecho, tal como se observa a continuación:

Artículo 78. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República. El Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan. El Estado promoverá su incorporación progresiva a la ciudadanía activa, y un ente rector nacional dirigirá las políticas para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes³.

En relación a lo antes expuesto, se destaca que las principales normas jurídicas destinadas a regular esta importante área del derecho son las siguientes:

³ Ibídem., art.78

- a) Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA).
- b) Ley Sobre Procedimientos Especiales en Materia de Protección Familiar de Niños, Niñas y Adolescentes.

La LOPNNA, establece el derecho que tienen todos los niños, niñas y adolescentes a la educación, de conformidad con lo previsto en su artículo 53 sobre el derecho a la educación, la obligatoriedad de los padres, madres y responsables de garantizar la educación de sus hijos, prevista en el artículo 54, e incluso, todo lo referente a la disciplina escolar establecida en el artículo 57, entre muchas otras disposiciones jurídicas que se desarrollarán en los capítulos posteriores.

La ley Sobre Procedimientos Especiales en Materia de Protección Familiar de Niños, Niñas y Adolescentes, establece en su artículo 4, los procedimientos de conciliación y mediación en el ámbito familiar, como medios alternativos para la resolución de los conflictos en materia de protección de niños, niñas y adolescentes.

En materia de legislación educativa, se destacan las disposiciones previstas en la Ley Orgánica de Educación (LOE). Sin obviar, que el Derecho Educativo, no depende exclusivamente del estudio de estas normas, sino que además, se hace necesario el estudio de muchos otros instrumentos jurídicos vinculantes, relacionados con la doctrina de los Derechos Humanos.

Adicionalmente, se prevé en las disposiciones finales de la LOE, en su numeral 10, la implementación de los medios alternativos para la resolución de los conflictos en el ámbito escolar, tales como la conciliación y mediación.

Además, se hace necesario estudiar otros contextos, como el ejercicio de la profesión docente, su ingreso, promoción y permanencia, las faltas en las que puede incurrir el personal docente, e incluso los procedimientos administrativos de orden disciplinario, previstos en el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente.

Por tal motivo, el Derecho Educativo se sustenta en el estudio, de todo el conjunto de normas existentes en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, legislación

educativa, e incluso las disposiciones jurídicas de las diversas áreas del derecho, a fin de alcanzar el objeto de regular la convivencia escolar, desde todos los ámbitos tanto institucionales como socio-pedagógicos.

CAPITULO I

LOS SUJETOS DE DERECHO EDUCATIVO.

Los Sujetos de Derecho Educativo, como se ha mencionado en el capitulo anterior, son todas las personas naturales o jurídicas, que se vinculan con las instituciones educativas. Estas personas, por las diversas relaciones que desarrollan con los diferentes planteles, sean preescolares, escuelas de educación básica o secundaria, entre otros. Constituyen dos grupos muy importantes:

- a) Los actores educativos
- b) Los entes vinculados al hecho pedagógico.

El grupo más amplio es el conformado por los actores educativos, el cual no solo incorpora a los docentes y estudiantes, ya que en él se vinculan todas las personas naturales que se relacionan con la institución y con los procesos de formación de los niños, niñas y adolescentes, tanto de forma directa como indirecta. En este contexto, se puede precisar

que los estudiantes, son por excelencia, Sujetos de Derecho Educativo, en el sentido que sobre ellos versan las garantías que se establecen, en el marco de esta importante área del derecho.

Además son Sujetos de Derecho Educativo, en la medida que ellos tienen la capacidad jurídica de contraer obligaciones, en el ámbito escolar, institucional y en todos los momentos y etapas del hecho pedagógico. Sin embargo, en el contexto institucional, los estudiantes, no son los únicos que tienen la capacidad de exigir derechos y contraer obligaciones.

También cuentan con esa capacidad: Los directivos, los docentes, el personal administrativo, el personal obrero, los representantes, madres, padres y responsables de la crianza o custodia, los miembros de la comunidad educativa, de los consejos estudiantiles u otras organizaciones vinculadas a la institución, para el desarrollo del ejercicio de la convivencia institucional.

En este mismo orden de ideas, son sujetos de Derecho Educativo, las personas jurídicas que se vinculan de

forma directa con el hecho pedagógico y con la convivencia dentro de las instituciones. Tales como, empresas, cooperativas, asociaciones civiles, fundaciones u otras formas de asociación de personas, que hayan protocolizado su acta constitutiva ante el registro civil o mercantil respectivo, y por su actividad y relación con el plantel, jueguen un papel fundamental en el ejercicio de la formación o convivencia dentro o en las adyacencias de la institución.

Por ejemplo:

Empresas o sociedades, si ejercen funciones de cantina escolar, comedores, proveedores de comedores escolares, proveedurías estudiantiles, fundaciones y asociaciones civiles que realicen funciones de grupos culturales o deportivos integrados o articulados con el plantel educativo, entre otras.

El Personal Directivo.

La dirección de los diversos planteles educativos, está encabezada por un director y en ocasiones puede existir la figura de varios sub-directores y coordinadores. Como es de

pleno conocimiento, el director es el responsable de todos los acontecimientos que se desarrollan en la institución, en tal medida, es la figura de máxima autoridad, sin embargo, sus decisiones no pueden ser tomadas sin el consenso o la debida información de los demás actores educativos.

En este contexto, el directivo, debe reconocer la existencia de los demás Sujetos de Derecho Educativo, Docentes, Personal Administrativo, Obreros, Estudiantes, Representantes, entre otros. A fin de tomar decisiones que contribuyan con el objeto de garantizar el goce de los derechos de los estudiantes, además de exigir el cumplimiento de sus obligaciones, para alcanzar el desarrollo de la sana convivencia en el marco del respeto de los Derechos Humanos.

El Personal Docente.

Los docentes, son los responsables directos de la enseñanza, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente en su artículo 4, aparte 2°, en el que se establece lo siguiente: “La carrera docente estará

a cargo de personas de reconocida moralidad y de idoneidad docente comprobada, provista del título profesional respectivo”¹.

En tal sentido, se destaca que el personal docente debe cumplir con un perfil ético, inspirador de un buen ejemplo, para los fines a desarrollar en el hecho educativo, debe tener una formación académica profesional en el área, aun cuando en la actualidad, existen las figuras de profesional no docente, bachiller docente, entre otros. Los cuales aun que no posean un título en el área de educación, están amparados por las convenciones colectivas.

El personal docente, es el Sujeto de Derecho Educativo, que se encuentra más comprometido con el proceso de la enseñanza por su rol pedagógico. Por ello, está sujeto a la regulación de un conjunto de normas jurídicas, más amplio, entre las que destacan no solo el reglamento de ejercicio profesional, sino también la Ley Orgánica de Educación (LOE) y Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), entre otras.

¹ Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente. Decreto N° 1.011 de fecha 4 de Octubre de 2000, Gaceta Oficial N° 5.496 Extraordinario de fecha 31 de Octubre de 2000. Artículo 4

El Personal Administrativo y Obrero.

El personal administrativo, conformado por los secretarios y secretarias de los planteles educativos, los obreros y obreras, encargados de la limpieza y mantenimiento de la institución, los empleados de los comedores escolares, entre otros.

Este personal es Sujeto de Derecho Educativo, debido a la relación que sostienen con los estudiantes durante la convivencia escolar, y por ello, deben ser reconocidos en las normas y acuerdos de convivencia.

El Personal Administrativo y Personal Obrero, tiene derechos enmarcados en la convivencia dentro de la institución, derecho a un buen trato y a ser respetados por los estudiantes.

Además son susceptibles de contraer obligaciones en la medida que sus labores, constituyen Derechos que deban ser garantizados para los estudiantes, docentes, e incluso para los representantes.

Los Estudiantes.

Los estudiantes, que hacen vida en los planteles, son los Sujetos de Derecho Educativo por excelencia. Debido a que su relación con la institución, es directa al igual que la del docente. El estudiante tiene garantizado el derecho a la educación como un fin superior. Sin embargo en su relación con los demás actores educativos, adquieren obligaciones que deben cumplir durante su convivencia escolar en el marco del respeto de los Derechos Humanos.

El estudiante, tiene un rol activo dentro de la convivencia escolar y no pasivo como se creía anteriormente. Por tal razón, debe existir un consenso entre el ejercicio de la vida estudiantil y el proceso pedagógico, a fin de que el estudiante sea parte de los acuerdos, de las normas y del hecho educativo. Así mismo, debe garantizarse la inclusión del estudiante en las estrategias pedagógicas, en proyectos institucionales, y en los proyectos de aprendizaje que contribuyan con el desarrollo de las estructuras normativas institucionales, destinadas a garantizar el ejercicio de sus derechos.

El Representante.

Los representantes, madres padres y responsables de los niños, niñas y adolescentes, se vinculan con la escuela y forman parte del Derecho Educativo. Por tal motivo, las normas de convivencia escolar, deben incluirlos.

El representante es el enlace directo entre el hogar y la escuela, los padres, madres y responsables de crianza de niños, niñas y adolescentes son susceptibles de contraer obligaciones, mediante las diversas acciones ejecutadas por los estudiantes en las que se establezca una responsabilidad civil, tal como se describe en el artículo 1.190 del código civil: “El padre, la madre, y a falta de éstos, el tutor, son responsables del daño ocasionado por el hecho ilícito de los menores que habiten con ellos”².

De conformidad con lo expuesto, se puede observar que el representante, es por excelencia un Sujeto de Derecho Educativo, al igual que su representado y la capacidad de contraer obligaciones del estudiante, está vinculada a la res-

² Código Civil de Venezuela. De fecha: 26 de Julio de 1982. Gaceta Oficial: N° 2.990 Extraordinaria. Artículo 1.190.

ponsabilidad de crianza que tienen sus padres, madres y tutores, por lo que a su vez, los padres son responsables civilmente de los daños que sus representados pudieran causar.

Según lo previsto en el artículo 54, de la Ley orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPN-NA), expresado en la siguiente cita:

Artículo 54. Obligación de los Padres, Representantes o Responsables en Materia de Educación. Los padres, representantes o responsables tienen la obligación inmediata de garantizar la educación de los niños y adolescentes. En consecuencia, deben inscribirlos oportunamente en una escuela, plantel o instituto de educación, de conformidad con la Ley, así como exigirles su asistencia regular a clases y participar activamente en su proceso educativo³.

Los padres, madres o representantes, están obligados a garantizar los Derechos Educativos de los menores bajo su custodia. Lo que implica no solo inscribirlos en una institución educativa, sino que además prevé la incorporación del representante de forma activa en el hecho pedagógico.

³ Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. (LOPN-NA). De fecha 10 de Diciembre de 2007. Gaceta Oficial: N°5.859 Extraordinario. Artículo 54.

Las Personas Jurídicas.

Las personas jurídicas vinculadas a la institución, juegan un papel muy importante como Sujetos de Derecho Educativo. En este contexto, las asociaciones y fundaciones, culturales y deportivas que imparten actividades complementarias a los estudiantes, las pequeñas empresas familiares o comunitarias que se involucran con la escuela, que prestan servicios para el mantenimiento de las instalaciones del plantel, e incluso las que contribuyen con los comedores escolares.

Estas personas jurídicas, aportan servicios de los cuales se sirven los estudiantes, y que en cierta forma, permiten mejorar las condiciones de vida que el estudiante como principal Sujeto de Derecho Educativo, realiza dentro de la institución, por lo que estos servicios, son objeto de regulación jurídica, no solo por la legislación positiva, sino que además, deben ser controlados por las normas de convivencia que se cumplen durante la vida institucional.

En este sentido, los acuerdos de convivencia, deben contener los alcances y limitaciones que tienen las personas

jurídicas que hacen vida en el contexto educativo, lo que permite establecer cómo se realiza la vinculación de estas personas, dentro de las normas de la institución, en función del respeto y desarrollo de la sana convivencia.

De conformidad con lo expuesto, este control permite que el plantel, supervise las relaciones que las personas jurídicas establecen con los estudiantes, y puede ejercer funciones de contraloría.

CAPITULO II

PERSPECTIVA INTERNACIONAL DEL DERECHO EDUCATIVO.

El Derecho Educativo, deriva del derecho que el ser humano tiene a la educación y de la importancia que esta, representa para los Derechos Humanos. Debido a que un ser sin educación, difícilmente puede comprender cuáles son sus derechos como persona o ciudadano de un Estado.

En este contexto jurídico, se precisa que los antecedentes doctrinarios de los Derechos Humanos, que a su vez, son fuentes del Derecho Educativo, nacen con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En tal sentido, esta fuente primaria del los Derechos Humanos, no solo establece los principios de libertad, y de respeto a la dignidad humana, sino que además, estipula que la educación es un derecho fundamental, que debe ser garantizado a todos los seres humanos sin distinciones de ningún tipo, de conformidad con el principio de igualdad.

El principal instrumento jurídico analizado, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, (DUDH). Debido a que este documento, es uno de los antecedentes doctrinarios más importantes que tiene la humanidad, para explicar las garantías establecidas en relación con los Derechos Humanos. El derecho a la educación es un Derecho Humano, y de conformidad con la DUDH, este derecho, debe ser garantizado de forma gratuita y obligatoria, sin distinciones y sin el menoscabo de las libertades, propias de la persona humana. De acuerdo a lo planteado, se cita el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:

Artículo 26.

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desa-

rrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos¹.

Sin embargo, los principios de gratuidad y obligatoriedad de la educación, no son exclusivos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y este documento, tampoco, es el primer antecedente del derecho a la educación. La educación gratuita y obligatoria, se origina en Prusia, durante el siglo XVIII con el reinado de Federico Guillermo I, cuando el sistema Prusiano, pretendía poner a la disposición del pueblo, algunos principios de la Ilustración.

Uno de los principales antecedentes históricos es: “Las Escuelas Rurales (Dorfschulen) del Estado de Gotha (Alemania). Las Escuelas para Pobres de Francke en Halle, en el año 1695”². Posteriormente: “En 1717 se proclamó la obligatoriedad escolar en las Dorfschulen de Prusia bajo el

¹ Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, Artículo 26.

² Vicente Llorent Bedmar, (2004). Libre Elección de Educación Obligatoria en el Ámbito de la Unión Europea. p.249

reinado de Federico Guillermo I, y en 1747 aparecieron en Berlín las Escuelas Científico-Técnicas (Realschulen)”³. En este periodo de la historia, nace el derecho de educación obligatoria, y es utilizado por el rey de Prusia, como una estrategia que permitía sostener el orden del Estado y hacer frente a las ideas que se desarrollaban con la Ilustración. Debido a esto, el periodo en el que se establece la obligatoriedad de la educación en el sistema prusiano, pasa a ser conocido como: “Absolutismo Ilustrado”⁴.

Durante el Absolutismo Ilustrado, el Estado de Prusia, limitó en gran medida el modelo educativo, para que los conocimientos, contribuyeran con el objetivo de favorecer la lealtad del pueblo a la monarquía, garantizando así la estabilidad de sus gobernantes. Por tal razón, los principios de la Ilustración, nunca llegaron en su totalidad a los extractos más vulnerables de la sociedad prusiana.

Los orígenes de la educación gratuita y obligatoria, se remontan al siglo XVIII. No obstante, la realidad para el mundo era otra. Al igual que pasó con los demás Derechos

³ Ibid.

⁴ Ibid.

Humanos, los cuales aun cuando eran reconocidos en documentos importantes como La Declaración de Derechos de Virginia (1776), La Declaración del Hombre y del Ciudadano (1789), entre otros. Nunca fueron garantizados con efectividad, hasta que se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948.

En este orden de ideas, se puede reconocer que la historia jurídica de los Derechos Humanos, está dividida en dos etapas cruciales, una de ellas muy significativa por sus antecedentes históricos, y la segunda, sustentada en un origen jurídico social, que permite el surgimiento de instrumentos internacionales vinculantes para garantizar el respeto de los Derechos Humanos.

En consideración, se puede comprender que aun cuando el sistema prusiano, contemplaba el ejercicio de la educación obligatoria. Es con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que este derecho, adquiere la importancia que le permite ser exigido ante el mundo. Permitiendo así, que en todos los países, se garantice el derecho a la educación como un Derecho Humano.

Al analizar el artículo 26 de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos, se puede observar que este, no se limita a la protección de un solo derecho, tal como se establece en la siguiente cita: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales”⁵. En consideración, se puede precisar que la importancia de este derecho, va mucho más allá de garantizar la gratuidad y obligatoriedad de la educación.

Por esta razón, se prevé el libre desenvolvimiento de la personalidad del Individuo, lo que es igual a decir, que la educación debe garantizar la libertad de expresión, creencias religiosas o tendencias políticas. Así mismo, debe contribuir con el respeto de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales. En este sentido, el sistema educativo de cada nación, tiene la obligación de educar para los Derechos Humanos. Entendiéndose esta educación, como un proceso mediante el cual el hombre reconoce sus garantías, libertades y derechos fundamentales, a fin de que tales de-

⁵ DUDH, Ob. Cit., art. 26

rechos no sean vulnerados. Además, se contempla la posibilidad de facilitar al sujeto de derecho, la capacidad intelectual para la comprensión de los demás derechos y garantías.

El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su inciso 2, establece lo siguiente: “favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos”⁶. Lo que garantiza la comprensión como valor fundamental, en pro de garantizar la paz entre las naciones, y como factor de gran relevancia, se contempla que la educación debe fortalecer la tolerancia humana, con la finalidad de crear una cultura de paz, en el marco de la diversidad étnica, y religiosa.

Tema de vital importancia, al considerar que la educación de los pueblos, es la principal estrategia que puede desarrollarse para la prevención del Crimen de Genocidio, establecido en el Estatuto de Roma, en el artículo 6. Destacando, que en muchos casos, este crimen tiene su origen en

⁶ *Ibíd.*

la intolerancia étnica o religiosa. Como puede evidenciarse en el caso del Genocidio de Rwanda, citado en el siguiente ejemplo:

Rwanda (1994), Crimen de Genocidio en el que los ciudadanos de Rwanda, pertenecientes al grupo étnico Hutus, al momento de tomar el gobierno, promovieron la intolerancia racial que conllevó al exterminio de casi un millón de hombres, mujeres y niños de la etnia Tutsi.

En el ámbito educativo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, juega un importante rol en la prevención del Crimen de Genocidio, y aun cuando es de pleno conocimiento que no basta solo con educar, para erradicar este crimen, el fortalecimiento de una educación que se oriente en los principios de comprensión y tolerancia étnico religiosa, y en los principios fundamentales de los Derechos Humanos, puede reducir el riesgo de que el hombre atente contra sus semejantes por las razones mencionadas anteriormente.

El inciso 3, del artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que: “Los pa-

dres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”⁷.

En este argumento, se prevé la garantía de libertad de elección del sistema o modelo educativo, que los padres elijan para sus hijos, de conformidad con los valores étnicos, religiosos, morales e incluso profesionales. Destacando que no se pueden violentar los valores culturales de los niños, niñas o adolescentes, debido a que tales valores contribuyen con el desarrollo de sus costumbres, en el marco de la sana convivencia, y deben ser garantizados dentro del Derecho Educativo.

La Convención Relativa a la Lucha Contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza de 1960. Es el Segundo instrumento jurídico internacional que se explicará, debido a la importancia que representa para el ejercicio del Derecho Educativo en la República Bolivariana de Venezuela. Esta convención, fue ratificada por el Estado Venezolano, mediante la Gaceta Oficial N° 28.744, de fecha 2 de febrero de 1968.

⁷ Ibíd.

Lo que implica que la mencionada convención, no solo representa aportes doctrinarios que definen al Derecho Educativo en el marco de los Derechos Humanos, sino que además, es un instrumento vinculante, el cual de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, tiene rango constitucional, tal como se observa en la siguiente cita:

Artículo 23.

Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las Leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público⁸.

De acuerdo con lo expuesto en el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, pactos y convenciones internacionales, suscritos y ratificados por el Estado, tienen rango constitucional. Lo

⁸ Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Caracas, jueves 19 de febrero de 2009. Gaceta Oficial: N° 5.908 Extraordinario. Artículo 23.

que permite que la Convención Relativa a la Lucha Contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza de 1960, se convierta en un instrumento jurídico vinculante con rango constitucional, dentro del ordenamiento jurídico interno del Estado.

Esta convención, fue adoptada el 14 de diciembre del año 1960, por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y entra en vigor el 22 de mayo de 1962. Consta de 19 artículos y su preámbulo, el cual establece:

Recordando que la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma el principio de que no deben establecerse discriminaciones y proclama el derecho de todos a la educación. Considerando que las discriminaciones en la esfera de la enseñanza constituyen una violación de derechos enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Considerando que, según lo previsto en su Constitución, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura se propone instituir la cooperación entre naciones a fin de asegurar el respeto universal de los derechos humanos y una igualdad de posibilidades de educación. Consciente de que, en consecuencia, incumbe a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con el debido respeto a la diversidad de sistemas educativos nacionales, no sólo

proscribir todas las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, sino también procurar la igualdad de posibilidades y de trato para todas las personas en esa esfera. Habiendo recibido propuestas sobre los diferentes aspectos de las discriminaciones en la enseñanza, cuestión que constituye el punto 17.1.4 del orden del día de la reunión. Después de haber decidido, en su décima reunión, que esta cuestión sería objeto de una convención internacional y de recomendaciones a los Estados Miembros⁹...

Como se puede observar en el preámbulo de la presente convención, se reafirma la importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y el interés de la Organización de las Naciones Unidas en garantizar el desarrollo de la paz, partiendo del derecho a la educación, como derecho humano de vital importancia.

La Convención Relativa a la Lucha Contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza de 1960. En su artículo 1, define cuales son las formas de discriminación que se manifiestan en las diversas esferas de la enseñanza, aportando una orientación conceptual que permite calificar

⁹ Convención Relativa a la Lucha Contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza de 1960, Adoptada el 14 de diciembre de 1960 por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Preámbulo.

las acciones que pudieran representar formas de exclusión o discriminación de los seres humanos en el marco de la vida educativa.

En este orden de ideas, se entiende por discriminación todas las formas de exclusión, o limitación al Derecho Educativo, las cuales se fundamentan en criterios étnicos, religiosos, posición social, tendencias políticas, posición económica, nacionalidad u otros criterios que atenten contra el principio de igualdad, garantizado por los diversos instrumentos vinculantes y doctrinarios en materia de Derechos Humanos.

Esta norma, prohíbe la exclusión o limitación del derecho a la educación, de grupos sociales, étnicos, religiosos, entre otros. Cuando se pretenda impartir una educación limitada, que no garantice la misma calidad que la prevista en el modelo educativo, implementado para el común de los ciudadanos de un Estado, o que en su defecto, se imparta a un determinado grupo, en condiciones que atenten contra la dignidad humana, tal como se evidencia a continuación en el artículo 1 de la mencionada convención:

Artículo 1.

1. A los efectos de la presente Convención, se entiende por "discriminación" toda distinción, exclusión, limitación o preferencia fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o el nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza y, en especial:

a) Excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados y tipos de enseñanza;

b) Limitar a un nivel inferior la educación de una persona o de un grupo;

c) A reserva de lo previsto en el artículo 2 de la presente Convención, instituir o mantener sistemas o establecimientos de enseñanza separados para personas o grupos;

d) Colocar a una persona o a un grupo de personas en una situación incompatible con la dignidad humana¹⁰...

En consideración, se establece que para los efectos del instrumento jurídico, se entenderá el término *Enseñanza*: Como el proceso de formación que se hace presente en los diversos tipos y grados de la actividad educativa, desta-

¹⁰ Ibídem., art. 1

cando que el acceso a la enseñanza, debe garantizarse en todos los niveles, tal como se evidencia en el artículo 1, inciso 2, citado en el siguiente párrafo:

2. A los efectos de la presente Convención, la palabra "enseñanza" se refiere a la enseñanza en sus diversos tipos y grados, y comprende el acceso a la enseñanza, el nivel y la calidad de ésta y las condiciones en que se da¹¹.

Lo dispuesto en el artículo 1, inciso 2 de la Convención Relativa a la Lucha Contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza de 1960. No solo, permite incluir al niño, niña o adolescente, en el ámbito del Derecho Educativo. Sino que además, incluye a los adultos que no han alcanzado la formación primaria, y hace posible que la formación universitaria, sea parte del Derecho Educativo.

Sin embargo, la separación de grupos por necesidades académicas, en consideración al sexo, o escuela con requerimientos especiales, no siempre está prohibida. De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la presente convención, siempre que la educación impartida a

¹¹ Ibid.

estos grupos, no limite la misma calidad de los procesos de formación, y los estudiantes de dichos grupos, gocen de una educación que garantice los mismos beneficios que la impartida a los demás ciudadanos del Estado y garantice un trato digno del ser humano. Estará permitida, tal como lo explica la siguiente cita:

Artículo 2.

En el caso de que el Estado las admita, las situaciones siguientes no serán consideradas como constitutivas de discriminación en el sentido del artículo 1, de la presente Convención:

a) La creación o el mantenimiento de sistemas o establecimientos de enseñanza separados para los alumnos de sexo masculino y para los de sexo femenino, siempre que estos sistemas o establecimientos ofrezcan facilidades equivalentes de acceso a la enseñanza, dispongan de un personal docente igualmente calificado, así como de locales escolares y de un equipo de igual calidad y permitan seguir los mismos programas de estudio o programas equivalentes;

b) La creación o el mantenimiento, por motivos de orden religioso o lingüístico, de sistemas o establecimientos separados que proporcionen una enseñanza conforme a los deseos de los padres o tutores legales de los alumnos, si la participación en esos sistemas o la asistencia a estos establecimientos es facultativa y si la enseñanza en ellos proporcionada se

ajusta a las normas que las autoridades competentes puedan haber fijado o aprobado particularmente para la enseñanza del mismo grado¹²...

Además, se prevé que puede existir la educación privada, siempre que esta, garantice la misma calidad educativa que las instituciones del Estado, y no excluya a los ciudadanos o grupos sociales, tal como se puede observar a continuación en el artículo 2, literal (c):

c) La creación o el mantenimiento de establecimientos de enseñanza privados, siempre que la finalidad de esos establecimientos no sea la de lograr la exclusión de cualquier grupo, sino la de añadir nuevas posibilidades de enseñanza a las que proporciona el poder público, y siempre que funcionen de conformidad con esa finalidad, y que la enseñanza dada corresponda a las normas que hayan podido prescribir o aprobar las autoridades competentes, particularmente para la enseñanza del mismo grado¹³.

Los Estados partes de la Convención Relativa a la Lucha Contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza de 1960. Se comprometen a eliminar toda forma de discriminación en las diferentes esferas de la enseñanza y sus disposiciones legislativas o administrativas, deben apor-

¹² *Ibidem.*, art. 2

¹³ *Ibid.*

tar medidas destinadas a la protección de los ciudadanos contra cualquier forma de discriminación educativa. De acuerdo con este argumento, no se podrá excluir o limitar el acceso a la educación de ningún ciudadano, mediante actos administrativos o legislativos.

El acceso a la enseñanza, debe ser garantizado, no solo a los nacionales. Por ello, el Estado parte de la convención mencionada, debe garantizar el derecho a la educación, no solo a sus nacionales, sino además a los extranjeros residentes en el país. Destacando la obligatoriedad de la educación de igual calidad que la destinada para sus nacionales.

Adicionalmente, este instrumento jurídico, vinculante en el ejercicio y aplicación del Derecho Educativo, establece en su artículo 4, literal (a), lo siguiente:

- a) Hacer obligatoria y gratuita la enseñanza primaria, generalizar y hacer accesible a todos, la enseñanza secundaria en sus diversas formas; hacer accesible a todos, en condiciones de igualdad total y según la capacidad de cada uno, la enseñanza supe-

rior; velar por el cumplimiento por todos de la obligación escolar prescrita por la ley¹⁴...

En el argumento antes mencionado, se puede precisar que la educación primaria debe ser garantizada de forma gratuita y obligatoria, sin exclusión, ni limitaciones, debe ser generalizada para todos los sectores de la población y accesible para todos los ciudadanos del Estado.

La formación o enseñanza secundaria, debe ser garantizada de forma accesible para todos los ciudadanos en sus diversas formas en condiciones de igualdad, y la educación superior, no se establece como obligatoria. No obstante, que en este nivel de la enseñanza debe garantizarse el acceso a todos los ciudadanos de acuerdo a la capacidad de estos, en condiciones de igualdad.

Por otra parte, en el artículo 4, del presente instrumento, los Estados partes, se comprometen a fomentar los métodos para garantizar la educación a las personas que no hayan podido culminar la educación primaria, y a velar por el mejoramiento de la calidad y preparación del personal

¹⁴ Ibídem., art. 4

docente, para evitar las posibles situaciones de discriminación o exclusión.

En relación a los fines de la Educación, se establece que la Convención Relativa a la Lucha Contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza de 1960, de conformidad con el artículo 5, establece al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que la educación deberá garantizar el libre desenvolvimiento de la personalidad humana y el respeto de los Derechos Humanos.

En tal sentido, se destacan los principios de tolerancia, igualdad y la amistad entre naciones, como puntos de vital importancia para el mantenimiento de la paz.

Se prevé el derecho de los padres de elegir el modelo de educación, que deberá darse a sus hijos, bien sea pública o privada, siempre que esta garantice los principios establecidos en la convención, de conformidad con el artículo 5, del instrumento jurídico mencionado, tal como se presenta a continuación:

Artículo 5.

1. Los Estados Partes en la presente Convención convienen:

a) En que la educación debe tender al pleno desenvolvimiento de la personalidad humana y a reforzar el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que debe fomentar la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales o religiosos, y el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz;

b) En que debe respetarse la libertad de los padres o, en su caso, de los tutores legales, 1º de elegir para sus hijos establecimientos de enseñanza que no sean los mantenidos por los poderes públicos, pero que respeten las normas mínimas que puedan fijar o aprobar las autoridades competentes, y 2º de dar a sus hijos, según las modalidades de aplicación que determine la legislación de cada Estado, la educación religiosa y moral conforme a sus propias convicciones; en que, además, no debe obligarse a ningún individuo o grupo a recibir una instrucción religiosa incompatible con sus convicciones;

c) En que debe reconocerse a los miembros de las minorías nacionales el derecho a ejercer actividades docentes que les sean propias, entre ellas la de establecer y mantener escuelas y, según la política de cada Estado en materia de educación, emplear y enseñar su propio idioma, siempre y cuando:

i) Ese derecho no se ejerza de manera que impida a los miembros de las minorías comprender la cultura y el idioma del conjunto de la colectividad y tomar parte en sus actividades, ni que comprometa la soberanía nacional;

ii) El nivel de enseñanza en estas escuelas no sea inferior al nivel general prescrito o aprobado por las autoridades competentes;

iii) La asistencia a tales escuelas sea facultativa.

2. Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen a tomar todas las disposiciones necesarias para garantizar la aplicación de los principios enunciados en el párrafo 1 de este artículo¹⁵.

En este orden de ideas, el Estado, mediante sus poderes públicos, debe regular el ejercicio de la educación religiosa o moral, para que se desarrolle el libre desenvolvimiento de la personalidad humana, sin lesionar o violentar los derechos inherentes al hombre. Además de garantizar los derechos de las minorías nacionales, tanto en su derecho a la enseñanza, como en el ejercicio de la docencia. Destacando que la educación deberá impartirse de acuerdo a la realidad cultural y lingüística de las colectividades.

¹⁵ Ibídem., art. 5

En el contexto jurídico, se establece una condición muy importante, debido a que la Convención Relativa a la Lucha Contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza de 1960, de conformidad con su artículo 9, no admite reservas. Lo que obliga a los Estados partes de la presente convención, la aceptación de todo su articulado en caso de ratificación.

El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Es el tercer Instrumento Jurídico Internacional que se procederá a estudiar, con la finalidad de aclarar la perspectiva internacional del Derecho Educativo.

Este importante pacto internacional, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión el día 16 de diciembre del año 1966, fue ratificado por el Estado Venezolano, el 28 de enero de 1978, mediante la Gaceta Oficial N° 2.146. Este instrumento jurídico, establece de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que el hombre no puede ser libre en condiciones de miseria, y para superar esta realidad, debe permitírsele gozar de derechos que le garanticen su bienestar económico,

social y cultural, de la misma forma que son garantizados los derechos civiles y políticos.

En este contexto, se puede observar como el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hace énfasis en que la educación debe favorecer el desarrollo de la personalidad humana y los Derechos Humanos, tal como se evidencia en la siguiente cita:

Artículo 13.

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Conviene en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los Derechos Humanos y las libertades fundamentales. Conviene así mismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz¹⁶...

¹⁶ Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 3 de enero de 1976. Artículo 13.

Los Estados, se comprometen a reconocer el derecho que tienen todos los seres humanos a la educación, además de establecer que este derecho debe estar orientado al desarrollo de la personalidad del hombre, de su dignidad y respeto de sus derechos. Por ello, se observa que la educación se garantiza, no solo como un Derecho Humano, sino que además, se constituye como el derecho que orienta el respeto de las demás garantías establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, también ratificado por el Estado Venezolano el 28 de enero de 1978, mediante la Gaceta Oficial N° 2.146.

En este orden de ideas, el derecho a la educación, no se precisa como un derecho que pueda estar sobre los derechos civiles y políticos, o que su importancia doctrinaria sea mayor que la de otros Derechos Humanos. Sin embargo, el Derecho Educativo es un derecho transversal a los demás derechos y garantías protegidas, tanto por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como por los demás instrumentos jurídicos internacionales. Por esta

razón, se hace indispensable el reconocimiento de este derecho en el marco de la doctrina jurídica, como un elemento que permite la protección integral del ser humano.

Otro punto de vital importancia, es que el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece que: “Conviene asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre”¹⁷. En concordancia, la educación debe cumplir con el fin de orientar al ser humano, al hecho de ser libre, civil y políticamente, lo que articula El Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, entrelazando así, las diversas generaciones de Derechos Humanos en un mismo conjunto doctrinario.

En común con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se puede precisar que el artículo 13 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece que la educación debe favorecer la

¹⁷ *Ibíd.*

tolerancia y comprensión entre los diversos grupos étnicos y religiosos, en el marco del respeto de la igualdad, como principio jurídico del Derecho Educativo.

En relación a lo mencionado en el artículo 13 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se puede observar que el derecho a la educación, se establece de forma detallada. Por ello, este derecho debe ser garantizado en las diversas modalidades y sistemas educativos. Además, de prever la obligatoriedad y gratuidad de la educación primaria.

En la República Bolivariana de Venezuela, la educación primaria está conformada por el subsistema de Educación Básica. La enseñanza secundaria, en sus diferentes modalidades, e incluso la educación técnica y profesional, debe garantizarse y ser accesible para todos sin distinciones, de conformidad con el artículo 13, en su inciso 2, literales (a) y (b), tal como se menciona en la siguiente cita:

a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;

b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y pro-

fesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita¹⁸...

En el Estado venezolano, la educación secundaria, es generalizada, accesible y gratuita, y está conformada por el subsistema de Educación Media General, que en la actualidad reemplaza la Educación Media y Diversificada.

Adicionalmente, se destaca otro elemento relevante, en relación al derecho a la educación, debido a que la educación superior, también forma parte del derecho Educativo. Motivo por el cual se considera que la formación universitaria es un elemento indispensable, para contribuir con el desarrollo del ser humano.

El artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, establece en el inciso 2, literal (c) lo siguiente:

c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en

¹⁸ *Ibíd.*

particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita¹⁹...

La educación superior forma parte del Derecho Educativo. Sin embargo, en la actualidad son pocas las medidas que los diversos Estados han ejecutado para profundizar en las garantías de este importante derecho. En relación con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, se establece que la educación superior ó educación universitaria, debe ser accesible a todos los ciudadanos. No obstante, se prevé que esta garantía, se realice sobre la capacidad que tiene el ser humano de conformidad con medios apropiados que permitan ir avanzando en la gratuidad de la educación.

En tal sentido, la educación universitaria, a diferencia de la formación primaria y secundaria, ha sido un tema de discusión realmente interesante, debido a que existen pocos instrumentos jurídicos internacionales que establezcan garantías, en relación a la gratuidad de la formación universitaria.

¹⁹ Ibíd.

Sin embargo, en el marco de este sistema educativo, deberá implementarse progresivamente la enseñanza gratuita. Lo que permite a los Estados avanzar en la creación de universidades públicas que permitan el desarrollo profesional de alto nivel en los diversos sectores y extractos sociales.

Además, existen dos elementos importantes que se encuentran previstos en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales. Estos son: “Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria”²⁰. Lo que permite garantizar el derecho a la educación, incluso para quienes en su edad adulta, no hayan podido alcanzar esta formación.

El otro elemento es: “Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y me-

²⁰ *Ibíd.*

jorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente”²¹.

En este contexto, se prevé, no solo el desarrollo de los diversos ciclos de la enseñanza en todos los niveles de la educación. Además, se establece que el Estado, adquiere el compromiso de implementar sistemas de becas eficientes y mejoras en las condiciones del personal docente que permitan el desarrollo del sistema educativo de cada Estado.

El Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, en su artículo 14, establece lo siguiente:

Artículo 14.

Todo Estado Parte en el presente Pacto que, en el momento de hacerse parte en él, aún no haya podido instituir en su territorio metropolitano o en otros territorios sometidos a su jurisdicción la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza primaria, se compromete a elaborar y adoptar, dentro de un plazo de dos años, un plan detallado de acción para la aplicación progresiva, dentro de un número razona-

²¹ *Ibíd.*

ble de años fijado en el plan, del principio de la enseñanza obligatoria y gratuita para todos²².

De acuerdo a lo descrito en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 14, los Estados parte del presente acuerdo, que no hayan podido garantizar el derecho a la gratuidad de la educación en su territorio, que lo hagan con planes progresivos, para alcanzar la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza para todos sus ciudadanos, en un plazo no mayor de dos años.

Esto hace evidente que la educación, es un derecho humano que permite el desarrollo y desenvolvimiento de la personalidad del hombre, en todos los ámbitos de convivencia, e incluso es el derecho que permite comprender las garantías jurídicas, existentes en los demás Derechos Humanos.

Por ello, el derecho a la educación, es un derecho transversal a los derechos fundamentales, a los derechos civiles y políticos, a los derechos económicos y sociales y a

²² *Ibídem.*, art. 14

los derechos que versan sobre el medio ambiente y el desarrollo de los pueblos.

Describir el Derecho Educativo como un derecho transversal, es identificar el derecho a la educación, como un derecho de igual orden jerárquico, que los demás Derechos Humanos. Sin embargo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. No explica la transversalidad del Derecho Educativo, y parece otorgar mayor importancia a los derechos civiles y políticos, por lo que se origina la doctrina de los Derechos Humanos de primera y segunda generación, aun cuando en la declaración se establece que todos los Derechos Humanos, son interdependientes.

En el marco de la doctrina de los Derechos Humanos, existen indicadores que al momento de analizar la jerarquización de estos derechos, permite que se evidencie la negación de que los Derechos Humanos, deben estar clasificados por jerarquías jurídicas.

El principal indicador es la interdependencia, siendo esta una de las características fundamentales de los Derechos Humanos. Se dice que los Derechos Humanos, son

interdependientes y esto quiere decir, que todos estos derechos, guardan una amplia relación entre sí. Debido a esta característica, se precisa que los Derechos Humanos, no pueden ser separados, ni jerarquizados jurídicamente. Todos los Derechos Humanos, tienen como fin proteger la dignidad de la persona humana, por lo que una norma destinada a la protección de un derecho, no puede depender de la negación del otro.

En tal sentido, se destaca que los Derechos Humanos, aun cuando se presentan en varias generaciones o clasificaciones doctrinarias para su estudio, no admiten jerarquización jurídica, debido a que todos se consideran como indispensables para el respeto de la dignidad del hombre y para el desarrollo adecuado de sus condiciones de vida.

Por esta razón, se hace referencia al presente ejemplo: *No se puede garantizar el derecho a la educación, negando los derechos civiles y políticos, o viceversa.* De acuerdo al ejemplo citado, se puede deducir que el derecho a la educación, es interdependiente a los derechos civiles y políticos. Pero ¿por qué? La respuesta es la siguiente: si no

existe la libertad de pensamiento, no puede existir un libre desarrollo de la personalidad del hombre y por tanto se cuestionaría el derecho a gozar de una educación encaminada a la libertad, la igualdad, y la paz.

No puede existir una libertad de pensamiento que se fundamente en la exclusión, o negación del derecho a la educación, porque tal libertad sería un fraude, una libertad a media, lo que conllevaría al hombre a creer que es libre, pero a costa de limitar su hacer de vida y esto sería como negar el principio de libertad real. En este plano, se crea un eje transversal. Ese eje, es el centro de la doctrina de los Derechos Humanos, y en este contexto, es donde se identifica el derecho a la educación, como uno de los principales derechos, no por jerarquía jurídica, sino por su finalidad.

El Derecho Educativo, o derecho a la educación, por su finalidad, cumple con la importante función de enseñar al hombre, a mejorar su nivel cognitivo, académico y social, desde las bases de una formación para la igualdad, la justicia, la equidad, el amor, la paz y el respeto de la dignidad humana en todos sus contextos. Por ello, este derecho,

permite que el Hombre interaccione con la realidad de los Derechos Humanos, haciéndole comprender los demás derechos.

Por la función que cumple el Derecho Educativo, no se convierte en un derecho superior sino transversal, por que se entrelaza con las diversas generaciones doctrinarias de los Derechos Humanos, haciendo posible que mediante el goce de este, se comprendan de una forma mucho más amplia los derechos de la persona humana.

La convención de los derechos del Niño, Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989 y entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, Es el cuarto instrumento jurídico que se analizará a continuación. Esta convención, es vinculante para la República Bolivariana de Venezuela y fue ratificada el 29 de agosto de 1990, mediante la Gaceta Oficial: N° 34.541.

Esta convención, en su artículo 28, establece que los Estados partes de la convención, reconocen el derecho que tienen los niños a la educación y que este debe ser garanti-

zado en condiciones de igualdad. Por ello, se reafirma que la educación primaria, debe ser gratuita y obligatoria.

En este mismo artículo, se garantiza el desarrollo de la educación secundaria en sus distintas formas, entre las que destaca la formación general o profesional. Se establece el derecho a la asistencia financiera con fines de fomentar la educación gratuita, la adopción de medidas para garantizar la educación, el fortalecimiento de medios que informen a los niños de temas educacionales y profesionales, la adopción de medidas que permitan garantizar la permanencia de los niños dentro del sistema educativo, evitando la deserción escolar, y el correcto uso de las normas disciplinarias, en concordancia con el respeto de la dignidad humana.

Además, se prevé que los Estados partes de la convención, fomentarán el desarrollo y la cooperación internacional, a fin de contribuir con la erradicación del analfabetismo, y permitirán el acceso a los conocimientos técnicos de la enseñanza, teniendo en cuenta como punto de vital importancia, las necesidades de los países en vías de desarrollo.

El artículo 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño, reafirma el derecho al desenvolvimiento de la libre personalidad en el proceso educativo, y el desarrollo de sus aptitudes, capacidad física y mental, hasta el máximo de sus posibilidades. Garantizando los Derechos Humanos de los niños y el goce de sus libertades fundamentales de conformidad con lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas, tal como se puede observar en la siguiente cita:

Artículo 29.

Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:

- a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades;
- b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas²³ ...

Este argumento establece tres puntos importantes:

²³ Convención de los Derechos del Niño, Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989 y entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990. Artículo 29.

- a) La promoción del respeto hacia sus padres, su identidad cultural, idioma y valores nacionales, en el marco de la enseñanza.
- b) La promoción de una educación sustentada en los principios de la paz, tolerancia, igualdad y amistad entre los pueblos.
- c) La promoción del respeto por el medio ambiente natural.

Seguidamente, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 30, establece que los Estados en los cuales existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, entre las que se incluyen las etnias indígenas, no se les excluirá del derecho a la educación. Permitiendo el libre ejercicio de las tradiciones de las minorías, sin el menoscabo de sus Derechos Humanos.

El artículo 32 de la Convención de los Derechos del Niño, reconoce el derecho de los niños de ser protegidos contra la explotación económica, regulando el desempeño de los trabajos y labores, que pudieran limitar su educación

o distorsionar la enseñanza. Por ello, los Estados partes, quedan comprometidos, en la adopción de medidas legislativas, administrativas, sociales o educativas, que permitan la aplicación de las disposiciones legales establecidas en la convención y los instrumentos jurídicos internacionales, encargados de garantizar los derechos de los niños, en relación con el hecho educativo y el proceso de la enseñanza.

En consideración a los instrumentos jurídicos internacionales, bien sean de carácter doctrinarios o vinculantes, se puede observar que el derecho a la educación, se constituye como un derecho transversal, que entrelaza las diversas generaciones de Derechos Humanos, sin establecer un orden jerárquico. Tal como se ha mencionado en la perspectiva internacional del Derecho Educativo.

En tal sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), como antecedente Doctrinario y única declaración que posee carácter vinculante. La Convención Relativa a la Lucha Contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960), el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (1966), el

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966), y la Convención de los Derechos del Niño (1989), entre otros instrumentos jurídicos vinculantes, permiten al ser humano, comprender de una forma más amplia la doctrina y ámbito de aplicación de todos los Derechos Humanos.

Teniendo en consideración que el respeto de estos derechos y garantías, no solo debe entenderse jurídicamente, sino que además, debe propiciar el desarrollo de las capacidades cognitivas del hombre, de tal forma que este, pueda comprender su realidad. Y a su vez, le facilite los conocimientos necesarios para ser activista en la defensa de los Derechos Humanos.

Por tal motivo, los ciudadanos de los diferentes Estados podrán exigir el respeto de sus derechos, con pleno conocimiento de las relaciones jurídicas que tienen lugar en el ámbito de la protección de los derechos fundamentales, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, e incluso los derechos ambientales, para lo que es indispensable tener en consideración, que estos derechos y garantías,

surgen de la comprensión del Derecho Educativo, como derecho transversal, y de la interdependencia que existe entre las diversas generaciones de Derechos Humanos.

CAPITULO III

EL DERECHO EDUCATIVO Y LA CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

El Derecho Educativo en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, está garantizado de conformidad con el Capítulo VI de la mencionada norma jurídica, referente a los derechos culturales y educativos.

Estos derechos, se encuentran establecidos en nuestra Carta Magna, desde el artículo 98, hasta el artículo 111, y son la base jurídica que rige el derecho a la educación y la cultura en todo el Estado venezolano. Sin embargo como se ha mencionado anteriormente, no podemos aislar el Derecho Educativo, de las normas de protección de niños, niñas o adolescentes. Por ello, se hace referencia a que en la aplicación del derecho a la educación, se tomará como garantía del principio más importante, el artículo 78 de la CRBV, debido a que es la norma que determina a los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derecho.

En el artículo 78 de la CRBV, se establece que los niños, niñas o adolescentes, son sujetos de pleno derecho, y gozan de la protección del Estado. La legislación nacional debe garantizar los derechos de los niños, niñas o adolescentes, destacando el interés superior que representa para la legislación interna y para el Derecho Internacional, de conformidad con los convenios, pactos y tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, tales como la Convención de los Derechos del Niño, entre otros.

Establece la creación de tribunales especializados con competencia en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, con la finalidad de dar un trato especial, que garantice el ejercicio y aplicación de las normas de protección en el marco del interés superior, asegurando la prioridad absoluta de las decisiones y acciones judiciales destinadas a garantizar sus derechos.

El Estado venezolano y la sociedad en general, según la presente norma, deberán asegurar el principio de prioridad absoluta en relación con la protección integral de los niños,

niñas o adolescentes, de conformidad con la legislación vigente.

Además el Estado, promoverá la incorporación de sus ciudadanos de forma progresiva al sistema rector en esta área del derecho. Lo que significa que la sociedad civil, podrá incorporarse en las diferentes instancias de protección de niños, niñas y adolescentes, de forma progresiva, de acuerdo a las disposiciones que se determinen en las leyes vigentes, a fin de garantizar lo expuesto en la presente norma constitucional, citada a continuación:

Artículo 78.

Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República. El Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan. El Estado promoverá su incorporación progresiva a la ciudadanía activa y

creará un sistema rector nacional para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes¹.

El Derecho Educativo en el ámbito constitucional, tiene como principal objetivo, garantizar el derecho a la Educación, como un Derecho Humano, para todas y todos los ciudadanos del Estado venezolano. Destacando que el derecho a la educación gratuita y obligatoria, debe ser garantizado sin distinciones de ningún tipo y sin importar las diferentes corrientes del pensamiento humano. Se promueve que el Estado, debe garantizar la educación, con bases fundadas en el conocimiento científico, tecnológico y humanístico, con el objetivo de orientar el desarrollo del potencial creativo de los ciudadanos, en el libre y pleno ejercicio de su personalidad.

La educación de conformidad con las normas constitucionales, se considera como un servicio público, que debe respetar la diversidad de criterios, de pensamiento, del libre ejercicio de la personalidad, y que por sus fines específicos, debe asumir el compromiso de elevar el potencial creativo

¹ Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Caracas, jueves 19 de febrero de 2009. Gaceta Oficial: N°5.908 Extraordinario. Artículo 78.

del ser humano, sustentándose en los principios democráticos, de valoración ética del trabajo y de los procesos participativos en el marco de la transformación social, tal como se puede observar en la siguiente cita:

Artículo 102.

La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social, consustanciados con los valores de la identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal. El Estado, con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana, de acuerdo con los principios contenidos en esta Constitución y en la ley².

En tal sentido, el Estado asume el rol de promover e impulsar a las familias y la sociedad en general, para esta-

² Ibídem., art. 102

blecer la corresponsabilidad de todos los Sujetos de Derecho Educativo en el proceso pedagógico, que orienta a la sociedad, al desarrollo de sus realidades socioculturales.

En este orden de ideas, se puede precisar que de conformidad con los principios constitucionales, las diversas dimensiones del Derecho Educativo, juegan un rol fundamental. Destacando, que esta importante rama del derecho, no solo persigue como objetivo, garantizar que se respete el derecho a la educación, sino que además, dentro de este derecho se transformen las realidades sociales, se desarrollen principios que entrelacen las diversas generaciones de Derechos Humanos, y que permitan el desarrollo social, antropológico, educativo y cultural del hombre, desde la valoración jurídica de sus derechos fundamentales.

El Derecho Educativo o derecho a la educación, nace de la doctrina de los Derechos Humanos y se consolida como una rama del derecho vinculante o exigible jurídicamente, con el surgimiento de los diversos instrumentos internacionales suscritos y ratificados por El Estado venezolano en materia de Derechos Humanos. Como se ha definido en párrafos anteriores, el artículo 23 de la Constitución de la

República Bolivariana de Venezuela. Permite que los pactos y tratados internacionales, sean de aplicación en los tribunales nacionales, cuando los mismos, cumplan con el objeto de proteger los Derechos Humanos en circunstancias, no previstas en la constitución o la legislación vigente. Sin embargo, la CRBV incorpora elementos jurídicos que permiten la garantía de los derechos educativos, de una forma satisfactoria, para todos los extractos de la sociedad venezolana.

La aplicación del Derecho Educativo, en su ámbito constitucional, surge en la medida que la Carta Magna como norma suprema, determina la existencia y los medios que garantizan el derecho a la educación, de conformidad con los tratados, pactos y convenciones internacionales, suscritas y ratificadas en materia de Derechos Humanos. Además, de las condiciones apropiadas en que se deba garantizar la educación, para alcanzar el desarrollo esperado en función de las necesidades del Estado y el bienestar de sus ciudadanos.

Las realidades sociales, la cultura y el derecho, juegan un papel muy importante en la aplicación del Derecho Educativo, y en la constitución se plasman las diversas líneas estratégicas que orientan el desarrollo del potencial pedagógico.

gico, que el sistema educativo venezolano, debe impulsar desde su legislación. Por ello, en los artículos sucesivos, se caracterizan aspectos muy importantes de conformidad con las condiciones a las que deberá responder el sistema educativo en todos sus niveles y modalidades.

En el artículo 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se establece que todas las personas tienen derecho a ser educados de forma integral y que esta formación, debe ser de calidad, permanente y en igualdad de condiciones y oportunidades. Se precisa que no deben existir limitaciones pedagógicas, más que las derivadas de las aptitudes, vocación o aspiraciones personales.

Se prevé la obligatoriedad de la educación, en todos los niveles del sistema educativo, haciendo referencia a la educación maternal, entendiendo esta etapa como el proceso pedagógico que recibe el niño o niña, desde los primeros años de vida, hasta su inclusión en el subsistema de educación preescolar, y se extiende la mencionada garantía a los diversos subsistemas de educación básica, educación media y diversificada.

La educación superior, de conformidad con el artículo 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se debe garantizar de forma gratuita hasta el nivel de pregrado. Por esta razón, las estructuras universitarias, deben estar incluidas en el ejercicio del Derecho Educativo. Por ello, se hace indispensable que en lo referente a la gratuidad de la educación universitaria, se promulguen normas jurídicas destinadas a garantizar el ingreso a las instituciones de educación superior, de acuerdo a los principios de la inclusión y la no discriminación.

Sin embargo, no es un secreto que la educación superior, requiere de planes de inversión, presupuestos amplios e infraestructura que garanticen la estabilidad del sistema. Por lo que, se hace indispensable que la CRBV, garantice no solo el derecho a la educación universitaria, sino que además, permita asegurar jurídicamente, los ingresos y planes presupuestarios que el Estado, debe invertir para lograr que se garantice este derecho. Adicionalmente, se prevé en la presente norma constitucional, la igualdad de atención para las personas con discapacidad y para los ciudadanos que se encuentren privados de libertad.

Si bien es cierto que de conformidad con lo expuesto en el artículo 103 de la CRBV, el derecho a la educación, debe ser garantizado a la población penitenciaria, y esto a su vez, constituye un elemento fundamental para la reinserción social de los privados de libertad. En la República Bolivariana de Venezuela, las estructuras y las realidades sociales de nuestros centros penitenciarios, dificultan en gran medida este objetivo. Por ello, las garantías de este derecho en la actualidad, se ve muy limitadas y los resultados esperados, carecen de efectividad.

En consideración con los argumentos expuestos, se precisa que la presente norma constitucional, aporta varios elementos que definen a grandes rasgos, las diferentes etapas del sistema educativo venezolano, tal como se puede observar a continuación:

Artículo 103.

Toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La imparti-

da en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. A tal fin, el Estado realizará una inversión prioritaria, de conformidad con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas. El Estado creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo. La ley garantizará igual atención a las personas con necesidades especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados o privadas de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y permanencia en el sistema educativo³.

La educación en la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con los principios constitucionales, se garantiza que estará a cargo de personas de reconocida idoneidad académica, sustentándose en el artículo 104 de la Carta Magna y lo previsto en el artículo 4, aparte 2°, del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente: “La carrera docente estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de idoneidad docente comprobada, provista del título profesional respectivo”⁴.

³ *Ibídem.*, art. 103

⁴ Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente. Decreto N° 1.011 de fecha 4 de Octubre de 2000, Gaceta Oficial N° 5.496 Extraordinario de fecha 31 de Octubre de 2000. Artículo 4.

En tal medida, el Estado de acuerdo a este argumento, establece en la mencionada norma constitucional, que se estimulará la actualización permanente y se garantizará la estabilidad en el ejercicio de la profesión, sin importar la condición pública o privada de las instituciones educativas. Se prevé que la carrera docente, de conformidad con la norma jurídica suprema, deberá garantizar al docente, un régimen de trabajo y nivel de vida acorde a la importancia de su misión.

Sin embargo, aun existen realidades sociales, políticas, culturales, económicas, entre otras, que en cierta forma, limitan la actualización adecuada del personal docente en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, además de limitar sus condiciones laborales en relación con las garantías establecidas en la mencionada norma jurídica.

Otro punto de vital importancia, relacionado con el ejercicio de la profesión docente, es que el ingreso, promoción y permanencia del personal docente, dependerá de los meritos y de los procesos de evaluación y desempeño. En donde los meritos deben ser reconocidos, sin injerencias políticas o ideológicas.

Por ello, se hace indispensable que la legislación vigente, estipule de forma objetiva las condiciones mencionadas en la norma constitucional, para que estos derechos puedan ser garantizados con efectividad.

La idoneidad académica del docente y su realidad social, son elementos fundamentales que permiten garantizar con mayor efectividad, el ejercicio del Derecho Educativo. Cabe destacar que no puede existir educación de calidad, sin un personal docente ampliamente calificado. La formación pedagógica, es un Derecho Humano, y por esta razón, el personal docente, debe ser formado en el área de Educación en Derechos Humanos.

Se precisa que la formación del personal docente, no debe exigirse a la ligera, en lo referente a su realidad curricular exclusivamente. Debido a que las medidas más significativas que puede tomar el Estado, para garantizar la preparación docente, es impulsar la Educación en Derechos Humanos, desde la formación académica, con una óptica objetiva e imparcial, que permita el libre desarrollo de la personalidad humana, en su multiplicidad de pensamiento.

Adicionalmente, la presente norma constitucional, establece que el docente, debe gozar de beneficios y de un nivel de vida adecuado, a su misión como ente formador de la sociedad. Por esta razón, se hace necesario que al personal docente, se le garanticen sus derechos correspondientes, a su formación académica, ingreso, promoción y permanencia dentro del sistema educativo, entre otros.

El artículo 105 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que de conformidad con la legislación vigente, se determinará las profesiones que requieren títulos académicos y formalidades como por ejemplo: Las condiciones especiales para su ejercicio, tales como: La necesidad de pertenecer a un Colegio Profesional, tal como se puede evidenciar a continuación: “La ley determinará las profesiones que requieren título y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas, incluyendo la colegiación”⁵.

En consideración a lo expuesto, las organizaciones colegiadas, tales como: Colegios de Abogados, Colegios Médicos, entre otros. También deben ser corresponsables en

⁵ CRBV, Ob. Cit., art. 105

la formación, promoción y defensa de la educación superior, en la materia que determinen los fines de su ejercicio profesional.

En otro orden de ideas, el Estado Venezolano, de conformidad con la CRBV en su artículo 106, permite que cualquier persona natural o jurídica que demuestre tener capacidad y cumplir con los requisitos, éticos, académicos, científicos, económicos, de infraestructura y los demás que establezca la legislación vigente, puede fundar y mantener instituciones educativas privadas. Sin embargo, la educación privada, debe contar con la supervisión, inspección, vigilancia y aceptación del Estado.

La educación privada en la República Bolivariana de Venezuela, está permitida de conformidad con los principios constitucionales y los tratados o pactos internacionales analizados. Siempre que las instituciones o planteles educativos, cumplan con los requisitos de ley, a fin de que en su ejercicio, puedan garantizar una educación de calidad al igual que las demás instituciones oficiales. Destacándose que las instituciones privadas no pueden impartir una formación, contraria a los fines de la educación establecidos en las normas

constitucionales o en la legislación vigente en materia educativa.

La educación en todos los niveles y modalidades del sistema educativo venezolano, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece la obligatoriedad de la educación ambiental y la educación ciudadana. Siendo obligatoria la educación para la preservación del medio ambiente, y la formación ciudadana, tanto en las instituciones públicas como privadas.

La obligatoriedad de la educación ambiental, permite que mediante la garantía del derecho a la educación, el ciudadano en su proceso de formación, comprenda la valoración del medio ambiente, de sus recursos y de la importancia que estos, representan en materia de Derechos Humanos. Por otra parte, la educación ciudadana, permite el fortalecimiento del contexto social y jurídico, en el que se garantiza el Derecho Educativo.

La formación ciudadana, corresponde, no solo al hecho de enseñar, normas morales y éticas, aplicables en el marco de la sociedad. Además, en este contexto, se deben

incluir, principios, normas y su relación con el libre desenvolvimiento de la conducta social de las personas, en el marco del ejercicio de la ciudadanía, y del respeto de los ciudadanos en el ámbito de los Derechos Humanos.

Las garantías previstas en la CRBV, referentes a la educación ambiental y la educación ciudadana, se establecen en su artículo 107, en donde además, se puede precisar que el Estado garantizará la enseñanza de la Lengua Castellana, La Historia y la Geografía de Venezuela, hasta finalizar el subsistema de educación diversificada, tal como se observa a continuación:

Artículo 107.

La educación ambiental es obligatoria en los niveles y modalidades del sistema educativo, así como también en la educación ciudadana no formal. Es de obligatorio cumplimiento en las instituciones públicas y privadas, hasta el ciclo diversificado, la enseñanza de la lengua castellana, la historia y la geografía de Venezuela, así como los principios del ideario bolivariano⁶.

⁶ Ibídem., art. 107

Estas áreas o componentes académicos, entre las que se mencionan, la Lengua Castellana, La Historia y la Geografía de Venezuela, se consideran de vital importancia, debido al contexto territorial y socio-cultural del Estado Venezolano.

Cabe destacar que de conformidad con el artículo 9 de la CRBV, el idioma oficial es el castellano, aun cuando se reconocen los idiomas indígenas, para el uso oficial en las comunidades indígenas, por constituir, parte de nuestro patrimonio cultural. Por esta razón, en el marco del sistema educativo venezolano, se reconoce y se afianza la enseñanza de la Lengua Castellana.

La importancia jurídica y social de la enseñanza de La Historia y la Geografía de Venezuela, también se puede observar en la Carta Magna, especialmente en el preámbulo, al citar: “El principio de integridad territorial”⁷, y “los referentes históricos en que se fundamente la presente constitución”⁸.

⁷ Ibídem., preámbulo

⁸ Ibid.

En tal sentido, se destaca que los componentes mencionados, revisten argumentos de obligatoriedad, en el ámbito de la enseñanza, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, los cuales de acuerdo con la CRBV, serán garantizados hasta el final del ciclo diversificado.

La educación y los medios de comunicación, si bien es cierto, se consideran como un recurso que puede resultar novedoso, para el fortalecimiento de las bases de una sociedad crítica. En este ámbito, la CRBV, expresa lo siguiente:

Artículo 108.

Los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información. Los centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones, según los requisitos que establezca la ley⁹.

De conformidad con lo antes expuesto, se establece que los medios de comunicación social, bien sean públicos o privados, deben aportar un beneficio sustentable en la for-

⁹ Ibídem., art. 108

mación ciudadana. Destacando los servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas, como entes que tienen la capacidad de educar. Y en tal medida, se expresa que los diversos centros educativos, deben hacer uso de los medios de comunicación, en el proceso pedagógico. Teniendo en cuenta el potencial existente en relación con el desarrollo tecnológico.

Si bien es cierto que esta importante garantía, permite a la sociedad, utilizar la información presentada por sus diferentes medios en beneficio del proceso pedagógico, es un ámbito que requiere importantes regulaciones jurídicas, y que en muchas circunstancias, deberá ser objeto de interpretaciones objetivas y complejas, que permitan el verdadero desarrollo educativo, en función del interés superior de los niños, niñas o adolescentes.

En este contexto, se considera que las normas constitucionales establecidas en materia de Derecho Educativo, están sujetas al desarrollo legislativo que pudiera surgir de conformidad con la carta magna, con el objeto de regular el proceso de la enseñanza en los múltiples contextos pedagógicos.

Por otra parte, se reconoce la autonomía de la educación superior en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Además, del principio de jerarquía que tiene por objeto garantizar a los egresados y egresadas, profesores y profesoras, el libre desenvolvimiento de sus áreas del saber, en función de la búsqueda del conocimiento y la investigación.

La autonomía universitaria, es una forma de liberar a la universidad de un sistema de dependencia, con el objeto de impulsar el desarrollo tecnológico, humanístico, y científico. Por ello, el artículo 109 de la CRBV, establece el principio de autonomía universitaria, en función de los avances que la misma puede representar en la investigación y desarrollo de la nación, tal como se puede observar a continuación:

Artículo 109.

El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la

Nación. Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión. Se establece la inviolabilidad del recinto universitario. Las universidades nacionales experimentales alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley¹⁰.

En tal sentido, las universidades como producto de la autonomía universitaria, otorgada por derecho constitucional, tendrán la responsabilidad de establecer sus formas de administración, control y vigilancia, sin más limitaciones que las previstas en la constitución y las leyes de la república. Destacando, la facultad en la elaboración, planificación, organización y actualización de programas de investigación y docencia o de extensión universitaria.

La autonomía universitaria, otorga otro derecho previsto en la constitución, el cual se considera como un elemento de vital importancia jurídica, para el desarrollo de la vida universitaria y las garantías del derecho a la educación

¹⁰ Ibídem., art. 109

en el sistema de educación superior. Este derecho, es la inviolabilidad del recinto universitario.

Esta garantía primordial, permite a la universidad, proteger su patrimonio tangible e intangible, garantizar el respeto de sus normas, bienes materiales y del patrimonio moral. La inviolabilidad del recinto universitario, es una garantía que permite la concreción del Derecho Educativo, en el sistema de educación superior, desde la protección del sistema universitario, frente a las posibles situaciones o procesos de Estadalización.

En tal medida, la inviolabilidad del recinto universitario, establecida en la Carta Magna, es el derecho que otorga la capacidad jurídica a las universidades de nuestro país, para ser libres e independientes de las posibles decisiones que pudieran violentar el derecho a la educación, como derecho humano transversal, que permite la articulación, promoción y defensa de las demás generaciones o categorías de Derechos Humanos, protegidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Tal como se puede observar, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece un conjunto de garantías, destinadas a la protección del principio de interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Estas garantías, a su vez, permiten afianzar el sistema educativo, desde la educación preescolar hasta el final de la educación secundaria, e incluso, permite el desarrollo de la educación universitaria, en el marco del Derecho Educativo.

En consideración, la CRBV, no solo estipula el derecho a la educación y la evolución de planes, programas y proyectos como fin de ampliar este derecho, sino que permite establecer principios orientadores del sistema educativo, al considerar la incorporación de conocimientos, áreas del saber, entre otros.

Por tal razón, se precisa que el Derecho Educativo, se encuentra previsto en las disposiciones constitucionales, destinadas a proteger los derechos y garantías establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en otros pactos, tratados o convenciones internacionales en materia de Derechos Humanos. Las cuales tengan el objetivo de permitir que la educación, sea accesible a todos los ciudada-

nos sin distinciones de ningún tipo. Lo que implica para el Estado venezolano, garantizar el derecho a una educación de calidad, para todos los ciudadanos, como un derecho fundamental, que debe ser protegido y difundido por todos los sectores que se comprometen con el desarrollo de la nación.

CAPITULO IV

EL DERECHO EDUCATIVO Y LA LEY ORGANICA DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

El Derecho Educativo, tal como puede evidenciarse en el contexto constitucional, al que se refiere el artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Se destacan tres elementos de vital importancia que son los siguientes:

- a) Todos los niños, niñas y adolescentes, son sujetos plenos de derecho.
- b) Se asegurará con prioridad absoluta su protección integral.
- c) Se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan.

En tal sentido, la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), de acuerdo con los

principios constitucionales, destaca que los niños, niñas y adolescentes, gozarán de las mismas garantías que las establecidas en la Carta Magna.

El primer elemento, que se precisa de conformidad con lo expuesto en el artículo 78 de la CRBV. Es la inclusión de los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derecho, como se puede observar en el artículo 10 de la LOPNNA. En este artículo, se define a los niños, niñas o adolescentes, como Sujetos de Derecho, como se evidencia a continuación:

Artículo 10. Niños, niñas y adolescentes sujetos de derecho. Todos los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho; en consecuencia, gozan de todos los derechos y garantías consagrados en favor de las personas en el ordenamiento jurídico, especialmente aquellos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño¹.

El artículo 10 de la LOPNNA, reconoce al niño, niña o adolescente, como Sujeto de Derecho, y por tal razón, se estipula que estos deberán gozar de los derechos y garantías

¹ Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. (LOPNNA). De fecha 10 de Diciembre de 2007. Gaceta Oficial: N°5.859 Extraordinario. Artículo 10.

que establezca la legislación vigente, y se hace énfasis en el respeto de los derechos consagrados en la Convención de los Derechos del Niño.

Seguidamente, en los artículos sucesivos de la LOPNNA. Se destacan los derechos inherentes a los niños, niñas y adolescentes, los cuales deben ser garantizados de conformidad con lo establecido en la constitución y la ley.

En el artículo 11 de la LOPNNA, se les reconoce a los niños, niñas y adolescentes, los derechos inherentes a la persona humana, de conformidad con el ordenamiento jurídico de la República Bolivariana de Venezuela, aun cuando estas garantías, no estén implícitas en la norma antes citada. Punto de vital importancia, en el desarrollo de la doctrina de los Derechos Humanos.

Adicionalmente, cabe destacar que la LOPNNA en su artículo 12, determina la naturaleza de los derechos y garantías establecidas en materia de protección de niños, niñas y adolescentes. Destacando, que estos derechos y garantías, son de orden público, Intransigibles, Irrenunciables, Interdependientes e Indivisibles.

En este contexto jurídico, los derechos del niño, guardan una amplia relación con la doctrina de los Derechos Humanos, debido a los principios que determinan su forma de aplicación.

De acuerdo a sus características, los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, son de orden público, en la medida que impera el estado de legalidad, en el marco del ordenamiento jurídico (impero-atributivo). Son intransigibles, debido a que no admiten la trasgresión del derecho, por lo cual se considera inviolable, y no negociable. Son irrenunciables, debido a que los Sujetos de Derecho, no pueden renunciar a ellos. Son Interdependientes e indivisibles, por que guardan una relación entre sí.

Por esta razón, los derechos y garantías del niño, no pueden dividirse, aplicarse a medias o negar un derecho mediante la aplicación de otro. Debido a que todos los derechos y garantías inherentes a los niños, niñas y adolescentes, están interrelacionados, tal cual como sucede en la doctrina de los Derechos Humanos.

El segundo elemento que se menciona, de acuerdo con el artículo 78 de la CRBV. Es el principio de Prioridad Absoluta establecido en el artículo 7, de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), tal como se destaca en la siguiente cita:

Artículo 7. Prioridad Absoluta. El Estado, la familia y la sociedad deben asegurar, con Prioridad Absoluta, todos los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. La prioridad absoluta es imperativa para todos y comprende:

- a) Especial preferencia y atención de los niños, niñas y adolescentes en la formulación y ejecución de todas las políticas públicas.
- b) Asignación privilegiada y preferente, en el presupuesto, de los recursos públicos para las áreas relacionadas con los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y para las políticas y programas de protección integral de niños, niñas y adolescentes.
- c) Precedencia de los niños, niñas y adolescentes en el acceso y la atención a los servicios públicos.
- d) Primacía de los niños, niñas y adolescentes en la protección y socorro en cualquier circunstancia².

² Ibídem., art. 7

En este argumento, se precisa que todos los derechos y garantías referentes a los niños, niñas o adolescentes, deben gozar de prioridad absoluta, estableciendo la atención especial y preferencia en esta área del derecho. La asignación privilegiada de presupuestos y recursos públicos, para los fines de garantizar el respeto de sus derechos y garantías. El acceso prioritario de los menores a los servicios públicos y la protección o auxilio de niños, niñas y adolescentes en cualquier circunstancia.

El tercero y último elemento que se menciona, de conformidad con el artículo 78 de la CRBV. Es el principio de Interés Superior, establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), en el cual se evidencia lo siguiente:

Artículo 8. Interés Superior del Niños, Niñas y Adolescentes. El Interés Superior de Niños, Niñas y Adolescentes es un principio de interpretación y aplicación de esta Ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a los niños, niñas y adolescentes. Este principio está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías.

Parágrafo Primero. Para determinar el interés superior de niños, niñas y adolescentes en una situación concreta se debe apreciar:

- a) La opinión de los niños, niñas y adolescentes
- b) La necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y sus deberes.
- c) La necesidad de equilibrio entre las exigencias del bien común y los derechos y garantías del niño, niña o adolescente.
- d) La necesidad de equilibrio entre los derechos de las personas y los derechos y garantías del niño, niña o adolescente.
- e) La condición específica de los niños, niñas y adolescentes como personas en desarrollo.

Parágrafo Segundo. En aplicación del Interés Superior de Niños, Niñas y Adolescentes, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros³.

En este contexto, se puede apreciar que lo establecido en la CRBV, referente al principio de Interés Superior, se ve desarrollado en el artículo 8 de la LOPNNA, al considerar que los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescen-

³ Ibídem., art. 8

tes, se sustentan en el mencionado principio jurídico, debido a que las decisiones en esta materia, deberán ser garantizadas con preferencia en lo que refiere a la protección y desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.

Además de establecerse que el interés superior, se aplicará en situaciones concretas a fin de garantizar las opiniones de los niños, niñas o adolescentes, sus derechos y garantías en el marco del bien común, en función del equilibrio que debe existir entre los derechos de los ciudadanos mayores de edad y el de los menores de 18 años, y la condición que los menores de edad, presentan como personas en desarrollo.

En tal medida, se plantea que en todas las etapas del desarrollo de la vida de los niños, niñas y adolescentes, se tome como principio jurídico, el interés superior que reviste el derecho en esta materia. Destacando que en la aplicación del principio de interés superior, cuando existan conflictos entre los derechos y garantías del niño, niña o adolescente, y otros derechos o intereses, se otorgará mayor importancia a los derechos del grupo antes mencionado, debido a que para el Estado y la legislación, siempre prevalecerá el principio de

interés superior en materia de protección de niños, niñas y adolescentes.

El Derecho a la Educación.

En relación con el derecho a la educación, la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA) en su artículo 53, establece el Derecho a la educación gratuita y obligatoria. Se prevé garantizar las condiciones más favorables para el cumplimiento de este derecho.

La inclusión de los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, deberá responder a sus condiciones más favorables, como se menciona en el párrafo anterior, y por esta razón, se tiene en cuenta que el derecho a la educación será garantizado en las instituciones más cercanas a su residencia. Incluso en los casos en que el menor, se encuentre cumpliendo medidas socio-educativas previstas en el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente.

El Estado, de conformidad con lo planteado en la presente norma jurídica, tiene el deber de crear y mantener planteles educativos oficiales, que brinden una educación

gratuita y de calidad. La educación debe ser integral, y para ello, se debe garantizar que el Estado realice las inversiones y designe los presupuestos necesarios para tal fin.

La educación impartida en los mencionados establecimientos educativos, será gratuita en todos sus niveles y modalidades, tal como se establece en la constitución y en las leyes vigentes.

Además de lo previsto en el artículo 53 de la LOPN-NA, existe otro elemento fundamental, para la aplicación del Derecho Educativo, el cual se puede precisar en el artículo 54 de esta misma ley, de conformidad con lo expuesto en la siguiente cita:

Artículo 54. Obligación del padre, de la madre, representantes o responsables en materia de educación. El padre, la madre, representantes o responsables tienen la obligación inmediata de garantizar la educación de los niños, niñas y adolescentes. En consecuencia, deben inscribirlos oportunamente en una escuela, plantel o instituto de educación, de conformidad con la ley, así como exigirles su asistencia regu-

lar a clases y participar activamente en su proceso educativo⁴.

En referencia al presente argumento, se puede observar que en este artículo, se inicia la aplicación del Derecho Educativo desde el contexto de las obligaciones.

En consideración a lo previsto en el artículo 54 de la LOPNNA, el padre, madre, representante o responsable, contrae una obligación, de acuerdo a lo establecido en la ley y tal obligación, permite la garantía de un derecho enmarcado en el interés superior.

En tal sentido, se obliga a los padres o responsables a garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas o adolescentes a su cargo, a inscribirlos en centros o planteles educativos, y a exigirles su asistencia a clases de forma regular, así como de ser partícipes de forma activa en el proceso educativo.

La participación activa del representante en el proceso educativo, es un elemento de vital importancia jurídica, en el marco del Derecho Educativo. Debido a que el represen-

⁴ Ibídem., art. 54

tante, es quien ejerce la supervisión más efectiva de la actividad escolar. Así mismo, es quien tiene la facultad de garantizar la asistencia regular y la permanencia del niño, niña o adolescente, dentro del sistema educativo. Por esta razón, el padre madre o responsable, debe asumir el compromiso de incorporarse de forma activa en el proceso de formación de su representado.

Además, el representante debe incorporarse de forma activa en el proceso pedagógico, debido a que la formación del niño, no es exclusiva del contexto escolar. También existe una continuidad del proceso pedagógico en el hogar, el cual debe ser garantizado por el núcleo familiar. Destacando que el padre, madre o responsable de la crianza, es quien ejerce el rol de autoridad.

El proceso educativo, desarrollado en el ámbito escolar, permite que el representante esté en contacto con la realidad, en lo que concierne a los avances pedagógicos de su representado. Por ello, la relación existente en el marco de la obligación, que el representante adquiere de conformidad con el artículo 54 de la LOPNNA, está directamente vincu-

lada, con la garantía del derecho a la educación del niño, niña o adolescente.

La Violación del Derecho a la Educación.

En relación con lo previsto, en el artículo 226 de la LOPNNA, la violación del derecho a la educación, establecida de conformidad con el artículo 53 de la misma ley, será objeto de multa, la cual será fijada de acuerdo al límite mínimo de 15 unidades tributarias y un máximo de 90 unidades tributarias.

Destacando que la misma sanción, se aplicará también a los padres, madres o responsables, que incumplan con el artículo 54 de la LOPNNA, referente a la obligación de los padres, madres o responsables, en materia de educación, cuando estos no aseguren el derecho a la educación de los niños, niñas o adolescentes que se encuentren bajo su responsabilidad de crianza.

En este ámbito, el docente, no podrá negar el derecho a la educación, lo que determina que no podrá negarse a ningún niño, niña o adolescente, el derecho a ser inscrito,

condicionar el ingreso o permanencia del estudiante en la institución, lo cual será sancionado con la pena anteriormente prevista en la ley, tal como se puede evidenciar a continuación:

Artículo 226. Violación del derecho a la educación. Quien impida indebidamente la inscripción o ingreso de un niño, niña o adolescente a una escuela, plantel o institución de educación, o su permanencia en el mismo, será sancionado o sancionada con multa de quince unidades tributarias (15 U.T.) a noventa unidades tributarias (90 U.T.). La misma multa se aplicará al padre, la madre, representantes o responsables que no aseguren al niño, niña o adolescente su derecho a la educación, a pesar de haber sido requerido para ello⁵.

La Participación en el Proceso Educativo.

El derecho a participar en el proceso educativo, que tienen todos los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con lo establecido en la LOPNNA, también se puede observar en lo previsto en el artículo 55 de esta ley. En concordancia, se menciona que todos los niños, niñas y adolescentes, tienen el pleno derecho de ser informados sobre la participación

⁵ Ibídem., art. 226

activa, que tienen en relación con el proceso educativo. En este contexto, se puede precisar que también se garantiza de conformidad con la presente norma jurídica, el respeto de este mismo derecho, para los padres madres y responsables.

Destacando que el derecho a ser informado sobre los avances pedagógicos, y sobre todas las situaciones del acontecer educativo, relacionadas con el proceso de formación, es un derecho fundamental que debe ser garantizado tanto a los niños, niñas o adolescentes, como al representante, siempre que tales informaciones versen sobre hechos que conciernan a los menores que se encuentren bajo su Patria Potestad, representación o responsabilidad.

Adicionalmente, la mencionada norma jurídica, establece que el Estado, debe ser el promotor en el ejercicio de este derecho. Por ello, debe brindar información y formación apropiada en la materia de protección de niños, niñas y adolescentes. De acuerdo a lo mencionado, se destaca que el Estado, es responsable de mantener una formación adecuada, tanto para los menores de edad, como para sus representantes o responsables de crianza.

Esta formación, debe contribuir con el desarrollo del proceso educativo, y debe orientar a los representantes en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, además de permitir que los ciudadanos menores de edad, conozcan sus derechos, sus deberes y el correcto ejercicio de la relación existente entre derechos y obligaciones en materia de protección en el ámbito escolar, y en función del desarrollo del proceso pedagógico.

Si bien es cierto que en la República Bolivariana de Venezuela, existe formación adecuada y difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los medios académicos y de comunicación, la información y formación aportada por el personal docente, debe ampliarse con la finalidad de promover no solo los derechos, sino que además, se debe garantizar la difusión de los deberes. De acuerdo con la capacidad jurídica que tiene todo ciudadano menor de edad, de contraer obligaciones, de conformidad con la ley.

Este punto de vital importancia, permite evidenciar la relación existente entre derechos y obligaciones, en materia de protección de niños, niñas y adolescentes. Lo que se considera fundamental, para el desarrollo educativo en los diver-

sos ámbitos: Académico, Familiar, Social, e incluso Comunicacional.

No solo se precisa la existencia de derechos, para los niños, niñas y adolescentes de conformidad con la LOPNNA. También se establecen deberes que se deben cumplir, destacando la capacidad de los menores, como Sujetos Plenos de Derecho.

En tal sentido, se precisa que de conformidad con el artículo 93 de la LOPNNA, son deberes del niño, niña y adolescente, los que se mencionan a continuación en la siguiente cita:

Artículo 93. Deberes de los niños, niñas y adolescentes.

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen los siguientes deberes:

- a) Honrar a la patria y sus símbolos.
- b) Respetar, cumplir y obedecer todas las disposiciones del ordenamiento jurídico y las órdenes legítimas que, en la esfera de sus atribuciones, dicten los órganos del poder público.
- c) Respetar los derechos y garantías de las demás personas.

- d) Honrar, respetar y obedecer a su padre, madre, representantes o responsables, siempre que sus órdenes no violen sus derechos y garantías o contravengan al ordenamiento jurídico.
- e) Ejercer y defender activamente sus derechos.
- f) Cumplir sus obligaciones en materia de educación.
- g) Respetar la diversidad de conciencia, pensamiento, religión y culturas.
- h) Conservar el medio ambiente.
- i) Cualquier otro deber que sea establecido en la ley⁶.

En relación con lo previsto en el artículo 93 de la LOPNNA, se puede evidenciar que los deberes de los niños, niñas y adolescentes, representan valores que vinculan su cumplimiento, con los fines de la enseñanza en función de fortalecer el proceso pedagógico.

Por ejemplo:

Al considerar que los niños, niñas y adolescentes, tienen el deber de honrar los símbolos patrios, de respetar el ordenamiento jurídico, los derechos y garantías de las demás

⁶ Ibídem., art. 93

personas, entre otros. Se establece una relación directa, con los fines de la enseñanza por lo que es un punto realmente considerable, e importante para el ejercicio del Derecho Educativo.

Por tal motivo, este derecho establecido en el artículo 55 de la LOPNNA, sobre la difusión e información de los derechos y deberes del niño, niña y adolescente, se debe garantizar de acuerdo a los fines del efectivo funcionamiento del sistema educativo.

Difusión de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente.

La difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es una garantía fundamental, la cual se encuentra prevista en el artículo 62 de la LOPNNA, tal como se puede observar en la siguiente cita:

Artículo 62. Difusión de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. El Estado, con la activa participación de la sociedad, debe garantizar programas permanentes de difusión de los derechos y ga-

rantías de los niños, niñas y adolescentes en las escuelas, institutos y planteles de educación⁷.

En este contexto, se puede evidenciar que el Estado, debe promover la participación activa de la sociedad, en programas permanentes de difusión de los derechos y garantías establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA). Los cuales deben ser ejecutados en las diversas instituciones educativas.

Además, se precisa que esta garantía permite la difusión de los derechos del niño, niña y adolescente, en todos los ámbitos.

Lo que permite difundir en las instituciones educativas, las disposiciones que permiten el ejercicio y aplicación del Derecho Educativo en el marco del contexto escolar. Debido a que de conformidad con la norma antes citada, se puede garantizar la difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en materia educativa.

⁷ Ibídem., art. 62

Educación Crítica para los Medios de Comunicación.

La Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA) en su artículo 69, establece la incorporación de la educación crítica para los medios de comunicación. Este elemento de vital importancia para el Derecho Educativo, permite al Estado impulsar la formación adecuada de los niños, niñas y adolescentes, mediante la búsqueda de la información.

El sistema educativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 69 de la LOPNNA, debe incorporar la educación crítica para los medios de comunicación, en los planes y programas educativos, y por consecuencia este elemento se incluirá en las asignaturas o materias obligatorias, tal como se evidencia a continuación:

Artículo 69. Educación crítica para medios de comunicación. El Estado debe garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes educación dirigida a prepararlos y formarlos para recibir, buscar, utilizar y seleccionar apropiadamente la información adecuada a su desarrollo.

Parágrafo Primero. La educación crítica para los medios de comunicación debe ser incorporada a los pla-

nes y programas de educación y a las asignaturas obligatorias.

Parágrafo Segundo. El Estado, con la activa participación de la sociedad, debe garantizar a todos los niños, niñas, adolescentes y sus familias programas sobre educación crítica para los medios de comunicación⁸.

En referencia a la presente cita, el Estado, conjuntamente con la sociedad, deben ser garantes de la incorporación de la educación para los medios de comunicación, la cual se inicia en el aula de clases, pero debe conducir al correcto uso y aprovechamiento de los medios de comunicación en el marco del análisis crítico.

Cabe destacar, que esta garantía representa un elemento importante para el Derecho Educativo, debido a que mediante el análisis del contenido comunicacional o audiovisual y la adecuada selección de la programación, que el niño, niña o adolescente, recibe y analiza de forma crítica, se pueden generar aportes muy significativos, en relación con el proceso de formación integral.

⁸ Ibídem., art. 69

Además, esta garantía permite que el proceso de aprendizaje, trascienda del plantel al hogar. Debido a que los medios de comunicación, son entes formadores que pueden cumplir la importante función de medios educativos cuando el niño, niña o adolescente, deja el recinto escolar.

Sin embargo, el contexto real en el cual se sustentan los medios de comunicación, el control inadecuado de la programación, e incluso, la manipulación ideológica evidente en ciertos contenidos comunicacionales, generan la existencia de una preocupación general, que conlleva a dudar de la factibilidad de la educación crítica para los medios de comunicación en el ámbito escolar.

En este contexto, la educación crítica para los medios de comunicación no es un elemento negativo, se considera como una estrategia que contribuye con el desarrollo de la integralidad de la educación, pero en la medida que el docente ejerce una imparcialidad ideológica y establece como principal criterio para el análisis la objetividad.

No obstante, la imparcialidad y objetividad, no son los únicos criterios que deben ser considerados para que la

educación relativa a los medios de comunicación, funcione correctamente en relación con el contenido recomendado a los niños, niñas y adolescentes o sobre los criterios que deben tener en cuenta al momento de elegir lo que ven a través de estos medios. También debe vincularse el sentido ético-moral.

Si bien es cierto que en los diversos medios de comunicación social, existe programación acorde para las diferentes edades de los niños, niñas o adolescentes, y que ellos, tienen el derecho de acceder a estas programaciones con plena libertad, es una realidad evidente, que muchos de los contenidos que se presentan, no se corresponden con los criterios que deben orientar la educación.

Por tal razón, es indispensable que a fin de poder asegurar las garantías y derechos, que permitan regular la sana convivencia institucional y fortalecer la educación integral, mediante el análisis crítico de la educación que deben tener los niños, niñas y adolescentes sobre los medios de comunicación, se debe formar y preparar a los educadores y educadoras en relación a los diversos criterios éticos y mora-

les, además de promover el análisis objetivo e imparcial en el uso de la sana crítica.

El artículo 72 de la LOPNNA, prevé que los diversos medios de comunicación deben difundir programas informativos, educativos, culturales y artísticos o de entretenimiento, para los niños, niñas y adolescentes en horario para todo público, lo cual debe garantizar la difusión de un mínimo de 3 horas diarias.

Este derecho, permite que la aplicación de la educación crítica para los medios de comunicación, se desarrolle en un entorno más favorable, de acuerdo con el derecho que tienen los niños a disfrutar de estos recursos, y amplía la capacidad del docente, de continuar con el proceso de aprendizaje, más allá del contexto educativo. Favoreciendo el interés de los niños, niñas y adolescentes en la formación crítica integral.

Educación y la Orientación Vocacional.

El vínculo existente entre la educación y el sistema socio productivo, también es regulado por la Ley Orgánica

de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), como se puede observar a continuación en su artículo 58:

Artículo 58. Vínculo entre la educación y el trabajo. El sistema educativo nacional estimulará la vinculación entre el estudio y el trabajo. Para ello, el Estado promoverá la orientación vocacional de los y las adolescentes y propiciará la incorporación de actividades de formación para el trabajo en la programación educativa regular, de forma tal que armonicen la elección de la profesión u oficio con el sistema de enseñanza y con las necesidades del desarrollo económico y social del país⁹.

En este ámbito, la LOPNNA garantiza que el Estado, deberá ser el promotor en el proceso de orientación vocacional. Por tal razón, los adolescentes, deben ser tomados en cuenta, en la incorporación de actividades de formación para el trabajo. Así mismo, el Estado, realizará actividades con la finalidad de facilitar a los adolescentes el proceso de elección de carreras universitarias, profesiones u oficios, que permitan potenciar el futuro desarrollo económico de la nación.

⁹ Ibídem., art. 58

En referencia, se entiende que mediante el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 58 de la LOPNNA. El Estado, como garante del desarrollo del país, a través de sus entes competentes en la materia, los cuales son:

- a) El Consejo Nacional de Universidades (CNU).
- b) La Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU).

Debe garantizar, los procedimientos pertinentes, para facilitar la adecuada elección de las carreras que los y las adolescentes, decidan estudiar de acuerdo con los criterios de orientación vocacional y disponibilidad territorial, acorde a su realidad y posibilidades socioeconómicas, en función del logro de sus objetivos académicos.

En la actualidad, la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), mediante el Sistema Nacional de Ingreso al Sector Universitario, realiza anualmente el proceso de ingreso a la educación superior, para los estudiantes del subsistema de Educación Media General, anteriormente

conocido como subsistema de Educación Media Diversificada.

La Educación y el Trabajo.

Los adolescentes trabajadores y trabajadoras, también gozaran del derecho a la educación, en tal medida, el trabajo, no debe interferir con el proceso educativo. De conformidad con el artículo 59 de la LOPNNA, el Estado, debe garantizar la existencia y aplicación de programas educativos para los adolescentes trabajadores y trabajadoras, de acuerdo a la siguiente cita:

Artículo 59. Educación para niños, niñas y adolescentes trabajadores y trabajadoras. El Estado debe garantizar regímenes, planes y programas de educación dirigidos a los niños, niñas y adolescentes trabajadores y trabajadoras, los cuales deben adaptarse a sus necesidades específicas, entre otras, en lo relativo al horario, días de clase, calendario y vacaciones escolares. El Estado debe asegurar recursos financieros suficientes que permitan cumplir esta obligación¹⁰.

Estas disposiciones, también están previstas en el artículo 95 de la LOPNNA, en donde se destaca que debe existir armonía entre el trabajo y la educación. Por tal razón,

¹⁰ Ibídem., art. 59

los adolescentes trabajadores o trabajadoras, tienen derecho a la educación, y los patronos en cualquier circunstancia, deberán garantizar el ejercicio de este derecho. Existe la corresponsabilidad del Estado, patronos, patronas y sociedad en general, a los fines del ejercicio del derecho a la educación que debe ser garantizado a los adolescentes trabajadores y trabajadoras, de conformidad con lo expuesto en la siguiente cita:

Artículo 95. El trabajo de los y las adolescentes debe armonizarse con el disfrute efectivo de su derecho a la educación. El Estado, las familias, la sociedad, los patronos y patronas deben velar para que los adolescentes trabajadores y las adolescentes trabajadoras completen la educación obligatoria y tengan acceso efectivo a la continuidad de su educación¹¹.

En relación a los niños y niñas, se destaca que no poseen una edad acorde, para ejercer funciones de trabajo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 96 de la LOPNNA, en el que se indica que la edad del adolescente para tal fin, debe ser de 14 años, tal como se establece textualmente: “Se fija

¹¹ Ibídem., art. 95

en todo el territorio de la República la edad de catorce años como edad mínima para el trabajo”¹².

Sin embargo, de conformidad con el Parágrafo Segundo del artículo 96 de la LOPNNA, los niños y niñas, que laboren tienen derechos a sus beneficios y remuneraciones al igual que los adolescentes trabajadores. Los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, pueden autorizar a adolescentes menores de 14 años, en circunstancias debidamente justificadas. Destacando que no se autorizará el trabajo a los menores de 12 años.

La Educación Intercultural Bilingüe.

Los niños, niñas y adolescentes de las comunidades indígenas, de conformidad con lo previsto en la LOPNNA en su artículo 60, tienen garantizado el derecho a la educación. En referencia, el Estado, debe ser promotor y garante de la ejecución de planes y proyectos educativos, que faciliten una educación enmarcada en la interculturalidad y con la inclusión de los idiomas propios de las comunidades indígenas.

¹² Ibídem., art. 96

Se garantizará el respeto de la cultura de cada grupo étnico, de sus valores, costumbres y tradiciones, sin el menoscabo de las disposiciones previstas en la constitución y las leyes vigentes. El acceso al conocimiento será generalizado, pero acorde a la realidad del grupo étnico. Por ello, se garantizará el respeto de los idiomas indígenas y valores culturales, de acuerdo a lo previsto en el artículo 60 de la LOPNNA, citado a continuación:

Artículo 60. Educación de niños, niñas y adolescentes indígenas. El Estado debe garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes indígenas regímenes, planes y programas de educación intercultural bilingüe que promuevan el respeto y la conservación de su propia vida cultural, el empleo de su propio idioma y el acceso a los conocimientos generados por su propio pueblo o cultura y de otros pueblos indígenas. El Estado debe asegurar recursos financieros suficientes que permitan cumplir con esta obligación¹³.

La Educación Especial.

El derecho a la educación, en el caso de niños, niñas y adolescentes, con necesidades especiales, debe ser garantizado con planes y programas especializados. El Estado debe

¹³ Ibídem., art. 60

ser promotor de la inclusión, y del respeto de las personas que presentan condiciones especiales. Así mismo, se debe asegurar la participación social activa en beneficio del pleno derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales, en relación con el derecho a la educación de calidad y que favorezca su condición y necesidades.

En tal sentido, las disposiciones que garantizan el debido reconocimiento de las garantías y derechos de los niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales, se prevé, en el artículo 61 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA). En el cual se establece lo siguiente:

Artículo 61. Educación de niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales. El Estado debe garantizar modalidades, regímenes, planes y programas de educación específicos para los niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales. Así mismo, debe asegurar, con la activa participación de la sociedad, el disfrute efectivo y pleno del derecho a la educación y el acceso a los servicios de educación de estos niños, niñas y adolescentes. El Estado debe asegurar recur-

sos financieros suficientes que permitan cumplir esta obligación¹⁴.

El Trato a los Estudiantes.

El Derecho Educativo, no solo pretende garantizar el goce del derecho a la educación. También se fundamenta en las mejoras de las condiciones, en las cuales se debe garantizar este derecho. Por ello, se establece el derecho que todos los niños, niñas y adolescentes, tienen de ser respetados por los educadores y educadoras de acuerdo a lo previsto en el artículo 56 de la LOPNNA, el cual se puede observar en la siguiente cita:

Artículo 56. Derecho a ser respetados y respetadas por los educadores y educadoras. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser respetados y respetadas por sus educadores y educadoras, así como a recibir una educación, basada en el amor, el afecto, la comprensión mutua, la identidad nacional, el respeto recíproco a ideas y creencias, y la solidaridad¹⁵.

En consideración a la presente cita, todo niño, niña o adolescente, deberá ser respetado por los docentes, directivos y/o por cualquier otro personal, que se vincule con la vida

¹⁴ Ibídem., art. 61

¹⁵ Ibídem., art. 56

institucional del plantel educativo. El personal docente por su formación y cultura, debe convertirse en un ente formador del estudiante, que no solo imparta las áreas de conocimiento, sino que además, contribuya con la formación jurídico-educativa de los estudiantes.

El educador debe respetar las garantías establecidas en el artículo 56 de la LOPNNA, en el cual se prevé el derecho de los niños, niñas y adolescentes, de ser educados en un ambiente de afectos, de comprensión, de respeto por la identidad nacional y valoración de sus ideas y creencias. También, se prevé que el niño, niña o adolescente, gozara de un trato digno en el que se le proteja de cualquier castigo físico o humillante, tal como se puede evidenciar en la última frase del artículo 56 de la LOPNNA, la cual se cita a continuación: “En consecuencia, se prohíbe cualquier tipo de castigo físico o humillante”¹⁶.

El artículo 56 de la LOPNNA, guarda una amplia relación, con las garantías establecidas en el artículo 32-A,

¹⁶ Ibídem., art. 56

de la misma ley, en el que se establece el derecho de los niños, niñas y adolescentes al buen trato.

En este contexto se precisa que el artículo 32-A de la LOPNNA, establece que todo niño, niña o adolescente, tiene derecho a un buen trato, tanto en su crianza como en el proceso de la enseñanza. Por ello, esta protección debe ser garantizada por sus padres, tutores, representantes o responsables, e incluso por los educadores y educadoras.

En relación a lo expuesto, se prohíben los maltratos y cualquier otro método de crianza o educación, que conlleve a la aplicación de castigos físicos o humillantes, de conformidad con lo previsto en el artículo 32-A de la LOPNNA, como se puede evidenciar a continuación:

Artículo 32-A. Derecho al buen trato. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al buen trato. Este derecho comprende una crianza y educación no violenta, basada en el amor, el afecto, la comprensión mutua, el respeto recíproco y la solidaridad.

El padre, la madre, representantes, responsables, tutores, tutoras, familiares, educadores y educadoras deberán emplear métodos no violentos en la crianza, formación, educación y corrección de los niños, niñas y adolescentes. En consecuencia, se prohíbe cualquier

tipo de castigo físico o humillante. El Estado, con la activa participación de la sociedad, debe garantizar políticas, programas y medidas de protección dirigidas a la abolición de toda forma de castigo físico o humillante de los niños, niñas y adolescentes¹⁷.

Se definen como castigos físicos, cualquier forma de uso de la fuerza con fines de crianza o educación, o la aplicación de medidas que tengan como objeto causar dolor o incomodidad corporal, y como castigos humillantes, todo acto que tenga por objeto ofender, denigrar o desvalorizar, al niño, niña o adolescente, incluyendo el trato estigmatizante o ridiculizador, que se ejecute en función de la crianza o educación, tal como se puede evidenciar en el artículo 32-A de la LOPNNA, apartes (3º) y (4º), citados a continuación:

Se entiende por castigo físico el uso de la fuerza, en ejercicio de las potestades de crianza o educación, con la intención de causar algún grado de dolor o incomodidad corporal con el fin de corregir, controlar o cambiar el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, siempre que no constituyan un hecho punible.

Se entiende por castigo humillante cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante o ridiculizador, realizado en ejercicio de las potestades

¹⁷ Ibídem., art. 32-A

de crianza o educación, con el fin de corregir, controlar o cambiar el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, siempre que no constituyan un hecho punible¹⁸.

En consideración a las garantías establecidas en el artículo 32-A de la LOPNNA, se puede observar la necesidad de relacionarlo con lo previsto en el artículo 56 de la ley mencionada, debido a que el artículo 56, prevé el derecho de los niños, niñas y adolescentes, a ser respetados por el docente, en un entorno que brinde las condiciones de armonía y comprensión más favorables, para el aprendizaje, y para ello, existe la necesidad de erradicar los métodos de enseñanza basados en la ejecución de castigos físicos o humillantes, los cuales son definidos con mayor claridad y especificidad en el artículo 32-A de la LOPNNA.

En relación con el Artículo 32-A de la LOPNNA, se tiene en consideración, que tanto la crianza del niño, niña o adolescente la cual es responsabilidad de su madre, padre o responsable, como la educación que estará bajo la responsabilidad del docente, debe garantizarse en un ambiente sano,

¹⁸ Ibídem., art. 32-A

de armonía, y que brinde los elementos necesarios para el desarrollo de la sana convivencia.

En las definiciones aportadas por el artículo 32-A de la LOPNNA, se establece la prohibición de los castigos físicos, por lo que jurídicamente, estos hechos, adquieren carácter sancionatorio de acuerdo con el principio de legalidad.

En lo referente a la legalidad, se entiende la importancia de este principio, debido a la necesidad de establecer una tipificación taxativa de los hechos que son susceptibles de sanciones penales en el marco de la legislación positiva, para que tales conductas, puedan ser sancionadas según las disposiciones previstas en la ley.

En este orden de ideas, se hace referencia al principio de legalidad establecido en el postulado: “*nullum crimen, nulla poena sine praevia lege certa*”¹⁹. El cual significa: “No existe Crimen, ni existe Pena, si no existe Ley Cierta”. De acuerdo al principio de legalidad debe existir una ley que determine la existencia de un hecho punible, para que pueda

¹⁹ José Hurtado Pozo, (1987). Manual de Derecho Penal. Segunda Edición, Lima, Perú. p.61

existir el delito y que mediante la calificación de este delito, se pueda establecer una pena o sanción.

Por ello, se considera que el artículo 32-A de la LOPNNA, permite que se establezca la posibilidad de calificar los castigos físicos, humillantes o degradantes como actos prohibidos por la ley.

Sin embargo, la última frase del artículo 32-A de la LOPNNA, establece lo siguiente: “siempre que no constituyan un hecho punible”²⁰. En consecuencia, se destaca que aun cuando existe tal prohibición, no siempre el hecho podrá constituir una acción delictiva prevista en el Código Penal de Venezuela u otras leyes penales, por lo que en muchos casos tales prohibiciones, serán sancionadas de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley Orgánica de Protección de niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), las cuales pueden ser consideradas como hechos punibles (delitos o faltas), dependiendo de la calificación jurídica establecida por la LOPNNA.

²⁰ LOPNNA, Op.Cit., art. 32-A

No obstante, el artículo 254 de la LOPNNA califica jurídicamente como tratos crueles o maltrato: “Los castigos físicos o psicológicos, ocasionados por los responsables de crianza o vigilancia de niños, niñas y adolescentes, cuando estos no constituyan un hecho punible”²¹, y establece una pena, de conformidad con el principio de legalidad, tal como se puede observar a continuación:

Artículo 254. Trato cruel o maltrato. Quien someta a un niño, niña o adolescente bajo su autoridad, Responsabilidad de Crianza o vigilancia a trato cruel o maltrato, mediante vejación física o síquica, será penado o penada con prisión de uno a tres años, siempre que no constituya un hecho punible será sancionado o sancionada con una pena mayor. El trato cruel o maltrato puede ser físico o psicológico.

En la misma pena incurrirá el padre, madre, representante o responsable que actúe con negligencia u omisión en el ejercicio de su Responsabilidad de Crianza y ocasionen al niño, niña o adolescente perjuicios físicos o psicológicos²².

Las definiciones aportadas en el artículo 32-A de la LOPNNA, permiten tener una idea clara de las acciones susceptibles de sanción. En relación con el desarrollo del proce-

²¹ Ibídem., art. 254

²² Ibíd.

so de la enseñanza, se prevé que no solo los castigos físicos o medios y métodos, destinados a infringir dolor o incomodidad son objeto de prohibición.

Se establece que los castigos humillantes, entre los que se incluyen los tratos ofensivos, calificativos despectivos o degradantes, los tratos y acciones destinadas a desvalorizar al niño, niña o adolescente, e incluso los tratos o calificativos estigmatizantes, que tengan por objeto ridiculizar al estudiante, se consideran como métodos prohibidos.

Este tipo de maltratos, en muchas circunstancias puede ser tan sutil, que el docente, puede caer en el error de violentar la mencionada norma sin percatarse de la acción. Por ello, se considera como un punto de vital importancia, para la formación permanente de los y las educadoras, en el área de Educación en Derechos Humanos.

Como se menciona en el párrafo anterior, el maltrato, mediante tratos humillantes se puede esconder en pequeñas acciones o castigos que durante años, fueron aplicados en el proceso de la enseñanza.

Por ejemplo:

El hecho de colocar a un estudiante mirando la pared del salón, u obligarlo a permanecer de espalda a sus compañeros, cuando este ha incurrido en una falta; o cuando en algunas ocasiones, el educador o educadora: regaña al niño, recriminándole públicamente frente a sus compañeros, y le dice: tienes doce años de edad y parece que tuvieras tan solo cinco.

Los ejemplos citados representan castigos que hace un par de décadas eran muy comunes, no solo en el sistema educativo venezolano, sino también en muchos otros países latinoamericanos.

En la actualidad se tiene el conocimiento de que las recriminaciones públicas al niño, los castigos que promuevan el rechazo por parte de sus compañeros de clase, o que tengan como finalidad apenar o ridiculizar al estudiante, constituyen acciones que violentan los Derechos Humanos, además de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de conformidad con el marco jurídico nacional e internacional.

En este contexto, la única opción que tiene el docente, para erradicar las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, y evitar los medios o métodos que conlleven a violentar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los cuales a su vez, también forman parte del conjunto normativo de los Derechos Humanos, es la preparación y formación permanente de los educadores y educadoras, en el ámbito del Derecho Educativo.

Otro punto de vital importancia es el siguiente: El docente, es un servidor público, el cual representa un rol formador en la sociedad, y en la mayoría de los casos es un funcionario adscrito a una nomina del Estado. Esto quiere decir que el ejercicio de sus funciones, se realiza en representación del Estado, por lo que, en consideración a la premisa de que solo el Estado tiene la capacidad jurídica de violentar Derechos Humanos a través de las acciones ejecutadas por sus funcionarios, se puede precisar que los educadores y educadoras, pueden incurrir en hechos ocasionados por acciones u omisiones, que violenten los Derechos Humanos, además de los derechos de los niños, niñas y adolescentes previstos en la LOPNNA.

La Disciplina Escolar.

La disciplina escolar de conformidad con el artículo 57 de la LOPNNA, debe ser administrada en función del respeto de los derechos y garantías establecidas en esta ley. Este derecho, se vincula con el ejercicio y los métodos de aplicación del Derecho Educativo. Destacando la importancia de las normas de convivencia de las instituciones educativas, como principal instrumento de aplicación en esta materia.

En el artículo 57 de la LOPNNA, se prevé claramente que el reglamento del plantel, o institución educativa, debe establecer los hechos que son susceptibles de sanción, además de las sanciones y los procedimientos que correspondan para garantizar su aplicación.

Los reglamentos de las instituciones educativas, o normas de convivencia, deben prever que el estudiante, tendrá acceso a las mismas en todas las circunstancias de la vida escolar, y se garantizará el derecho a ser informado sobre las faltas disciplinarias, las sanciones y los procedimientos de aplicación. Además, las normas de orden institucional,

deben garantizar el derecho que tiene todo niño, niña o adolescente, de ser escuchado y opinar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 80 de la LOPNNA, tal como se evidencia en la siguiente cita:

Artículo 80. Derecho a opinar y a ser oído y oída. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a:

- a) Expresar libremente su opinión en los asuntos en que tengan interés.
- b) Que sus opiniones sean tomadas en cuenta en función de su desarrollo²³...

En relación a lo previsto en el artículo 57 de la LOPNNA, y su relación con el argumento citado, se puede observar que al estudiante, se le garantizará el derecho a ser oído y expresar su opinión, sin más limitaciones que las establecidas en la legislación vigente. También se establece el derecho a la defensa, de acuerdo con el artículo 86 de la LOPNNA, en el que se prevé la garantía que tienen los niños, niñas y adolescentes de defender sus derechos, como se evidencia a continuación:

²³ Ibídem., art. 80

Artículo 86. Derecho a defender sus derechos. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a defender sus derechos por sí mismos. Se debe garantizar a todos los niños y adolescentes el ejercicio personal y directo de este derecho, ante cualquier persona, instancia, entidad u organismo²⁴.

El derecho al debido proceso y la defensa, se garantizará en el marco de todos los procedimientos administrativos, por tal motivo, es de vital importancia, que la disciplina escolar se ejerza de conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la LOPNNA, teniendo en consideración, que la misma se aplicará sin el menoscabo de las disposiciones establecidas en el artículo 88 de la LOPNNA, el cual se cita a continuación:

Artículo 88. Derecho a la defensa y al debido proceso. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la defensa en todo estado y grado de cualquier proceso administrativo o judicial. Asimismo, tienen derecho al debido proceso, en los términos consagrados en esta Ley y el ordenamiento jurídico²⁵.

Adicionalmente, en el artículo 57 de la LOPNNA, se establece que en los acuerdos de convivencia, u otros regla-

²⁴ Ibídem., art. 86

²⁵ Ibídem., art. 88

mentos institucionales, debe existir la posibilidad de impugnar las decisiones ante una autoridad superior. Esta garantía, permite regular la aplicación de las normas institucionales en un contexto de justicia, e imparcialidad. En este mismo artículo se prevé la prohibición de aplicar castigos o sanciones corporales o colectivas, y se expresa la respectiva prohibición de sancionar a las adolescentes de sexo femenino por causa de embarazo.

Otro punto relevante previsto en el artículo 57 de la LOPNNA, es el hecho de que el retiro o expulsión de un niño, niña o adolescente de cualquier institución educativa, solo será admisible, por las causas previstas en la ley y mediante los procedimientos administrativos aplicables en materia de protección de niños, niñas y adolescentes.

En tal sentido, estas garantías se pueden evidenciar de acuerdo a lo establecido en el artículo 57 de la LOPNNA el cual se cita a continuación:

Artículo 57. Disciplina escolar acorde con los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. La disciplina escolar debe ser administrada de forma acorde con los derechos, garantías y deberes de los niños, niñas y adolescentes. En consecuencia:

a) Debe establecerse claramente en el reglamento disciplinario de la escuela, plantel o instituto de educación los hechos que son susceptibles de sanción, las sanciones aplicables y el procedimiento para imponerlas.

b) Todos los niños, niñas y adolescentes deben tener acceso y ser informados e informadas oportunamente, de los reglamentos disciplinarios correspondientes.

c) Antes de la imposición de cualquier sanción debe garantizarse a todos los niños, niñas y adolescentes el ejercicio de los derechos a opinar y a la defensa y, después de haber sido impuesta, se les debe garantizar la posibilidad de impugnarla ante una autoridad superior e imparcial.

d) Se prohíben las sanciones corporales, así como las colectivas.

e) Se prohíben las sanciones por causa de embarazo de una niña o adolescente.

El retiro o la expulsión del niño, niña o adolescente de la escuela, plantel o instituto de educación sólo se impondrá por las causas expresamente establecidas en la ley, mediante el procedimiento administrativo aplicable. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser reinscritos o reinscritas en la escuela, plantel o instituto donde reciben educación, salvo durante el tiempo que hayan sido sancionados o sancionadas con expulsión²⁶.

²⁶ Ibídem., art. 57

En relación a lo expuesto, se puede precisar la importancia que esta norma representa en el ejercicio y aplicación del Derecho Educativo. Debido a que el artículo 57 de la LOPNNA, es la base legal más importante, en relación con el control de la disciplina escolar.

En este contexto, adquiere vital importancia el Derecho Educativo. Debido a la ejecución de procedimientos que permitan garantizar el correcto desenvolvimiento de la actividad escolar, para lo cual se hace necesario regular el contexto pedagógico desde lo interno, lo que implica el control de la disciplina escolar, mediante instrumentos institucionales. Por ello, esta visión jurídica, debe sustentarse de forma obligatoria, en el cumplimiento de las disposiciones previstas en el mencionado artículo.

El Derecho y el Deber de Denunciar.

En lo concerniente al Derecho Educativo, y su aplicación en el marco de la Ley Orgánica de protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), se tiene previsto el deber del personal que labora en las instituciones educativas,

de denunciar las amenazas o violaciones a los derechos del niño, niña o adolescente.

El artículo 91 de la LOPNNA, establece el deber de denunciar las amenazas y violaciones a los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. En lo que se prevé que toda persona puede realizar las denuncias correspondientes en casos de violación o de amenazas de los derechos de los menores de edad. Sin embargo, aun cuando está previsto que todo ciudadano, puede realizar denuncias sobre las amenazas o violaciones a los derechos del niño, niña o adolescente, para el personal que trabaja en instituciones de servicio, centros de salud, al igual que el personal de los planteles u otras instituciones educativas, es una obligación.

Por lo que, todo el personal que labora en las instituciones educativas, está obligado a denunciar las amenazas o violaciones de los derechos del niño, niña o adolescente, de las cuales tenga conocimiento, durante la prestación del servicio que determina sus labores, y debe además, realizar la respectiva comunicación a los padres, madres o responsables, a menos que el caso evidencie que los padres o responsables se encuentran vinculados con la amenaza o violación

de los derechos, tal como se menciona textualmente en el artículo 91 de la LOPNNA, citado a continuación:

Artículo 91. Deber y derecho de denunciar amenazas y violaciones de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes.

Todas las personas tienen derecho de denunciar ante las autoridades competentes los casos de amenazas o violaciones a los derechos o garantías de los niños, niñas y adolescentes.

Los trabajadores y las trabajadoras de los servicios y centros de salud, de las escuelas, planteles e institutos de educación, de las entidades de atención y de las defensorías de niños, niñas y adolescentes, tienen el deber de denunciar los casos de amenaza o violación de derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes de que tengan conocimiento, mientras prestan tales servicios. Antes de proceder a la denuncia, estas personas deben comunicar toda la información que tengan a su disposición sobre el caso al padre, la madre, representantes o responsables, salvo cuando sean éstos los que amenacen o violen los derechos a la vida, integridad y salud del niño, niña o adolescente. En estos casos, el padre y la madre deben ser informados en las cuarenta y ocho horas siguientes a la denuncia²⁷.

El deber de denunciar previsto en el artículo 91 de la LOPNNA, se vincula con lo expuesto en el Capítulo IX, re-

²⁷ Ibídem., art. 91

ferente a las Infracciones a la Protección Debida y Sanciones, Sección Cuarta, artículo 275 de esta misma ley, en donde se destaca lo siguiente:

Artículo 275. Omisión de denuncia. Quien estando obligado u obligada por ley a denunciar un hecho del que haya sido víctima un niño, niña o adolescente, no lo hiciere inmediatamente, será penado o penada con prisión de tres meses a un año²⁸.

En este sentido, se establece de acuerdo a lo previsto en el artículo 91 de la LOPNNA, que el docente, al igual que todo el personal que labora en los planteles o institutos de educación, quienes a su vez, son reconocidos como Sujetos de Derecho Educativo, tienen el deber y la obligación de denunciar las amenazas o violaciones a los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes.

En consecuencia, al remitirse al artículo 275 de la LOPNNA, citado en el párrafo anterior, se observa que esta norma jurídica, establece la sanción penal, que tiene como límites: Entre tres meses y un año de prisión, para sancionar a quienes estando obligados u obligadas a denunciar hechos, en los que haya sido víctima un niño, niña o adolescente no

²⁸ *Ibidem.*, art. 275

realice la respectiva denuncia. Además, cabe destacar que en la sección segunda del mismo Capítulo, en el artículo 220, se encuentra previsto lo siguiente:

Artículo 220. Violación de derechos y garantías en instituciones. Quien trabaje en una entidad de atención, en Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, en escuelas, planteles o institutos de educación o centros de desarrollo infantil o de adolescentes, y viole, amenace, permita la violación o impida el efectivo y pleno ejercicio de los derechos y garantías consagrados en esta Ley, será sancionado o sancionada de acuerdo con la gravedad de la infracción, con multa de quince unidades tributarias (15 U.T.) a noventa unidades tributarias (90 U.T.)²⁹.

En la presente cita, se observa que quienes trabajen en las Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes, así como el personal docente de las instituciones educativas, que violen, amenacen o permitan la violación de un derecho o garantía inherente a los derechos del niño, o que en su labor, impida el pleno ejercicio de los derechos de los niños, niñas o adolescentes, será sancionado de conformidad, con las penas establecidas en la mencionada norma, la cual como se

²⁹ Ibídem., art. 220

puede observar en el artículo 220, prevé la multa de 15 a 90 unidades tributarias.

En los argumentos presentados, se puede observar que el docente, en el ejercicio del Derecho Educativo, tiene una responsabilidad muy elevada. Debido a que en el marco del derecho a la educación, existen muchas circunstancias, las cuales requieren del conocimiento de las normas jurídicas antes citadas.

Las acciones que pueden constituir una amenaza, violación de un derecho o garantía, e incluso los hechos punibles, cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes en el ámbito escolar, guardan una amplia relación con la responsabilidad del directivo, del docente, personal obrero y administrativo, que labora en los planteles o institutos de educación. Por ello, el personal, debe conocer de forma amplia, las situaciones y hechos que amenazan las garantías o derechos de los estudiantes.

En este contexto, el personal de las instituciones educativas, y en especial los educadores y educadoras, deben conocer la correcta calificación de los diversos hechos puni-

bles, o al menos, debe conocer cuando se está en presencia de un determinado delito, falta, amenaza o violación de los derechos del niño, niña o adolescente.

Destacando que este conocimiento, le permitirá diferenciar, cuando se está en presencia de una situación o hecho, que por su naturaleza jurídica, debe ser denunciado, ante el Ministerio Público de forma directa o a través de sus órganos auxiliares, y cuando los hechos, pueden ser solventados con la aplicación de medios alternativos para la resolución de los conflictos.

Las Instancias Competentes.

En este ámbito, es indispensable tener en consideración, cuales son las instancias encargadas de ejercer el control y garantizar la aplicación del derecho, en materia de protección de niños, niñas y adolescentes.

En tal sentido, se hace necesario diferenciar el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CMDNNA), del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (CPNNA).

En relación a lo previsto en el artículo 147 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), Los Consejos Municipales de Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes (CMDNNA), son los entes municipales encargados de garantizar el pleno ejercicio de los derechos difusos y colectivos, de los niños, niñas y adolescentes.

En consideración a lo expuesto, el artículo 147 de la LOPNNA, en sus literales (k) y (l), establece lo siguiente:

Artículo 147. Son atribuciones de los Consejos Municipales de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes:

k) Conocer casos de amenazas o violaciones a los derechos colectivos o difusos de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito municipal.

l) Intentar de oficio o por denuncia la acción de protección, así como solicitar la nulidad de la normativa o de actos administrativos cuando éstos violen o amenacen los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes³⁰...

³⁰ Ibídem., art. 147

Los Consejos Municipales de Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes (CMDNNA), como lo establece el artículo 147 de la LOPNNA, son instancias creadas en cada municipio, con la finalidad de atender los casos referentes a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en general. Por ello, conocerá de los casos referentes a las amenazas o violaciones a los derechos colectivos y difusos de los menores de edad.

Además, tendrá la plena capacidad de intentar de oficio o por denuncia, la acción de protección, o de solicitar la nulidad de normas o actos administrativos, cuando estos violen o amenacen los derechos de los niños, niñas o adolescentes.

En referencia, cuando se menciona que podrá, proceder de oficio, se entiende que aun cuando no exista la denuncia, y se tenga conocimiento de los hechos, esta instancia, tendrá la capacidad jurídica de iniciar el procedimiento correspondiente. De igual manera, procederá en los casos en los que exista la denuncia.

En lo referente a la nulidad de normas o actos administrativos, se destaca que las leyes, ordenanzas municipales, reglamentos institucionales, acuerdos de convivencia, y los actos administrativos, deben garantizar un fin lícito y no deben ser contradictorios a los principios constitucionales, o leyes vigentes, si estas se encuentran enmarcadas en las garantías establecidas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).

Por esta razón, cuando una norma o acto administrativo, entra en contradicción con los principios constitucionales, cabe la posibilidad de solicitar su nulidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 de la CRBV, el cual se cita a continuación:

Artículo 27. Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad; y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación

jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella³¹...

En consecuencia, toda norma o acto administrativo que viole o amenace los derechos de los niños, niñas o adolescentes, se considera inconstitucional, debido a que esa norma o acto administrativo, es contrario a lo establecido por el artículo 78 de la CRBV, relativo a los derechos de los niños, niñas o adolescentes. Por ello, el CMDNNA, tendrá dentro de sus funciones, la potestad de solicitar, ante los tribunales competentes, la nulidad de las normas o actos administrativos que amenacen los intereses de los menores, mediante la acción de amparo constitucional.

El CPNNA, es la instancia de protección de niños niñas y adolescentes, que garantiza los derechos de forma particular o individualizada. En este contexto, no solo se ocupa de los casos individuales. También posee la capacidad jurídica de actuar en defensa de los derechos y garantías, cuando se trate de grupos que involucren a varios niños, niñas o adolescentes.

³¹ Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Caracas, jueves 19 de febrero de 2009. Gaceta Oficial: N° 5.908 Extraordinario. Artículo 27.

El Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (CPNNA), es un ente competente para conocer los casos de amenazas o violaciones a los derechos de los niños, niñas o adolescentes, de forma individual o incluso grupal. Siendo la principal diferencia, entre esta instancia y el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CMDNNA), que el CPNNA, solo es competente para conocer de casos en donde los niños, niñas o adolescentes, puedan ser identificados y el CMDNNA, responde a las garantías de intereses difusos y colectivos, en los cuales la amenaza o violación de los derechos de los niños, niñas o adolescentes, se hace presente de forma colectiva y generalizada.

Las atribuciones del CPNNA, se encuentran establecidas en el artículo 160 de la Ley orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA). Con relación a la aplicación del Derecho Educativo, se tiene en consideración, que esta instancia, debe instar a la conciliación entre las partes cuando estén involucradas en procedimientos administrativos, en los cuales tenga competencia el CPNNA. En tal medida, cuando en un conflicto, exista la posibilidad de conciliación y el caso, no amerite de la intervención del Mi-

nisterio Público, o de un tribunal competente, y exista la voluntad entre las partes, el CPNNA, hará todo lo posible para la resolución alternativa de los conflictos, mediante la conciliación.

Además, entre sus atribuciones destaca la ejecución de las medidas de protección y decisiones administrativas, las cuales podrán requerir del uso de la fuerza pública, o de la inclusión del niño, niña o adolescente en los diversos programas de protección. El seguimiento para garantizar el cumplimiento de las medidas de protección, y el respectivo control que esta instancia, determine en función de las medidas de protección y los actos administrativos.

Adicionalmente, se destaca en el marco de sus competencias, el deber de denunciar, ante el Ministerio Público, las situaciones que configuren infracciones de carácter administrativo, disciplinario, penal o civil contra niños, niñas o adolescentes.

En consideración al presente argumento, se puede evidenciar, que la instancia a la que deben recurrir los diversos casos, en los cuales exista un conflicto, en el que sea

procedente la conciliación, es el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (CPNNA).

Las situaciones de amenaza a los derechos de los niños, niñas o adolescentes, siempre que estas no constituyan hechos punibles y los casos de control de la disciplina escolar, en los cuales los responsables sean adolescentes, y la conciliación en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, son competencia del CPNNA, de acuerdo a las atribuciones de esta instancia, las cuales están previstas en el artículo 160 de la LOPNNA.

Los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, de Conformidad con lo previsto en el Artículo 177 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), en el Parágrafo Quinto, establece lo siguiente: “Acción judicial de protección de niños, niñas y adolescentes contra hechos, actos u omisiones de particulares, órganos e instituciones públicas o privadas que amenazan o violen derechos colectivos o difusos, de niños, niñas y adolescentes”³². De acuerdo a la presente cita, procederá la

³² LOPNNA, Op. Cit., art. 177

acción judicial de protección, contra los particulares, instituciones públicas o privadas, siempre que esas personas, amenacen o violen los derechos colectivos o difusos de los niños, niñas o adolescentes.

En este ámbito, el tribunal, de conformidad con lo previsto en el artículo 322 de la LOPNNA, tiene la obligación de dictar las medidas preventivas, las cuales se encuentren previstas en los casos relativos a los Parágrafo Tercero y Quinto del artículo 177 de la LOPNNA. Estas medidas deben tener un carácter inmediato, para garantizar el derecho a la vida, salud, integridad personal, o la educación de los niños, niñas o adolescentes.

Las medidas preventivas de acuerdo al artículo 177 de la LOPNNA, específicamente en lo referente a los Parágrafo Tercero y Quinto, serán dictadas tomando en consideración, la amenaza grave o la violación inminente de los derechos de los niños, niñas o adolescentes, o cuando existan pruebas que evidencien la presunción de las circunstancias antes mencionadas.

Las acciones de protección, previstas en el artículo 226 de la LOPNNA, son consideradas como un recurso judicial contra los hechos, actos u omisiones, de particulares, u organizaciones públicas o privadas que ponen en riesgo, amenazan o que permiten la violación de los derechos difusos y colectivos de los niños, niñas o adolescentes.

En consecuencia, las acciones de protección tendrán como finalidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 227 de la LOPNNA, que el tribunal competente en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, a través de la acción judicial antes prevista, determine el cese de la amenaza, ordenando la restitución plena del derecho, mediante la imposición de obligaciones de hacer o de no hacer. Destacando que estas acciones, deberán garantizar el respeto inmediato de todos los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes.

CAPITULO V

EL DERECHO EDUCATIVO Y LOS MEDIOS ALTERNATIVOS, PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS EN EL ÁMBITO ESCOLAR.

Los medios alternativos para la resolución de los conflictos, son estrategias que permiten solventar las situaciones de conflictividad, sin recurrir a las acciones o recursos judiciales en la mayor parte de los casos.

Estos medios empleados para la resolución pacífica de controversias, se sustentan en la buena fe y la voluntad de las partes.

Por esta razón, se hace indispensable, el carácter voluntario que debe haber en la aceptación de estos medios, además de la disponibilidad de aceptar las decisiones que se determinen durante el proceso, sin el menoscabo de las disposiciones previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la legislación vigente.

En este contexto, se pueden precisar dos medios alternativos que son fundamentales, para la resolución pacífica de los conflictos en el ámbito escolar, los cuales son:

- a) La Conciliación.
- b) La Mediación.

La Conciliación.

El término Conciliación, deriva etimológicamente del latín: *conciliatio onis*, y su significado, de acuerdo a lo establecido por la Real Academia Española: “Acción y efecto de conciliar. Conveniencia o semejanza de una cosa con otra. Favor o protección que alguien se granjea. Acuerdo de los litigantes para evitar un pleito o desistir del ya iniciado”¹. En consideración a lo expuesto, se puede observar que la última frase de la definición, nos indica: “*Acuerdo de los litigantes para evitar un pleito o desistir del ya iniciado*”².

¹ Real Academia Española. (2001). Diccionario de la Lengua Española-la.22. ^a Edición.

² Ibíd.

Este argumento, describe a la conciliación como un pacto o acuerdo entre las partes, para evitar una controversia, o desistir de un conflicto.

En tal sentido, la conciliación guarda una amplia relación con esta definición de carácter etimológico. Debido a que la conciliación, en su concepción jurídica, se define como: La acción destinada a la solución directa y amistosa de las controversias, que pudieran surgir, o de conflictos existentes. Destacando que mediante las relaciones contractuales o extracontractuales sostenidas por las partes, según sea el caso y la intervención de un tercero que cumpla con la función de conciliador, se logre poner fin al conflicto.

La conciliación, como se ha mencionado en párrafos anteriores, es un medio alternativo para la resolución de los conflictos, en el cual las partes se someten de buena fe y aceptan la intervención de un tercero imparcial, que realice las funciones de conciliador. De igual forma, las partes deben acordar la aceptación de las acciones que deberán tomarse en consideración, para poner fin a la controversia, lo que implica aceptar las decisiones a que haya lugar, con el final del proceso.

Este medio alternativo para la resolución de controversias, puede darse de forma judicial o extra judicial, siendo la conciliación extrajudicial, un proceso más flexible que permite la participación de las partes, en la búsqueda de soluciones, que permiten poner fin al conflicto.

La conciliación extrajudicial, puede darse en muchos contextos y circunstancias, permitiendo que las partes, puedan solventar sus controversias sin la necesidad de recurrir a instancias judiciales, para la solución pacífica de los conflictos. En materia de protección de niños, niñas y adolescentes, la conciliación se da en muchos contextos, entre los que se destacan, los actos conciliatorios que tienen lugar en los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (CPNNA).

Adicionalmente, la Ley Sobre Procedimientos Especiales en Materia de Protección Familiar de Niños, Niñas y Adolescentes, publicada en Gaceta Oficial: 39.570, de fecha: 9 de diciembre del 2010. En su artículo 4, define la conciliación y mediación como:

Artículo 4. A los fines de esta Ley, la conciliación y mediación familiar son medios alternativos para la solución de conflictos, en los cuales se orienta y asiste con imparcialidad a las familias para que alcancen acuerdos justos y estables que resuelvan una controversia o al menos, contribuyan a reducir el alcance de la misma, para la protección de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes.

La conciliación y mediación son considerados medios de solución de conflictos análogos, siendo desarrollado el primero en procedimientos administrativos y el segundo en procesos judiciales³.

En relación a la presente cita, en la que se habla de la conciliación y mediación, como medios alternativos para la resolución de los conflictos, se destaca que estos medios, deben conllevar a la celebración de acuerdos justos que permitan resolver la controversia, o permitan reducir el alcance de la misma.

En consecuencia, se reconocen como medios análogos que permiten la solución de conflictos, y diferencia a la conciliación de la mediación, al considerar que la conciliación tiene lugar, mayormente, en procedimientos administra-

³ Ley Sobre Procedimientos Especiales en Materia de Protección Familiar de Niños, Niñas y Adolescentes. Gaceta Oficial: 39.570, de fecha: 9 de diciembre del 2010. Artículo 4.

tivos y la mediación en muchos de los casos, se da por procesos judiciales. Sin embargo, estos métodos alternativos para la resolución de conflictos, puede variar y desarrollarse por la vía administrativa, de conformidad con la voluntad de las partes.

La Mediación.

La Mediación al igual que la conciliación, es un medio alternativo para la resolución de los conflictos. Este medio, se define jurídicamente con la acción de mediar, con la finalidad de que las partes pasivas o activas en la controversia, alcancen el dialogo, que les permitirá solucionar el conflicto. La mediación, supone la obtenciones soluciones rápidas, lo que permite el ahorro de tiempo y dinero, en comparación con las acciones judiciales.

Las Diferencias entre Mediación y Conciliación, son las siguientes:

- a) La mediación supone la solución del conflicto, mediante acuerdos que no necesariamente persiguen como fin, una decisión enmarcada en lo más justo;

Sin embargo la conciliación se fundamenta en la búsqueda de soluciones en el marco de la justicia. Por ello, se considera que la Mediación surge como solución a un conflicto de intereses y la conciliación para alcanzar una solución justa.

- b) En la mediación, el tercero que contribuye a la solución del conflicto, interviene de forma espontanea, y en la conciliación se realiza de forma inducida, debido a que el conciliador, es nombrado o autorizado a intervenir por las partes en conflicto.
- c) El mediador, en el proceso de la mediación, es neutral, por lo que tiene menos protagonismo en el proceso, su participación es pasiva, limitándose a permitir la comunicación y el dialogo entre las partes, no propone soluciones, pero el conciliador en el proceso de conciliación, a pesar de ser neutral, asume un rol activo a diferencia del mediador, lo que le permite proponer acuerdos y soluciones para la resolución de las controversias.

- d) La mediación, garantiza una mayor probabilidad de cumplimiento de los acuerdos, por que las partes, negocian con libertad en las decisiones que deban tomar para la resolución del conflicto. En el caso de la conciliación, la influencia del rol activo del conciliador, hace que las partes en muchos casos, no se sientan vinculadas a la decisión o a las propuestas del conciliador, generando una probabilidad menor de solución.

Los Medios Alternativos para la Resolución de Conflictos en el Ámbito Familiar.

Los medios alternativos para la resolución de conflictos en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, representa un elemento de vital importancia para el Derecho Educativo, en especial cuando se refiere a la conciliación y mediación.

En este contexto, se puede observar como la Ley Sobre Procedimientos Especiales en Materia de Protección Familiar de Niños, Niñas y Adolescentes, establece la conciliación y mediación, como acciones que permiten la resolución

de conflictos por la vía administrativa, a fin de evitar el uso de recursos judiciales, cuando las controversias puedan alcanzar su solución, mediante los acuerdos y negociaciones pacíficas entre las partes.

En este sentido, el artículo 5 de la Ley Sobre Procedimientos Especiales en Materia de Protección Familiar de Niños, Niñas y Adolescentes, destaca los principios que deben regir los procesos de conciliación y mediación, en materia de protección familiar. En este ámbito, la conciliación y mediación, en el marco de los procedimientos administrativos, o judiciales en el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, se caracteriza de conformidad con los siguientes principios:

- a) El compromiso de las partes para favorecer el proceso y alcanzar la resolución de las controversias.
- b) El protagonismo y autodeterminación de las personas que participan en el proceso, permitiendo que los acuerdos se logren por el interés de las partes, como característica fundamental de la mediación y conciliación.

liación, lo que implica descartar cualquier tipo de imposiciones.

- c) La voluntariedad en la participación, además de la plena libertad de decidir los acuerdos que deseen celebrar y los que no.
- d) La inmediatez y el carácter personalísimo, a fin de favorecer el proceso de conciliación y mediación, destacando la importancia que tiene la presencia de las personas, que son parte en las negociaciones y acuerdos.
- e) El proceso de conciliación y mediación familiar, debe ser flexible, lo que determina que los acuerdos y negociaciones tienen la capacidad de adaptarse a las personas y a la naturaleza de las circunstancias, permitiendo un entorno más favorable para alcanzar la solución del conflicto.
- f) La imparcialidad en el marco del proceso de conciliación y mediación, para evitar la discriminación, de

forma que se asegure la igualdad entre quienes participan en la resolución del conflicto.

- g) La neutralidad del proceso que define al conciliador o mediador, como una persona objetiva e imparcial, que garantice el cumplimiento efectivo de los valores del ordenamiento jurídico.
- h) El principio de la satisfactoria composición de intereses, el cual establece que los acuerdos celebrados durante los procesos de conciliación y mediación, deben expresar de forma satisfactoria, pero equilibrada, los intereses y necesidades de las partes en conflicto.
- i) El respeto al interés superior de los niños, niñas y adolescentes, en relación a los procesos de conciliación y mediación, a fin de velar por el respeto de los derechos, inherentes a los niños, niñas y adolescentes, como garantía primordial, para evitar que los acuerdos sean vulnerados.

- j) El carácter informativo y formativo de conciliación y mediación, en el ámbito familiar como proceso educativo, destacando el hecho significativo de las actividades y el valor jurídico que representan los acuerdos y los mecanismos que garantizan su cumplimiento.
- k) La buena fe de las partes en la conciliación y mediación, en pro de garantizar la honestidad, lealtad y sinceridad en los planteamientos. Lo que permite, evitar que los medios alternativos para la resolución de controversias, sean usados con fines distintos a los que persiguen las partes, para solventar sus diferencias y poder encontrar la solución al conflicto.
- l) La confidencialidad que garantiza a las partes en conflicto, que los argumentos debatidos durante el proceso, no serán expuestos en ocasiones posteriores. En consecuencia, el proceso de conciliación y mediación, de conformidad con lo expuesto en el artículo 5 de la Ley Sobre Procedimientos Especiales en Materia de Protección Familiar de Niños, Niñas y Adolescentes, establece lo siguiente:

...Quienes participen en el proceso de conciliación y mediación tendrán el Deber de guardar silencio, sobre lo dialogado en las sesiones correspondientes. Estas personas tampoco podrán servir como testigos, expertos o expertas en algún procedimiento posterior que verse sobre lo tratado en estas reuniones de conciliación y mediación. Sin embargo, la confidencialidad cesa cuando se revele la existencia de una amenaza o violación para los derechos humanos a la vida o la integridad personal o de hechos punibles de acción pública⁴.

En consideración a lo expuesto en la presente cita, se puede observar, que las partes en conflicto, deben garantizar la confidencialidad del proceso de conciliación y mediación, evitando exponer los argumentos, o acuerdos, sin el menoscabo de las disposiciones explícitas en esta ley, las cuales eximen de responsabilidad a quien comunique o haga público ante los órganos e instancias competentes, cuando se encuentren amenazados o se violen los derechos de los niños, niñas o adolescentes, los Derechos Humanos, la integridad personal, o cuando las situaciones por su naturaleza, constituyan un hecho punible de acción pública.

⁴ Ibídem., art. 5

- m) El último principio que garantiza el artículo 5 de la Ley Sobre Procedimientos Especiales en Materia de Protección Familiar de Niños, Niñas y Adolescentes, es la oralidad. En referencia, se determina que los actos relativos a los procedimientos de conciliación y mediación, previstos en esta norma jurídica, tanto en lo que refiere a los procedimientos administrativos, como a los procedimientos judiciales, deben desarrollarse mediante debates orales, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

En relación a lo previsto en el artículo 5 de la Ley Sobre Procedimientos Especiales en Materia de Protección Familiar de Niños, Niñas y Adolescentes. Se destacan los principios que deben garantizarse, en todos los procedimientos de conciliación y mediación, que tengan por objeto, la resolución de conflictos que versen en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, en el ámbito familiar.

Los medios alternativos para la resolución de los conflictos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de la Ley Sobre Procedimientos Especiales en Materia de Protección Familiar de Niños, Niñas y Adolescentes. Prevé las materias

que serán objeto de conciliación, ante las Defensorías de Niños, Niñas y adolescentes, destacando lo siguiente:

Artículo 15. Las materias objeto de conciliación familiar ante las Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes son las siguientes:

1. Decisiones sobre el ejercicio de la responsabilidad de crianza, tales como: Orientación moral y afectiva, formación, educación, recreación, esparcimiento, salud, pautas de crianza, forma de vestir, disciplina y vigilancia de los niños, niñas y adolescentes⁵...

En este argumento, se puede observar que la presente norma jurídica, establece la capacidad de conciliación y mediación, ante las Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes, en los casos relativos a las responsabilidades de crianza, y en especial cuando se trate de la orientación moral, afectiva, la formación y educación, esparcimiento, salud, forma de vestir, disciplina, entre otros.

También se puede precisar que existe una pieza clave, la cual es muy importante, en la aplicación del Derecho Educativo. Esta característica relevante, se puede observar en el artículo 15, cuando se hace referencia a las materias

⁵ *Ibíd.*, art. 15

que serán objeto de conciliación y mediación, entre las que se destacan la formación, educación, forma de vestir, disciplina y vigilancia de niños, niñas y adolescentes.

Aun cuando la conciliación y mediación familiar en relación a las materias antes citadas, no incluye al docente, o al directivo de las instituciones o planteles educativos, es un hecho notable, que estas áreas permiten establecer un vínculo muy estrecho entre el representante y el ámbito escolar. En este sentido, la conciliación y mediación involucran, e interrelacionan el contexto familiar, con el ámbito escolar.

Así mismo, se puede observar que en el proceso de conciliación y mediación, que se desarrolla dentro del contexto familiar, existen derechos que deben ser garantizados en el marco del Derecho Educativo, y se contraen obligaciones que deben cumplirse en el ámbito escolar. Por ello, este proceso, en la mayoría de los casos, influye en el desarrollo de la vida estudiantil de los niños, niñas o adolescentes, y sobre las controversias objeto de conciliación.

En consecuencia, no existe un derecho a la educación, aislado de la responsabilidad de crianza. Esta responsa-

bilidad, incluye el derecho a la educación gratuita y obligatoria, y de conformidad con lo previsto en el artículo 54 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), el representante estará obligado a inscribir al niño, niña o adolescente en un plantel o institución educativa pública o privada, de acuerdo a su libre elección. Además, deberá incorporarse de forma activa en el proceso de formación y educación de su representado.

En este orden de ideas, el representante forma parte del derecho a la educación de su representado, por lo que, en consideración, es un Sujeto del Derecho Educativo. Por ello, la resolución de algunos conflictos del contexto familiar, también son objeto del Derecho Educativo, debido a que por su naturaleza, se hace necesaria la intervención de otros Sujetos de Derecho Educativo vinculados con el plantel o instituto de educación.

El artículo 16 de la Ley Sobre Procedimientos Especiales en Materia de Protección Familiar de Niños, Niñas y Adolescentes, en el inciso decimo, establece como materias excluidas de medios alternativos para la resolución de los

conflictos: “Las Sanciones derivadas de la comisión de hechos punibles”⁶.

En referencia a lo descrito en la presente cita, se puede observar que los hechos punibles, en ningún caso serán objeto de conciliación o mediación. Sin embargo, en los hechos punibles que recaigan sobre bienes patrimoniales, o los delitos contra las personas, siempre que estos sean culposos, el juez en su fase preparatoria, podrá celebrar acuerdos destinados a la reparación del daño, y estos acuerdos extinguirán la acción penal.

No obstante, la aprobación de un acuerdo reparatorio, tiene lugar exclusivamente en los procesos judiciales penales y son celebrados de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 41, tal como se evidencia en la siguiente cita:

Artículo 41. El Juez o Jueza podrá, desde la fase preparatoria, aprobar acuerdos reparatorios entre el imputado o imputada y la víctima, cuando:

1. El hecho punible recaiga exclusivamente sobre bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial.

⁶ Ibídem., art. 16

2. Cuando se trate de delitos culposos contra las personas.

A tal efecto, deberá el Juez o Jueza verificar que quienes concurren al acuerdo hayan prestado su consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos, y que efectivamente se está en presencia de un hecho punible de los antes señalados. Se notificará a él o la Fiscal del Ministerio Público a cargo de la investigación para que emita su opinión sobre la viabilidad del acuerdo reparatorio.

El cumplimiento del acuerdo reparatorio extinguirá la acción penal respecto del imputado o imputada que hubiere intervenido en el. Cuando existan varios imputados o imputadas o víctimas, el proceso continuará respecto de aquellos que no han concurrido al acuerdo.

Cuando se trate de varias víctimas, podrán suscribirse tantos acuerdos reparatorios, como víctimas existan por el mismo hecho. A los efectos de la previsión contenida en el aparte siguiente, se tendrá como un único acuerdo reparatorio, el celebrado con varias víctimas respecto del mismo hecho punible.

En el supuesto previsto en el numeral primero de este artículo, sólo se podrá aprobar un nuevo acuerdo reparatorio a favor del imputado o imputada, después de transcurridos tres años desde la fecha de cumplimiento de un anterior acuerdo. A tal efecto, el Tribunal Supremo de Justicia, a través del órgano del Poder Judicial que designe, llevará un registro automatizado de los ciudadanos y ciudadanas a quienes les

hayan sido aprobados acuerdos reparatorios y la fecha de su realización.

En caso de que el acuerdo reparatorio se efectúe después que el o la Fiscal del Ministerio Público haya presentado la acusación, y ésta haya sido admitida, se requerirá que el imputado o imputada, en la audiencia preliminar, o antes de la apertura del debate, si se trata de un procedimiento abreviado, admita los hechos objeto de la acusación. De incumplir el acuerdo, el Juez o Jueza pasará a dictar la sentencia condenatoria, conforme al procedimiento por admisión de los hechos⁷.

Los Hechos Punibles.

Los hechos punibles, son todas aquellas acciones las cuales acarrean una sanción penal de conformidad con el derecho, a las que se les puede denominar también como conductas delictivas. En la República Bolivariana de Venezuela, existe una visión bipartita en consideración a los hechos punibles, al establecer las calificaciones relativas a delitos y faltas. Sin embargo, existe otra visión a la que se conoce como tripartita, que subdivide los hechos punibles en crímenes, delitos y faltas.

⁷ Código Orgánico Procesal Penal, Gaceta Oficial: N° 6.078 Extraordinario, de fecha: 15 de junio del 2012.

En relación a lo expuesto, existe el argumento de que el Estado Venezolano, desde el 13 de diciembre del año 2000, debería reformar el Código Penal, a fin de incluir las calificaciones relativas al Crimen de Genocidio y Crímenes de Lesa Humanidad. Debido a que los mencionados crímenes, son competencia de la Corte Penal Internacional, de conformidad con el artículo 5 del Estatuto de Roma, destacando que el mencionado instrumento jurídico internacional, fue ratificado por el Estado Venezolano, mediante la Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, publicada en Gaceta Oficial: N°. 5.507 de fecha 13 de diciembre del 2000. Lo que implicaría el cambio de visión bipartita, caracterizada por sancionar delitos y faltas, por la tripartita, en la que se sancionan crímenes, delitos y faltas. Sin embargo, en la actualidad, la legislación penal se sigue caracterizando por su visión bipartita.

El delito, en su concepción jurídica, representa un acto antijurídico imputable a una persona la cual se le considera culpable, y se le sanciona con la imposición de una pena determinada.

Las faltas a diferencia del delito, se representan como una conducta antijurídica que pone en peligro los bienes susceptibles de protección jurídica, pero en el marco de un estado de gravedad menor que el previsto en las acciones delictivas, por lo que no se le puede considerar como delito, aun cuando se precisa la existencia del carácter punible.

En consideración a lo expuesto, se ha definido lo que son hechos punibles y su clasificación. Adicionalmente, se destacan los delitos y faltas, que pudieran ocurrir en el ámbito escolar, a fin de aclarar cuáles son las acciones más comunes las cuales son sancionadas por el Código Penal de Venezuela.

Los delitos que ocasionalmente pueden ocurrir en el ámbito escolar, o en sectores cercanos a las instituciones educativas, son un motivo de preocupación colectiva, para todos los Sujetos de Derecho Educativo, debido a que estos, constituyen un grave estado de amenaza a los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes.

Esta amenaza a los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, se inicia con el estado de riesgo que

minimiza las posibilidades a los estudiantes de los planteles educativos, para recibir una educación en un ambiente sano, y en muchos casos finaliza, con la incursión de estudiantes en actividades que por su naturaleza, pueden constituir hechos punibles. En consecuencia, se destaca que todo hecho punible debe ser notificado al Ministerio Público de forma inmediata, a través de la denuncia directa ante sus órganos auxiliares.

A continuación, se presentan las acciones que constituyen hechos punibles de conformidad con el Código Penal de Venezuela, los cuales en ningún caso, pueden ser objeto de medios alternativos para la resolución de conflictos en el ámbito escolar.

Los Delitos:

El delito de “*Homicidio*”, de conformidad con lo expuesto en el artículo 405 del Código Penal de Venezuela, quien haya dado muerte a alguna persona, será sancionado con la pena de doce a dieciocho años de presidio. Sin embargo, en el artículo 409 del Código Penal, se establece que quien haya obrado con imprudencia, negligencia, impericia

en su profesión, o inobservancia, y en este contexto de muerte a una persona, incurrirá en el delito de “*Homicidio Culposos*”, y será castigado con prisión de seis meses a cinco años.

El Delito de “*Violación*”, establecido en el artículo 374 del Código Penal de Venezuela, será castigado con pena de diez a quince años de prisión. El Delito de “*Actos Lascivos*”, previsto en el artículo 376 del Código Penal, será sancionado con una pena de prisión de seis a treinta meses. Destacando que las penas antes mencionadas, tanto para el delito de violación, como para el delito de actos lascivos, se podrá incrementar, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 45 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en Gaceta Oficial: N°: 38.668 de fecha 23 de abril del 2007.

Los Delitos contra la Mujer de conformidad con lo expuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en la Gaceta Oficial: N°: 38.668, de fecha 23 de abril del año 2007, en el cual se definen las formas de violencia contra la mujer, tenemos que los hechos más comunes que pudieran ocurrir en el ámbito escolar, son los previstos en los incisos:

2, 3 ,4 ,10 y 17 de la norma antes mencionada, los cuales se describen en la siguiente cita:

2. Acoso u hostigamiento: Es toda conducta abusiva y especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos o mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear, apremiar, importunar y vigilar a una mujer que pueda atentar contra su estabilidad emocional, dignidad, prestigio, integridad física o psíquica, o que puedan poner en peligro su empleo, promoción, reconocimiento en el lugar de trabajo o fuera de él.

3. Amenaza: Es el anuncio verbal o con actos de la ejecución de un daño físico, psicológico, sexual, laboral o patrimonial con el fin de intimidar a la mujer, tanto en el contexto doméstico como fuera de él.

4. Violencia física: Es toda acción u omisión que directa o indirectamente está dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico a la mujer, tales como: Lesiones internas o externas, heridas, hematomas, quemaduras, empujones o cualquier otro maltrato que afecte su integridad física.

10. Acoso sexual: Es la solicitud de cualquier acto o comportamiento de contenido sexual, para sí o para un tercero, o el procurar cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado que realice un hombre prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o análoga, o con ocasión de relaciones derivadas del ejercicio profesional, y con la amenaza expresa o tácita de causarle a la mujer un daño relacio-

nado con las legítimas expectativas que ésta pueda tener en el ámbito de dicha relación.

17. Violencia simbólica: Son mensajes, valores, iconos, signos que transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales que se establecen entre las personas y naturalizan la subordinación de la mujer en la sociedad⁸.

El Delito de “*Lesiones Personales*”, de conformidad con lo previsto en el artículo 413 del Código Penal de Venezuela, será sancionado con prisión de tres a doce meses.

El Delito de “*Posesión Ilícita de Drogas*”. La Ley Orgánica de Drogas, Publicada en la Gaceta Oficial: N° 37.510 de fecha: 05 de septiembre del 2010, en su artículo 153, de conformidad con lo expuesto en la siguiente cita:

Artículo 153. Posesión ilícita.

Él o la que ilícitamente posea estupefacientes, sustancias psicotrópicas, sus mezclas, sales o especialidades farmacéuticas o sustancias químicas, con fines distintos a las actividades lícitas así declaradas en esta Ley o al consumo personal establecido en el Artículo 131

⁸ Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en la Gaceta Oficial: N°: 38.668, de fecha 23 de abril del año 2007. Artículo: 15.

de esta Ley, será penado con prisión de uno a dos años. A los efectos de la posesión se apreciará la detentación de una cantidad de hasta dos (2) gramos para los casos de posesión de cocaína y sus derivados, compuestos o mezclas; hasta veinte (20) gramos para los casos de marihuana, o hasta cinco (5) gramos de marihuana genéticamente modificada y hasta un (1) gramo de derivados de amapola, que se encuentre bajo su poder o control para disponer de ella.

En todo caso el juez o jueza determinará cuando sea necesario y utilizando la máxima experiencia de expertos o expertas como referencia, lo que pueda constituir una dosis personal de la sustancia correspondiente para una persona media.

No se considerará bajo ninguna circunstancia, a los efectos de determinar el delito de posesión, aquellas cantidades que se detentan como pretexto de provisión o provisión que sobrepasen lo que podría ser teóricamente una dosis personal⁹.

Establece que la posesión ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas se considera un hecho punible, sancionado por la Ley. Sin embargo, la presente norma estipula que el mencionado delito no aplica, en los casos referentes al

⁹ Ley Orgánica de Drogas, Publicada en la Gaceta Oficial: N° 37510 de fecha: 05 de septiembre del 2010. Artículo 153.

consumo de drogas de acuerdo a las cantidades establecidas como dosis personal.

No obstante, el docente, directivo o personal del plantel educativo, deberá reportar a las autoridades todos los casos. Debido a que son las autoridades, el fiscal del Ministerio Público y el tribunal competente, quienes deben determinar si se está en presencia del delito de *Posesión Ilícita de Drogas*, o si el imputado es consumidor. En este caso, el tribunal decidirá de conformidad con lo establecido en la ley.

El Delito de “*Incitación e Inducción al Consumo*”, de conformidad con lo previsto en el artículo 164 de la Ley Orgánica de Drogas, Publicada en la Gaceta Oficial: N° 37.510 de fecha: 05 de septiembre del 2010, será sancionado de acuerdo a las penas establecidas en la siguiente cita:

Artículo 164. Incitación e inducción al consumo.

Él o la que con amenaza, engaño o violencia, logre que alguna persona consuma estupefacientes o sustancias psicotrópicas, será penado o penada con prisión de seis a ocho años.

Él o la que incite o induzca a alguna persona al consumo de estupefacientes y sustancias psi-

cotrópicas, que produzcan dependencia física o psíquica, será penado o penada con prisión de cuatro a seis años.¹⁰.

El Delito de “*Robo*”, previsto en el artículo 455 del Código Penal de Venezuela, en muchos casos tiende a presentar confusión con otros hechos punibles, tales como el hurto, la apropiación indebida, e incluso con la estafa, para algunas personas. Por ello, se hace énfasis en la definición aportada en el artículo 455, citado a continuación:

Artículo 455. Quien por medio de violencia o amenazas de graves daños inminentes contra personas o cosas, haya constreñido al detentor o a otra persona presente en el lugar del delito a que le entregue un objeto mueble o a tolerar que se apodere de éste, será castigado con prisión de seis años a doce años¹¹.

En consideración a lo expuesto, se puede observar que el delito de robo, está vinculado a la acción violenta, mediante amenazas destinadas a causar daños graves a las personas, con la finalidad de obligar a la víctima a entregar

¹⁰ Ibídem., art. 164

¹¹ Código Penal de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial: N°: 5.768. Extraordinaria, de fecha 13 de abril del año 2005.

un determinado objeto mueble, cantidades liquidas de dinero, entre otros.

El Delito de “*Hurto*”, se encuentra previsto en el artículo 451 del Código Penal de Venezuela, y de conformidad con lo expuesto, algunas personas tienden a confundir este hecho punible con el “*Robo*”. Sin embargo, existen diferencias muy considerables, debido a que el Robo surge en condiciones de violencia y amenazas con el objeto de obligar a la víctima a entregar un determinado objeto, y el hurto, consiste en el hecho de apoderarse de un objeto que por derecho pertenece a otra persona. El autor del delito, sustrae el objeto o la cosa, del lugar donde se hallaba, sin el consentimiento de su dueño, tal como se describe en la siguiente cita:

Artículo 451. Todo el que se apodere de algún objeto mueble, perteneciente a otro para aprovecharse de él, quitándolo, sin el consentimiento de su dueño, del lugar donde se hallaba, será penado con prisión de un año a cinco años. Si el valor de la cosa sustraída no pasare de una unidad tributaria (1 U.T.), la pena será de prisión de tres meses a seis meses. Se comete también este delito cuando el hecho imputado recaiga sobre cosas que hagan parte de una herencia aún no aceptada, y por el copropietario, el asociado o coheredero, respecto de las cosas comunes o respecto de la herencia indivisa, siempre que el culpable no tuvie-

re la cosa en su poder. La cuantía del delito se estimará hecha la deducción de la parte que corresponde al culpable¹².

El Delito de “*Apropiación Indebida*”, se encuentra previsto en el artículo 466 del Código Penal de Venezuela, y se define como: El hecho de apropiarse en beneficio propio, de algún bien o cosa, perteneciente a otra persona, cuando el legítimo dueño la hubiera confiado o entregado con la condición de que le sea devuelta, o se le asigne un determinado uso, tal como se establece en el siguiente artículo:

Artículo 466. El que se haya apropiado, en beneficio propio o de otro, alguna cosa ajena que se le hubiere confiado o entregado por cualquier título que comporte la obligación de restituirla o de hacer de ella un uso determinado, será castigado con prisión de tres meses a dos años, por acusación de la parte agraviada¹³.

El Delito de “*Porte ilícito de arma de fuego*”, previsto en el artículo 112 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, establece que el porte ilícito de Armas de fuego, será penado con prisión de cuatro a ocho años.

¹² Ibídem., art. 451

¹³ Ibídem., art. 466

El Delito de “*Daños a la Propiedad Privada*”, el Código Penal de Venezuela, en su artículo 473, establece que cualquier persona que ocasione la destrucción, daño o deterioro de las cosas, sean estas muebles o inmuebles, las cuales pertenezcan a otros, será castigado con prisión de uno a tres meses.

El Delito de “*Instigación a delinquir*”, previsto en el artículo 283 del Código Penal de Venezuela, establece que cualquier persona que públicamente o por cualquier otro medio instigue a otro a cometer un hecho punible u otro acto que este en contravención a las leyes, será castigado con prisión de la tercera parte del delito al que incite, y en otros casos con pena de multa, dependiendo la gravedad del hecho.

El Delito de “*Simulación de Hecho Punible*”, Previsto en el artículo 239 del Código Penal de Venezuela, establece que cualquier persona que denuncie ante una autoridad publica un hecho punible, que no haya ocurrido en realidad, será sancionado con prisión de uno a quince meses.

Las Faltas.

En relación a las faltas, se tiene que los hechos más comunes, que se pueden suscitar en el ámbito escolar, son los siguientes:

Los “*Actos Contrarios a la Decencia Publica*”, esta falta, prevista en el Código Penal de Venezuela en su artículo 536, se encuentra relacionada con los hechos, en los cuales una persona, se presente en público de modo indecente, o propicie palabras, cantos, gestos, actos impropios que resulten ofensivos a la decencia pública. Hecho que de conformidad con el Código Penal, será sancionado, hasta por un mes de arresto.

El “*Maltrato a los Animales*”, en este hecho, se establece de conformidad con lo previsto en el Código Penal de Venezuela en el artículo 537, que todo el que cometa actos de crueldad contra los animales, o los maltrate sin necesidad, e incluso quien los someta a trabajo excesivo, será sancionado de conformidad con el presente artículo.

Los hechos punibles anteriormente descritos, conforman parte de los delitos y faltas, más comunes que se registran en la sociedad venezolana. Por ello, aun cuando algunos de estos delitos, no sean cometidos en el ámbito escolar, cabe señalar la importancia de conocer su existencia, a fin de ampliar los conocimientos que permitirán orientar de forma adecuada a los estudiantes, en el marco de las realidades actuales.

Adicionalmente, es importante señalar, que en los casos en que un adolescente incurra en la comisión de un hecho punible, previsto en la legislación penal, entendiéndose esta, como el conjunto de leyes destinadas a sancionar las acciones delictivas y las faltas. El procedimiento aplicable, se regirá de conformidad con lo dispuesto en el Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente, previsto en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA).

En este sentido, el Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente, establece como sanciones aplicables por los tribunales con esta competencia, las siguientes: La amonestación, la imposición de reglas de conducta, los servicios a la

comunidad, la libertad asistida, la semi-libertad y la privación de libertad.

La finalidad de las sanciones aplicables a los adolescentes, debe cumplir con el objeto de educar y orientar al menor y no de castigar el hecho de forma punitiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 621 de la LOPNNA. Además, se destaca que la medida de “*Libertad Asistida*”¹⁴: Tiene por objeto someter al adolescente a la supervisión, asistencia y orientación, por parte de personal calificado a fin de que se realice el seguimiento del caso. Esta medida no podrá tener una duración de más de dos años.

La Semi-libertad: “Consiste en la incorporación obligatoria del o de la adolescente a un centro especial durante el tiempo libre de que disponga en el transcurso de la semana. La duración de esta medida no podrá exceder de un año”¹⁵.

La Privación de Libertad: Esta medida, se refiere al internado del Adolescente, en un establecimiento público,

¹⁴ Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. (LOPNNA). De fecha 10 de Diciembre de 2007. Gaceta Oficial: N° 5.859 Extraordinario. Artículo 626.

¹⁵ Ibídem., art. 627

del que solo podrá salir por orden judicial. En ningún caso, podrá exceder de cinco años y se aplicará de conformidad con las condiciones previstas en el artículo 628 de la LOPNNA, el cual se cita a continuación:

Artículo 628. Consiste en la internación del o de la adolescente en establecimiento público del cual sólo podrá salir por orden judicial.

Parágrafo Primero. La privación de libertad es una medida sujeta a los principios de excepcionalidad y de respeto a la condición peculiar de persona en desarrollo. En caso de adolescentes que tengan catorce años o más, su duración no podrá ser menor de un año ni mayor de cinco años. En caso de adolescentes de menos de catorce años, su duración no podrá ser menor de seis meses ni mayor de dos años. En ningún caso podrá imponerse al o a la adolescente un lapso de privación de libertad mayor al límite mínimo de pena establecido en la ley penal para el hecho punible correspondiente.

Parágrafo Segundo. La privación de libertad sólo podrá ser aplicada cuando él o la adolescente:

a) Cometiere alguno de los siguientes delitos: homicidio, salvo el culposo; lesiones gravísimas, salvo las culposas; violación; robo agravado; secuestro; tráfico de drogas, en cualesquiera de sus modalidades; robo o hurto sobre vehículos automotores.

b) Fuere reincidente y el hecho punible objeto de la nueva sanción prevea pena privativa de libertad que, en su límite máximo, sea igual o mayor a cinco años.

c) Incumpliere, injustificadamente, otras sanciones que le hayan sido impuestas. En este caso, la privación de libertad tendrá una duración máxima de seis meses.

A los efectos de las hipótesis señaladas en los literales a) y b), no se tomarán en cuenta las formas inacabadas o las participaciones accesorias, previstas en el Código Penal.¹⁶

En consideración a lo expuesto, se puede observar, que las penas destinadas a castigar los hechos punibles mencionados en párrafos anteriores, en muchos casos es superior a lo previsto en el artículo 628 de la LOPNNA. Por ello, cuando un adolescente, incurriera en la comisión de estas acciones, solo se impondrán penas que por ningún motivo, excedan de cinco años.

Destacando que los límites de las penas podrán variar de conformidad con la edad del adolescente de la siguiente forma: Mayores de catorce años de edad, entre uno y cinco años. Menores de catorce años de edad, entre seis meses y

¹⁶ Ibídem., art. 628

dos años. Además, se destaca que la privación de libertad solo procederá de conformidad con las disposiciones previstas en el Parágrafo Segundo del artículo 628 de la LOPNNA.

Los hechos punibles definidos y su relación con el Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente, no forman parte del Derecho Educativo. Sin embargo, estas ideas, permiten ampliar los conocimientos sobre las acciones, que no son objeto de medios alternativos para la resolución de los conflictos. En consecuencia, es indispensable conocer los diferentes hechos punibles, e incluso su clasificación en delitos y faltas, para poder tomar la decisión adecuada al enfrentarnos a una determinada situación de conflicto.

Esto a su vez, facilitará la elección de las acciones a seguir, destacando que:

- a) En los casos correspondientes a delitos y faltas, la única medida aplicable es realizar la respectiva denuncia, ante las autoridades competentes, a fin de dar conocimiento de los hechos al Ministerio Público.

- b) En los hechos que versen sobre situaciones, las cuales no se encuentren previstas en la legislación penal, podrán ser objeto de medios alternativos para la resolución de los conflictos, tales como son: La Conciliación y Mediación.

La Conciliación y Mediación en el Ámbito Escolar.

Los medios alternativos para la resolución de conflictos en el ámbito escolar, se encuentran previstos en la Ley Orgánica de Educación (LOE). En el capítulo VII, Disposiciones Transitorias, Derogatorias y Finales. Específicamente en las Disposiciones Transitorias, Numeral 10, citado a continuación:

Los y las estudiantes que incurran en faltas de disciplina, se someterán a medidas alternativas de resolución de conflictos, producto de la mediación y conciliación que adopten los y las integrantes de la comunidad educativa, resguardando siempre el derecho a la educación y a la legislación de protección a niños, niñas y adolescentes¹⁷.

¹⁷ La Ley Orgánica de Educación (LOE), publicada en Gaceta Oficial: N°: 5.929. Extraordinario de fecha 15 de Agosto de 2009. Disposiciones Transitorias, Primera, Inciso: 10

En relación a la presente cita, los estudiantes que incurran en faltas disciplinarias, deberán someterse a medios alternativos para la resolución de conflictos, entre los que se destacan la conciliación y mediación. Además, se prevé que los integrantes de la comunidad educativa, son quienes deben adoptar los medios antes citados.

En este ámbito, la LOE, otorga a la comunidad educativa, la facultad de intervenir en los procedimientos disciplinarios en el ámbito escolar. Sin embargo, estas intervenciones deben realizarse sin el menoscabo del derecho a la educación, o de las disposiciones previstas, en las leyes vigentes en materia de protección de niños, niñas y adolescentes.

La comunidad educativa, conformada por docentes, representantes, estudiantes, e incluso personas que se vinculan con la institución educativa, deben propiciar la creación de espacios para la resolución alternativa de conflictos.

No obstante, cabe señalar que la Ley Orgánica de Educación (LOE), fue publicada en Gaceta Oficial, posterior a la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adoles-

centes (LOPNNA). En este contexto, se puede evidenciar que el artículo 57 de la LOPNNA, relativo a la disciplina escolar, no hace referencia a los medios alternativos para la resolución de conflictos, tal como se observa a continuación:

Artículo 57. Disciplina escolar acorde con los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. La disciplina escolar debe ser administrada de forma acorde con los derechos, garantías y deberes de los niños, niñas y adolescentes. En consecuencia:

- a) Debe establecerse claramente en el reglamento disciplinario de la escuela, plantel o instituto de educación los hechos que son susceptibles de sanción, las sanciones aplicables y el procedimiento para imponerlas.
- b) Todos los niños, niñas y adolescentes deben tener acceso y ser informados e informadas oportunamente, de los reglamentos disciplinarios correspondientes.
- c) Antes de la imposición de cualquier sanción debe garantizarse a todos los niños, niñas y adolescentes el ejercicio de los derechos a opinar y a la defensa y, después de haber sido impuesta, se les debe garantizar la posibilidad de impugnarla ante una autoridad superior e imparcial.
- d) Se prohíben las sanciones corporales, así como las colectivas.
- e) Se prohíben las sanciones por causa de embarazo de una niña o adolescente.

El retiro o la expulsión del niño, niña o adolescente de la escuela, plantel o instituto de educación sólo se impondrá por las causas expresamente establecidas en la ley, mediante el procedimiento administrativo aplicable. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser reinscritos o reinscritas en la escuela, plantel o instituto donde reciben educación, salvo durante el tiempo que hayan sido sancionados o sancionadas con expulsión¹⁸.

En este orden de ideas, las disposiciones previstas en el artículo 57 de la LOPNNA, determinan que la disciplina escolar debe respetar los derechos y garantías propias de los niños, niñas y adolescentes. Por ello, se deben establecer criterios que permitan hacer cumplir al estudiante sus deberes, en el marco de procedimientos disciplinarios que sean respetuosos de sus derechos.

Los reglamentos institucionales, de los planteles educativos, o Acuerdos de Convivencia, elaborados por las escuelas y liceos, constituyen un elemento fundamental en el ejercicio de la disciplina escolar, de conformidad con el artículo 57 de la LOPNNA en su literal (a), debido a que la presente norma, prevé que los reglamentos disciplinarios de las

¹⁸ LOPNNA. Op. Cit., art. 57

instituciones educativas, deben establecer los hechos que son susceptibles de sanción, además de las sanciones a que haya lugar y los procedimientos para imponerlas.

Las disposiciones establecidas en el literal (a), cumplen con el objeto de garantizar el debido proceso en los procedimientos relativos a sancionar las faltas disciplinarias. No obstante, los literales: (b) y (c), también contribuyen con este fin. Como se puede observar, el Literal (b), garantiza que las normas de convivencia, sean difundidas con el objetivo de informar a los estudiantes sobre los hechos sancionables, las sanciones aplicables y el procedimiento destinado para tal fin, lo que permite asegurar el respeto de las garantías establecidas en el literal (a).

En consideración al literal (c), establece un principio muy importante en función del respeto al debido proceso. Este principio es el derecho a la defensa, entendiéndose que el niño, niña o adolescente, en todas las circunstancias tendrá el derecho de expresar sus opiniones, su versión de los hechos y se le deberá dar valor a los argumentos que este exponga en su defensa. Además, se prevé la posibilidad de

que el procedimiento, se pueda impugnar ante una instancia superior e imparcial, en los casos en que el proceso, no cuente con las condiciones que favorezcan la imparcialidad, o no alcancen una decisión conforme a la justicia.

Los argumentos presentados en los literales (a), (b) y (c), constituyen un elemento muy importante en los procedimientos disciplinarios enmarcados en la justicia y la imparcialidad. Esto permite la aplicación de sanciones en el marco del respeto al debido proceso. Sin embargo, En el artículo 57 de la LOPNNA, no se proponen o establecen de forma directa, medios alternativos para la resolución de conflictos.

El literal (d), establece la prohibición de las sanciones corporales y colectivas, por lo que se entiende, que no deberán aplicarse castigos físicos, o que atenten contra la integridad corporal del niño, niña o adolescente. Además de prohibir todo tipo de sanciones colectivas, lo que implica que se sancionará al estudiante, por las faltas disciplinarias que este cometa, y no existirá la posibilidad de castigar a otros

estudiantes, por las faltas disciplinarias en las que incurra un determinado niño, niña o adolescente.

En el artículo 57 de la LOPNNA, se observa que la norma regula los actos que constituyen el proceso disciplinario, al que se someterá el estudiante. En tal medida se prohíben las sanciones o castigos que no contribuyen con un fin educativo. Sin embargo, no se establece de forma explícita la ejecución de medios alternativos como la conciliación o mediación. En este contexto, la Ley Orgánica de Educación (LOE). En las Disposiciones Transitorias, numeral 10, establece que los conflictos relativos a las faltas disciplinarias de los estudiantes, se someterán a la resolución alternativa de conflictos, a través de los procedimientos de conciliación y mediación. Adicionalmente, prevé que tales medios, no podrán violentar el derecho a la educación, ni las garantías previstas en la LOPNNA.

Cabe destacar que la conciliación y mediación, al igual que cualquier otro medio alternativo para la resolución de conflictos, no está prohibido por la legislación en materia de protección de niños, niñas y adolescentes. Por esta razón,

aun cuando no se establezcan estos procedimientos de forma explícita en el artículo 57 de la LOPNNA, no quiere decir que sea inaplicable, o que la LOE, violente las disposiciones previstas en la LOPNNA.

La conciliación y mediación, son procedimientos que pueden, y deben existir en las instituciones educativas, con el objeto de solucionar los conflictos relativos a la disciplina escolar. Estos medios alternativos para la resolución de conflictos, permiten solventar las controversias mediante el diálogo y la aceptación de propuestas que puedan satisfacer los intereses de las partes. Por ello, sería un error considerar que la conciliación o mediación, es violatoria de los derechos y garantías previstas en el artículo 57 de la LOPNNA. Sin embargo, se hace necesario acotar que estos medios alternativos para la resolución de conflictos, no es viable para la totalidad de los casos.

En consideración, se puede evidenciar que lo previsto en la LOE, Disposiciones Transitorias, numeral 10, sobre la conciliación y mediación en relación a los casos disciplinarios, es viable en los conflictos que se suscitan en el ámbito

escolar, siempre que los mismos, no constituyan hechos punibles. Destacando que los medios alternativos para la resolución de conflictos, serán aplicables cuando el desarrollo de estos, no sea contradictorio a las garantías establecidas en el artículo 57 de la LOPNNA.

En este contexto jurídico, la LOE establece que a través de la conciliación y mediación, se desarrollara un proceso disciplinario, participativo, en el que las partes de conformidad con los principios previstos en la legislación, en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, solventarán sus controversias. Teniendo en cuenta como factor primordial el bienestar de los estudiantes, mediante el control disciplinario de la vida escolar.

Durante el proceso de conciliación y mediación en el ámbito escolar, deberá respetarse en todo momento el honor y la reputación del niño, niña o adolescente, de conformidad con lo expuesto en el artículo 65 de la LOPNNA. Además, las partes y el conciliador o mediador, tienen la obligación de garantizar la confidencialidad, de acuerdo a lo previsto en el artículo 5 de la Ley Sobre Procedimientos Especiales en

Materia de Protección Familiar de Niños, Niñas y Adolescentes, tal como lo indica la siguiente cita: “Quienes participen en el proceso de conciliación y mediación tendrán el Deber de guardar silencio, sobre lo dialogado en las sesiones correspondientes”¹⁹.

Como se evidencia en el párrafo anterior, se puede observar que la legislación en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, no está conformada exclusivamente por la LOPNNA. En consideración, la LOE en el numeral 10 de las Disposiciones Transitorias, indica: “resguardando siempre el derecho a la educación y la legislación de protección de niños, niñas y adolescentes”²⁰. En consecuencia nos remite a todas las leyes vigentes que versen sobre esta área del derecho.

La conciliación y mediación, debe contar con la participación activa del representante, de conformidad con la obligación del padre y de la madre o responsable de crianza, prevista en el artículo 54 de la LOPNNA. Además, se debe

¹⁹ Ley Sobre Procedimientos Especiales en Materia de Protección Familiar de Niños, Niñas y Adolescentes, Op. Cit., art. 5

²⁰ LOE. Op. Cit., numeral 10

garantizar la participación activa del estudiante de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de la LOPNNA. Por otra parte la institución educativa, debe favorecer el desarrollo, utilizando el recurso de personal capacitado, orientadores, docentes, coordinadores y directivos, o cualquier otro personal que haya sido formado en el área de resolución de conflictos, a fin de obtener resultados favorables en la resolución pacífica de las controversias.

El conciliador o mediador, debe ser una persona imparcial, que permita el dialogo entre las partes, y debe prepararse permanentemente para garantizar el correcto desempeño de sus funciones, por lo que se destaca como elemento de vital importancia, la formación permanente del docente, o del orientador, en el área del Derecho Educativo y la resolución de conflictos, en materia de protección de niños, niñas y adolescentes.

La conciliación y mediación, puede conllevar a dos resultados:

- a) La solución pacífica del conflicto, mediante la aplicación de correctivos, sanciones pedagógicas o cual-

quier otra medida que favorezca la solución de la controversia, con acciones educativas y no punitivas.

- b) Continuidad del conflicto. En este contexto se determinará como acción correspondiente, el seguimiento del caso y el registro de las faltas en que haya incurrido el estudiante, a los fines de iniciar el procedimiento ante las instancias correspondientes en materia de protección de niños, niñas y adolescentes.

No obstante, se hace necesario aclarar que el proceso disciplinario, mediante la conciliación y mediación en el ámbito escolar, o ante cualquier instancia competente en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 57 de la LOPNNA. Además, de los derechos y garantías previstas en la legislación vigente.

Espacios para la Conciliación y Mediación en el Ámbito Escolar.

En consideración a lo expuesto, se explicó todo lo concerniente al derecho y las garantías que rigen el proceso

de conciliación y mediación escolar, de conformidad con la legislación vigente, en materia de protección de niños, niñas y adolescentes en la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, cabe destacar que los medios alternativos para la resolución de los conflictos, no dependen exclusivamente del derecho.

En este contexto, se puede precisar que también se hace necesario, la disposición de recursos humanos y materiales, para que estos medios puedan alcanzar los objetivos esperados.

El recurso humano, es el más importante de todos, debido a que un personal que cuente con la formación adecuada para la resolución de conflictos, es la base fundamental en todos los procesos de conciliación o mediación. Desde este punto de vista, se enfatiza que la formación permanente del personal docente, prevista en el artículo 38 de la LOE, se puede convertir en un instrumento muy valioso, para el ejercicio del Derecho Educativo, en lo relativo a los medios alternativos para la resolución de los conflictos.

Por otra parte, la conciliación y mediación en el ámbito escolar, depende de personas imparciales que puedan ejercer las funciones de conciliadores o mediadores, según sea el caso. Por ello, se hace indispensable que las instituciones educativas, establezcan una adecuada selección del personal, a quienes se les delegará este importante rol. Para esta adecuada elección del personal que ejerza las funciones de conciliador o mediador, deben existir criterios objetivos y precisos, que estén enmarcados en las disposiciones jurídicas antes previstas.

En tal sentido, el conciliador o mediador, puede ser cualquier docente, debido a que esta función, no es exclusiva del directivo o del orientador. Sin embargo, la resolución de conflictos en el ámbito escolar, requiere de formación, preparación y conocimiento de las áreas básicas del Derecho Educativo.

Aspectos que el conciliador o mediador debe conocer:

- a) Los derechos y garantías inherentes a los niños, niñas y adolescentes, previstos en la LOPNNA.

- b) Las disposiciones previstas en el artículo 57 de la LOPNNA.
- c) Las definiciones y diferencias entre conciliación y mediación.
- d) El objetivo de los procesos conciliatorios o de mediación en el ámbito escolar.
- e) Los derechos y garantías relativas al debido proceso.
- f) Las acciones que por su naturaleza, constituyen hechos punibles.
- g) Los acuerdos de convivencia escolar y en especial, los hechos que son susceptibles de sanción, las sanciones aplicables y los procedimientos para imponerlas.

Adicionalmente, la formación permanente en el área del Derecho Educativo, es fundamental para la preparación del docente, a fin de que las instituciones educativas, puedan contar con personal capacitado de forma adecuada, en lo referente a la resolución de conflictos, para así, poder impul-

sar el desarrollo de los procesos de conciliación y mediación en el ámbito escolar.

Los recursos materiales, también representan un elemento muy importante para el fortalecimiento de los medios alternativos para la resolución de conflictos en el ámbito escolar. Sin embargo, este tipo de recursos, no son una limitante que imposibilite del todo la ejecución de los procesos de conciliación y mediación.

Los recursos económicos destinados al fortalecimiento de los procesos de conciliación y mediación en el ámbito escolar, permiten a los conciliadores o mediadores ejercer sus funciones con mayor grado de confiabilidad, celeridad e independencia.

Entre estos recursos materiales de gran relevancia para el fortalecimiento de los procesos de conciliación y mediación, se tiene:

- a) El espacio físico acorde, destinado exclusivamente para reuniones de conciliación o mediación escolar.

- b) Los archivos debidamente identificados, en donde reposarán todos los documentos, actas, acuerdos conciliatorios, entre otros.
- c) El mobiliario, equipos de computación para el secretario o secretaria, escritorios y sillas, debidamente ubicados, donde las partes estén frente al conciliador o mediador.
- d) Las dotaciones de materiales de oficina y consumibles destinados a las labores de las salas de conciliación y mediación escolar, entre otros.

Las actividades relativas a la conciliación y mediación escolar, no dependen de salas lujosas, ni de espacios que contengan grandes dotaciones materiales. De hecho pueden existir salas destinadas a la resolución alterna de conflictos, que no estén en capacidad de cumplir sus funciones por falta del personal calificado. Sin embargo, existen planteles educativos públicos, los cuales evidencian graves carencias de recursos materiales, y logran resolver grandes conflictos a través de la conciliación o mediación.

Como se puede observar, los recursos materiales no representan en sí una limitante. Debido a que un espacio para la conciliación o mediación en el ámbito escolar, puede ser cualquier espacio, y los avances que representen, son producto del trabajo que ejerce el personal designado para tal fin.

No obstante, los recursos materiales, son muy importantes para el fortalecimiento del proceso, debido a que un espacio destinado exclusivamente a la conciliación y mediación escolar, permite que la resolución de conflictos de forma alterna, sea más efectiva. Además, brinda comodidades de trabajo al personal encargado de estas labores, aporta mayor celeridad a los procesos, permite atender una mayor cantidad de casos y lo más importante, ofrece mayor resguardo de la información, lo que a su vez, representa un elemento muy importante en relación a la confidencialidad que debe existir en los procesos de conciliación y mediación escolar.

Actividad Recomendada:

1. ¿Cómo se crea un espacio alternativo para la resolución de conflictos? Los pasos a seguir son los siguientes:
 - a) Realizar un colectivo de formación, en el área de conciliación y mediación de conflictos escolares.
 - b) Seleccionar a un docente que cumpla con el perfil de conciliador y mediador.
 - c) Atender los conflictos estudiantiles que se susciten, durante el trimestre o lapso académico, en el marco de procesos de conciliación y mediación.
 - d) Registrar todos los procesos de conciliación o mediación.
 - e) Evaluar al finalizar el trimestre, los avances en un colectivo de formación docente.
2. ¿Se logró realizar cada uno de los pasos? Si es así, entonces tu institución está en plena capacidad de

asumir la conciliación y mediación escolar de forma permanente:

- a) Elaborar un proyecto para la creación de una sala de conciliación y mediación escolar, que involucre la formación del personal docente, incluyendo jornadas de capacitación donde los facilitadores sean abogados, orientadores, psicólogos, entre otros profesionales.
- b) Dirigir el proyecto a todos los entes con capacidad de aportar financiamiento.

Este tipo de proyectos, en muchos casos puede resultar factible, debido a que inician de forma experimental. Esto quiere decir que parten del ejercicio de una actividad y se afianza en los resultados obtenidos. Sin embargo, en la actualidad, el Estado Venezolano, no aporta recursos suficientes para el mantenimiento efectivo de las instituciones educativas, y la mayoría de los planteles, funcionan bajo figuras como la auto gestión, e incluso en muchos de los casos, se

requiere de los aportes y colaboraciones de las empresas privadas.

No obstante, se requiere la participación activa e incansable de los directivos, docentes, representantes, y de la comunidad educativa, para exigir la ejecución de los proyectos institucionales que por derecho, son responsabilidad del Estado, a fin de alcanzar una mejor convivencia en el ámbito escolar.

CAPITULO VI

LOS ACUERDOS DE CONVIVENCIA, REDACCIÓN Y LEGITIMACIÓN.

Los Acuerdos de Convivencia, son las normas institucionales que cada plantel educativo, adopta para el correcto desarrollo de la sana convivencia, de conformidad con la adecuada aplicación de la disciplina escolar.

Estas normas de convivencia escolar, son consideradas como el reglamento del plantel educativo. En este sentido, los Acuerdos de Convivencia, deben respetar dos estructuras fundamentales, a fin de que su construcción y legitimación, se desarrolle de acuerdo a las disposiciones establecidas en la legislación educativa vigente en la República Bolivariana de Venezuela.

La construcción y legitimación de los Acuerdos de Convivencia, tiene que considerar:

- a) La estructura de fondo del instrumento: En la que se debe precisar que las normas establecidas en el acuerdo, deben cumplir con el objeto de regular la disciplina escolar y garantizar la sana convivencia, no solo de los estudiantes, sino también, la de todos los Sujetos de Derecho Educativo, pero desde un contexto jurídico, en el que impere la legalidad y la legitimidad.
- b) La estructura de forma de Los acuerdos de Convivencia Escolar: La estructura de forma, debe evidenciar, el correcto uso de las normas y técnicas de redacción legislativa, en función de que las disposiciones previstas en el instrumento determinen argumentos claros y precisos.

Los Elementos de la Estructura de Fondo.

La estructura de fondo de los Acuerdos de Convivencia escolar, debe considerar varios aspectos básicos, a fin de que su contenido normativo, no resulte contradictorio a las disposiciones jurídicas previstas en la legislación educativa y de protección de niños, niñas y adolescentes.

Para este fin, se hace necesario hacer referencia al artículo 57 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), relativo a la disciplina escolar. En esta norma, se menciona que la disciplina escolar debe ser acorde a los derechos y garantías de los niños o niñas. Por tal razón, la disciplina debe estar prevista dentro del sistema normativo interno de cada plantel educativo, y ese conjunto de normas institucionales, debe precisar los hechos que se consideran sancionables, y conjuntamente deben existir sanciones y procedimientos para su aplicación, tal como se indica a continuación:

...Debe establecerse claramente en el reglamento disciplinario de la escuela, plantel o instituto de educación los hechos que son susceptibles de sanción, las sanciones aplicables y el procedimiento para imponerlas¹.

Esta estructura, debe incorporar artículos que delimiten los hechos que estarán prohibidos dentro del plantel educativo. Además, en los artículos del instrumento, se deben precisar las sanciones aplicables a los estudiantes que incu-

¹ Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. (LOPNNA). De fecha 10 de Diciembre de 2007. Gaceta Oficial: N° 5.859 Extraordinario. Artículo 57

rran en los hechos prohibidos por las normas previstas en el acuerdo.

Adicionalmente, debe establecerse un procedimiento para la aplicación de las sanciones. Destacando que este procedimiento debe garantizar el respeto al debido proceso, al derecho de oír los argumentos del estudiante, el derecho a la defensa, el derecho a poder impugnar la decisión ante una instancia superior e imparcial, cuando existan elementos que evidencien condiciones de parcialidad en el proceso, o cuando se violenten los derechos y garantías inherentes a los niños, niñas y adolescentes.

La redacción de los Acuerdos de Convivencia Escolar, es muy similar a la de cualquier reglamento institucional. En consideración, el artículo 57 de la LOPNNA, se refiere a las normas de convivencia como: Reglamento Interno del plantel. Este instrumento debe ser amplio y su objetivo, no es regular exclusivamente la disciplina. También debe establecer disposiciones que permitan orientar la convivencia escolar de todos los Sujetos de Derecho Educativo vinculados a la institución.

Los argumentos de fondo de los Acuerdos de Convivencia, tienen que considerar que este instrumento no posee un carácter unilateral. En consecuencia, la institución, debe incorporar normas que regulen las actividades desarrolladas por todos los Sujetos de Derecho Educativo que se vinculan frecuentemente con el plantel o instituto de educación, durante la convivencia escolar.

Estos Sujetos de Derecho son:

- a) El personal Directivo.
- b) El personal Docente.
- c) El personal Administrativo y Obrero.
- d) Los Estudiantes y sus respectivos Representantes.
- e) Los Miembros de la Comunidad Educativa, entre los que participan, docentes, representantes, estudiantes y la comunidad.

Estos Sujetos de Derecho Educativo, son los involucrados en el proceso de legitimación de los Acuerdos de Convivencia Escolar. En tal sentido, conformarán un colec-

tivo escolar que discutirá las normas institucionales y deberá aprobarlas para su posterior implementación, destacando que todos los Sujetos de Derecho Educativo, pueden proponer ideas sobre los elementos que puedan ser susceptibles de regulación, por parte del acuerdo en construcción, y tales argumentos serán considerados, en la medida que cumplan con los siguientes criterios:

- a) Que los argumentos y propuestas sean lícitos y no violen o amenacen los derechos y garantías previstas en la legislación vigente.
- b) Que los argumentos y propuestas lícitas, sean aprobados por la mayoría de conformidad con los valores democráticos, de forma que se puedan considerar como una propuesta legítima del colectivo.

Los argumentos de fondo de los Acuerdos de Convivencia, adquieren un carácter multilateral. Debido a que todas las partes que suscriben y legitiman el acuerdo, establecen condiciones, permitiendo que no solo el estudiante y el representante, puedan contraer obligaciones con la institución. También se establecen normas que permiten al directi-

vo, a los docentes y otros Sujetos de Derecho Educativo, contraer obligaciones que deben cumplirse. Lo que a su vez, permite evidenciar un importante conjunto de derechos y deberes que surgen como producto de la relación multilateral, que aprueba el acuerdo por un colectivo.

Los argumentos de fondo de los Acuerdos de Convivencia Escolar, deben a hacer referencia a los hechos susceptibles de sanción, los correctivos y procedimientos aplicables como se ha mencionado. Además debe ser el producto de una relación multilateral que surge entre los integrantes de un colectivo, conformado por los diferentes Sujetos de Derecho Educativo. Sin embargo, existen tres puntos de vital importancia jurídica, los cuales deben ser considerados de forma obligatoria, para que el instrumento pueda cumplir con el principio de legalidad.

El primero, es que los Acuerdos de Convivencia Escolar, no pueden establecer sanciones o procedimientos, relativos a castigar al estudiante de forma punitiva, o mediante la aplicación de sanciones colectivas. En este orden de ideas, las sanciones deben tener un fin educativo, más allá que el de castigar o reprimir. Además, el estudiante en toda circuns-

tancia debe gozar del buen trato, las sanciones deben ser lícitas y se debe respetar la responsabilidad individual.

Por ejemplo:

No podrán ser sancionados los grupos o secciones de estudiantes, por las faltas disciplinarias en la que incurra uno de sus integrantes.

El segundo punto de vital importancia, está constituido por la legalidad de las sanciones. Este elemento es muy importante, debido a que toda medida disciplinaria, debe estar enmarcada en los derechos y garantías previstas en la legislación vigente, tanto en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, como en el ámbito educativo.

El tercer elemento indispensable, con el que debe contar la estructura de fondo de los Acuerdos de Convivencia Escolar, es la especificidad de los actos prohibidos por el instrumento, y la aclaratoria, de que todas las acciones que por su naturaleza constituyen hechos punibles, no son competencia del ámbito escolar. Por ello, la única medida de

aplicación, será la denuncia ante las autoridades competentes.

En este contexto, se debe considerar los delitos y faltas, previstos en el Código Penal de Venezuela, y otros instrumentos jurídicos. A fin de que los acuerdos de convivencia, hagan referencia a estas acciones, las cuales deben ser definidas y citadas textualmente. Además de explicar que en caso de incursión de un estudiante en un hecho punible, solo procederá, como medida de aplicación exclusiva, la denuncia ante las autoridades policiales.

Los Elementos de la Estructura de Forma.

Los Acuerdos de Convivencia Escolar, se caracterizan por estar divididos en capítulos. Los capítulos, siempre deben enumerarse en números romanos y se pueden identificar por estar escritos en letras mayúsculas. Los capítulos, están conformados por un conjunto de artículos, los cuales deben dar sentido a los fines que este pretende desarrollar.

El Capítulo I, es por excelencia el fragmento que identifica, define y contextualiza las normas de convivencia.

En este sentido, se destaca que en el Capítulo I, se debe establecer: La definición, el objeto, la naturaleza, e incluso los fines del instrumento disciplinario.

Los capitulos siguientes, no tienen un orden específico debido a que esta estructura puede variar, de acuerdo a los planteamientos que se desarrollen en las asambleas educativas, destinadas a la construcción colectiva de las normas de convivencia escolar. Sin embargo, se hace indispensable que el acuerdo establezca, al menos las siguientes disposiciones:

- a) Los Deberes, Derechos y Atribuciones del Personal Directivo.
- b) Los Deberes, y Atribuciones del Personal Docente Coordinador.
- c) Los Deberes, y Atribuciones del Personal Docente de Aula.
- d) Los Deberes, Derechos y Atribuciones del Personal Administrativo.

- e) Los Deberes, Derechos y Atribuciones del Personal de Bibliotecas o Centros de Informática.
- f) Los Deberes, Derechos y Atribuciones del Personal Obrero.
- g) Los Deberes, Derechos y Atribuciones del Personal que labora en los Comedores Escolares.
- h) Definición y Funciones de la Comunidad Educativa.
- i) Definición y Funciones de los Consejos Estudiantiles.
- j) Los Acuerdos de las Asambleas de Padres, Madres y Representantes.
- k) Los Deberes y Derechos de los Padres, Madres, Representantes o Responsables.
- l) Los Deberes y Derechos de los Estudiantes.
- m) Los Espacios y los Procedimientos destinados para la Conciliación y Mediación.

- n) La Disciplina Escolar de los Estudiantes y el Régimen Disciplinario. (Destacando que este capítulo debe establecer los hechos susceptibles de sanción y las sanciones aplicables).
- o) Los Procedimientos Disciplinarios para la imposición de las sanciones.

Los Artículos.

La definición de acuerdo a la Real Academia Española, del término: Artículo, en su numeral 6, citado a continuación: “Del latín. Articŭlus. Cada una de las disposiciones numeradas de un tratado, de una ley, de un reglamento, etc”². El concepto aportado por la Real Academia Española, realiza un aporte preciso al considerar que es una disposición específica de una norma. Destacando que estas disposiciones conforman la unidad básica del texto normativo, en lo referente a la redacción legislativa.

Los artículos en los reglamentos de orden institucional, deben enmarcarse en una serie de criterios de redacción

² Real Academia Española. (2001). Diccionario de la Lengua Española. 22.ª Edición.

legislativa, al igual que las leyes, a fin de que se pueda conservar el sentido normativo. Estos criterios de redacción se pueden observar de conformidad con la siguiente cita:

- 1) Cada artículo contiene una norma, cada párrafo un enunciado, y cada enunciado una idea.
- 2) El artículo no debe ser excesivamente largo. No debe tener más de cinco párrafos.
- 3) El artículo constituye un conjunto sintáctico completo, de manera que para comprenderlo no sea necesario entender el artículo anterior, ni posterior.
- 4) El artículo no debe contener motivación o explicación sobre su contenido. Es objetivo³.

Como se puede evidenciar, en los criterios antes citados, aportados por el Manual de Técnica Legislativa de la República del Perú, los artículos, deben contener una norma específica, cada párrafo de un artículo debe contener un enunciado y cada enunciado debe encerrar una idea, a fin de que esta unidad de redacción, pueda aportar un sentido preciso y objetivo sobre la materia de regulación.

³ Manual de Técnica Legislativa. Dirección General Parlamentaria de la República del Perú. Aprobado por Acuerdo N° 095-2010-2011., p.17

Además, cada artículo es independiente y su sentido, no debe depender de otras disposiciones jurídicas, debe contener una idea completa, aun cuando el artículo remita a otras disposiciones, debe aportar elementos suficientes para su comprensión.

El Manual de Técnica Legislativa de la República del Perú, no es un instrumento vinculante para la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, esta publicación, aporta elementos muy importantes, sus planteamientos son muy acertados y de fácil comprensión, tanto para abogados como para docentes, lo que permite sustentar las ideas que faciliten el proceso de la redacción de normas institucionales, desde una concepción, exclusivamente bibliográfica.

En referencia a las reglas de redacción, se debe tener en cuenta, que los artículos, deben iniciar en el margen izquierdo, precedido de la palabra “*Artículo*” en fuente negrita, sin abreviaturas, cada disposición debe ser identificada por números cardinales arábigos los cuales estarán seguidos de punto, tal como lo indica en siguiente ejemplo:

Artículo 78. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho...

El Artículo, puede estar precedido por una “*Sumilla*” –*La sumilla, define brevemente el objeto del artículo*– la cual también puede ser identificada por ir en letras negrita, de conformidad con el ejemplo presentado a continuación:

Artículo 8. Interés Superior del Niños, Niñas y Adolescentes.

El Interés Superior del Niños, Niñas y Adolescentes es un principio de interpretación y aplicación de esta Ley...

Por otra parte, el “Artículo”, está dividido en varias partes fundamentales. Sin embargo, estas partes o divisiones, no necesariamente se dan en todos los casos, debido a que dependen de las enumeraciones que sean necesarias para subdividir el artículo.

La primera de estas divisiones es el Párrafo: El “párrafo”, es una división gramatical del artículo y en la mayoría de los casos, no corresponde propiamente a una división normativa. –*El primer párrafo se ubica a un espacio*

después de la sumilla– Los párrafos están separados por espacio, tal como se puede observar en el siguiente ejemplo, en donde el párrafo se encuentra identificado en letras cursivas:

Artículo 8. Interés Superior del Niños, Niñas y Adolescentes.

El Interés Superior del Niños, Niñas y Adolescentes es un principio de interpretación y aplicación de esta Ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes...

Los párrafos, se encuentran divididos en “*Incisos*”. El inciso es una división que enumera los diferentes puntos que encierran una idea dentro del artículo. –*Se Identifican por estar precedidos de un enunciado, seguido de dos puntos, y enumerados con números cardinales arábigos*– aun cuando en algunas normas, pueden estar solo precedidos por la numeración. Sin embargo, algunos instrumentos jurídicos, como la Ley Orgánica de Educación (LOE), en algunos casos identifica los incisos como numerales, como en el caso del numeral 10, correspondiente a las disposiciones transitorias.

Los incisos se pueden identificar, de acuerdo con el siguiente ejemplo, en donde el inciso está ubicado después del primer párrafo y precedido por el número 1:

Artículo 6. El Estado, a través de los órganos nacionales con competencia en materia Educativa, ejercerá la rectoría en el Sistema Educativo. En consecuencia:

1. Garantiza:

Los incisos se dividen en “*Literales*”. El literal contiene información que siempre estará relacionada al enunciado que establece el “*Inciso*”. El Literal esta precedido por los incisos, los cuales a su vez, finalizan en dos puntos. *—El Literal se identifica por estar precedido de una letra minúscula y están separados entre sí por un espacio—* Tal como se evidencia, el literal identificado con la letra (a), en el siguiente ejemplo:

Artículo 6. El Estado, a través de los órganos nacionales con competencia en materia Educativa, ejercerá la rectoría en el Sistema Educativo. En consecuencia:

1. Garantiza:

a. El derecho pleno a una educación integral...

Los Literales, se dividen en “*Numerales*”. El numeral, contiene la información que encierra la idea planteada por los “*Literales*”, Su uso es excepcional y no se da en la mayoría de los casos. Sin embargo, en los Artículos que poseen un contenido amplio, es común esta división. –*Los Numerales, se encuentran dentro del margen de los Literales, están precedidos de números romanos en minúsculas y separados entre espacios*– tal como se pueden observar los numerales identificados como: (i) y (ii), en el siguiente ejemplo:

Artículo 5.

1. Los Estados Partes en la presente Convención convienen:

a) En que la educación debe tender al pleno desenvolvimiento de la personalidad humana...

i) Ese derecho no se ejerza de manera que impida a los miembros de las minorías...

ii) El nivel de enseñanza en estas escuelas no sea inferior al nivel general...

Los Artículos, están separados entre sí por doble espacio en la mayoría de los casos. Sin embargo, muchas

normas no cumplen con este esquema, el cual se considera de mucha importancia para su comprensión.

Los acuerdos de convivencia, no son disposiciones jurídicas, y tampoco están sometidos a la revisión de instancias legislativas y no son publicados en Gaceta Oficial. En consecuencia, no forman parte de la legislación vigente de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, son reglamentos institucionales, que regirán la convivencia escolar en función del bienestar colectivo. Por ello, estas normas garantizan la protección de los derechos difusos y colectivos de los estudiantes.

Los Consejos Municipales de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CMDNNA), deben revisar y aprobar la implementación de los Acuerdos de Convivencia, los cuales serán de efectiva aplicación a lo interno de los planteles educativos. En consecuencia, se debe tener en cuenta que la redacción legislativa, es un elemento de gran utilidad para garantizar la adecuada redacción de estos acuerdos, aun cuando estos, requieren de pocos formalismos jurídicos en comparación con otros instrumentos normativos.

Los artículos en los Acuerdos de Convivencia, por lo general, están agrupados en capítulos. En este contexto, a los capítulos, se les identifica por su denominación explícita y enumerados con números romanos en letras mayúsculas. Destacando que además, contienen una sumilla centrada, y también en letras mayúsculas.

Las reglas de redacción, ortografía y gramática, deben considerar la relevancia del instrumento, por lo que se deben evitar el uso de términos coloquiales o comunes. Se enfatiza que los términos expresados en las normas o reglamentos institucionales, deben ser acordes a las definiciones establecidas por la Real Academia Española.

Las cantidades en ninguna circunstancia deben ser expresadas en números, a menos que las mismas correspondan a la denominación de unidades monetarias. En consideración a lo expuesto, toda cantidad referida a plazos, edades, entre otras, debe ser indicada en letras, tal como lo indica el siguiente ejemplo:

...será penado o penada. Con prisión de **tres meses a un año.**

En los casos en que las cantidades correspondan a cantidades de dinero o unidades tributarias, se podrá expresar en números, con la indicación de la denominación, entre paréntesis como lo indica el siguiente ejemplo:

...serán sancionados o sancionadas con multa de quince unidades tributarias **(15 U.T.)**

Las citas que se realicen en la redacción de los Acuerdos de Convivencia, deben estar destinadas a probar la existencia de un derecho, garantía u obligación, mediante la remisión a una norma jurídica externa, o la remisión a una sección del mismo reglamento institucional, según sea el caso.

En este orden de ideas, las citas deben explicar el marco legal que sustenta las disposiciones normativas previstas en el acuerdo, de conformidad con lo establecido en las leyes vigentes. Las citas se identifican por estar entre comillas.

Legitimación de los Acuerdos de Convivencia.

En consideración a los aportes antes mencionados, se puede precisar que los Acuerdos de Convivencia, deben superar varias etapas, para que las instituciones o planteles educativos, puedan realizar su aplicación en el ámbito escolar.

La primera de estas etapas, es el proceso de conformación de colectivos que involucren a los diferentes Sujetos de Derecho Educativo, entre los que destacan: Los estudiantes, madres, padres, o representantes, la comunidad educativa, los voceros de concejos estudiantiles, el personal docente, administrativo y obrero. Además, del directivo de la institución.

La segunda etapa, debe garantizar la consolidación del colectivo, la construcción de una propuesta normativa, acorde a las realidades institucionales del plantel educativo. Esta propuesta, debe ser aprobada por el colectivo y analizada por el asesor jurídico de la institución. En el caso de planteles o institutos de educación, que no dispongan de un asesor jurídico, deberán solicitar el asesoramiento respectivo, al

Consejo Municipal de Derechos de Niños, niñas y Adolescentes (CMDNNA).

La tercera y última etapa, se inicia al presentar la propuesta de Acuerdos de Convivencia Escolar, ante el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CMDNNA), para que esta instancia, realice la revisión de las normas contenidas en el acuerdo, y finaliza con la aprobación del instrumento normativo, que tendrá su rango de aplicación a lo interno del plantel educativo.

CAPITULO VII

LA GESTIÓN ESCOLAR, COMUNIDAD EDUCATIVA, ORGANIZACIÓN ESTUDIANTEL Y FORMACIÓN PERMANENTE.

La gestión escolar se desarrolla de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica de Educación (LOE), en su artículo 19, el cual explica que la educación básica, deberá orientar el proceso educativo, en función de estimular la participación comunitaria, mediante la incorporación de los colectivos internos de las instituciones educativas.

En consideración, se establecen elementos como la corresponsabilidad de los diversos actores comunitarios, permitiendo que estos actores, se incorporen a la gestión escolar, tal como se puede evidenciar en la siguiente cita:

Artículo 19. El Estado, a través del órgano con competencia en el subsistema de educación básica, ejerce la orientación, la dirección estratégica y la supervisión del proceso educativo y estimula la participación comunitaria, incorporando tanto los colectivos inter-

nos de la escuela, como a diversos actores comunitarios participantes activos de la gestión escolar en las instituciones, centros y planteles educativos en lo atinente a la formación, ejecución y control de gestión educativa bajo el principio de corresponsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República y la presente Ley¹.

En este sentido, la comunidad como Sujeto de Derecho Educativo, debe incorporarse en la gestión escolar. Se establece el principio de Corresponsabilidad entre los diversos actores educativos. Sin embargo, esta incorporación no se debe realizar, sin la adecuada supervisión del personal docente y directivo.

Si bien es cierto que las instituciones educativas, deben orientar su formación, a un contexto pedagógico más social, humano y acorde a las realidades de la comunidad, también debe considerarse que muchas comunidades, aun no se encuentran preparadas, para ejercer su rol protagónico en el marco de la gestión escolar. Por ello, este ha sido un punto muy controvertido en lo que refiere al sistema educativo venezolano en la actualidad. No obstante, cabe señalar, que

¹ Ley Orgánica de Educación (LOE), publicada en Gaceta Oficial: N°: 5.929. Extraordinario de fecha 15 de Agosto de 2009. Artículo 19.

la participación de la sociedad en la gestión educativa, no debe considerarse como un elemento negativo, debido a que este tipo de estrategias de integración, pueden resultar favorables en muchos contextos. Sin embargo, la incorporación de las comunidades en la gestión educativa, debe considerar muchos aspectos fundamentales, entre los que destacan principalmente la legalidad y los límites que tendrán las comunidades en consideración al proceso pedagógico, a fin de no lesionar los derechos de los demás Sujetos de Derecho Educativo.

El representante y las organizaciones comunitarias, pueden integrarse en el ejercicio de la actividad escolar, y esta realidad no resulta tan novedosa, si analizamos el rol que ejercía la Asociación Civil de Padres, Madres y Representantes, o las eventuales vinculaciones de las Asociaciones Vecinales creadas a finales de la década de los años 80, las cuales tenían como objeto trabajar en la búsqueda de soluciones a ciertos problemas comunitarios. En consecuencia, se puede precisar que estas ideas de integración de la sociedad, en la vida escolar, pueden significar un avance en la gestión educativa, siempre que tal integración se desarrolle

en el marco de legalidad, legitimidad y en función del respeto de los derechos del niño, niña y adolescente, además de garantizar que no existirán interferencias en relación a la calidad de la educación, las evaluaciones de meritos del personal que ejerce la docencia, el respeto de las normas institucionales, entre otros aspectos fundamentales de la educación.

La gestión escolar, debe desarrollarse en dos etapas:

- a) La primera etapa, debe alcanzar el objetivo de incorporar al representante, en los procesos de formación permanente que se realicen en la institución. Esta formación, debe contextualizar lo que actualmente son las escuelas para padres, y educar al representante, para que pueda enfrentar la responsabilidad que implica la gestión escolar.
- b) La segunda etapa, debe involucrar al representante, en la gestión escolar. Sin embargo, esta participación, debe ser supervisada y evaluada por el colectivo institucional, permitiendo así, el correcto funcionamiento de lo que constituye una nueva forma de gestión

compartida, entre el directivo, los docentes, y los representantes.

En relación a lo previsto en la Ley Orgánica de Educación (LOE), en su artículo 20, se establece que la Comunidad Educativa, es un espacio democrático, de carácter social y comunitario. En consideración se mencionan una serie de principios, entre los que destacan: La participación, el protagonismo, el cooperativismo y la solidaridad.

En sus funciones se establece que los integrantes de la comunidad educativa, deben actuar de conformidad con la educación ciudadana, respetando las disposiciones constitucionales, la legislación vigente, y en especial las normas que rigen el sistema educativo.

La Comunidad Educativa, representa para los planteles o institutos de educación, una estructura organizativa, de gestión escolar, en la que se deben involucrar los diferentes Sujetos de Derecho Educativo. (Padres, Madres, Representantes, Responsables de Crianza, Estudiantes, Docentes, personal Administrativo y Obrero, e incluso integrantes de la comunidad, sean Personas Naturales o Jurídicas).

Esta estructura organizativa, no se limitará al subsistema de educación básica, debido a que se establece su implementación, desde la educación inicial, hasta la educación media general o media técnica.

La Comunidad Educativa, deberá crear normas que regulen su accionar en el marco de la gestión escolar, a tal efecto, puede entenderse que esta estructura organizativa, debe funcionar como una persona jurídica. Lo cual solo es posible, si se constituye como asociación sin fines de lucro, u otra forma de organización no gubernamental, mediante un acta protocolizada ante el registro público respectivo.

En consideración a los procesos de formación permanente, se establece que es competencia del Estado, garantizar la formación permanente de todos los ciudadanos que integren la Comunidad Educativa, en función del desarrollo de una adecuada gestión escolar, como se puede observar en la siguiente cita:

Artículo 20. La comunidad educativa es un espacio democrático, de carácter social comunitario, organizativo, participativo, cooperativo, protagónico y solidario. Sus integrantes actuarán en el proceso de educación ciudadana de acuerdo con lo establecido en la

Constitución de la República, leyes y demás normas que rigen el Sistema Educativo. A tales efectos:

1. La comunidad educativa está conformada por padres, madres, representantes, responsables, estudiantes, docentes, trabajadores administrativos y trabajadoras administrativas, obreros y obreras de las instituciones y centros educativos, desde la educación inicial hasta la educación media general y media técnica y todas las modalidades del subsistema de educación básica. También podrán formar parte de la comunidad educativa las personas naturales y jurídicas, voceros y voceras de las diferentes organizaciones comunitarias vinculadas con las instituciones y centros educativos.

2. La organización y funcionamiento de la comunidad educativa se regirá por la normativa legal que a tal efecto se dicte, la cual deberá desarrollar las normas y los procedimientos para velar por su cumplimiento por parte de sus integrantes.

El Estado garantiza, a través del órgano rector con competencia en el subsistema de educación básica, la formación permanente de los ciudadanos y las ciudadanas integrantes de las comunidades educativas para efectos del cumplimiento de la contraloría social y otros deberes y derechos de los ciudadanos y las ciudadanas en la gestión educativa².

La organización estudiantil, prevista en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Educación (LOE), se desarrollará de

² *Ibídem.*, art. 20

acuerdo a la conformación de los Consejos Estudiantiles, esta forma de organización socio-escolar, estará integrada por los estudiantes de la institución o plantel educativo. Su función es promover la formación de los ciudadanos y ciudadanas, mediante la participación y el protagonismo.

En este contexto, los estudiantes de las diferentes modalidades y subsistemas educativos, deben propiciar la creación de espacios para la gestión escolar, en función de los valores socio-jurídicos y democráticos, establecidos en la constitución y las leyes vigentes, como se precisa en la siguiente cita:

Artículo 21. En las instituciones y centros educativos en los diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo se organizarán consejos estudiantiles, sin menoscabo de otras formas organizativas, destinadas a promover la formación de ciudadanos y ciudadanas mediante la participación protagónica y corresponsable del estudiantado, tomando en cuenta las especificidades de cada nivel y modalidad. Estas organizaciones estudiantiles actuarán junto con la comunidad educativa en los diferentes ámbitos, programas, proyectos educativos y comunitarios, ejerciendo sus derechos y deberes como seres sociales, en un clima democrático, de paz, respeto, tolerancia y solidaridad.

Las organizaciones estudiantiles se registrarán por la normativa que al efecto se dicte³.

La gestión escolar debe ser ejercida con corresponsabilidad. Esto implica que la responsabilidad de las acciones destinadas a la gerencia de los procesos pedagógicos, es de todos los actores que forman parte del hecho educativo. Por ello, se hace indispensable que los Sujetos de Derecho Educativo, se organicen en estructuras organizativas que les permitan vincularse a la gestión escolar, respetando los valores democráticos y las disposiciones jurídicas previstas en la constitución y la legislación vigente.

La Formación Permanente.

La Formación Permanente, es un proceso que debe involucrar a los docentes, miembros de la comunidad educativa, e incluso a las organizaciones estudiantiles. Esta formación, debe ser integral y de carácter continuo, a fin de dar respuesta a las necesidades pedagógicas de la institución o plantel educativo.

³ Ibídem., art. 21

Este proceso, debe considerar que la Formación Permanente, es un elemento indispensable que garantiza la preparación continua del personal docente en el ejercicio de sus funciones, tal como se puede evidenciar en la siguiente cita:

Artículo 38. La formación permanente es un proceso integral continuo que mediante políticas, planes, programas y proyectos, actualiza y mejora el nivel de conocimientos y desempeño de los y las responsables y los y las corresponsables en la formación de ciudadanos y ciudadanas. La formación permanente deberá garantizar el fortalecimiento de una sociedad crítica, reflexiva y participativa en el desarrollo y transformación social que exige el país⁴.

La Formación Permanente, permite que la sociedad desarrolle una visión que fortalezca el sentido crítico, reflexivo y participativo de sus ciudadanos, influyendo así, en todo lo concerniente a las transformaciones sociales, desde el quehacer educativo.

El Estado a través de los subsistemas educativos, que van desde la educación inicial o preescolar, hasta la educación media general, y aun en la educación universitaria, debe dirigir y fortalecer el desarrollo de políticas de Formación

⁴ Ibídem., art. 38

Permanente en función de capacitar a los responsables, y corresponsables de la gestión educativa, justificando así, la importancia de ofrecer programas de Formación Permanente, tanto para los docentes, como para los integrantes de las comunidades educativas en beneficio del desarrollo institucional.

Este argumento, se puede evidenciar de conformidad con el artículo 39 de la LOE, el cual se presenta a continuación:

Artículo 39. El Estado a través de los subsistemas de educación básica y de educación universitaria diseña, dirige, administra y supervisa la política de formación permanente para los y las responsables y los y las corresponsables de la administración educativa y para la comunidad educativa, con el fin de lograr la formación integral como ser social para la construcción de la nueva ciudadanía, promueve los valores fundamentales consagrados en la Constitución de la República y desarrolla potencialidades y aptitudes para aprender, propicia la reconstrucción e innovación del conocimiento, de los saberes y de la experiencia, fomenta la actualización, el mejoramiento, el desarrollo personal y profesional de los ciudadanos y las ciudadanas, fortalece las familias y propicia la participación de las comunidades organizadas en la planifica-

ción y ejecución de programas sociales para el desarrollo local⁵.

La Formación Permanente, es un recurso pedagógico de vital importancia, para el desarrollo de la educación. Sin embargo, esta formación requiere de múltiples elementos que permitan el desarrollo del proceso. El simple hecho de incorporar cátedras de formación para los docentes o crear escuelas para padres, no garantiza que el proceso conlleve al desarrollo y transformación del sistema educativo.

En tal sentido, para que la Formación Permanente se desarrolle en un contexto adecuado, se debe orientar el proceso pedagógico, en función de las soluciones a los problemas institucionales, desde el quehacer educativo y la implementación de medios y métodos aplicables para sustentar el desarrollo institucional.

Este proceso formativo, debe ser flexible, a fin de permitir que los actores educativos, planifiquen en función de sus propias necesidades. Debe ser organizado y cumplir con una estructura que permita generar un desarrollo opera-

⁵ *Ibíd.*, art. 39

tivo de los proyectos de aprendizaje o proyectos de Formación Permanente, y finalmente, debe ser objetivo e imparcial.

La objetividad e imparcialidad de la Formación Permanente, permite la aceptación de todos los ciudadanos en el marco de la gestión educativa, sin el menoscabo de sus condiciones políticas, económicas, sociales, culturales, étnicas, e incluso religiosas. Por ello, este proceso no debe ser excluyente y tampoco puede condicionar la diversidad de pensamiento.

La formación permanente, debe considerar la incorporación de los docentes, directivos y miembros de la comunidad educativa, y fortalecer la valoración de sus ideas, y desde este contexto, debe formar estrategias que permitan fortalecer los conocimientos científicos, técnicos, sociales, culturales, desde el intercambio de conocimientos, pero siempre en el marco de las realidades institucionales y sociales adyacentes al plantel educativo.

CAPITULO VIII

EL DERECHO EDUCATIVO Y EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DOCENTE.

El Derecho Educativo, se fundamenta principalmente en el estudio de las disposiciones jurídicas que regulan el hecho educativo, además de la formulación y legitimación de acuerdos internos que permitan mejorar la convivencia institucional, en los planteles o institutos de educación. Sin embargo, los estudiantes, representantes y las comunidades educativas, no son los únicos Sujetos de Derecho Educativo.

Los docentes, son Sujetos de Derecho Educativo por excelencia, debido a que su relación con el proceso de la enseñanza, es indispensable y de ellos, depende en gran medida, que el derecho a la educación sea garantizado. Por esta razón, el Derecho Educativo, debe regular el ejercicio de la profesión docente, no solo en lo referente a su ingreso, promoción y permanencia, sino que además, debe establecer la calificación de los hechos susceptibles de sanción para los

docentes y los procedimientos administrativos de orden disciplinario, aplicables de conformidad con la legislación vigente.

En tal sentido, se hace necesario señalar que el personal docente, debe cumplir con ciertas condiciones que le permitirán ejercer la docencia. Tal como se encuentra previsto en el artículo 4 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, publicado en la Gaceta Oficial: N°: 5.496 Extraordinario de fecha 31 de octubre del año 2000, el cual se cita a continuación:

Artículo 4.

El ejercicio profesional de la docencia constituye una carrera, integrada por el cumplimiento de funciones, en las condiciones, categorías y jerarquías establecidas en este Reglamento.

La carrera docente estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de idoneidad docente comprobada, provista del título profesional respectivo¹.

¹ Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente. Decreto N° 1.011 de fecha 4 de Octubre de 2000, Gaceta Oficial N° 5.496 Extraordinario de fecha 31 de Octubre de 2000. Artículo 4

La presente disposición jurídica establece, que la docencia es una carrera integrada por el cumplimiento de las funciones previstas en el mencionado instrumento. Y a su vez, establece la existencia de condiciones, categorías y jerarquías que deben ser respetadas. En el aparte 2°, de este mismo artículo, se prevé que la profesión docente, debe estar a cargo de personas de reconocida moralidad y de idoneidad docente comprobada, provista del título profesional respectivo.

En este orden de ideas, el artículo 4 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, establece condiciones profesionales que se consideran como un imperativo académico y ético-moral, para las personas que ejerzan la carrera pedagógica.

Si bien es cierto que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, y que no se puede hacer discriminaciones o limitar las profesiones u oficios que cada persona desee ejercer. La profesión docente, es una carrera que implica asumir grandes responsabilidades, tanto éticas como legales.

Por ello, es absolutamente necesario que el personal docente, cuente con la preparación académica acorde al ejercicio de sus funciones. El nivel académico del docente, no es el único elemento que debe condicionar el ejercicio de la carrera docente. Adicionalmente, el docente, debe poseer una solvencia moral que le identifique como una persona con profundos valores éticos, dignos del ejemplo a seguir.

El personal docente, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, tiene la obligación de cumplir con los siguientes deberes:

Artículo 6.

Son deberes del personal docente:

1. Observar una conducta ajustada a la ética profesional, a la moral, a las buenas costumbres y a los principios establecidos en la Constitución y leyes de la República.
2. Cumplir las actividades docentes conforme a los planes de estudios y desarrollar la totalidad de los objetivos, contenidos y actividades, establecidos en los programas oficiales, de acuerdo con las Previsiones de las autoridades competentes, dentro del calendario escolar y de su horario de trabajo, conforme a las disposiciones legales vigentes.

3. Planificar el trabajo docente y rendir oportunamente la información que le sea requerida.
4. Cumplir con las disposiciones de carácter pedagógico, técnico, administrativo y jurídico que dicten las autoridades educativas.
5. Cumplir con las actividades de evaluación.
6. Cumplir con eficacia las exigencias técnicas relativas a los procesos de planeamiento, programación, dirección de las actividades de aprendizaje, evaluación y demás aspectos de la enseñanza-aprendizaje.
7. Asistir a todos los actos académicos y de trabajo en general para los cuales sea formalmente convocado dentro de su horario de trabajo.
8. Orientar y asesorar a la comunidad educativa en la cual ejerce sus actividades docentes.
9. Contribuir a la elevación del nivel ético, científico, humanístico, técnico y cultural de los miembros de la institución en la cual trabaja.
10. Integrar las juntas, comisiones o jurados de concursos, calificación de servicio de docentes y trabajos de ascenso, para los cuales fuera designado por las autoridades competentes.
11. Dispensar a los superiores jerárquicos, subordinados, alumnos, padres o representantes y demás miembros de la comunidad educativa, el respeto y trato afable, acordes con la investidura docente.

12. Velar por el buen uso y mantenimiento de los ambientes de trabajo y de materiales, y de los equipos utilizados en el cumplimiento de sus labores.

13. Coadyuvar eficazmente en el mantenimiento del orden institucional, la disciplina y el comportamiento de la comunidad educativa.

14. Promover todo tipo de acciones y campañas para la conservación de los recursos naturales y del ambiente.

15. Los demás que se establezcan en normas legales y reglamentarias².

En el artículo 6 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, se enumeran los deberes que debe cumplir el educador, en función del correcto ejercicio de la carrera, destacando que el primer deber, es mantener una conducta acorde a las normas ético-profesionales, el respeto de las buenas costumbres y los principios establecidos en la constitución y las leyes vigentes. Por lo que se hace énfasis, en la importancia que tiene la solvencia moral del docente, en lo referente al ejercicio de la carrera pedagógica.

En relación a lo expuesto, establece que el docente debe cumplir con sus actividades de índole laboral, en fun-

² Ibídem., art.6

ción de favorecer el aprendizaje de los estudiantes, debe impartir la totalidad de los contenidos oficiales de acuerdo a lo previsto en el calendario escolar, planificar su trabajo y entregar las planificaciones que le sean requeridas, debe cumplir con las disposiciones de carácter pedagógico, técnico, administrativo y jurídico que dicten las autoridades educativas, quienes son a su vez, los encargados de ejercer la supervisión laboral de sus funciones.

El personal docente, debe cumplir con las actividades destinadas a la evaluación que garanticen el proceso de la enseñanza. Debe asistir a todos los actos académicos que les sean convocados, dentro de su horario laboral. Además, debe ser orientador de la comunidad educativa, contribuir con el fin de elevar el nivel científico, humanista, ético y cultural de los miembros de la institución, integrar las comisiones destinadas a la evaluación y desempeño del personal docente, cuando se le designe, velar por el correcto uso y mantenimiento del ambiente escolar, y promover acciones que tengan como fin la conservación del medio ambiente, además de las disposiciones que se establezcan en las leyes que regulen la materia educativa.

El personal docente, de acuerdo a lo previsto en el artículo 7 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, tiene los siguientes derechos:

Artículo 7.

Son derechos del personal docente:

1. Desempeñar funciones docentes con carácter de ordinario o interino.
2. Participar en los concursos de méritos para ingresar como docente ordinario.
3. Disfrutar de un ambiente de trabajo acorde con su función docente.
4. Estar informado acerca de todas las actividades educativas, científicas, sociales, culturales y deportivas, planificadas o en ejecución en el ámbito de su comunidad educativa.
5. Percibir puntualmente las remuneraciones correspondientes a los cargos que desempeñen, de acuerdo con el sistema de remuneración establecido.
6. Disfrutar de un sistema de previsión y asistencia social que garantice mejores condiciones de vida para él y sus familiares.
7. Participar efectivamente en la planificación, ejecución y evaluación de las actividades de la comunidad educativa.

8. Justificar las razones por las cuales no pudo asistir a sus labores. A tal efecto, si no pudiere solicitar el permiso respectivo con anticipación, deberá presentar el justificativo correspondiente dentro de los quince 15 días hábiles siguientes a la fecha de inasistencia.

9. Los demás que se establezcan en normas legales y reglamentarias³.

El personal docente ordinario o interino, como se puede observar en la presente cita, tiene derecho a que se le permita el desempeño de sus funciones. A que se le garantice el derecho a participar en los concursos de merito, destinados para el ingreso del personal ordinario. Además, deberá disfrutar de un ambiente de trabajo acorde a sus necesidades como docente y a ser informado, sobre todas las actividades educativas, científicas, sociales, culturales y deportivas que se realicen en su institución educativa, y a participar en su planificación o ejecución. El docente, tiene derecho a percibir un salario o remuneración correspondiente por el desempeño de sus funciones, el cual debe ser cancelado puntualmente de conformidad con el sistema de remuneraciones establecido por las convenciones colectivas.

³ Ibídem., art. 7

Adicionalmente, tiene derecho al disfrute de un sistema de previsión y asistencia social, destinado a mejorar la calidad de vida del docente y sus familiares. Destacando que en la República Bolivariana de Venezuela, este derecho es garantizado por el Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (IPASME). El docente tendrá el derecho a justificar el motivo de sus inasistencias, y solicitar los respectivos permisos o licencias. Sin embargo, la solicitud de permisos se debe realizar de forma anticipada, y se otorgará un plazo de 15 días hábiles, para justificar las inasistencias.

El Ingreso, Promoción, Ascenso y Permanencia.

El ingreso, promoción, ascenso y permanencia del personal docente en la República Bolivariana de Venezuela, está regulado por las disposiciones legales establecidas en la Ley Orgánica de Educación (LOE), y el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente.

La Ley Orgánica de Educación (LOE). Establece en su artículo 6: Que el Estado a través de sus órganos nacionales con competencia educativa ejercerá la rectoría del siste-

ma educativo, y de conformidad con lo previsto en el inciso 1, literal (f) deberá garantizar que los procesos relativos a el ingreso, permanencia, ascenso, promoción y desempeño de los profesionales de la educación, correspondan a criterios y métodos de evaluación integral y realizados mediante la contraloría social, como lo indica la siguiente cita:

Artículo 6.

El Estado, a través de los órganos nacionales con competencia en materia Educativa, ejercerá la rectoría en el Sistema Educativo. En consecuencia:

1. Garantiza. (...)

f. Los procesos de ingreso, permanencia, ascenso, promoción y desempeño de los y las profesionales del sector educativo oficial y privado, en correspondencia con criterios y métodos de evaluación integral y contraloría social⁴.

Además, el artículo 40 de la Ley orgánica de Educación (LOE), establece que la carrera docente constituye un sistema integral de ingreso en todos los niveles educativos, prevé que el ingreso a la profesión docente exigirá del título

⁴ La Ley Orgánica de Educación (LOE), publicada en Gaceta Oficial: N°: 5.929. Extraordinario de fecha 15 de Agosto de 2009. Artículo 6.

profesional respectivo, otorgado por las instituciones de educación universitaria.

Las condiciones para el ingreso a la carrera docente, se encuentran previstas en el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, Sección Segunda, la cual inicia con el artículo 22 y finaliza con el artículo 26. De acuerdo a lo previsto en el artículo 22, el ejercicio de la carrera docente, se iniciara con la categoría de Docente I.

El artículo 23 del mencionado reglamento, establece que la designación del personal docente de carácter ordinario o interino, se realizará por la autoridad educativa competente, la cual expedirá el nombramiento, y el acta de posesión del cargo, en la que hará constar el carácter con el que se incorpora al servicio docente. Este documento, comúnmente denominado como credencial de ingreso, se expedirá en dos originales, una de ellas para el interesado, y la otra que deberá conservarse en el expediente del profesional de la docencia, tal como lo establece la siguiente cita:

Artículo 23.

En toda designación del personal docente, bien sea por carácter de ordinario o de interino, la autoridad educativa competente expedirá el nombramiento correspondiente y el acta de toma de posesión del cargo y en los mismos se hará constar el carácter con el cual ha sido incorporado al servicio docente. Los originales de dichos documentos deberán entregarse al interesado y una

Copia se incorporará al expediente del profesional de la docencia que ha sido objeto de la designación⁵.

Por otra parte, el ingreso en condición de personal ordinario, para cualquier profesional de la docencia, se realizará mediante el concurso de méritos de conformidad con lo previsto en el artículo 24, del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, en el que se establece lo siguiente: “El ingreso al servicio de la docencia en la condición de ordinario, se hará mediante la aprobación del concurso de méritos”⁶.

El carácter de docente interino, se otorgará al personal de la docencia que sea designado para ocupar el cargo de forma temporal, a los fines de suplir la ausencia del personal

⁵ Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente. Op. Cit., art. 23

⁶ *Ibidem.*, art. 24

docente ordinario, y cuando el profesional de la docencia ó el docente no titulado, ejerza el cargo en la espera del respectivo concurso de merito. Destacando que también se otorgará el carácter de interino, cuando se designe a personas sin título docente. Las condiciones para la designación del personal interino, se encuentran previstas en el artículo 25 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, el cual se puede evidenciar a Continuación:

Artículo 25.

El ejercicio de la docencia con carácter de interino, procederá en los casos siguientes:

1. Cuando un profesional de la docencia sea designado para ocupar un cargo por tiempo determinado, en razón de ausencia temporal del ordinario.
2. Cuando el profesional de la docencia o el docente no titulado desempeñe un cargo que deba ser provisto por concurso, mientras éste se realiza.
3. Cuando se hayan agotado todos los procedimientos posibles para proveer un cargo con un profesional de la docencia y se designe a personas sin título docente, previo cumplimiento del régimen de selección establecido en el presente Reglamento⁷.

⁷ Ibídem., art. 25

El carácter de docente interino, de acuerdo a lo previsto en el artículo 26 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, no excluye de la obligatoriedad de desempeñar el cargo con idoneidad profesional, ética y capacidad docente comprobada. Además, el mismo artículo, establece que se deberá instruir el expediente respectivo a los fines administrativos, o legales en los casos relativos a la falta de moralidad e idoneidad, conforme a lo previsto en la siguiente cita:

Artículo 26.

El carácter de interino en el ejercicio de un cargo docente no excluye de la obligación de desempeñarse con idoneidad y capacidad profesional comprobadas. A quien no la ejerza con la debida eficiencia, moralidad e idoneidad, le será instruido el expediente respectivo, a los fines legales y administrativos correspondientes⁸.

En consideración, el ingreso a la docencia, debe responder a criterios de merito y condiciones que permitan garantizar el derecho a una educación de calidad, en todos los subsistemas educativos. Sin importar el carácter de personal ordinario o interino. Destacando que se exigirá el titulo de

⁸ Ibídem., art. 26

profesional respectivo. Sin embargo, en la actualidad, existen diversas clasificaciones del personal interino, las cuales se encuentran amparadas por la VII Convención Colectiva de los Trabajadores y Trabajadoras de la Educación 2013-2015⁹. Tales como son:

- a) Docente (Profesor, Licenciado ó TSU)
- b) Profesional No Docente (Licenciado ó Técnico Superior Universitario TSU).
- c) Interino No Graduado.
- d) Bachiller Docente.

En este sentido, el personal interino, conformado por: Docentes (Profesores, licenciados ó TSU en Educación), Profesionales No Docentes (Licenciado ó TSU), Interinos No Graduados (Estudiantes de la Carrera de educación) y Bachilleres Docentes (Que poseen el cargo respectivo). Pueden ejercer la profesión y gozan de los mismos derechos y

⁹ Convención Colectiva de los Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. N°: VII de Fecha: 2013-2015., p10

tendrán los mismos deberes que el personal docente ordinario.

Promoción y Ascenso del Personal Docente.

La promoción del personal, de acuerdo con el artículo 29 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, son las acciones que las autoridades educativas, realizan en función de mejorar las condiciones profesionales de los educadores. En este contexto, la promoción y los ascensos del personal que ejerce la docencia, contribuye con el desarrollo del bienestar laboral del educador, lo que a su vez, se traduce como un estímulo que permite garantizar el derecho a la educación, con una mejor calidad. Estas acciones tienen el objeto de aprovechar las potencialidades del personal docente, al máximo.

En consideración a lo antes expuesto, las medidas de promoción que se pueden aplicar, de conformidad con el artículo 29 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, son las siguientes:

- a) El paso de una dedicación a otra de mayor concentración de horas, lo que implica el incremento de salario percibido.
- b) La reubicación del docente en plantel o servicio con un cargo de mayor categoría o de ubicación geográfica.
- c) La realización de giras de observación, estudio y comisiones especiales para el trabajo de campo de la docencia.
- d) Cursos de nivelación, perfeccionamiento o postgrado y entrenamientos especiales.

Estas medidas que se pueden apreciar en el artículo 29 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, son acciones que sin implicar el ascenso del personal, constituyen mejoras laborales, destinadas a estimular al personal que ejerce la docencia, para que este, fortalezca su desempeño laboral e institucional. Lo que a su vez, constituye un elemento muy importante, para los efectos de garantizar una

educación de alto nivel en todos los subsistemas y modalidades de la educación.

Por otra parte, no solo el aumento de horas destinadas a elevar el nivel de ingresos, se considera como un elemento de estímulo para el educador, también se puede observar que los trabajos de campo en el área educativa, comisiones especiales, nivelaciones, entrenamientos profesionales y realización de estudios de postgrado, son estímulos que a su vez, permiten la superación del docente, mediante el fortalecimiento de sus capacidades y conocimientos.

El hecho de elevar el nivel académico y de conocimiento del personal de la docencia, permite que el docente, cuente con una mayor capacidad, para garantizar una educación de calidad a sus estudiantes. Además, permite que este educador, pueda participar activamente en la formación de sus colegas, y de la comunidad educativa en general, de conformidad con lo previsto en el Capítulo IV de la Ley Orgánica de Educación (LOE), destinado a regular el proceso de Formación Permanente.

Como puede observarse, la promoción del docente, no solo persigue como fin estimular al educador, también se fundamenta en crear mejores condiciones académicas que faciliten su desempeño, a fin de garantizar el derecho a una educación de calidad, para los estudiantes que son parte de los diversos subsistemas y modalidades que conforman el Sistema Educativo Venezolano.

La promoción del personal docente, explicada en párrafos anteriores, se puede evidenciar de acuerdo a lo previsto en el artículo 29 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, tal como se puede observar a continuación:

Artículo 29.

La promoción dentro de la carrera docente consiste en todo tipo de acciones realizadas por las autoridades educativas que propendan al mejoramiento del profesional docente en servicio, que permitan su realización plena o que faciliten el mejor aprovechamiento de sus potencialidades. Las promociones procederán como reconocimiento y estímulo, en atención a la calificación eficiente de la actuación profesional. Entre las medidas de promoción pueden aplicarse las siguientes: paso de una dedicación a otra de mayor concentración de horas docentes, reubicación del docente en un plantel o servicio de mayor categoría o

mejor ubicación geográfica, realización de giras de observación y estudio, comisiones especiales de trabajo en el campo de la docencia, cursos de nivelación, perfeccionamiento o postgrado y entrenamientos especiales, así como cualesquiera otras que disponga la autoridad educativa en relación con el mejoramiento de las condiciones de trabajo.

La promoción a la Dedicación Integral Nocturna y al Tiempo Completo se hará mediante concurso de méritos y oposición, entre aspirantes que tengan una antigüedad no menor a tres años en la categoría de Docente I, como mínimo¹⁰.

En relación con el ascenso del personal que ejerce la docencia, el artículo 30 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, aporta la siguiente definición:

Artículo 30.

Se entiende por ascenso el pase progresivo del profesional de la docencia en las jerarquías administrativas y categorías académicas de la carrera docente, en virtud de la calificación eficiente de su actuación y desarrollo profesional, y del cumplimiento riguroso de los requisitos establecidos para el correspondiente pase a la jerarquía o categoría inmediata superior¹¹.

¹⁰ Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente. Op. Cit., art. 29

¹¹ Ibídem., art. 30

Entendiéndose por ascenso del personal docente, el cambio de jerarquía administrativa, que le permite obtener una categoría académica de mayor nivel en el ejercicio de la docencia. Esta calificación de ascenso, se diferencia de la promoción del docente, en que la promoción, aun cuando involucra elementos que definen mejoras académicas o laborales, no permite el cambio de estatus, en lo concerniente a la categoría académica en el marco del orden jerárquico institucional. Sin embargo, el ascenso, no solo determina el estímulo mediante beneficios académico-laborales, sino que además, representa un estatus académico enmarcado en el sistema jerárquico institucional, establecido por el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente.

El ascenso de los educadores, debe responder a un conjunto de criterios enmarcados en los meritos academicos, experiencia, entre otros aspectos fundamentales, para el ejercicio de la carrera pedagógica. En tal sentido, el artículo 31 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, establece que el ascenso del personal de la docencia, debe considerar los siguientes elementos:

Artículo 31.

Para ascender a los profesionales de la docencia en las jerarquías y categorías de la carrera docente, se tomarán en cuenta los siguientes elementos de juicio:

1° Años de servicio prestados en planteles o servicios educativos del sector oficial.

2° Títulos, certificaciones y constancias de estudios realizados.

3° El puntaje mínimo establecido de acuerdo con la Tabla de Valoración de Méritos.

4° Memoria Descriptiva o Trabajo de Ascenso, según corresponde.

5° Otros méritos que acrediten legalmente al aspirante, vinculados con la actuación, el desarrollo y la eficiencia profesional¹².

En consideración a lo previsto en el artículo 31 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, se tiene que la experiencia profesional, y la antigüedad en el ejercicio de las funciones adquiridas por el educador con los años de servicio, es uno de los principales criterios para el ascenso. Sin embargo, para los fines de ascenso del personal que ejer-

¹² Ibídem., art. 31

ce la docencia, existen otros criterios fundamentales, como son:

- a) El currículum del profesional de la docencia, en el que se deben incluir, todos los estudios conducentes y no conducentes a grado académico, investigaciones, publicaciones, entre otros.
- b) El puntaje mínimo establecido en la *Tabla de Valoración de Meritos*¹³.
- c) Los trabajos de ascenso y otros meritos que acrediten su eficiencia profesional.

En este contexto, se puede observar que el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, establece criterios muy específicos, para el ascenso del personal que ejerce la docencia, en relación a cada categoría o jerarquía, tal como se puede evidenciar en su artículo 32, el cual se cita a continuación:

¹³ Ver ANEXO II. Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, art. 56

Artículo 32.

Los miembros ordinarios del personal docente tendrán derecho a las promociones y ascensos, siempre que reúnan los requisitos mínimos establecidos en las especificaciones de las jerarquías y categorías contenidas en la Tabla de Posiciones de la Carrera Docente, conforme a las disposiciones siguientes:

Primera Jerarquía:

DOCENTE DE AULA

Categoría 1: Docente I

Ingresa por concurso de méritos.

Para ascender a la Categoría Docente II debe cumplir todos los siguientes requisitos:

1. Tres (3) años de ejercicio en la categoría Docente I.
2. Curso de actualización o de perfeccionamiento profesional, de primer nivel, con evaluación.
3. Presentación de la Memoria Descriptiva de su actuación.
4. Puntaje mínimo acumulado de: cuatro (4,00) puntos en el sistema de calificación.

Categoría 2: Docente II

Requisitos mínimos para ascender a Docente III:

1. Cuatro (4) años de ejercicio en la Categoría Docente II.
2. Curso de actualización o de perfeccionamiento profesional de segundo nivel, con evaluación.
3. Puntaje mínimo acumulado de: ocho (8,00) puntos en el sistema de calificación.

Categoría 3 Docente III

Requisitos mínimos para ascender a Docente IV:

1. Cuatro (4) años de ejercicio en la Categoría Docente III.
2. Curso de actualización o de perfeccionamiento profesional de tercer nivel, con evaluación.
3. Trabajo de ascenso.
4. Puntaje mínimo acumulado de: doce (12,00) puntos en sistema de calificación.

Categoría 4 Docente IV

Requisitos mínimos para ascender a Docente V:

1. Cinco (5) años de ejercicio en la Categoría Docente IV.
2. Curso de postgrado, equivalente a especialización como mínimo.
3. Trabajo de ascenso.

4. Puntaje mínimo acumulado de: dieciséis (16,00) puntos en el sistema de calificación.

Categoría 5: Docente V

Requisitos mínimos para ascender a Docente VI:

1. Cinco (5) años de ejercicio en la Categoría Docente V.
2. Curso de postgrado, equivalente a Maestría o Doctorado.
3. Trabajo de ascenso.
4. Puntaje mínimo acumulado de: veinte (20,00) puntos en el sistema de calificación.

Categoría 6: Docente VI

Última clasificación de las categorías académicas establecidas para la jerarquía de Docente de Aula.

Segunda Jerarquía:

DOCENTE COORDINADOR

Para ingresar a la Jerarquía de Docente Coordinador se requiere:

1. Tener una antigüedad no menor de doce (12) meses en la categoría de Docente II.
2. Tener dedicación a Tiempo Completo.
3. Ganar el concurso correspondiente.

Tercera Jerarquía:

DOCENTE DIRECTIVO Y DE SUPERVISIÓN

Para ingresar a la jerarquía de Docente Directivo y de Supervisión se requiere:

1. Ser venezolano.
2. Ganar el concurso correspondiente.
3. Tener dedicación a Tiempo Integral o a Tiempo Completo, según corresponda.
4. Haber aprobado el curso de cuarto nivel relativo a la naturaleza, funciones y atribuciones del cargo al cual va a optar.
4. Poseer por lo menos la categoría docente que según el cargo a ocupar se señala a continuación, y haberse desempeñado en ella en un lapso no menor de doce (12) meses:
 - 5.1. Para el cargo de Subdirector: Docente III
 - 5.2. Para el cargo de Director: Docente IV
 - 5.3. Para el cargo de Supervisor: Docente V.

Cuarta Jerarquía:

SUPERVISORES ITINERANTES NACIONALES

Para ingresar a la jerarquía de Supervisores Itinerantes Nacionales, es necesario:

1. Ser venezolano.
2. Ser o haber sido docente.
3. Ser de reconocida solvencia moral y con méritos académicos suficientes que acrediten su eficiencia profesional.
4. Ser nombrado por el Ministro de Educación, Cultura y Deportes, a proposición del Viceministro de Asuntos Educativos.

El Cuerpo de Supervisores Itinerantes Nacionales estará conformado por los docentes que fueren necesarios, a proposición del Viceministro de Asuntos Educativos, del cual dependerán jerárquicamente. Dichos Supervisores realizarán supervisiones integrales en todos los planteles establecidos a nivel nacional.

Si el informe final de la supervisión integral de cada plantel así lo recomienda, éste se intervendrá y podrá suspenderse a todos o a algunos de los miembros del cuerpo directivo, caso en el cual se designará el personal directivo interino correspondiente¹⁴.

Como se puede observar en el artículo 32 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, solo el personal ordinario, tendrá derecho a las promociones y ascensos, en las categorías previstas, y se regirá de conformidad con los

¹⁴ Ibídem., art. 32

requisitos mínimos exigidos para ascender a cada jerarquía, de acuerdo a lo dispuesto en el mencionado artículo.

Por otra parte, el puntaje mínimo acumulado del sistema de calificación, al que se hace referencia en los requisitos establecidos, para ascender a cada categoría, se puede observar en la *Tabla de Valoración de Méritos*, la cual se encuentra prevista en el artículo 56 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente. (*Ver Anexos*).

Estabilidad y Permanencia del Personal Docente.

La estabilidad y permanencia del personal docente en el ejercicio de su cargo, se encuentra prevista en el artículo 94 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente y el artículo 41 de la Ley Orgánica de Educación (LOE). En consideración, se establece que el educador, tendrá el derecho a la permanencia en los cargos que desempeñe, con la jerarquía, categoría, remuneración y demás garantías socioeconómicas que le correspondan. Como se evidencia a continuación:

Artículo 94.

Se entiende por estabilidad en el ejercicio de la profesión docente, el derecho a gozar de la permanencia en los cargos que desempeñen, con la jerarquía, categoría, remuneración y garantías económicas y sociales que le correspondan de acuerdo con la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación, la Ley Orgánica del Trabajo, el presente Reglamento, las cláusulas contenidas en la contratación colectiva y demás normativa legal vigente¹⁵.

La permanencia del profesional de la docencia, se rige por el principio de estabilidad, este principio, es administrado por los diferentes entes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, en el que se destaca que la administración del principio de estabilidad estará a cargo de las autoridades educativas, la comisión nacional y las comisiones regionales de estabilidad y la jurisdicción contencioso-administrativa.

La estabilidad de la carrera docente, también se encuentra prevista en el artículo 41 de la ley Orgánica de educación (LOE). En el cual se garantiza a los profesionales de

¹⁵ *Ibíd.*, art. 94

la docencia la estabilidad en el ejercicio de sus funciones bien sea en el sector privado como en las instituciones de educación oficial. En el marco de esta estabilidad, se reconoce la jerarquía docente, categoría, remuneración y beneficios. Estas garantías previstas en el artículo 41 de la LOE, guardan una amplia relación con el artículo 94 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, como se observa en la siguiente cita:

Artículo 41.

Se garantiza a los y las profesionales de la docencia, la estabilidad en el ejercicio de sus funciones profesionales, tanto en el sector oficial como privado; gozarán del derecho a la permanencia en los cargos que desempeñan con la jerarquía, categoría, remuneración y beneficios socioeconómicos en correspondencia con los principios establecidos en la Constitución de la República, en esta Ley y en la ley especial¹⁶.

En lo concerniente a la jubilación del personal de la docencia, el artículo 42 de la LOE, establece la relación entre el trabajo y la jubilación. En este contexto, se encuentra previsto que los profesionales de la docencia, en sus relaciones de trabajo, se regirán por las disposiciones de esta ley, de las

¹⁶ LOE. Op. Cit., art 41

leyes especiales que regulen la materia, la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras (LOTTT) y demás disposiciones aplicables, entre las que se debe considerar de forma obligatoria el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente. El mismo artículo, prevé que el profesional de la docencia adquiere el derecho a la jubilación con el cien por ciento del salario, al cumplir 24 años de servicio activo en la educación, tal como se puede evidenciar a continuación:

Artículo 42. Los y las profesionales de la docencia se registrarán en sus relaciones de trabajo, por las disposiciones de esta Ley, por las leyes especiales que regulen la materia, la Ley Orgánica del Trabajo y demás disposiciones legales que le sean aplicables. El personal docente adquiere el derecho de jubilación con veinticinco años de servicio activo en la educación, con un monto del cien por ciento del sueldo y de conformidad con lo establecido en la ley especial¹⁷.

Cabe señalar que la carrera docente, de conformidad con lo previsto en las disposiciones que establece la Ley Orgánica de Educación (LOE), y el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, Garantiza la estabilidad y permanencia del docente en el ejercicio de sus funciones. A tal

¹⁷ Ibídem., art 42

efecto, quienes desempeñen cargos en la docencia en las instituciones oficiales, no podrán ser separados de sus cargos, a menos que tal separación, se realice en las siguientes condiciones:

- a) Cuando el docente sea destituido de su cargo, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, artículo 159.
- b) Cuando exista la separación temporal del cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 160 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente.
- c) Cuando ocurra el abandono de cargo, igualmente previsto en el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente en su artículo 161.

No obstante, la separación temporal del cargo o destitución, solo tendrá lugar cuando las autoridades educativas competentes, agoten todas las instancias relativas al procedimiento correspondiente. Este procedimiento administrativo, se debe desarrollar de conformidad con lo establecido en las disposiciones previstas en el Reglamento del Ejercicio de

la Profesión Docente, destacando que todos los procedimientos administrativos, deben respetar las garantías previstas en la constitución y las leyes vigentes.

Faltas en las que puede incurrir el Personal Docente.

Las faltas en las que puede incurrir el personal docente, se clasificarán en graves o leves. La Ley Orgánica de Educación (LOE) en las Disposiciones Transitorias, Primera: Numerales 5 y 6, establece las acciones que son consideradas como faltas graves. De igual forma, estas faltas también se encuentran previstas en el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente en los artículos: 150 y 151, relativo a las faltas graves. Por otra parte, las faltas leves se encuentran previstas en el artículo 152 del mencionado reglamento.

En relación con lo previsto, tanto en las Disposiciones Transitorias de la Ley Orgánica de Educación (LOE), Numeral 5, como en el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente en su artículo 150, se consideran como faltas graves las que se mencionan a continuación en la siguiente cita:

Artículo 150.

Los miembros del personal docente incurrir en falta grave en los siguientes casos:

1º Por aplicación de castigos corporales o afrentosos a los alumnos.

2º Por manifiesta negligencia en el ejercicio del cargo.

3º Por abandono del cargo sin haber obtenido licencia o antes de haber hecho entrega formal del mismo a quien deba reemplazarlo o a la autoridad educativa competente, salvo que medien motivos de fuerza mayor a casos fortuitos.

4º Por la inasistencia y el incumplimiento reiterado de las obligaciones que le corresponden en las funciones de evaluación del rendimiento estudiantil.

5º Por observar conducta contraria a la ética profesional, a la moral, a las buenas costumbres y a los principios que informan nuestra Constitución y las demás leyes de la República.

6º Por violencia de hecho o de palabras contra sus compañeros de trabajo, sus superiores jerárquicos o sus subordinados.

7º Por utilizar medios fraudulentos para beneficiarse de cualesquiera de los derechos que acuerde la Ley Orgánica de Educación y el presente Reglamento.

8° Por coadyuvar a la comisión de faltas graves cometidas por otros miembros de la comunidad educativa.

9° Por reiterado incumplimiento de obligaciones legales reglamentarias o administrativas.

10° Por inasistencia injustificada durante tres días hábiles o seis turnos de trabajo en el período de un mes¹⁸.

Adicionalmente, existe otra disposición jurídica común, en lo referente a la Ley Orgánica de Educación (LOE), y el reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente. Debido a que el numeral 6 de la LOE, al igual que el artículo 151 del mencionado reglamento, establece que los docentes en el ejercicio de cargos con función directiva, o de supervisión educativa, podrán incurrir en falta grave, de acuerdo a las condiciones previstas en la siguiente cita:

Artículo 151.

También incurren en falta grave los profesionales de la docencia en ejercicio de cargos de dirección o supervisión de la educación, cuando violen o amenacen la estabilidad de los educadores o di-

¹⁸ Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente. Op. Cit., art 150

eren lugar a la aplicación de medidas legales contra éstos¹⁹.

Cabe destacar, que las condiciones previstas en el Numeral 5 de las Disposiciones transitorias de la LOE, y lo previsto en el artículo 150 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, coinciden notablemente por su similitud. De hecho, en muchos de los casos se puede observar que el contenido de estas dos normas es exactamente el mismo.

El inciso 10° del artículo 150 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, establece: “Por inasistencia injustificada durante tres días hábiles o seis turnos de trabajo en el período de un mes”²⁰ y el literal (j) del numeral 5, de la LOE: “Por inasistencia injustificada durante tres días hábiles en el período de un mes. El Reglamento establecerá todo lo relativo al personal docente que trabaje a tiempo convencional y otros casos”²¹.

En consideración a lo expuesto, se destaca que el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, establece

¹⁹ Ibídem., art. 151

²⁰ Ibídem., art. 150

²¹ LOE. Op. Cit., numeral 5.

que el educador incurrirá en falta grave por no asistir durante tres días hábiles *-o seis turnos de trabajo-* en un mes, y de acuerdo a lo previsto en la LOE, se considera como falta grave, la inasistencia injustificada, durante *tres días hábiles en un mes*. Destacando que no solo la inasistencia a tres días hábiles era objeto de falta grave. Sin embargo, seis turnos de trabajo en la mayoría de los casos son el equivalente a tres días hábiles. Por lo que se puede precisar que las diferencias no son realmente notables. Aun que en algunos casos, puede representar confusión, sobre todo para los docentes que laboran a tiempo convencional.

En lo concerniente al artículo 151 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente y el numeral 6 de la Ley Orgánica de Educación (LOE), Se establece que los docentes, que se encuentren en el ejercicio de cargos de dirección o supervisión educativa, incurrirán en falta grave cuando sus acciones violen o amenacen la estabilidad de los docentes que se encuentran a su cargo o supervisión.

En este contexto cabe señalar, que los procedimientos administrativos correspondientes a mantener el orden institucional, y sancionar los hechos que por su naturaleza son con-

siderados como faltas, no constituyen la violación a la estabilidad del docente, siempre que se respeten las garantías constitucionales, el debido proceso y los procedimientos previstos en la legislación educativa vigente.

Las faltas leves, se encuentran previstas en el artículo 152 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, el cual se puede evidenciar a continuación:

Artículo 152.

Los miembros del personal docente incurren en falta leve en los siguientes casos:

1. Retardo reiterado en el cumplimiento del horario de trabajo.
2. Inasistencia injustificada al trabajo durante dos (2) días hábiles en el término de un mes.
3. Incumplimiento de las normas de atención debida a los miembros de la comunidad educativa.
4. Incumplimiento reiterado de las actividades docentes relativas a la planificación, desarrollo de la enseñanza, y uso y mantenimiento de las ayudas pedagógicas en el aula.

5. Retardo injustificado en la entrega de los recaudos relativos a la administración escolar²².

El Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, establece en su artículo 153 las sanciones aplicables al personal que ejerce la docencia, entre las que destacan: La amonestación oral, la amonestación escrita, la separación temporal del cargo, la destitución e inhabilitación para el ejercicio de la profesión docente.

Cada una de estas sanciones, se encuentra definida por el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, tal como se puede observar en el artículo 154, donde se establece que la amonestación oral, consiste en: “la represión que hace el supervisor inmediato, en el lugar de trabajo, personal y privadamente, al docente objeto de la sanción”²³. La amonestación escrita es: “la represión que, extendida por escrito, hace el funcionario de mayor jerarquía dentro del servicio o plantel, al docente objeto de la sanción”²⁴. La separación del cargo consiste en: “la privación temporal de su ejercicio, sin

²² Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente Op. Cit., art. 152

²³ Ibídem., art. 153

²⁴ Ibídem., art. 156

remuneración ni consideración de tiempo de servicio”²⁵. La destitución del cargo, consiste en: “la separación definitiva del cargo que venía desempeñando el docente, con inhabilitación para el servicio en cargos docentes, durante un período de tres a cinco años”²⁶.

La aplicación de estas sanciones también se encuentra definida en el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, Destacando que el Artículo 155, establece que son causal de amonestación oral, el retardo injustificado y reiterado en el horario laboral del docente, El retardo en la entrega de las planificaciones y recaudos, destinados a la planificación de la enseñanza, o la evaluación de los estudiantes y la falta de cortesía con los miembros de la comunidad educativa.

La amonestación escrita, tendrá lugar de conformidad con lo previsto en el artículo 157 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, cuando el profesional de la docencia, se le hayan realizado tres amonestaciones orales en un año, por inasistencia injustificada de un día hábil o dos

²⁵ Ibídem., art. 160

²⁶ Ibídem., art. 159

turnos de trabajo en un mes, por la inasistencia injustificada de dos días hábiles en un plazo de seis meses, o por inasistencia injustificada de tres días hábiles, en un plazo de un año. Destacando que tres amonestaciones escritas, son causal de separación del cargo cuando estas se produzcan en un mismo año, tal como lo establece el artículo 158 del mencionado reglamento.

El abandono de cargo injustificado, se encuentra previsto en el artículo 161 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, en donde se establece lo siguiente:

Artículo 161.

El abandono injustificado del trabajo durante dos (2) días hábiles constituye causal de separación del cargo por un mes, cuando se produzca en el plazo de treinta (30) días continuos. La reincidencia es causal de separación por tres (3) meses, si se produce en el plazo de un año²⁷.

La separación del cargo de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente en su artículo 162, establece que se consideran causales de separación del cargo, hasta por un lapso de 11 meses las si-

²⁷ Ibídem., art.161

guientes: Tres amonestaciones escritas en un mes, el incumplimiento injustificado y reiterado del tiempo destinado para el logro de los contenidos programáticos, el incumplimiento de recaudos correspondientes a la administración escolar, y la insubordinación reiterada ante las autoridades educativas, tal como se puede evidenciar en la siguiente cita:

Artículo 162.

Son causales de separación del cargo hasta por un lapso de once (11) meses, las siguientes:

1. Haber sido objeto de tres (3) amonestaciones escritas en el término de un año.
2. Incumplir en forma injustificada y reiterada con el tiempo destinado para el logro de los objetivos programáticos.
3. Incumplimiento injustificado en la entrega de los recaudos de la administración escolar.
4. Insubordinación reiterada a la autoridad educativa competente²⁸.

Las faltas graves de conformidad con lo previsto, tanto en el artículo 164 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, como en el numeral 7 de la Ley Orgánica

²⁸ Ibídem., art 162

de Educación (LOE), establece que las faltas anteriormente citadas, se sancionarán con separación del cargo de uno a tres años, y la reincidencia con la destitución e inhabilitación del ejercicio de la profesión por un lapso de 3 a 5 años.

En consideración a las faltas leves, el artículo 165 del Reglamento de Ejercicio de la Profesión Docente y el numeral 8 de la LOE, establecen que las sanciones destinadas para tal fin, serán la amonestación oral o escrita y la separación temporal del cargo hasta por un lapso de 11 meses, tiempo durante el cual el profesional de la docencia, no tendrá derecho al goce del salario correspondiente, durante el tiempo de separación.

La LOE en el numeral 8, establece que el órgano rector con competencia en materia de educación, será quien determine la graduación de las sanciones en relación a las faltas leves. Sin embargo, estas acciones deberán contar con el respeto de todas las disposiciones establecidas en la constitución y las leyes vigentes, tanto en lo que respecta a la legislación educativa, como al ámbito laboral. Destacando que en ningún caso, las decisiones del órgano rector en materia de educación, podrán aplicar sanciones que violenten el

principio de: *In Dubio Pro Operario*, el cual prevé, que en caso de duda, sobre la legislación que rijan la materia laboral, se aplicará con preferencia la norma que beneficie más al trabajador.

Los Procedimientos Disciplinarios.

Los procedimientos disciplinarios que rigen la carrera pedagógica, en lo que refiere a los educadores que laboren en instituciones o planteles educativos, desde el subsistema de educación preescolar hasta la etapa de educación media general, son regulados por el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente. Sin embargo, la Ley orgánica de Educación (LOE), en sus disposiciones transitorias numeral 1, establece lo siguiente:

1. Durante el procedimiento de averiguación y determinación de las faltas cometidas por las personas a que se refiere esta Ley y a los fines de la decisión correspondiente, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Educación, instruirán el expediente respectivo, en el que hará constar todas las circunstancias y pruebas que permitan la formación de un concepto preciso de la naturaleza del hecho. En dicho procedimiento se garantizará a la persona el derecho a ser oído y a ejercer plenamente su defensa,

conforme a los principios constitucionales y a las disposiciones legales pertinentes²⁹.

En relación a la presente cita, se destaca que en los casos de faltas cometidas por el personal docente, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Educación, instruirá el expediente e iniciará la investigación destinada a determinar las faltas que se presuponen que el profesional de la docencia, pudo haber cometido durante el ejercicio de sus funciones. Adicionalmente, se destaca que en el numeral 1, se prevé el derecho de ser oído y de ejercer su derecho a la defensa de conformidad con lo dispuesto en la constitución y las leyes vigentes.

En lo referente a la incursión de el docente en faltas leves, las cuales ameriten sanciones como la amonestación oral o escrita, se rejrán de acuerdo a lo previsto en los artículo 167, 168 y 169 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente.

En consideración a lo expuesto, el artículo 167 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, establece

²⁹ LOE. Op. Cit., Disposiciones transitorias, Primera, Numeral 1

que el supervisor inmediato, decidirá sobre la aplicación de la sanción, después de escuchar la defensa del docente de conformidad con las garantías antes mencionadas. De acuerdo a lo previsto en el artículo 168, se ejecutará el procedimiento de forma muy similar, solo que este, se realizará de forma escrita. Por ello, el superior de mayor jerarquía de la institución, deberá emitir un informe por escrito al docente, posterior a la entrevista en la que se garantice el derecho a ser oído y el derecho a la defensa. Este informe, debe contener los hechos y las conclusiones a las que se haya llegado, destacando que solo procederá la aplicación de la sanción, cuando se determine la responsabilidad del docente en la comisión de la falta.

Las amonestaciones de acuerdo a lo previsto en el artículo 169 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, bien sea, cuando son realizadas de forma oral o por escrito, deben ser comunicadas a la Oficina de Personal y al Comité de Substanciación, para que las mencionadas instancias, procedan con el registro de las sanciones en la hoja de servicio del profesional de la docencia.

En circunstancias más graves, el artículo 171 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, prevé que en los casos, que por su naturaleza ameriten la separación temporal del cargo, destitución e inhabilitación, será el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Educación, quien inicie el procedimiento respectivo. En consideración, el jefe o director de Zona Educativa, el Supervisor Jefe de Distrito, el Jefe de Sector o el Director del Plantel Educativo, podrán ordenar la averiguación administrativa inicial, la cual en ningún caso debe prolongarse por más de 30 días hábiles, contados desde la fecha en la que se imparte la mencionada orden y este plazo, solo podrá ser prorrogable por una vez si realmente fuere necesario.

En consideración a lo descrito, una vez iniciada la investigación, el funcionario que sea designado para realizar la averiguación, debe proceder con la elaboración de un expediente, debidamente foliado en letras y números. Este expediente debe contener:

- a) Las declaraciones del docente investigado.
- b) Las actuaciones practicadas.

- c) El material probatorio para hacer constar los hechos.
- d) Las circunstancias que puedan influir en su calificación.

El informe final de la averiguación, se debe especificar y deberá ser motivado a las conclusiones que determinen la participación del profesional de la docencia, en los hechos que pueden dar origen a la apertura del expediente disciplinario.

El contenido y orden que debe tener el expediente correspondiente a la averiguación, se puede observar de acuerdo a lo previsto en el artículo 172 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, el cual se cita a continuación:

Artículo 172.

El funcionario designado para realizar la averiguación elaborará un expediente, foliado en letras y números, que contendrá las declaraciones del docente investigado, las actuaciones practicadas y, en general, todo el material probatorio para hacer constar los hechos, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación. En el informe final de la ave-

riguación se especificará y motivará las conclusiones sobre la participación del docente en los hechos, que puedan dar origen a la apertura del expediente disciplinario³⁰.

El procedimiento mediante el cual se instruirá el expediente respectivo a la averiguación y determinación de las faltas, en las que presuntamente hubiere incurrido el profesional de la docencia, se encuentra previsto en el artículo 173 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, como se puede evidenciar en la siguiente cita:

Artículo 173.

Para la averiguación y determinación de faltas presuntamente cometidas por miembros del personal docente, a los fines de la decisión correspondiente, se instruirá el expediente respectivo, de acuerdo al siguiente procedimiento:

1. El Director de Educación o de la Zona Educativa, al tener conocimiento del resultado de una averiguación administrativa inicial, en la que resulte presuntamente responsable de la comisión de faltas un docente, procederá a ordenar la emisión del Acta de Proceder, y designará al Instructor Especial para que dirija la averiguación del caso, suministrándole toda la información y documentos pertinentes.

³⁰ Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente. Op. Cit., art. 172

2. El Director del plantel, Supervisor del sector, Jefe de Distrito, de Servicio o Director de Zona o Director de Educación, son los funcionarios competentes para emitir el Acta de Proceder que da inicio al procedimiento disciplinario.

3. El Instructor Especial, una vez analizada el Acta de Proceder y los recaudos o informes de los hechos presuntamente calificables como falta, dictará el Auto de Proceder, con la motivación de la decisión, indicación de los elementos de juicio tenidos en cuenta y la determinación de las normas que definen las faltas investigadas.

4. Una vez dictado el Auto de Proceder, el Instructor Especial lo notificará a la Comisión Regional de Estabilidad y citará al docente investigado a fin de que rinda Declaración Informativa sobre los hechos presuntamente calificables como falta. Asimismo, citará a los denunciantes o testigos o personas que puedan tener conocimiento de los hechos. Con estas declaraciones deberá elaborar el Informe Preliminar con las conclusiones que permitan establecer, con certeza, si existen fundamentos para continuar la averiguación y determinar la presunta responsabilidad disciplinaria del docente.

5. Si hubiere méritos o indicios que hicieren presumir la comisión de una falta por parte de un docente, el Instructor Especial deberá citar al investigado, mediante Boleta de citación, para que comparezca a co-

nocer de los hechos y su presunta participación en ellos³¹.

En este orden de ideas, se puede observar cómo se debe desarrollar el procedimiento correspondiente al momento de instruir el expediente. En tal sentido, el director o directora de la Zona Educativa, al tener conocimiento del resultado de la averiguación administrativa inicial, en la que se precise la existencia de elementos que determinen la posible responsabilidad del docente en la falta que le ha sido imputada, el director de la Zona Educativa correspondiente, deberá ordenar que se emita el *Acta de Proceder*, además, procederá con la designación del funcionario que actuará en la función de *Instructor Especial*. El instructor especial, será el funcionario que dirigirá la investigación del caso.

El instructor especial, quien es el funcionario designado por la dirección de la Zona Educativa para formalizar o instruir el expediente, debe analizar el *Acta de Proceder* y los demás recaudos o informes que versen sobre los hechos, sobre los cuales existe la presunta calificación de faltas. Este funcionario, deberá dictar el *Auto de Proceder* y este acto,

³¹ Ibídem., art. 173

debe ser motivado. Por lo que en él, debe constar la decisión, la indicación de los elementos de juicio que fueron considerados para la calificación de las faltas, las normas infringidas y su relación con los hechos, y los elementos que determinan la posible responsabilidad del docente en la incursión de las faltas.

Como se puede observar existe una diferencia significativa en lo que se refiere al *Acta de Proceder* y el *Auto de Proceder*. Debido a que la primera, es un documento administrativo, mediante el cual la dirección de Zona Educativa, ordena a un funcionario competente instruir el expediente, y proceder con la continuidad del caso. A diferencia de este acto administrativo, el *Auto de Proceder*, es la orden que dicta el funcionario designado como *Instructor Especial*, para la prosecución del expediente.

Al dictarse el auto de proceder, el instructor especial, tiene que realizar la notificación a la Comisión Regional de Estabilidad, y esta instancia, deberá citar al docente investigado, para que este realice una declaración informativa sobre los hechos que supuestamente puedan ser calificados como faltas. De la mis-

ma forma, se citará a la parte denunciante, testigos y personas que tengan conocimiento de los hechos.

Las declaraciones de las partes citadas, deben ser incorporadas al informe preliminar, el cual debe contener conclusiones que establezcan con certeza si existen elementos relevantes, para continuar la averiguación o que permitan determinar la presunta responsabilidad del docente, en las posibles faltas.

En consecuencia, si surgen indicios relacionados con la presunción de que el docente, puede haber incurrido en hechos calificados como faltas, el instructor especial, deberá citar al docente nuevamente mediante la boleta de citación, a fin de que este rinda una nueva declaración sobre los hechos y su presunta participación.

La citación emitida al docente, posterior al informe preliminar, debe ser realizada mediante la *Boleta de Citación*. Esta boleta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 174 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, debe contener de forma obligatoria la siguiente información:

- a) Identificación del organismo que lleva a cabo la instrucción del expediente.

- b) Identificación precisa y completa del docente citado.
- c) Indicación del lapso en el que debe comparecer a la citación, el cual no puede ser inferior a cinco días hábiles, destacando que el inicio de este lapso, no puede ser fijado antes del tercer día hábil de la citación personal, o a los 15 días hábiles en los casos en los cuales la citación se realice mediante carteles publicados en prensa.
- d) El horario en el que debe comparecer, destacando que solo será admisible el horario de oficina.
- e) La formación completa y precisa de los hechos y cargos que se imputen al docente citado.
- f) La indicación que establezca, la posibilidad de contestar, aclarar o informar acerca de los hechos y su responsabilidad en estos, bien sea, durante la comparecencia o en un lapso de diez días hábiles los cuales se contarán desde el día de la comparecencia.
- g) Debe contener la indicación de que puede negarse a declarar de conformidad con lo dispuesto en el prin-

cipio constitucional, o de hacerlo de forma verbal o por escrito e incluso realizar la solicitud de prórroga por el mismo lapso de comparecencia, para la presentación de un escrito de respuesta en rechazo, aceptación o descargo.

- h) Indicación referente al lugar, fecha y hora en la que fue elaborada la boleta de citación.

En consideración a lo expuesto, tales requisitos se pueden evidenciar en el artículo 174 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, el cual se cita a continuación:

Artículo 174.

La Boleta de Citación deberá contener:

1. Identificación del organismo del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes que lleve a cabo la instrucción del expediente.
2. Identificación precisa y completa del docente citado a comparecer.
3. Lapso no inferior a cinco (5) días hábiles en el cual debe comparecer el docente citado.

El inicio del lapso de comparecencia no podrá fijarse antes del tercer día hábil siguiente a la citación personal, y a los quince (15) días hábiles si fuere hecha mediante cartel publicado en prensa de amplia circulación en la región del plantel o servicio en el cual se desempeña el averiguado.

4. Horario de oficina dispuesto para el lapso de comparecencia.

5. Formulación completa y precisa de los hechos y cargos que se imputan al docente citado.

6. Indicación al citado de que puede contestar, aclarar o informar sobre los hechos, y sobre su responsabilidad en ellos, en el mismo acto de comparecencia, o dentro de un nuevo lapso de diez (10) días hábiles a contar desde el día de la comparecencia.

7. Indicación al citado de que puede negarse a declarar conforme al Principio Constitucional que lo protege, contestar los cargos verbalmente en el momento de la comparecencia, o presentar un escrito, o solicitar una prórroga por el mismo lapso de comparecencia para presentar un escrito de respuesta, rechazo, aceptación o descargo.

La identificación y la firma del Instructor especial designado por la autoridad máxima de la Zona educativa correspondiente.

8. Lugar, fecha y hora de elaboración de la Boleta de Citación.

9. Identificación y firma del Instructor Especial³².

La citación a la que se hace referencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 175 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, se hará siempre de forma personal, en su dependencia de trabajo o en su domicilio, respetando el horario hábil para el ejercicio de la docencia. Sin embargo, el artículo 176 del mencionado reglamento, prevé que en los casos, en los cuales no fuese posible la entrega de la boleta de citación de forma personal o el docente, se niegue a firmar el recibo correspondiente, procederá la citación mediante un único cartel publicado en prensa de amplia circulación en la región donde ejerce la docencia.

Destacándose que al transcurrir 15 días contados a partir de la fecha de publicación, se dará por consumada la citación para el acto de comparecencia. En tal sentido, se puede observar la relación existente entre lo previsto en el inciso 3 del artículo 174 y el artículo 176 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, al considerar que el artículo 174, establece que las citaciones por carteles publicados

³² Ibídem., art. 174

en la prensa, no podrán realizarse con un lapso inferior a 15 días, y el artículo 176, prevé que a los 15 días contados a partir de la publicación, es que se podrá dar por consumada la citación. En este contexto, se puede evidenciar que toda publicación o citación realizada mediante carteles de prensa, deberá contar con el respeto de los lapsos y los demás requisitos previstos en el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente.

En lo concerniente a la falta de comparecencia del docente a la citación realizada mediante la respectiva boleta de citación, o por carteles publicados en la prensa, el instructor especial, debe dejar constancia de ello en el expediente, tal como lo establece el artículo 177 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente.

Al finalizar el lapso correspondiente a la comparecencia del docente, de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del mencionado reglamento, se dará un día hábil, y el instructor especial procederá con el *Auto de Apertura del Lapso Probatorio*.

En este acto, se inicia la apertura del lapso probatorio, destinado a la promoción de las pruebas y en esta etapa del proceso, el docente, tendrá el derecho de promover todas las pruebas que pudieran aclarar los hechos, negarlos, o eximirle de cualquier responsabilidad en ellos. Además, el docente podrá solicitar al instructor especial, que realice todas las diligencias que se consideren necesarias y pertinentes en relación al caso. Este lapso, será de diez días hábiles. La evacuación de las pruebas promovidas, se realizará en un lapso de quince días hábiles y en este lapso se pueden presentar nuevos informes y documentos.

El instructor especial, de acuerdo a lo previsto en el artículo 179 del reglamento antes citado, tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento estricto de los lapsos. Además, debe facilitar al docente en la medida de lo posible, todo lo necesario para realizar la promoción y evacuación de las pruebas, mediante todos los medios probatorios que permitan aclarar los hechos y circunstancias que son objeto de la investigación. Sustentándose no solo en las disposiciones previstas en el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, sino también en las normas previstas en la Ley Orgá-

nica de Procedimientos Administrativos, el Código de Procedimiento Civil y el Código de Enjuiciamiento Criminal. No obstante, el Código de Enjuiciamiento Criminal, fue derogado por el Código Orgánico Procesal Penal, el cual se mantiene vigente en la actualidad.

Culminado el lapso probatorio, el instructor especial debe proceder de acuerdo con lo previsto en el artículo 180 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente. En tal sentido, tendrá la obligación de fijar un término de cinco días hábiles. *(En referencia cabe señalar que al hablar de un término de cinco días hábiles, se establece que el acto de informes, tendrá lugar al quinto día, y no en el transcurso de los días anteriores a la fecha indicada, por lo que no debe confundirse lo que es un lapso con los plazos establecidos a fecha término).* El quinto día hábil, se dará el *Acto de Informes*. Destacando que la parte interesada, podrá consignar escritos con las conclusiones y análisis sobre los hechos recogidos en el expediente, los cuales permitan ilustrar el reconocimiento de la causa.

En esta etapa del proceso, el instructor especial procederá de conformidad con lo previsto en el artículo 181 del mencionado reglamento y levantará el *Acta Final*.

El Acta Final, contendrá el resumen de todas las circunstancias que forman parte del expediente. De igual forma, en esta acta, se dejará constancia motivada sobre las medidas disciplinarias aplicables y su fundamentación legal o reglamentaria.

Por otra parte, el docente tendrá acceso al expediente que se instruya, en todos los momentos y etapas del proceso, teniendo derecho a leer y obtener copias certificadas por el instructor especial, e incluso podrá ser asistido por un abogado de su confianza en todo momento, tal como se encuentra previsto en el artículo 182 del reglamento antes mencionado.

En consideración a lo establecido en el artículo 183 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, se prevé que al concluir todas las actuaciones el instructor especial, revisará el expediente, a fin de verificar que esté correctamente foliado, tanto en letras como en números y se

encuentre ordenado cronológicamente, además de cuidar que todos los recaudos se encuentren firmados y sellados. Posterior a la revisión del expediente, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 del reglamento.

Teniendo en cuenta los casos en los que se determine la presunta responsabilidad de un docente en faltas que ameriten sanción disciplinaria con separación del cargo, destitución e inhabilitación para el ejercicio profesional, el instructor especial, deberá elaborar el informe final y remitirá el expediente al ministerio con competencia en materia de educación, a los efectos de que este sea revisado por la Consultoría Jurídica, la cual deberá elaborar la resolución con la decisión correspondiente, esta decisión del ministerio con competencia en materia de educación, se hará de forma motivada y le será notificada al docente a través de la Zona Educativa correspondiente.

Sin embargo, el docente contra quien se dicte la resolución relativa a la imposición de sanciones disciplinarias, de conformidad con lo previsto en el artículo 185 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, podrá ejercer el recurso de reconsideración contra las sanciones impuestas

por el ministerio antes citado, o el recurso jerárquico contra las sanciones impuestas por funcionarios de menor jerarquía, u otros actos que se encuentren en contraposición a lo previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

CONCLUSIONES

En consideracion a los temas desarrollados en el presente trabajo, se destacan aspectos muy importantes que permiten llegar a las siguientes conclusiones:

1. El Derecho Educativo es una rama del derecho dinámica y transversal, arraigada en los valores y acciones socio-educativas. Por ello, se puede observar que esta importante área del derecho, guarda una amplia relación con la Educación en Derechos Humanos. En consecuencia, la educación forma parte de los Derechos Humanos y este derecho en el marco del Derecho Educativo, se convierte en el eje transversal de todos los Derechos Humanos, no por considerarse como una jerarquía jurídica imperativa, sino por ser el vínculo que permite la comprensión de los demás derechos.
2. Este derecho, adquiere su importancia con la regulación jurídica del hecho pedagógico, en todos sus contextos, reconociendo las diversas relaciones que sur-

gen entre los estudiantes y los docentes, los miembros del directivo de la institución, el personal obrero y administrativo, representantes, e incluso de otras personas naturales o jurídicas que se vinculan con el quehacer educativo, a los que se les define como sujetos de derecho.

3. El Derecho Educativo, responde a una multiplicidad de fundamentos que le permiten, ser aplicado de una forma multidisciplinaria. En tal sentido, se destacan los fundamentos antropológicos que determinan el quehacer humano y la actividad del hombre como el eje central de las relaciones jurídicas, que regulan el conjunto de políticas y líneas estratégicas, destinadas a la transformación del contexto pedagógico. Los fundamentos sociales, que orientan la formación del sujeto de derecho, desde su condición de buen ciudadano, en la formación de un ideal común que responda a la realidad jurídica de un contexto educativo inspirador de los valores arraigados en la doctrina jurídica de los Derechos Humanos. Los fundamentos jurídicos y pedagógicos, que permiten formar al ciu-

dadano, en el marco de la Educación en Derechos Humanos, desde un proceso educativo participativo y flexible, capaz de fortalecer el desarrollo de los valores humanos y el respeto consciente de las normas, desde una visión que trascienda los aspectos coercitivos del ordenamiento jurídico, para impulsar el respeto de una sociedad justa desde su concepción axiológica.

4. Esta área del derecho, responde a las realidades específicas de cada Estado en particular. Sin embargo, en Venezuela, nace de antecedentes históricos y jurídicos muy relevantes a nivel mundial. Destacando la importancia de los instrumentos jurídicos relacionados con la dinámica internacional, en el marco de la doctrina jurídica de los Derechos Humanos. Por ello, se considera que el Derecho Educativo en Venezuela, tiene una perspectiva internacional sustentada por los tratados, convenios y pactos internacionales, suscritos y ratificados por el Estado Venezolano, como instrumentos jurídicos vinculantes dentro del Derecho Interno. En este mismo orden de ideas, se destaca la

importancia jurídica que representa la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en consideración a lo previsto en su artículo 23 en el que se establece que todos los tratados y pactos internacionales en materia de Derechos Humanos, suscritos y ratificados por el Estado Venezolano, adquieren rango constitucional. Además, se puede evidenciar que en Venezuela, la Carta Magna garantiza los principales derechos establecidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

5. El Derecho Educativo, se vincula de forma directa con el derecho que rige las relaciones jurídicas en materia de protección de niños, niñas y adolescentes. Destacando los principios jurídicos de prioridad absoluta y de interés superior, en las decisiones concernientes a los procedimientos relativos a la protección de niños, niñas y adolescentes. Se prevé la relación directa entre el proceso de la enseñanza y las disposiciones jurídicas que regulan a los estudiantes menores de 18 años. Por ello, se hace énfasis en los derechos y deberes que tienen los niños, niñas y adoles-

centes, como elemento primordial, que permite garantizar la correcta implementación de la disciplina, a través de medios alternativos para la resolución de conflictos, destinados al logro de la sana convivencia escolar.

6. Este derecho, se desarrolla en el marco de las relaciones institucionales de cada plantel educativo, las cuales a su vez, son de gran relevancia para la sociedad en general. En este contexto, se destaca la importancia de los medios alternativos para la resolución de los conflictos, como la mediación y la conciliación, como medios fundamentales para alcanzar la resolución de controversias que garanticen la sana convivencia, sin la intervención de las instancias judiciales.
7. Se destaca la importancia que reviste la implementación de normas institucionales que permiten concientizar a los Sujetos de Derecho Educativo, para lograr una mejor convivencia, en relación con la actividad escolar y la correcta implementación de la disciplina. Sin embargo, también se precisa la importancia de

los diversos procedimientos administrativos, que guardan una amplia relación con el Derecho Educativo y se hace referencia a la importancia de los procedimientos disciplinarios, relativos al ejercicio de la profesión docente, en el marco de las faltas que pueden representar posibles amenazas al derecho a la educación, en el marco de las garantías establecidas por la constitución y la legislación vigente.

8. Se consideran aspectos muy relevantes como son: La relación existente entre el contexto pedagógico y las realidades sociales de los sujetos de derecho, y en especial los conocimientos previos que puedan tener los actores educativos, en relación con los criterios jurídicos, que faciliten la redacción y legitimación de los acuerdos de convivencia. Por lo que, las fuentes de este derecho, no solo están previstas en los instrumentos jurídicos como la Ley Orgánica de Educación, la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, entre otras. Sino que además, se precisa la importancia de las normas institucionales,

las cuales en el marco de la legalidad y la legitimidad, determinan aspectos fundamentales destinados a garantizar el desenvolvimiento de la sana convivencia escolar, desde una visión arraigada en la concientización y no en la implementación coercitiva de la ley.

BIBLIOGRAFÍA

Brotons Remiro. (2001). *Derecho Internacional Tratados y otros Documentos*. Estatuto de la Corte Penal Internacional de Roma. Madrid, España. Editorial Mc Graw Hill.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Publicado en la Gaceta Oficial: N° 5.908 Extraordinario. En fecha: 19 de febrero de 2009.

Convención de los Derechos del Niño, Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989 y entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990.

Convención Relativa a la Lucha Contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza de 1960, Adoptada el 14 de diciembre de 1960 por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Código Penal de Venezuela. Publicado en la Gaceta Oficial: N° 5.768 Extraordinario. En fecha 13 de abril del año 2005.

Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela. Publicado en la Gaceta Oficial: N° 6.078 Extraordinario. En fecha: 15 de junio del 2012.

Código Civil de Venezuela. Publicado en la Gaceta Oficial: N° 2.990 Extraordinario. En fecha: 26 de Julio de 1982.

Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.

José Hurtado Pozo. (1987). *Manual de Derecho Penal*. Lima, Perú. 2^{da} Edición. Editorial EDDILI.

Ley Aprobatoria del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Publicada en la Gaceta Oficial: N° 2.146. En fecha: 28 de enero de 1978.

Ley aprobatoria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Publicada en la Gaceta Oficial: N° 2.146. En fecha: 28 de enero de 1978.

Ley aprobatoria del Estatuto de la Corte Penal Internacional de Roma. Publicada en la Gaceta Oficial: N° 5.507 Extraordinario. En fecha: 13 de diciembre del 2000.

Ley aprobatoria de la Convención de los Derechos del Niño. Publicada en la Gaceta Oficial: N° 34.541. En fecha: 29 de agosto de 1990.

Ley aprobatoria de la Convención Relativa a la Lucha Contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza. Publicada en la Gaceta Oficial: N° 28.744. En fecha: 2 de febrero de 1968.

Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA). Publicada en la Gaceta Oficial: N° 5.859 Extraordinario. En fecha: 10 de Diciembre de 2007.

Ley Orgánica de Educación (LOE). Publicada en la Gaceta Oficial: N° 5.929 Extraordinario. En fecha: 15 de Agosto de 2009.

Ley Orgánica de Drogas. Publicada en la Gaceta Oficial: N° 37.510. En fecha: 05 de septiembre del 2010.

Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en la Gaceta Oficial: N°: 38.668. En fecha: 23 de abril del año 2007.

Ley Sobre Procedimientos Especiales en Materia de Protección Familiar de Niños, Niñas y Adolescentes. Gaceta Oficial: 39.570. En fecha: 9 de diciembre del 2010.

Dirección General Parlamentaria de la República del Perú. (2011). *Manual de Técnica Legislativa*. Aprobado por Acuerdo N° 095-2010-2011.

Ossorio, Manuel. (1981). *Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales*. Buenos Aires, Argentina, Editorial Heleastá S.R.L.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 3 de enero de 1976.

Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente. Decreto N° 1.011, de fecha 4 de Octubre de 2000. Publicado en la Gaceta Oficial: N° 5.496 Extraordinario. En fecha: 31 de Octubre de 2000.

Real Academia Española. (2001). *Diccionario de la Lengua Española*. 22.ª ed. Madrid, España. Editorial Espasa.

Vicente Llorent Bedmar, (2004). *Libre Elección de Educación Obligatoria en el Ámbito de la Unión Europea*. Revista de Educación y Deporte, N°: 335. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Madrid, España.

VII Convención Colectiva de los Trabajadores y Trabajadoras de la Educación 2013-2015.

ANEXO I

GLOSARIO DE TERMINOS

GLOSARIO DE TERMINOS

A

Acción de Amparo: Institución que tiene su ámbito dentro de las normas del Derecho Político o Constitucional y que va encaminada a proteger la libertad individual o patrimonial de las personas cuando han sido desconocidas o atropelladas por una autoridad, cualquiera que sea su índole, que actúa fuera de sus atribuciones legales o excediéndose en ellas, generalmente vulnerando las garantías establecidas en la Constitución o los derechos que ella protege. Ha sido objeto de amplia discusión en doctrina si la petición de amparo constituye un recurso, un juicio o una acción, si bien parece prevalecer este último sentido, por no haber previa resolución contradictoria. Respecto de ante quién se debe ejercitar esa acción, las legislaciones, o las costumbres, no son unánimes, pero cabe afirmar que por lo general se hace ante la autoridad judicial y sin apertura de juicio contradictorio, porque lo que interesa es el rápido restablecimiento del derecho conculcado. Por eso, precisamente, es de esencia de esta acción, como de la de hábeas corpus, que se puede promover ante cualquier juez o tribunal sin distinción de jurisdicciones, y que pueda ser iniciada por quien necesita ser amparado o por cualquier persona en su nombre. Desconocidos esos principios, el amparo carece de eficacia. De ahí que el Poder Ejecutivo, en sus varios órganos, contra cuyas autoridades de diverso grado se interpone casi siempre la acción comentada, tenga la tendencia de dificultar su ejercicio. En la Constitución de la Segunda República española se creó un Tribunal de Garantías Constitucionales que tenía competencia para conocer, entre otras cosas, de “el recurso de amparo de garantías individuales, cuando hubiere sido ineficaz la recla-

mación ante otras autoridades”. Aparte el discutido acierto de titular “recurso” esa acción, es probable que la necesidad de una previa reclamación ante otras autoridades le hubiera restado eficacia. Con respecto al contenido de la acción, la doctrina discrepa. Según algunos autores, el amparo de la libertad individual constituye el hábeas corpus, y el amparo de la libertad patrimonial constituye el amparo propiamente dicho. Según otros, el amparo tanto protege la libertad individual como la patrimonial. Y, finalmente, no faltan quienes estiman que es el hábeas corpus el que ampara ambas libertades¹.

Acciones de Protección: Las medidas de protección son aquellas que impone la autoridad competente cuando reproduce en perjuicio de uno o varios niños, niñas o adolescentes individualmente considerados, la amenaza o violación de sus derechos o garantías, con el objeto de preservarlos o restituirlos².

Actas: Documento emanado de una autoridad pública (juez, notario, oficial de justicia, agente de policía), a efectos de consignar un hecho material, o un hecho jurídico con fines civiles, penales o administrativos. Por extensión, también se llama así el documento privado en que se deja constancia de un hecho o de lo tratado y resuelto en las reuniones de socie-

¹ Ossorio Manuel. 1981. *Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales*. Buenos Aires, Argentina, Editorial Heleastá S.R.L, p. 71

² Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. (LOPN-NA). De fecha 10 de Diciembre de 2007. Gaceta Oficial: N°5.859 Extraordinario. art.125

dades y asociaciones, que tienen que llevar, a veces de modo obligatorio, el llamado libro de actas³.

Actos Administrativos: La decisión general o especial que, en ejercicio de sus funciones, toma la autoridad administrativa, y que afecta a derechos, deberes e intereses de particulares o de entidades públicas. 1. Deslinde. Dentro de la división tripartita de los poderes públicos, es el que procede del ejecutivo. A diferencia del acto legislativo (o ley) y del judicial (resolución, providencia, auto o sentencia). Además, la autoridad o el agente ha de obrar como representante de la administración pública en tanto que persona de Derecho Público, ya que, de proceder como persona jurídica privada, las relaciones encuadran dentro de las civiles o comunes, con los privilegios que en todo caso se atribuyen al Estado y a otras entidades aun en su aspecto “particular”. 2. Catálogo. Prácticamente integran actos administrativos todas las resoluciones y disposiciones, verbales o escritas (singularmente éstas, debido a su constancia), sean acuerdos, órdenes, decretos, reglamentos, instrucciones, circulares u ordenanzas que dictan desde los ministros hasta los alcaldes, y también las corporaciones, como las diputaciones provinciales, los ayuntamientos; pero no los organismo legislativos de las provincias o Estados de una federación. 3. Extensión conceptual. Con exactitud técnica discutible, aunque el uso lo apoye, se llama también acto administrativo el acto de administración. En el Derecho brasileño, el acto de jurisdicción voluntaria, el realizado ante autoridad judicial, pero sin contradicción entre partes⁴.

³ Osorio Manuel. Op, cit., p.32

⁴ Ibídem., p.36

Adolescentes: Se entiende por adolescente toda persona con doce años o más, y menos de dieciocho años de edad⁵.

Autos: En lenguaje procesal, y empleada la palabra en singular, se refiere a la clase especial de resoluciones judiciales intermedia entre la providencia y la sentencia. En general se puede decir que, mientras la providencia afecta a cuestiones de mero trámite y la sentencia pone fin a la instancia o al juicio criminal, el auto resuelve cuestiones de fondo que se plantean antes de la sentencia. Claro es que esta nomenclatura varía conforme a la legislación de los diversos países. Empleada la voz en plural, autos hace referencia al conjunto de documentos y piezas de que se compone una causa o pleito. Los autos son lo que en el sistema procesal de algunos países se denominan expedientes, que suele preferirse no obstante para lo administrativo y sus actuaciones escritas⁶.

B

Bilateral: Actos bilaterales o contrato bilateral⁷.

C

Capacidad: Aptitud que se tiene, en relaciones jurídicas determinadas, para ser su sujeto activo o sujeto pasivo. Como se ve, esa capacidad puede ser absoluta, si permite actuar en toda clase de actos jurídicos y políticos, o relativa, cuando consiente realizar algunos de ellos y no otros. Así se puede tener capacidad para testar, para contraer matrimonio, para

⁵ LOPNNA. Op, cit., Art.2

⁶ Osorio, Manuel. Op, cit., p.97

⁷ Ibídem., p. 118

trabajar, para ser elector o diputado, y no tenerla para disponer de los bienes, para ser senador. Basta la enunciación del tema para comprender la amplitud jurídica que contiene. El problema de la capacidad se encuentra además relacionado con el de la responsabilidad, no solo en materia civil, sino también en materia penal. La incapacidad representa el concepto opuesto. La determinación de la capacidad para realizar cada negocio jurídico concreto habrá de referirse a la institución de que se trate. La edad, el estado civil y la sanidad mental constituyen aspectos primordiales en el problema de la capacidad⁸.

Carta Magna: Por antonomasia, el texto fundamental de orden político otorgado, en 1215, por el monarca inglés Juan sin Tierra. Por extensión, sinónimo actual de Constitución⁹.

Citación: Acto por el cual un juez o tribunal ordena la comparecencia de una persona, sea parte, testigo, perito o cualquier otro tercero, para realizar o presenciar una diligencia que afecte a un proceso. La citación no debe confundirse con el emplazamiento, aun cuando frecuentemente se incurre en esa confusión, porque el emplazamiento no es una citación de comparecencia, sino la fijación por el juzgador de un espacio de tiempo para que las partes realicen o dejen de realizar determinada actividad en el proceso, bajo apercibimiento de la sanción que corresponda. La citación ha de ser notificada a la persona a quien se dirija y esa notificación se puede hacer por cédula o por edictos. La tendencia procesal moderna es la de permitir que las citaciones o, mejor dicho, las notificaciones de las citaciones y emplazamientos a los inte-

⁸ Ibídem., p.137

⁹ Ibídem., p.47

resados se puedan hacer no solo por cédula o por edictos, sino también por cualquiera forma fehaciente; por ejemplo, el telegrama colacionado o la carta con acuse de recibo¹⁰.

Comparecencia: Acto de presentarse una persona ante la justicia de acuerdo con las normas procesales, bien sea personalmente, bien por medio de apoderado, y ya se haga, según el trámite de que se trate, verbalmente, ya por escrito. En determinados casos y cuando la comparecencia ha sido ordenada por la autoridad judicial, la incomparecencia puede dar lugar a la declaración de rebeldía o a sanciones por desobediencia. Se emplea también el vocablo comparecencia para referirse al hecho de presentarse ante un notario a efectos del otorgamiento de una escritura pública¹¹.

Conciliación: Acción y efecto de conciliar, de componer y ajustar los ánimos de los que estaban opuestos entre sí. Dentro del ámbito del Derecho Procesal, la audiencia previa a todo juicio civil, laboral o de injurias, en que la autoridad judicial trata de avenir a las partes para evitar el proceso. No siempre se requiere que el intento conciliatorio sea previo, pues algunas legislaciones admiten, especialmente en materia laboral, que el juez pueda intentar en cualquier momento la conciliación de los litigantes. En doctrina se han discutido ampliamente las ventajas y los inconvenientes de que actúe de conciliador el juez que entiende en el asunto, pues no faltan quienes creen que su intervención conciliatoria prejuzga el asunto o coacciona a las partes. En la Argentina, en materia laboral, el acto previo de conciliación se celebraba ante una comisión de conciliación, suprimida por la ley 18.345, y

¹⁰ Ibídem., p.163

¹¹ Ibídem., p.182

encomendada al juez o al funcionario del juzgado en quien delegase. Innecesario parece añadir que las partes pueden conciliarse en cualquier momento del juicio. En el Derecho del Trabajo suelen también admitirse o exigirse actos conciliatorios ante la autoridad administrativa de aplicación o ante comisiones constituidas al efecto, para resolver las divergencias entre obreros y patronos o como trámite previo a las medidas de acción directa. En materia penal, algunas legislaciones exigen la celebración de un acto conciliatorio previo para dar curso a las querellas por calumnia o injuria¹².

Contrato: Pacto o convenio entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas. En una definición jurídica, se dice que hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus derechos. Define como acuerdo de voluntades, entre dos o más personas, con el objeto de crear entre ellas vínculos de obligaciones, y también documento escrito destinado a probar una convención. Los contratos han de ser celebrados entre personas capaces y no han de referirse a cuestiones prohibidas o contrarias a la moral o a las buenas costumbres. Los contratos lícitos obligan a las partes contratantes en iguales términos que la ley¹³.

Controversia: Larga discusión. Polémica. Litigio.¹⁴

D

¹² Ibídem., p.189

¹³ Ibídem., p.217

¹⁴ Ibídem., p.229

De oficio: En Derecho Procesal se usa esta expresión para determinar las actuaciones y diligencias, así como las facultades, que pueden realizar los jueces por su propia iniciativa; es decir, sin instancia de parte interesada. La expresión también alcanza a las personas, especialmente a los abogados, que son designadas por los tribunales para tomar determinadas intervenciones en los juicios o actuaciones judiciales¹⁵.

Deber Jurídico: Lo define Dourado de Gusmão diciendo que, en sentido lato, constituye un comportamiento obligatorio impuesto por una norma legal, por un contrato o por un tratado, a una persona en favor de otra, que tiene la facultad de exigir su cumplimiento, cuando no fuere espontáneamente observado, lo que lo diferencia del deber moral. A su vez, Radbruch afirma que, de la validez del Derecho para la vida de los hombres en común, se sigue que su contenido debe estar constituido por relaciones jurídicas fundamentadas en deberes jurídicos y en derechos subjetivos. Ramírez Gronda expresa que Von Kirchmann y Von Ferneck pretendieron explicar la existencia de deberes jurídicos en el influjo motivador que sobre la conciencia humana ejerce la amenaza de la sanción, mientras que para Bierling constituye un acto de reconocimiento tácito de las normas por los individuos que componen la sociedad. Recasens Siches estima que el deber jurídico y el deber moral son distintos, aunque se den superpuestos y como coincidentes, y añade que la existencia del deber jurídico se determina porque la infracción de la conducta señalada en aquél constituye el supuesto de una sanción jurídica, pues, donde no haya posibilidad de coacción inexorable al sujeto, no hay deber jurídico, aunque pueda haberlo moral, social o religioso. Para Kelsen, en la cita de

¹⁵ Ibídem., p.256

Ramírez Gronda, el deber jurídico es la norma misma en relación con un sujeto determinado en tanto que lo obliga a aquel comportamiento, cuya oposición contradictoria constituye la condición del acto coactivo establecido en el precepto jurídico¹⁶.

Debido Proceso Legal: Cumplimiento con los requisitos constitucionales en materia de procedimiento, por ejemplo en cuanto a posibilidad de defensa y producción de pruebas¹⁷.

Decisión: Resolución o determinación en materia dudosa. Parte dispositiva de la ley. Sentencia o fallo en cualquier pleito o causa. Firmeza de carácter. Acción que provoca la victoria en batalla o guerra. Resolución de un concilio de la Iglesia sobre cuestión hasta entonces debatida. Cada una de las cincuenta constituciones nuevas de Justiniano, luego de promulgado el primer Código, que dio para decidir o aclarar diversas dudas que habían dividido a los intérpretes¹⁸.

Delito: Son varias las definiciones que en la doctrina y en algunos códigos penales se han dado al delito. Recogiendo la de Jiménez de Asúa, se entiende por tal “el acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción penal”. En consecuencia, según ese mismo autor, las características del delito serían: actividad, adecuación típica, antijuridicidad, imputabilidad, culpabilidad, penalidad y, en

¹⁶ Ibídem., p.257

¹⁷ Ibíd.

¹⁸ Ibídem., p.259

ciertos casos, condición objetiva de punibilidad. Soler lo define como “una acción típicamente antijurídica, culpable y adecuada a una figura legal conforme a las condiciones objetivas de ésta”, por lo cual sus elementos sustantivos son: la acción. La antijuridicidad, la culpabilidad y la adecuación a una figura. Para la definición de Carrara. En la cita de Soler. Es “la infracción de la ley del Estado, promulgada para seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso. Como se ve, en todas esas definiciones se encuentran comprendidas de modo genérico las infracciones punibles cualesquiera que sea su gravedad. Mas el delito tiene en algunos códigos y en algunos autores un sentido restringido, porque emplean ese nombre para designar las infracciones de menor gravedad que el crimen y de mayor que la falta o contravención. Se trata de una cuestión relacionada con la división bipartita o tripartita de las infracciones penales¹⁹.

Denuncia: Acto de poner en conocimiento del funcionario competente (juez, ministerio público o agentes policiales) la comisión de un hecho delictuoso, sujeto a acción pública, del que se hubiere tenido noticia por cualquier medio. Puede denunciar toda persona capaz según la ley civil. La denuncia, que es en general facultativa, puede adquirir carácter de obligatoria, ya que los funcionarios y empleados públicos y, a veces, los profesionales que no denuncian los delitos de que tuvieren conocimiento en ejercicio de sus cargos, están sujetos a sanción. Otras veces, por el contrario, la denuncia está prohibida por la ley, como en el caso de los descendientes con respecto a los ascendientes y viceversa; entre cónyuges

¹⁹ Ibídem., p.275

ges o entre hermanos, salvo que el denunciante, o un pariente más cercano a éste que el propio denunciado, fuere víctima del delito en cuestión. También se prohíbe la denuncia de los delitos conocidos en el ejercicio de la profesión, como medida de asegurar el secreto profesional, a menos que mediare justa causa²⁰.

Derechos Humanos: Hacia 1970 empezó a circular en el lenguaje internacional esta expresión, que en principio parece superflua, por cuanto su contenido no difiere del tradicionalmente designado como derechos de la personalidad o derechos individuales. Tal vez, aunque con escasa conciencia en los más, se quiera aludir al espíritu y a la letra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas en 1948. En todo caso, cuando de Derechos Humanos se habla por diplomáticos, políticos y periodistas se hace referencia casi siempre a una transgresión supuesta o real del respeto que el hombre merece como individuo, como ciudadano y como integrante de la comunidad universal. De manera más singular aun, tales violaciones se denuncian en algunas repúblicas iberoamericanas que han padecido procesos demagógicos o soportan el flagelo de la subversión social, con reacciones vehementes, de las que no pueden estar ajenos ni el error frecuente ni siquiera el exceso cuando los represores no solo sirven la vindicta pública, sino que también encuentran satisfacción corporativa de una venganza específica. Lo notable es que los que más recuerdan los derechos humanos en países ajenos son los que sistemáticamente y desde su misma instauración los han atropellado de fronteras para adentro para con sus súbditos, y, más allá de sus límites fronterizos, en invasiones ocasionales o en las

²⁰ Ibídem., p.290

enquistadas en sus zonas de influencia, precisamente en los sistemas colectivistas, que se prevalen de su poderío bélico potencial para impedir toda investigación acerca de la materia²¹.

Descargo: Descarga, como alivio de carga. En las cuentas, data o salida, en contraposición al cargo o entrada. Satisfacción, respuesta, explicación o excusa ante una acusación, cargo o reproche. Cumplimiento o satisfacción de obligaciones de justicia²².

Derechos Inherentes a la Persona: Llámense también “personalísimos” y son aquellos que no pueden ser transmitidos, dada la situación jurídica especial de su titular. También las obligaciones pueden ser inherentes a la persona²³.

Destitución: Privar a uno de alguna cosa. Separar a uno de su cargo como corrección o castigo. La segunda de esas acepciones presenta particular importancia respecto al Derecho Público, y tal vez más concretamente al Administrativo. En el hecho de destituir a una persona de su empleo oficial, cargo o función, se tienen que distinguir dos situaciones: es una la que puede ordenar la autoridad superior usando de facultades que le están regladas y que vienen a representar pérdida de confianza hacia el destituido, como sucedería en el supuesto, por cierto frecuente, de que el jefe del Poder Ejecutivo separe a alguno de los ministros u otros altos funcionarios por él designados para secundarlo en la función de gobierno, y es otra la que no se puede adoptar sin que medie

²¹ Ibídem., p.313

²² Ibídem., p.313

²³ Ibídem., p.323

causa justificativa ni previa formación de expediente en que se oiga al interesado. Este sería el caso de decretar la cesantía de los empleados públicos de cualquier orden, siempre, claro está, dentro de la organización de un Estado de Derecho; pues, como bien se dice en el Diccionario de Derecho Usual, los gobiernos de fuerza, una de las primeras medidas que adoptan es la de destituir sin otra causa que la de tratarse de personas enemigas o poco adictas al nuevo poder constituido²⁴.

Día hábil: El que está habilitado para actuaciones ante los tribunales²⁵.

Diligencia: Voz con múltiples y capitales significados jurídicos: cuidado, celo, solicitud, esmero, desvelo en la ejecución de alguna cosa, en el desempeño de una función, en la relación con otra persona. Prontitud, rapidez, agilidad, ligereza, que valorizan la laboriosidad, el trámite administrativo y el judicial. Asunto, negocio, solicitud. Tramitación. Cumplimiento o ejecución de un acto o de un auto judicial. Actuación del secretario judicial en el enjuiciamiento civil o en el procedimiento. A esas notas conceptuales suyas, Luis Alcalá Zamora agrega que la diligencia se erige en la clave y en la observancia de las obligaciones legales y aun voluntarias, y determina, en su declinación o falta, la calibración de la culpa, desde el rigor de la grave hasta la eventual exigencia de las resultas de la levísima. Como desempeño de funciones y cargo, el eclipse de esa diligencia, en el parcial de la negligencia o en el total de la omisión, origina además eventuales sanciones punitivas, con la pérdida de los puestos desempe-

²⁴ Ibídem., p.323

²⁵ Ibídem., p.328

ñados y el resarcimiento económico pertinente. Así, pues, se está en el antídoto más eficaz frente a la responsabilidad sea de carácter civil, penal o profesional²⁶.

E

Estabilidad: Se entiende por tal el derecho que todo trabajador por cuenta ajena tiene a conservar su empleo, con la correlativa obligación patronal de mantenerlo en él, salvo que aquél hubiere incurrido en causa justificada de despido legalmente determinada. La estabilidad se llama propia cuando el empleador se encuentra privado de toda posibilidad de romper el contrato laboral por su sola y arbitraria voluntad, y se denomina impropia, cuando el empleador puede despedir injustificadamente al empleado substituyendo la estabilidad por la indemnización que la ley establezca para ese supuesto. Generalmente, la estabilidad-propia afecta (por lo menos teóricamente) a los empleados públicos, y la estabilidad impropia, a los de actividades privadas. Existe una tercera posibilidad: la que permite al empleador despedir arbitrariamente al empleado, pero pagándole el lucro cesante; es decir, todos los sueldos que le hubieren correspondido desde el momento del despido hasta el de su jubilación²⁷.

Expediente: Negocio o asunto que se ventila ante los tribunales sin carácter contradictorio, como los de la jurisdicción voluntaria. Actuación administrativa sin carácter contencioso. Conjunto de antecedentes y documentos relativos a un

²⁶ Ibídem., p.330

²⁷ Ibídem., p.381

asunto. Arbitrio, recurso, medio para resolver o superar ciertas situaciones. Título o razón, pretexto o excusa²⁸.

Extra Judicial: Por la negativa, lo efectuado fuera o al margen de un juez o tribunal²⁹.

F

Faltas: Esta voz, que tiene muchas acepciones generales, es también susceptible de diversas interpretaciones jurídicas, la más caracterizada de las cuales tal vez sea la que afecta a su sentido penalístico, ya que se entiende por tal, según la definición de la Academia, la “infracción voluntaria de la ley, ordenanza, reglamento o bando, a la cual está señalada sanción leve”. El concepto incurre en un error, porque la infracción puede ser, y corrientemente es, originada no por dolo (que sería la característica de la voluntariedad), sino por simple culpa derivada de imprudencia o negligencia, pero ya con una calificación: la de falta de intención. Otra acepción jurídica que consigna el Diccionario, también con la calificación de falta de intención, es la de “circunstancia atenuante determinada por la desproporción entre el propósito delictivo y el mayor daño causado”. Esta segunda definición se refiere a casos de preterintención. Para algunas legislaciones, las faltas deben estar incluidas en el código penal por constituir una de las tres categorías de las infracciones penales (crímenes, delitos y faltas). En cambio, para otras legislaciones, las faltas deben quedar fuera del código penal, para ser sancionadas por normas especiales, generalmente de tipo municipal o policial, sin perjuicio de la posible intervención de los jue-

²⁸ Ibídem., p.396

²⁹ Ibídem., p.399

ces de menor categoría (de paz en la Argentina, municipales en España). La falta recibe también el nombre de contravención. Pero falta es también “defecto en el obrar, quebrantamiento de la obligación de cada uno”, así como “ausencia de una persona del sitio en que hubiera debido estar, y nota o registro en que se hace constar esta ausencia”. Ambas acepciones ofrecen interés dentro del Derecho Administrativo, por lo que se refiere a la inasistencia de los empleados públicos al desempeño de sus funciones, y del Derecho Laboral, por lo que afecta a las sanciones que pueden ser impuestas a los trabajadores de las actividades privadas por su inasistencia injustificada al trabajo, que-dé lugar, en determinadas circunstancias. Entre ellas la reiteración, al despido sin indemnización³⁰.

Foliar: Numerar correlativamente unas actuaciones administrativas o una causa judicial³¹.

Folio: Hoja de libro, cuaderno, expediente o causa. Se llama recto el anverso o página impar, y vuelto, el opuesto o página paro³².

G

Garantías Constitucionales: Las que ofrece la Constitución en el sentido de que se cumplirán y respetaran los derechos que ella consagra, tanto en lo que se refiere al ejercicio de los de carácter privado como al de los de índole pública. Algunas Constituciones, como la argentina, tratan esta cuestión

³⁰ Ibídem., p.406

³¹ Ibídem., p.421

³² Ibíd.

en un capítulo denominado Declaraciones, derechos y garantías³³.

I

In Dubio Pro Operario: Aforismo latino. En la duda. A favor del obrero. En los conflictos del trabajo, las dudas se tienen que resolver a favor del trabajador, por una razón de protección social a la parte más necesitada. Es de señalar que por lo general los tribunales aplican esa norma³⁴.

Instancia: Cada una de las etapas o grados del proceso. Corrientemente, en la tramitación de un juicio se pueden dar dos instancias: una primera, que va desde su iniciación hasta la primera sentencia que lo resuelve, y una segunda, desde la interposición del recurso de apelación hasta la sentencia que en ella se pronuncie. En esas dos instancias se debaten tantos problemas de hecho cuanto de derecho. Y aun cuando la sentencia dictada en la apelación sea susceptible de otros recursos ordinarios o extraordinarios, de inaplicabilidad de la ley o de casación, esa última etapa ya no es constitutiva de una instancia, porque, generalmente, en ese trámite no se pueden discutir nada más que aspectos de mero Derecho. De ahí que a los jueces que intervienen en la primera instancia del juicio, suele llamárselos de primera instancia. Instancia significa también el requerimiento que los litigantes dirigen a los jueces, dentro del proceso, para que adopten una determinada medida, y en este sentido se habla de las que pueden o tienen que ser tomadas a instancia de parte³⁵.

³³ Ibídem., p.34

³⁴ Ibídem., p.479

³⁵ Ibídem., p.503

Instruir Expediente: Orden, mandato. Trámite, curso o formalización de un proceso o expediente, reuniendo pruebas, citando y oyendo a los interesados, practicando cuantas diligencias y actuaciones sean precisos para que pueda resolverse o fallarse acerca del asunto. Adiestramiento militar; enseñanza para el desempeño como miembro de las fuerzas armadas y como eventual combatiente³⁶.

J

Jurídico: Que atañe al Derecho o se ajusta a él. De ahí que se diga que una acción es jurídica cuando es ejercitada con arreglo a Derecho; pues, en caso contrario, la acción no podría prosperar, porque se reputaría antijurídica. Ese vocablo tiene numerosas aplicaciones, derivadas del Derecho Romano, según el cual era día jurídico aquel en que se podía administrar justicia, como convento jurídico era el tribunal compuesto de varios jueces³⁷.

Jurisdicción: Del lat. Iurisdictio (administración del derecho). Acción de administrar el derecho, no de establecerlo. Es, pues, la función específica de los jueces. También, la extensión y límites del poder de juzgar, ya sea por razón de la materia, ya sea por razón del territorio, si se tiene en cuenta que cada tribunal no puede ejercer su función juzgadora sino dentro de un espacio determinado y del fuero que le está atribuido. En este último sentido se habla de jurisdicción

³⁶ Ibídem., p.505

³⁷ Ibídem., p 529

administrativa, civil, comercial, correccional, criminal, laboral, etc.³⁸.

L

Lapso (Del lat. *lapsus*, deslizamiento, caída). Tiempo fijado entre dos límites³⁹.

Legal: Lo ajustado a ley y, por ello, lo lícito, lo permitido o lo exigible en el Derecho positivo.⁴⁰

Legalidad: Calidad de legal. Régimen político estatuido por la ley fundamental del Estado. En este último sentido se habla de gobierno legal con referencia al establecido de acuerdo con las normas de la Constitución. Por ello, los gobiernos de facto son insanablemente ilegales, salvo cuando proceden de una revolución triunfante para un cambio de régimen y hasta tanto se sancione la nueva Constitución por el Poder Constituyente⁴¹.

Legalización: Declaración por la cual un funcionario competente testimonia o certifica la veracidad o la autenticidad de una o varias firmas aplicadas al pie de un documento, y a veces también la calidad de los signatarios para agregar fe. Acción de realizar ese testimonio. En general, la firma de los funcionarios es legalizada por su superior inmediato. La legalización no afecta en nada la esencia del documento, cuya

³⁸ *Ibídem.*, p 530

³⁹ RAE. (2001). *Diccionario de la Lengua Española* la.22.ª Edición.

⁴⁰ *Ibídem.*, p 541

⁴¹ *Ibíd.*

sinceridad y legalidad no confirma; tiene por único efecto hacer que las fumas sean incontestables, salvo inscripción falsa. Todo documento destinado a ser presentado ante las autoridades o los tribunales de otro país debe ser legalizado por un agente diplomático o consular del último país, residente en la localidad o la región donde fue redactado el documento (Carlos Calvo). La legalización de documentos suele ser necesaria dentro de un mismo país cuando provienen de un ordenamiento jurídico y han de ser presentados ante otro⁴².

Legislación: Conjunto o cuerpo de leyes por las cuales se gobierna un Estado o se regula una materia determinada. También, la ciencia de las leyes⁴³.

Legitimidad: Calidad de legítimo, de lo que es conforme a las leyes. Lo cierto, genuino y verdadero en cualquier línea. La expresión se emplea especialmente en la relación paterna filial, así como en todo aquello que se otorga o realiza de acuerdo con las leyes⁴⁴.

Ley ordinaria: La común o civil en cuanto no es ni privilegiada en relación con una persona ni para un estado⁴⁵.

Ley orgánica: La que, derivando inmediatamente de la Constitución, tiene como finalidad la organización de una rama de la administración pública⁴⁶.

⁴² Ibíd.

⁴³ Ibíd.

⁴⁴ Ibídem., p.543

⁴⁵ Ibídem., p.550

⁴⁶ Ibíd.

Ley penal: La que define los delitos y faltas, determina las responsabilidades o las exenciones y especifica las penas o medidas de seguridad que a las distintas figuras delictivas o de peligro social corresponden. Por antonomasia, el código penal⁴⁷.

Litigar: Promover un juicio contencioso. Oponerse a demanda judicial. Pleitear⁴⁸.

Litigio: Contienda judicial entre partes en la que una de ellas mantiene una pretensión a la que la otra se opone o no satisface. Llamase también litis, juicio, pleito, proceso⁴⁹.

M

Mediación: Participación secundaria en un negocio ajeno, a fin de prestar algún servicio a las partes o interesados. Apaciguamiento, real o intentado, en controversia, conflicto o lucha. Facilitación de un contrato, presentando a las partes u opinando acerca de algún aspecto⁵⁰.

N

Naturaleza Jurídica: Calificación que corresponde a las relaciones o instituciones jurídicas conforme a los conceptos utilizados por determinado sistema normativo. Así, por ejemplo, la naturaleza jurídica de la sociedad será la de un

⁴⁷ Ibíd.

⁴⁸ Ibídem., p.563

⁴⁹ Ibíd.

⁵⁰ Ibídem., p.589

contrato plurilateral, desde la perspectiva de su constitución, y la de una persona jurídica, desde el ángulo de su existencia como organización⁵¹.

Niño o Niña: Se entiende por niño o Niña toda persona con menos de Doce años de edad⁵².

Norma: Regla de conducta. Precepto. Ley. Criterio o patrón. Práctica⁵³.

Norma Jurídica: Denominase así la significación lógica creada según ciertos procedimientos instituidos por una comunidad jurídica y que, como manifestación unificada de la voluntad de ésta, formalmente expresada a través de sus órganos e instancias productoras, regula la conducta humana en un tiempo y un lugar definidos, prescribiendo a los individuos, frente a determinadas circunstancias condicionantes, deberes y facultades, y estableciendo una o más sanciones coactivas para el supuesto de que dichos deberes no sean cumplidos (J. C. Smith)⁵⁴.

O

Obligación: Deber jurídico normativamente establecido de realizar u omitir determinado acto, y a cuyo incumplimiento por parte del obligado es imputada, como consecuencia, una sanción coactiva; es decir, un castigo traducible en un acto de fuerza física organizada (J. C. Smith). Claro es que esta

⁵¹ Ibídem., p 615

⁵² LOPNNA. Op. Cit., art.2

⁵³ Osorio Manuel. Op. Cit., p.625

⁵⁴ Ibíd.

definición se encuentra referida a las obligaciones de orden legal, por cuanto hay también obligaciones morales, que no llevan aparejada ninguna sanción coactiva, sino que quedan sometidas a la conciencia del obligado por esa calificación social. Jurídicamente, y en términos generales, puede decirse que las obligaciones admiten la siguiente división: a) de hacer, b) de no hacer, c) de dar cosas ciertas, d) de dar cosas inciertas, e) de dar sumas de dinero. La simple enunciación de esas obligaciones resulta suficiente para comprender su contenido. Se clasifican así mismo en principales, cuando subsisten por sí mismas; accesorias, cuando dependen o están vinculadas con la principal; puras, cuando no dependen de una condición; condicionales, cuando su cumplimiento depende de ciertas circunstancias, por lo que adquieren diversas modalidades; divisibles, cuando también lo sea la cosa, el hecho o la abstención que ha de ser cumplida y siempre que tal fraccionamiento se encuentre permitido legal o convencionalmente, e indivisibles, en el supuesto contrario. Las obligaciones pueden ser también naturales, entendiéndose por tales las que se fundan en una causa suficiente para engendrar en una persona, y con respecto a otra, una prestación determinada, pese a que el legislador no las haya incluido entre las obligaciones civiles, por cuanto no dejan al titular del derecho ningún medio procesal para reclamarlas; civiles, que, contrariamente a las naturales, son aquellas cuyo cumplimiento puede ser exigido por vía legal; mancomunadas, cuando reconocen varios acreedores o varios deudores, no obstante estar representadas por una sola prestación; solidarias, cuando su cumplimiento puede ser íntegramente exigido por cada uno de los acreedores o de cada uno de los deudores, y a plazo, cuando su ejercicio está sujeto a un término suspensivo o resolutorio. Se llaman obligaciones

alternativas cuando, conteniendo una pluralidad de obligaciones, el deudor queda librado de todas ellas mediante el cumplimiento de una sola, y son facultativas cuando, no teniendo por objeto sino una sola prestación, el deudor tiene la facultad de substituir por otra⁵⁵.

Obligación de Hacer: Como su denominación anticipa con claridad, la que impone realizar un acto o prestar algún servicio. Así, como típicas: el mandato, la comisión, el arrendamiento de servicios y el contrato de trabajo. Tienen estas obligaciones como característica hoy, y desde hace mucho, que no son susceptibles de cumplimiento compulsivo; por lo cual su transgresión lleva a buscar el resarcimiento por la vía económica de reparar los daños y perjuicios, o bien, de haber previsiones legales o privadas, a los recursos de las cláusulas penales o de las pérdidas de fianzas o señas estipuladas. Aunque, en general, cabe el pago por otro, en las obligaciones de hacer no se admite cuando se han tenido en cuenta las cualidades personales del deudor, del obligado, por ser entonces nexo concertado intuitu personae. Naturalmente, la especie opuesta consiste en la obligación de no hacer y también se contrapone en lo técnico a la obligación de dar, que a la postre es también de hacer una entrega o transmitir un derecho, aunque más concreta en su objeto⁵⁶.

Obligación de No Hacer: Se está ante la coerción legal o el compromiso convencional que impide hacer algo, posible y lícito en otro supuesto, y que puede configurar abstenerse de prestar un servicio o ejecutar otro acto y, más en especial, no entregar una cosa, no desposeerse de ella, como constituye la

⁵⁵ Ibídem., p.634

⁵⁶ Ibídem., p.638

obligación de no dar. Su esfera es muy amplia, por decisión legal, en materia de servidumbres. Asimismo aparecen, por convenios privados, en la no competencia que se pacta en las transferencias de industrias y comercios, al igual que restricciones laborales en análogo sentido⁵⁷.

Orden jurídico: Conjunto de normas positivas vigentes relacionadas entre sí y escalonadas o jerarquizadas, que rigen en cada momento la vida y las instituciones de todas clases dentro de una nación determinada. Esas normas, en opinión de muchos jusfilósofos, han de tomarse en un sentido amplio, ya que están formadas no solo por la Constitución y por las leyes, sino también por los reglamentos, por las disposiciones de las autoridades administrativas, por las sentencias judiciales, por las costumbres y hasta por los contratos en cuanto regulan las relaciones entre las partes contratantes. La importancia de cada una de esas normas es diferente y va de mayor a menor, por lo cual las inferiores toman su fundamento de las inmediatamente superiores. A esa jerarquización o escalonamiento es a lo que Merkl y Kelsen denominaron “pirámide jurídica”. El orden jurídico es tan esencial para la existencia de un país que sin él no se concibe la vida social⁵⁸.

Orden público: Conjunto de condiciones fundamentales de vida social instituidas en una comunidad jurídica, las cuales, por afectar centralmente a la organización de ésta, no pueden ser alteradas por la voluntad de los individuos ni, en su caso, por la aplicación de normas extranjeras (J. C. Smith). El concepto de orden público ofrece especial importancia con

⁵⁷ Ibíd.

⁵⁸ Ibídem., p.659

respecto a las cuestiones de índole política y de Derecho Administrativo, pero también la ha adquirido, de un tiempo a esta parte, en materia de Derecho Social, por cuanto se ha atribuido a sus normas la condición de afectar al orden público, por lo cual son irrenunciables. Tal calidad se atribuye a diversos preceptos del Derecho del Trabajo⁵⁹.

P

Patria Potestad: Conjunto de derechos, poderes y obligaciones conferidos por la ley a los padres para que cuiden y gobiernen a sus hijos desde la concepción hasta la mayoría de edad o la emancipación, así como para que administren sus bienes en igual período. En el Derecho argentino el ejercicio de la patria potestad corresponde, en el caso de los hijos matrimoniales, al padre y a la madre conjuntamente, en tanto no estén separados o divorciados, o su matrimonio fuese anulado; en el caso de separación de hecho, separación personal, divorcio vincular, o nulidad de matrimonio, al padre o madre que ejerza legalmente la tenencia; en caso de muerte de uno de los padres, ausencia con presunción de fallecimiento, privación de la patria potestad, o suspensión de su ejercicio, al otro de los padres; en caso de los hijos extramatrimoniales reconocidos por uno solo de los padres, a aquél que lo hubiere reconocido; en caso de los hijos extramatrimoniales, reconocidos por ambos padres, a ambos, si convivieren, y en caso contrario a aquél que tenga la guarda otorgada en forma convencional, o judicial, o reconocida en forma sumaria; respecto de los hijos no voluntariamente reconocidos, a quien fuese declarado judicialmente padre o madre. Tiene su origen natural y legal a la vez la patria po-

⁵⁹ Ibídem., p.660

testad: a) por nacimiento de legítimo matrimonio; b) por legitimación mediante siguientes nupcias entre los padres de uno o más hijos; c) por reconocimiento de la filiación natural; d) por obra exclusiva de la ley, en virtud de la adopción, y e) como resultado de los hechos, ante la falta de otras pruebas, por la posesión de estado⁶⁰.

Persona jurídica: La expresión es una de las más delicadas en el tecnicismo del Derecho. De un lado, superada la esclavitud en todos los países, y a un lado el sojuzgamiento de los regímenes tiránicos, en la actualidad, y hace mucho, toda persona es sujeto de derechos y obligaciones, y por ende jurídica. Ahora bien, con olvido de ello e instaurando no pequeña confusión, persona jurídica se refiere por un amplio sector de la doctrina, que el uso ha impuesto, a los sujetos de derechos y obligaciones que no son la persona natural o física; es decir, ni el hombre ni la mujer. Vélez Sarsfield, pretendiendo justificar el calificativo, expresa que se los denomina personas jurídicas porque no existen sino con un fin jurídico, cosa rebatible sin dificultad, puesto que no es algo jurídico lo que las crea por lo general, sobre todo las privadas, sino una finalidad económica, nológica, cultural, deportiva o de otro género. Que tiene que adoptar para su funcionamiento ese ropaje jurídico, cosa muy distinta. De ahí que se hayan propuesto numerosas substituciones para el tecnicismo: persona abstracta, artificial, civil, ficticia, incorporal, de existencia ideal, no física o moral, que se analizan brevemente en sus respectivos artículos, en cuanto al acierto o inconsistencia. Acatando el uso, con reserva de la justeza del tecnicismo, el legislador argentino divide las personas jurídicas o de existencia ideal en dos grupos, ajustados a la refor-

⁶⁰ Ibídem., p.702

ma de la ley 17.711: las de carácter público, que son: 1) el Estado nacional, las provincias y los municipios. 2) las entidades autárquicas, 3) la Iglesia Católica; y las de carácter privado, que son: 1) las asociaciones y las fundaciones que tengan por principal objeto el bien común, posean patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado y o tengan autorización para funcionar, 2) las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley tengan capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, aunque no requieran autorización expresa del Estado para funcionar. Se admiten además, como personas jurídicas, los Estados extranjeros, sus provincias y municipios, los establecimientos, corporaciones o asociaciones existentes en ellos. Se consideran actos suyos los de sus representantes legales, siempre que no excedan los límites de su ministerio. Tales personas se estiman distintas enteramente de sus miembros. Los bienes que pertenezcan a la asociación no pertenecen a ninguno de sus miembros ni éstos están obligados a satisfacer las deudas de la corporación, salvo ser fiadores o haberse obligado mancomunadamente. Cuentan con capacidad patrimonial similar a la de los particulares; si bien pueden recibir por testamento, no pueden testar, aunque cabe que los estatutos prevean el reparto de los bienes sociales subsistentes al disolverse. Pueden ser demandantes y demandadas en juicio. Responden de los daños que causen los que las administren o dirijan, en ejercicio o con ocasión de sus funciones⁶¹.

Persona natural: El hombre o la mujer como sujeto jurídico, con capacidad para ejercer derechos y contraer y cumplir

⁶¹ Ibídem., p.723

obligaciones. La calificación recalca su condición de ser por naturaleza, para contraponerla a la persona abstracta. Las personas naturales se diversifican según variado enfoque jurídico: 1) por el sexo, en hombres o varones y en mujeres o hembras, aparte la discutida condición de los hermafroditas; 2) por su realidad corporal externa, en nacidos y concebidos; 3) por la capacidad de obrar, en mayores o menores de edad, 4) por el estado civil, en solteros, casados, divorciados y viudos; 5) por la nacionalidad o ciudadanía. En nacionales y extranjeros, con la especie intermedia de los nacionalizados o naturalizados en un país; 6) por lo administrativo o municipal, en vecinos, residentes y transeúntes. Todas las categorías significan modificaciones en la capacidad jurídica, apuntadas al menos en las voces respectivas, según resumen del Diccionario de Derecho Usual⁶².

Plazo: Término o tiempo señalado para una cosa. Vencimiento del término. Constituye un vocablo de constante uso en materia jurídica, porque significa el espacio de tiempo que la ley unas veces, el juez en otras o las partes interesadas fijan para el cumplimiento de determinados hechos jurídicos, generalmente de carácter civil o procesal. Couture lo define como medida de tiempo señalada para la realización de un acto o para la producción de sus efectos jurídicos. Dentro de ese concepto tiene dos interpretaciones opuestas, por cuanto unas veces sirve para señalar el momento desde el cual una obligación puede ser exigida, y otras para establecer la caducidad de un derecho o su adquisición. Plazo, además, es la cuota de una obligación pagadera en dos o más veces. El cómputo de los plazos no incluye el día primero, y el último ha de transcurrir por completo. Es decir que un plazo de dos

⁶² Ibíd.

días concertado o notificado hoy comprende mañana y pasado mañana, hasta las 24. Si el plazo es por horas, se cuenta de momento a momento en que expresa o desde la notificación⁶³.

Poder Judicial: En toda su variedad de fueros o jurisdicciones, los órganos a que se confía el conocimiento y resolución de los juicios y causas de un país. La judicatura de un Estado. Sobre su articulación con los demás poderes⁶⁴.

Poder Legislativo: El Parlamento legalmente elegido y en ejercicio de sus funciones en un Estado constitucional. Asamblea, designada de manera más o menos caprichosa, que imita al Parlamento en regímenes sui géneris. El propio Poder Ejecutivo allí donde ejerza, por auto arrogación, las facultades legislativas. La integración por una sola Cámara, la de diputados o representantes, o por dos —entonces la otra el Senado o cuerpo asimilable—, es fundamental en el ejercicio de este Poder. En cuanto a su articulación con los restantes de carácter público⁶⁵.

Poder Publico: La potestad inherente al Estado y que lo autoriza para regir, según reglas obligatorias, la convivencia de cuantos residen en territorio sujeto a sus facultades políticas y administrativas. Cada uno de los poderes fundamentales del Estado⁶⁶.

⁶³ Ibídem., p.733

⁶⁴ Ibídem., p.740

⁶⁵ Ibíd.

⁶⁶ Ibíd.

Probatorio: Adecuado para probar algo como hecho o en otro planteamiento. Hábil para la prueba⁶⁷.

Procedimiento administrativo: El que no se sigue ante la jurisdicción judicial, sino ante los organismos dependientes del Poder Ejecutivo, cuyas resoluciones son generalmente impugnables ante los organismos del Poder Judicial⁶⁸.

Procedimiento judicial: El procedimiento sin más en el ámbito de los tribunales ordinarios, para diferenciarlo de los especiales, como el procedimiento administrativo, el canónico y el contencioso-administrativo⁶⁹.

Promoción: Iniciativa en cualquier orden. Ascenso ha puesto o grado superior. Conjunto de individuos que terminan sus estudios u obtienen un nombramiento ascenso simultáneamente⁷⁰.

Promulgación: Acción y efecto de promulgar, de publicar formalmente una ley u otra disposición de la autoridad, a fin de que sea cumplida y hecha cumplir como obligatoria. Pero, corrientemente, en el léxico jurídico esa expresión está reservada al decreto que el jefe del Estado, cuando no hace uso de su facultad de veto, suscribe con el ministro refrendatario, ordenando la publicación y ejecución de una ley sancionada por el Poder Legislativo. La Constitución de la Argentina establece un plazo de diez días para que el Poder Ejecutivo haga la promulgación, pasado el cual, sin haberlo efectuado

⁶⁷ Ibídem., p.775

⁶⁸ Ibídem., p.777

⁶⁹ Ibídem., p.778

⁷⁰ Ibídem., p.783

o sin haber devuelto el proyecto de la ley a la Cámara, se reputa automáticamente aprobado y promulgado; es decir, convertido en ley⁷¹.

Protocolización: Acto de registrar o incorporar un documento, sea público o privado, a un protocolo notarial⁷².

R

Ratificación de Tratados: Los convenios internacionales suelen tener dos fases aprobatorias, la inicial, en que las partes concuerdan en un texto, y la que les da autoridad de ley en cada país. Esto último configura la ratificación, que suele corresponder al Parlamento, donde no lo usurpa o substituye el Poder Ejecutivo⁷³.

Recurso Administrativo: Denominase así cada uno de los que los particulares pueden interponer contra las resoluciones administrativas y ante los propios organismos de la administración pública. En términos generales, puede decirse que esos recursos son el de reposición o reconsideración, que se interpone ante la autoridad u organismo que haya dictado la resolución impugnada, y el jerárquico, que se interpone ante el superior, dentro siempre de la vía administrativa y hasta agotarla. Una vez terminada ésta, la impugnación se ha de hacer ante la autoridad judicial, generalmente por el trámite contencioso-administrativo. En la Argentina no se encuentran determinados con carácter genérico ni el proce-

⁷¹ Ibíd.

⁷² Ibídem., p.789

⁷³ Ibídem., p.805

dimiento administrativo ni los recursos utilizables dentro de él⁷⁴.

Recurso Jerárquico: Se conoce también en algunos países y épocas como recurso de alzada. Se está ante una de las especies del recurso administrativo, cuando se acude ante el superior del que ha dictado una resolución que se impugna o por un acto perjudicial no revocado por él mismo, pese al interpuesto recurso de reposición. En ciertos países como la Argentina, el planteamiento del recurso jerárquico no resulta siempre obligado, porque, por la imperfecta organización de la vía contencioso-administrativa, se permite la demanda directa ante la jurisdicción ordinaria⁷⁵.

Reserva de Derechos: Potestad, de ejercicio facultativo para el titular, que permite ejercer las atribuciones concretadas, como retrotraer un bien, dentro de cierto plazo, o desistir del contrato. Ofrece carácter extrajudicial, ya que, en el supuesto de fundarse en alguna resolución de los tribunales, se está ante la reserva de acciones⁷⁶.

Responsabilidad Civil: La que lleva consigo el resarcimiento de los daños causados y de los perjuicios provocados por uno mismo o por tercero, por el que debe responderse. Sobre su lineamiento, el artículo principal sobre responsabilidad⁷⁷.

Responsabilidad Penal: La aneja a un acto u omisión penado por la ley y realizado por persona imputable, culpable o

⁷⁴ Ibídem., p.815

⁷⁵ Ibídem., p.819

⁷⁶ Ibídem., p.847

⁷⁷ Ibídem., p.849

carente de excusa voluntaria. Se traduce en la aplicación de una pena. Suele llevar consigo, de haber ocasionado daños o perjuicios, la responsabilidad civil que sea pertinente⁷⁸.

S

Sanción Administrativa: La medida penal que impone el Poder Ejecutivo o alguna de las autoridades de este orden, por infracción de disposiciones imperativas o abstención ante deberes positivos. Por lo general se reduce a multas, cuantiosas en ocasiones, como las represivas del contrabando y la especulación. En otros casos significa una inhabilitación, por privar del pase, patente, autorización o documento que permite ejercer una profesión o actividad, como el retiro del permiso de conducir a los automovilistas reincidentes en faltas de tránsito. También se aplican cortos arrestos o detenciones⁷⁹.

Sanción Penal: La amenaza legal de un mal por la comisión u omisión de ciertos actos o por la infracción de determinados preceptos⁸⁰.

Sinalagmáticos: Vocablo de origen griego, con el significado de obligatorio para las distintas partes de un acto jurídico⁸¹.

⁷⁸ Ibíd.

⁷⁹ Ibídem., p.871

⁸⁰ Ibíd.

⁸¹ Ibídem., p.895

Subscribir: Firmar al final de un escrito, como autor o para conformidad. Convenir en el parecer expuesto por otro⁸².

T

Término: Plazo probatorio (Ver concepto de Plazo)⁸³.

Término Procesal: Plazo, unas veces fijado por la ley, otras por los jueces y otras por convenio entre las partes, dentro del cual se tiene que cumplir cada uno de los actos que constituyen el proceso. En ese sentido se habla de término para contestar la demanda, para proponer y practicar la prueba, para apelar, para expresar agravios, etc. Puede decirse que casi todos los actos procesales están sometidos a un término para su cumplimiento, unas veces prorrogable, otras improrrogable, perentorios o no perentorios⁸⁴.

V

Vinculante: 1. adj. Que vincula (sujeta a una obligación)⁸⁵.

⁸² Ibídem., p.914

⁸³ Ibídem., p.937

⁸⁴ Ibíd.

⁸⁵ RAE. (2001). Diccionario de la Lengua Española la.22.ª Edición.

ANEXO II

REGLAMENTO DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DOCENTE

**Gaceta Oficial N° 5.496 Extraordinario de fecha:
31 de octubre de 2000**

REGLAMENTO DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DOCENTE

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El presente Reglamento establece las normas y procedimientos que regulan el ejercicio de la Profesión Docente, relativos a ingreso, reingreso, retiro, traslados, promociones, ubicación, ascensos, estabilidad, remuneración, perfeccionamiento, profesionalización, licencias, jubilaciones y pensiones, vacaciones, previsión social, régimen disciplinario y demás aspectos relacionados con la prestación de servicios profesionales docentes.

Artículo 2. Se entiende por personal docente, quienes ejerzan cualesquiera de las funciones señaladas en el artículo 77 de la Ley Orgánica de Educación, bien sea en la condición de personal ordinario o de personal interino. Asimismo, se entiende por profesional de la docencia a los que se refiere el aparte de ese artículo.

Quienes posean títulos profesionales docentes obtenidos conforme al régimen de la Ley de Educación anterior, conservarán el derecho a ejercer la docencia en la misma forma que les garantizaban las normas derogadas, según lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Orgánica de Educación.

Artículo 3. Este Reglamento se aplicará a quienes ejerzan la profesión docente en funciones de enseñanza, orientación, planificación, investigación, experimentación, evaluación, dirección, supervisión y administración, en el campo educativo, con excepción del nivel de educación superior.

TÍTULO II

DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DOCENTE

Capítulo I

Del Personal Docente

Artículo 4. El ejercicio profesional de la docencia constituye una carrera, integrada por el cumplimiento de funciones, en las condiciones, categorías y jerarquías establecidas en este Reglamento.

La carrera docente estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de idoneidad docente comprobada, provistas del título profesional respectivo.

Artículo 5. La prestación del servicio del personal docente que actúe con carácter de ordinario o de interino se regirá por lo establecido en la Ley Orgánica de Educación, por el presente Reglamento y demás disposiciones legales relativas al ejercicio profesional docente, en el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, en los Estados, Municipios y demás entidades del sector oficial; y en cuanto le resulte apli-

cable, a los profesionales de la docencia que presten servicio en el sector privado.

Artículo 6. Son deberes del personal docente:

1. Observar una conducta ajustada a la ética profesional, a la moral, a las buenas costumbres y a los principios establecidos en la Constitución y leyes de la República.
2. Cumplir las actividades docentes conforme a los planes de estudios y desarrollar la totalidad de los objetivos, contenidos y actividades, establecidos en los programas oficiales, de acuerdo con las previsiones de las autoridades competentes, dentro del calendario escolar y de su horario de trabajo, conforme a las disposiciones legales vigentes.
3. Planificar el trabajo docente y rendir oportunamente la información que le sea requerida.
4. Cumplir con las disposiciones de carácter pedagógico, técnico, administrativo y jurídico que dicten las autoridades educativas.
5. Cumplir con las actividades de evaluación.
6. Cumplir con eficacia las exigencias técnicas relativas a los procesos de planeamiento, programación, dirección de las actividades de aprendizaje, evaluación y demás aspectos de la enseñanza-aprendizaje.

7. Asistir a todos los actos académicos y de trabajo en general para los cuales sea formalmente convocado dentro de su horario de trabajo.
8. Orientar y asesorar a la comunidad educativa en la cual ejerce sus actividades docentes.
9. Contribuir a la elevación del nivel ético, científico, humanístico, técnico y cultural de los miembros de la institución en la cual trabaja.
10. Integrar las juntas, comisiones o jurados de concursos, calificación de servicio de docentes y trabajos de ascenso, para los cuales fuera designado por las autoridades competentes.
11. Dispensar a los superiores jerárquicos, subordinados, alumnos, padres o representantes y demás miembros de la comunidad educativa, el respeto y trato afable, acordes con la investidura docente.
12. Velar por el buen uso y mantenimiento de los ambientes de trabajo y de materiales, y de los equipos utilizados en el cumplimiento de sus labores.
13. Coadyuvar eficazmente en el mantenimiento del orden institucional, la disciplina y el comportamiento de la comunidad educativa.

14. Promover todo tipo de acciones y campañas para la conservación de los recursos naturales y del ambiente.

15. Los demás que se establezcan en normas legales y reglamentarias.

Artículo 7. Son derechos del personal docente:

1. Desempeñar funciones docentes con carácter de ordinario o interino.

2. Participar en los concursos de méritos para ingresar como docente ordinario.

3. Disfrutar de un ambiente de trabajo acorde con su función docente.

4. Estar informado acerca de todas las actividades educativas, científicas, sociales, culturales y deportivas, planificadas o en ejecución en el ámbito de su comunidad educativa.

5. Percibir puntualmente las remuneraciones correspondientes a los cargos que desempeñen, de acuerdo con el sistema de remuneración establecido.

6. Disfrutar de un sistema de previsión y asistencia social que garantice mejores condiciones de vida para él y sus familiares.

7. Participar efectivamente en la planificación, ejecución y evaluación de las actividades de la comunidad educativa.

8. Justificar las razones por las cuales no pudo asistir a sus labores. A tal efecto, si no pudiere solicitar el permiso respectivo con anticipación, deberá presentar el justificativo correspondiente dentro de los quince 15 días hábiles siguientes a la fecha de inasistencia.

9. Los demás que se establezcan en normas legales y reglamentarias.

Artículo 8. A los profesionales de la docencia, además de los derechos consagrados en el artículo anterior, y en la Constitución y leyes de la República, se les garantiza el derecho a:

1. Participar en los concursos de méritos o de méritos y oposición para ingresar como docente ordinario; ser promovido o ascender en jerarquía y categoría, de acuerdo con las normas del presente Reglamento y las que al efecto se dicten.

2. Ser incorporado a un cargo docente en la misma jerarquía y categoría cuando cese en el ejercicio de un cargo de libre nombramiento y remoción o cuando cese la licencia que se le haya otorgado.

3. Percibir puntualmente las remuneraciones correspondientes a la jerarquía y categoría que desempeñen de acuerdo con el sistema de remuneración establecido.

4. Percibir la diferencia de sueldo cuando desempeñen, en forma temporal, cargos de mayor jerarquía.
5. La participación y realización de cursos de perfeccionamiento, actualización, especialización, maestría y doctorado, programados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y/o instituciones académicas, científicas y culturales de reconocida acreditación.
6. Participar activamente en actividades de investigación y estudios en el campo pedagógico, cultural, científico y otros relacionados con su profesión.
7. El goce de becas para cursos de mejoramiento, actualización y postgrado, conforme a las previsiones legales sobre la materia.
8. El goce de beneficio de becas para sus hijos.
9. Solicitar y obtener licencias para no concurrir a sus labores, siempre y cuando sean justificadas.
10. Solicitar traslados o cambios mutuos, cuando por necesidades personales o profesionales así lo requiera.
11. Los beneficios del régimen de jubilaciones y pensiones.
12. Recibir honores y condecoraciones de acuerdo con sus méritos profesionales.

13. Asociarse en agrupaciones académicas, gremiales y sindicales para participar en el estudio y solución de los problemas de la educación.

14. Los demás que se establezcan en normas legales y reglamentarias.

Artículo 9. Todo profesional de la docencia de reconocida moralidad y de idoneidad docente comprobada, podrá optar a cargos docentes de conformidad con el régimen que se establece en el presente Reglamento.

Artículo 10. El personal docente gozará de autonomía académica para la enseñanza, con sujeción a las normas de organización y funcionamiento de los planteles, a la administración de los planes y programas de enseñanza-aprendizaje y al régimen de supervisión, establecidos para los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.

Artículo 11. Las autoridades educativas correspondientes garantizarán al personal docente, el desempeño de su labor considerando los distintos elementos de efectiva influencia en las condiciones de trabajo, tales como: número de alumnos por aula, recursos humanos, material didáctico, empleo de medios y recursos pedagógicos modernos, dotación, horarios, condiciones ambientales del plantel y otros factores que directamente influyan en la determinación del volumen e intensidad del trabajo, tanto en el aula como en actividades de coordinación y de dirección. Asimismo, mantendrá una política de edificaciones escolares que haga posible el fun-

cionamiento de los planteles de su dependencia en locales ad-hoc. Igualmente, cuidará de que exista mobiliario, equipos y servicios indispensables para el cumplimiento de los fines básicos de la educación.

Artículo 12. La función educativa se ejercerá de acuerdo con las atribuciones inherentes al ejercicio de los cargos que conforman la Carrera Docente, la organización y la competencia de los respectivos servicios. El incumplimiento de la presente disposición acarreará responsabilidad disciplinaria y administrativa.

Artículo 13. A los fines de la determinación de la antigüedad en el ejercicio de la docencia, y sólo a los efectos del establecimiento del derecho a la jubilación y pensiones, sin incidencia en las prestaciones sociales, los años de servicio docente prestados en planteles o servicios del sector privado, serán considerados hasta un máximo de seis (6) años, siempre y cuando no sean simultáneos a los ejercicios en planteles o servicios educativos del sector oficial.

A los mismos fines, los planteles privados reconocerán los años de servicio no simultáneos prestados en planteles oficiales, hasta un máximo de seis (6) años.

Artículo 14. Los profesionales de la docencia deberán ejercer la profesión docente en las regiones fronterizas, en el medio rural o en aquellas localidades que el Estado considere convenientes en función del desarrollo del país, durante los dos (2) primeros años de su ejercicio profesional. El

tiempo prestado en el servicio militar obligatorio será imputado al cumplimiento de esta obligación.

Capítulo II

Del Sistema de Escalafón

Artículo 15. El escalafón de los profesionales de la docencia es un sistema orgánico de clasificación que regula el ingreso, ubicación y ascenso, en el ejercicio de la profesión docente, y está basado en jerarquías y categorías.

El escalafón comprende, además, los requisitos de cada categoría y jerarquía.

La clasificación se hará considerando, los antecedentes académicos y profesionales, la antigüedad en el servicio; la calificación de la actuación y eficiencia profesional y demás méritos relacionados con el ejercicio de la profesión docente.

Artículo 16. La jerarquía se corresponde con los cargos definidos dentro de la organización administrativa del sistema educativo y comprende las siguientes denominaciones: Docente de Aula. Docente Coordinador y Docente Directivo y de Supervisión. La categoría es el grado alcanzado por el profesional de la docencia en el ejercicio de su carrera dentro de la organización administrativa. Todo docente debe tener una Categoría Académica.

Sección Primera

De la Clasificación y Ubicación de los Profesionales de la Docencia

Artículo 17. La clasificación y ubicación de los profesionales de la docencia se realizará de acuerdo con la Tabla de Posiciones de la Carrera Docente, que comprende jerarquías y categorías.

Artículo 18. La primera jerarquía corresponde al cargo de Docente de Aula y comprende las denominaciones de: Docente de Aula de Preescolar, Docente de Aula de Educación Básica del 1° al 6° grados, Docente de Aula de 7° a 9° grados, Docente de Aula de Educación Media, Diversificada y Profesional y Docente de Aula de Educación Especial.

Artículo 19. La segunda jerarquía corresponde al cargo de Docente Coordinador y comprende las denominaciones de: Docente Coordinador de Seccional, Docente Coordinador de Departamento, Docente Coordinador de Laboratorio, Docente Coordinador de Taller, Docente Coordinador de Especialidad, Docente Coordinador Residente Nocturno y las que se crearen por la autoridad educativa competente.

Artículo 20. La tercera jerarquía corresponde al cargo de Docente Directivo y de Supervisión, y comprende las denominaciones de: Subdirector, Director y Supervisor.

Artículo 21. Los grados alcanzados en el ejercicio de la Carrera Docente se expresarán en una escala académica de seis (6) categorías: Docente I, Docente II, Docente III, Docente IV, Docente V y Docente VI.

Sección Segunda

De las Condiciones de Ingreso al Ejercicio de la Profesión Docente

Artículo 22. El ejercicio de la profesión docente se iniciará en todo caso, en la categoría académica de Docente de Aula I.

Artículo 23. En toda designación del personal docente, bien sea por carácter de ordinario o de interino, la autoridad educativa competente expedirá el nombramiento correspondiente y el acta de toma de posesión del cargo y en los mismos se hará constar el carácter con el cual ha sido incorporado al servicio docente. Los originales de dichos documentos deberán entregarse al interesado y una copia se incorporará al expediente del profesional de la docencia que ha sido objeto de la designación.

Artículo 24. El ingreso al servicio de la docencia en la condición de ordinario, se hará mediante la aprobación del concurso de méritos.

Artículo 25. El ejercicio de la docencia con carácter de interino, procederá en los casos siguientes:

1. Cuando un profesional de la docencia sea designado para ocupar un cargo por tiempo determinado, en razón de ausencia temporal del ordinario.
2. Cuando el profesional de la docencia o el docente no titulado desempeñe un cargo que deba ser provisto por concurso, mientras éste se realiza.
3. Cuando se hayan agotado todos los procedimientos posibles para proveer un cargo con un profesional de la docencia y se designe a personas sin título docente, previo cumplimiento del régimen de selección establecido en el presente Reglamento.

Artículo 26. El carácter de interino en el ejercicio de un cargo docente no excluye de la obligación de desempeñarse con idoneidad y capacidad profesional comprobadas. A quien no la ejerza con la debida eficiencia, moralidad e idoneidad, le será instruido el expediente respectivo, a los fines legales y administrativos correspondientes.

Sección Tercera

De la Dedicación en los Cargos de la Carrera Docente

Artículo 27. La dedicación es el tiempo asignado al personal docente para la prestación del servicio, de acuerdo con su cargo y jerarquía. La dedicación será a:

Tiempo Completo: Con 36 horas docentes semanales.

Medio Tiempo: Con 18 horas docentes semanales.

Tiempo Integral Diurno: Con 5 jornadas semanales de 5 horas diarias de 60 minutos.

Tiempo Integral Nocturno: Con 5 jornadas semanales de 5 horas docentes diarias.

Tiempo Convencional: Con carga horaria semanal variable.

Parágrafo Único: A los fines de la estimación de la carga horaria de los miembros del personal docente en los planteles educativos, la hora docente tendrá una duración mínima de cuarenta y cinco (45) minutos y comprenderá el trabajo de aula, dirección, coordinación, orientación, planificación, administración, investigación, experimentación, evaluación y extensión.

Artículo 28. La dedicación en cargos de la carrera docente se establecerá de acuerdo a los siguientes criterios:

1º El cargo de Docente de Aula de Educación Preescolar y Educación Básica de 1º a 6º grados, en horario diurno, tendrá una Dedicación a Tiempo Integral.

2º El cargo de Docente de Aula diurno de Educación Básica de 7º a 9º grados, y de Media Diversificada y Profesional, podrá ser ejercicio a Tiempo Convencional, Medio Tiempo y Tiempo Completo.

3° El cargo de Docente de Aula nocturno de Educación Básica, Media Diversificada y Profesional, podrá ser ejercido a Tiempo Convencional y Tiempo Integral.

4° El cargo de Docente Coordinador en horario diurno debe ser ejercido a Tiempo Completo y el de Coordinador Residente Nocturno a Tiempo Integral.

5° El cargo de Docente Directivo de Educación Preescolar y Básica de 1° a 6° grados, debe ser ejercido a Tiempo Integral.

6° El cargo de docente Directivo de Educación Básica de 7° a 9° grados y Educación Media Diversificada y Profesional en horario diurno debe ser ejercido a Tiempo Completo, y en horario nocturno a Tiempo Integral.

7° El Cargo de Docente Supervisor será ejercido a Tiempo Completo.

8° La Promoción a la Dedicación Integral Nocturna y al Tiempo Completo se hará mediante concurso de méritos y oposición.

9° Todo profesional de la docencia que ejerza un cargo de Docente Coordinador, Subdirector o Director, deberá dedicar obligatoriamente un mínimo de tres (3) horas semanales a la docencia de aula.

Sección Cuarta

De las Promociones y Ascensos de los Profesionales de la Docencia

Artículo 29. La promoción dentro de la carrera docente consiste en todo tipo de acciones realizadas por las autoridades educativas que propendan al mejoramiento del profesional docente en servicio, que permitan su realización plena o que faciliten el mejor aprovechamiento de sus potencialidades. Las promociones procederán como reconocimiento y estímulo, en atención a la calificación eficiente de la actuación profesional. Entre las medidas de promoción pueden aplicarse las siguientes: paso de una dedicación a otra de mayor concentración de horas docentes, reubicación del docente en un plantel o servicio de mayor categoría o mejor ubicación geográfica, realización de giras de observación y estudio, comisiones especiales de trabajo en el campo de la docencia, cursos de nivelación, perfeccionamiento o postgrado y entrenamientos especiales, así como cualesquiera otras que disponga la autoridad educativa en relación con el mejoramiento de las condiciones de trabajo.

La promoción a la Dedicación Integral Nocturna y al Tiempo Completo se hará mediante concurso de méritos y oposición, entre aspirantes que tengan una antigüedad no menor a tres años en la categoría de Docente 1, como mínimo.

Artículo 30. Se entiende por ascenso el pase progresivo del profesional de la docencia en las jerarquías administrativas y

categorías académicas de la carrera docente, en virtud de la calificación eficiente de su actuación y desarrollo profesional, y del cumplimiento riguroso de los requisitos establecidos para el correspondiente pase a la jerarquía o categoría inmediata superior.

Artículo 31. Para ascender a los profesionales de la docencia en las jerarquías y categorías de la carrera docente, se tomarán en cuenta los siguientes elementos de juicio:

1° Años de servicio prestados en planteles o servicios educativos del sector oficial.

2° Títulos, certificaciones y constancias de estudios realizados.

3° El puntaje mínimo establecido de acuerdo con la Tabla de Valoración de Méritos.

4° Memoria Descriptiva o Trabajo de Ascenso, según corresponde.

5° Otros méritos que acrediten legalmente al aspirante, vinculados con la actuación, el desarrollo y la eficiencia profesional.

Artículo 32. Los miembros ordinarios del personal docente tendrán derecho a las promociones y ascensos, siempre que reúnan los requisitos mínimos establecidos en las especificaciones de las jerarquías y categorías contenidas en la Tabla

de Posiciones de la Carrera Docente, conforme a las disposiciones siguientes:

Primera Jerarquía: DOCENTE DE AULA

Categoría 1: Docente I

Ingresa por concurso de méritos.

Para ascender a la Categoría Docente II debe cumplir todos los siguientes requisitos:

1. Tres (3) años de ejercicio en la categoría Docente I.
2. Curso de actualización o de perfeccionamiento profesional, de primer nivel, con evaluación.
3. Presentación de la Memoria Descriptiva de su actuación.
4. Puntaje mínimo acumulado de: cuatro (4,00) puntos en el sistema de calificación.

Categoría 2: Docente II

Requisitos mínimos para ascender a Docente III:

1. Cuatro (4) años de ejercicio en la Categoría Docente II.
2. Curso de actualización o de perfeccionamiento profesional de segundo nivel, con evaluación.

3. Puntaje mínimo acumulado de: ocho (8,00) puntos en el sistema de calificación.

Categoría 3 Docente III

Requisitos mínimos para ascender a Docente IV:

1. Cuatro (4) años de ejercicio en la Categoría Docente III.
2. Curso de actualización o de perfeccionamiento profesional de tercer nivel, con evaluación.
3. Trabajo de ascenso.
4. Puntaje mínimo acumulado de: doce (12,00) puntos en sistema de calificación.

Categoría 4 Docente IV

Requisitos mínimos para ascender a Docente V:

1. Cinco (5) años de ejercicio en la Categoría Docente IV.
2. Curso de postgrado, equivalente a especialización como mínimo.
3. Trabajo de ascenso.
4. Puntaje mínimo acumulado de: dieciséis (16,00) puntos en el sistema de calificación.

Categoría 5: Docente V

Requisitos mínimos para ascender a Docente VI:

1. Cinco (5) años de ejercicio en la Categoría Docente V.
2. Curso de postgrado, equivalente a Maestría o Doctorado.
3. Trabajo de ascenso.
4. Puntaje mínimo acumulado de: veinte (20,00) puntos en el sistema de calificación.

Categoría 6: Docente VI

Última clasificación de las categorías académicas establecidas para la jerarquía de Docente de Aula.

Segunda Jerarquía: DOCENTE COORDINADOR

Para ingresar a la Jerarquía de Docente Coordinador se requiere:

1. Tener una antigüedad no menor de doce (12) meses en la categoría de Docente II.
2. Tener dedicación a Tiempo Completo.
3. Ganar el concurso correspondiente.

Tercera Jerarquía: DOCENTE DIRECTIVO Y DE SUPERVISIÓN

Para ingresar a la jerarquía de Docente Directivo y de Supervisión se requiere:

1. Ser venezolano.
2. Ganar el concurso correspondiente.
3. Tener dedicación a Tiempo Integral o a Tiempo Completo, según corresponda.
4. Haber aprobado el curso de cuarto nivel relativo a la naturaleza, funciones y atribuciones del cargo al cual va a optar.
4. Poseer por lo menos la categoría docente que según el cargo a ocupar se señala a continuación, y haberse desempeñado en ella en un lapso no menor de doce (12) meses:
 - 5.1. Para el cargo de Subdirector: Docente III
 - 5.2. Para el cargo de Director: Docente IV
 - 5.3. Para el cargo de Supervisor: Docente V.

Cuarta Jerarquía: SUPERVISORES ITINERANTES NACIONALES

Para ingresar a la jerarquía de Supervisores Itinerantes Nacionales, es necesario:

1. Ser venezolano.
2. Ser o haber sido docente.
3. Ser de reconocida solvencia moral y con méritos académicos suficientes que acrediten su eficiencia profesional.
4. Ser nombrado por el Ministro de Educación, Cultura y Deportes, a proposición del Viceministro de Asuntos Educativos.

El Cuerpo de Supervisores Itinerantes Nacionales estará conformado por los docentes que fueren necesarios, a proposición del Viceministro de Asuntos Educativos, del cual dependerán jerárquicamente. Dichos Supervisores realizarán supervisiones integrales en todos los planteles establecidos a nivel nacional.

Si el informe final de la supervisión integral de cada plantel así lo recomienda, éste se intervendrá y podrá suspenderse a todos o a algunos de los miembros del cuerpo directivo, caso en el cual se designará el personal directivo interino correspondiente.

Artículo 33. Los profesionales de la docencia a los que se refiere el artículo 139 de la Ley Orgánica de Educación que ejerzan en los niveles de Educación Preescolar y Básica de 1° a 6° grados, serán exceptuados del requisito de aprobación de los cursos de postgrado, a los fines de clasificación y ascenso.

Artículo 34. Para optar al cargo de Subdirector se requiere haber desempeñado en forma eficiente el cargo de Docente Coordinador, salvo en el nivel de Educación Preescolar y Educación Básica 1° a 6° grado.

Para optar al cargo de Director se requiere haber desempeñado en forma eficiente el cargo de Subdirector.

Para optar al cargo de Supervisor se requiere haber desempeñado en forma eficiente el cargo de Director.

Artículo 35. El desempeño de los cargos Docente Coordinador, Docente Directivo y Docente Supervisor, tendrá una duración determinada: cuatro (4) años para los cargos de Docente Coordinador y Subdirector y, cinco (5) años para los cargos de Director y Supervisor.

Artículo 36. Los Profesionales de la docencia que hayan ejercido un período de cargos de Docente Coordinador, Subdirector, Director o de Supervisor, podrán concursar sólo por un nuevo período en el mismo cargo, una vez que la autoridad competente haya aprobado el informe final de su actuación.

Artículo 37. A los profesionales de la docencia que concluyan el período de ejercicio de un cargo de Docente Coordinador o Docente Directivo y de Supervisión, o cesen en el ejercicio del cargo por razones justificadas, se les garantizará:

1. La ubicación en el plantel de origen, o en el plantel en el cual concluyó el respectivo período de ejercicio, a solicitud del profesional de la docencia.

2. La dedicación a tiempo completo.

3. La actualización de su clasificación, para establecer la categoría académica que le corresponda.

Artículo 38. Los requisitos establecidos en la Tabla de Posiciones, contenidas en el artículo 32, se calificarán de acuerdo con el sistema de calificación de méritos y las disposiciones establecidas en este Reglamento.

Asimismo, a los efectos de los requisitos previstos en estos artículos, se definen como cursos de Primer, Segundo, Tercero y Cuarto Nivel, aquellos que tengan un valor de: tres (3), cuatro (4), cinco (5) y seis (6) créditos, respectivamente, en el área de la Educación o de Especialidad del Docente.

Artículo 39. La Memoria Descriptiva consiste en un informe detallado, elaborado por un docente para la consideración del Comité de Sustanciación de su plantel, que deberá contener: la descripción de las funciones desempeñadas en la condición de Docente de Aula, la participación en las actividades de extensión cultural y académicas y los resultados de la evaluación de eficiencia docente y actuación profesional alcanzados, según los registros llevados por las dependencias relacionadas con estas funciones.

Artículo 40. El trabajo de ascenso debe ser original del docente tanto en el tema como en las particularidades de su enfoque, desarrollo o metodología utilizada. Puede ser un trabajo experimental o de carácter teórico, una monografía o una obra que contenga una contribución útil en materia educativa. Debe reunir los requisitos de razonamiento riguroso, exposición sistemática, fuerza metodológica y complementa-

ción bibliográfica. Los trabajos de experimentación pedagógica deberán estar sustentados en el adecuado cúmulo de observaciones y experimentos.

Artículo 41. No podrán ser admitidos como Trabajos de Ascenso aquellos que hubieren sido admitidos o rechazados para efectos de ascensos anteriores y los que sean recopilación y reproducción parcial o total de otros autores.

El Trabajo de Ascenso podrá ser presentado en forma individual o colectiva. En este último caso el grupo no podrá exceder de tres personas y los coautores deberán anexar una memoria que permita determinar y evaluar la contribución de cada uno de ellos.

Artículo 42. Los profesionales de la docencia para ascender a cualquier categoría de escalafón podrán presentar como Trabajo de Ascenso, la Tesis aprobada como requisito de título de postgrado obtenido después de su último ascenso, así como los libros de textos para diferentes niveles y modalidades del sistema educativo de los cuales sean autores, y que hubieren sido aprobados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

Artículo 43. Los servicios de Evaluación y Clasificación del Personal Docente, las Juntas Calificadoras del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes a nivel nacional y zonal y las que funcionen en otros entes públicos que cuenten con servicios educativos, tendrán a su cargo la materia de evaluación del personal docente a los fines de ascenso, lo cual se regirá conforme a las normas y procedimientos establecidos sobre esta materia en el presente Reglamento.

Artículo 44. Cuando un plantel atienda varios niveles y modalidades del sistema educativo, el Director deberá poseer el título docente correspondiente al nivel más alto.

Capítulo III

De la Evaluación y Clasificación del Personal Docente

Sección Primera

De las Juntas Calificadoras

Artículo 45. La evaluación y clasificación del personal docente será organizada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, los Estados, los Municipios y demás entidades del sector oficial.

Artículo 46. La evaluación y clasificación del personal docente del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes se llevará a cabo a través de la Junta Calificadora Nacional, las Juntas Calificadoras Zonales y los Comités de Sustanciación. En los Estados, Municipios y demás entes públicos la evaluación y clasificación se organizará de acuerdo con las necesidades propias de cada organismo.

Artículo 47. La Junta Calificadora Nacional estará integrada por quince (15) miembros, de la siguiente manera:

Siete (7) miembros en representación del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

Siete (7) miembros en representación de las organizaciones de los profesionales de la docencia.

Un (1) miembro designado de mutuo acuerdo por los representantes del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y de las organizaciones de los profesionales de la docencia, quien presidirá la Junta.

Artículo 48. La Junta Calificadora Nacional del personal docente, tendrá las siguientes funciones:

1º Elaborar su reglamento interno dentro de los noventa (90) días siguientes a su instalación y someterlo a la aprobación del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

2º Establecer las normas, criterios y procedimientos para la organización y funcionamiento del servicio de evaluación del personal docente.

3º Actuar como segunda instancia administrativa para los casos de apelación y revisión de las clasificaciones otorgadas por las juntas calificadoras zonales.

4º Decidir todo lo concerniente a los instructivos y formatos requeridos para el cumplimiento de las funciones de evaluación y clasificación del personal docente.

5º Establecer criterios y procedimientos que garanticen la efectiva organización y ejecución de los concursos de méritos o de méritos y oposición para la provisión de cargos de la carrera docente.

6° Atender, resolver y dictaminar acerca de las consultas que le sean formuladas en materia de evaluación de personal docente y clasificación de los profesionales de la docencia.

7° Participar oportunamente a la Oficina de Personal del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes a los interesados, los resultados de las evaluaciones y clasificaciones correspondientes.

8° Establecer las normas para la designación de los jurados y evaluación de los trabajos de ascenso de los profesionales de la docencia.

9° Proponer a la Dirección General del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes la integración de los jurados para los concursos, cuando corresponda.

10° Rendir informe anual de su actuación ante la Dirección General del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

11° Las demás que le señalen las leyes y reglamentos.

Artículo 49. Las Juntas Calificadoras Zonales estarán integradas por quince (15) miembros, de la siguiente manera:

Siete (7) miembros en representación de la Zona Educativa.

Siete (7) miembros en representación de las organizaciones de los profesionales de la docencia de la zona.

Un (1) miembro designado de mutuo acuerdo por los representantes de la Zona Educativa y las organizaciones de los profesionales de la docencia, quien presidirá la Junta.

Artículo 50. Las Juntas Calificadoras Zonales tendrán, entre otras, las siguientes funciones; las cuales podrán ser establecidas en los organismos que a tal efecto se crearen en los Estados, Municipios y demás entes públicos, en cuanto resulten aplicables:

1º Evaluar al personal docente y clasificar a los profesionales de la docencia de la Zona Educativa correspondiente, tomando en consideración las propuestas de los Comités de Sustanciación.

2º Registrar en la Hoja de Servicio todos los aspectos de la actuación, desarrollo y eficiencia docente, de los profesionales de la docencia.

3º Atender, resolver y dictaminar sobre las consultas que le sean formuladas, en materia de evaluación del personal docente y de la clasificación de los profesionales de la docencia.

4º Remitir a la Junta Calificadora Nacional copia de la Hoja de Servicio y demás informaciones de las evaluaciones, calificaciones y clasificaciones realizadas.

5º Proponer a la Zona Educativa respectiva la integración de los jurados para los concursos y trabajos en ascenso, cuando corresponda.

6º Recibir y publicar el veredicto de los jurados de los concursos y de los trabajos de ascenso y remitir oportunamente copia de los mismos, a la Zona Educativa respectiva.

7° Remitir a la Oficina de Personal de la Zona Educativa correspondiente, los resultados de las evaluaciones y clasificaciones realizadas, para ser incorporados en los expedientes, personales respectivos.

8° Expedir los certificados de evaluación del personal docente, y de calificación y clasificación de los profesionales de la docencia, a solicitud de parte interesada.

9° Recibir y tramitar las apelaciones a que hubiere lugar.

10° Servir de primera instancia para los casos de solicitud de revisión y apelación.

11° Rendir ante la Junta Calificadora Nacional, informe anual de su actuación.

12° Elaborar su reglamento interno.

13° Las demás establecidas en el ordenamiento jurídico.

Artículo 51. Los miembros de las Juntas Calificadoras durarán tres (3) años en sus funciones, y deberán reunir los siguientes requisitos: ser profesional de la docencia, tener una Categoría no menor de Docente III para la Junta Calificadora Zonal, y para las que se crearen en los Estados, Municipios y demás entes públicos, y de Docente IV para la Junta Calificadora Nacional.

Artículo 52. Los Comités de Sustanciación funcionarán en los planteles, servicios educativos y demás unidades administrativas y estarán integrados por tres (3) profesionales de

la docencia, con una Categoría Académica no menor de Docente II, de la manera siguiente:

1° El Director del Plantel o el Jefe de Servicio Educativo o Unidad Administrativa.

2° Dos (2) miembros, del personal con sus respectivos suplentes, electos anualmente por los profesionales de la docencia reunidos previa convocatoria del Director del Plantel, Jefe del Servicio Educativo o Jefe de la unidad administrativa.

3° Cuando el Director del Plantel, el Jefe de la unidad de servicio o el Jefe de la unidad administrativa vaya a ser evaluado, actuará como miembro del comité de sustanciación, el profesional de la docencia que actúe como Jefe inmediato superior.

4° Cuando un profesional de la docencia ejerza en Escuelas Unitarias o Concentradas, será evaluado directamente por la Junta Calificadora respectiva.

Artículo 53. Los Comités de Sustanciación tendrán entre otras las siguientes funciones:

1° Recibir, procesar y archivar los documentos probatorios de la actuación y desarrollo profesional del personal docente.

2° Elaborar el informe de la eficiencia docente tomando en consideración, entre otros aspectos, el cumplimiento y el rendimiento en la función docente, asistencia y puntualidad, iniciativa, creatividad, espíritu de trabajo, colaboración, ela-

boración y uso de los recursos didácticos y de las estrategias de enseñanza.

3° Mantener actualizado los expedientes del personal docente y registrar los datos y los juicios evaluativos en la Hoja de Servicio del docente evaluado.

4° Proponer a la Junta calificadora la respectiva calificación y clasificación que corresponda al docente evaluado.

5° Proponer a la Junta Calificadora respectiva los, nombres de los candidatos a integrar los jurados de los trabajos de ascenso.

6° Conocer el informe de la Memoria Descriptiva, a los fines de la calificación y clasificación de los profesionales de la docencia.

7° Entregar copia de la calificación y clasificación propuestas al docente evaluado.

8° Remitir oportunamente a la Junta Calificadora respectiva los informes de las calificaciones y clasificaciones realizadas a los profesionales de la docencia y los recaudos correspondientes.

Artículo 54. La Hoja de Servicio del Docente será un registro acumulativo y contendrá datos personales e informaciones relativas a la actuación profesional, desarrollo profesional eficiencia docente. Los resultados de la evaluación de la eficiencia docente se expresará en una de las siguientes calificaciones: Sobresaliente, Distinguido, Bueno, Regular, Deficiente.

Artículo 55. Los miembros de las Juntas Calificadoras y de los Comités de Sustanciación no podrán actuar cuando estén vinculados por matrimonio o lazos de parentesco, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con el docente a evaluar.

Sección Segunda

Del Sistema de Calificación de Méritos y Valoración de la Actuación, Desarrollo y Eficiencia Docentes

Artículo 56. A los efectos de la calificación de méritos y de valoración de la actuación, desarrollo y eficiencia docentes, para ingreso, ascensos y clasificación, se establece la siguiente relación de factores y sus respectivos valores en puntos, la cual será de revisión periódica, mediante resolución, por parte del Ministro de Educación, Cultura y Deportes:

TABLA DE VALORACIÓN DE MÉRITOS

1. ESTUDIOS DE POSTGRADO DE EDUCACIÓN O EN ÁREAS INHERENTES

A LA ESPECIALIDAD DOCENTE:

	Puntos
1.1. Título de Especialista...	3
1.2. Título de Maestría...	4
1.3. Título de Doctor...	6

2. OTROS TÍTULOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR:

	Puntos
2.1. Título adicional de Licenciado o equivalente...	2
2.2. Título adicional de especialista...	2
2.3. Título adicional de magíster...	3
2.4. Título adicional de doctor...	4
2.5. Título posdoctoral...	5
3. ESTUDIOS DE PERFECCIONAMIENTO O ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL EN ÁREA DE LA EDUCACIÓN O DE LA ESPECIALIDAD	

	Puntos	Máximo
3.1. Como Alumno:	3	
3.1.1. Por cada crédito, sin evaluación...	0,05	
3.1.2. Por cada crédito, con evaluación...	0,10	
3.2. Como profesor o coordinador académico:	3	
3.2.1. Por cada crédito, sin evaluación...	0,10	
3.2.1 Por cada crédito, con evaluación...	0,15	
3.3 Participación en talleres en áreas de la educación:		

	Puntos	Máximo
Por cada ocho (8) horas, con evaluación:		
3.3.1. Como participante...	0,05	3

3.3.2. Como coordinador...	0,10	3
----------------------------	------	---

3.3.3. Como profesor...	0,10	3
-------------------------	------	---

Cada crédito de los cursos de perfeccionamiento o de actualización profesional se considerará equivalente a 16 horas de teoría o de seminario o a 16 sesiones prácticas de dos horas o más.

4. CERTIFICADO ANUAL DE EFICIENCIA EN LOS CARGOS DE LA

CARRERA DOCENTE:

	Puntos
4.1. Por cada certificado con la calificación Sobresaliente...	0,50
4.2. Por cada certificado con la calificación Distinguido...	0,40

5. PARTICIPACION EN COLOQUIOS, PÁNELES, MESAS REDONDAS, FOROS, SIMPOSIOS, SEMINARIOS, JORNADAS Y DEMÁS ACTIVIDADES AFINES, EN ÁREAS DE LA EDUCACIÓN O DE LA ESPECIALIDAD, CON UN MÍNIMO DE OCHO HORAS EN CADA ACTIVIDAD:

	Puntos
5.1. Como participante...	0,05
5.2. Como ponente...	0,10
5.3. Como coordinador...	0,10

6. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS REALIZADOS EN ÁREAS DE LA EDUCACIÓN, CON UN MÍNIMO DE DOCE HORAS DE DURACIÓN:

	Puntos
6.1. Congresos y convenciones:	
6.1.1. Como participante...	0,05
6.1.2. Como ponente...	0,10
6.1.3. Como coordinador...	0,10
6.2. Encuentros profesionales por especialidad, en áreas de la educación:	

	Puntos
6.2.1. Como participante...	0,10
6.2.1. Como ponente...	0,15
6.2.2. Como coordinador...	0,15

6.3. Eventos internacionales:	
6.3.1. Como participante...	0,20
6.3.2. Como ponente...	0,50
6.3.3. Como coordinador...	1

7. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS PROFESIONALES VINCULADOS A

LAS ÁREAS DEPORTIVAS O ARTÍSTICAS:

	Puntos	Máximo Por Año
7.1. Participación colectiva dentro del país...	0,10	1
7.2. Participación individual dentro del país...	0,20	1
7.3. Participación colectiva fuera del país...	0,20	1
7.4. Participación individual fuera del país...	0,50	1
7.5. Participación en representación del país...	0,50	1

8. EXPERIENCIA PROFESIONAL CON O SIN TÍTULO:

8.1 Por cada año de servicio en cualquier nivel o modalidad del sistema educativo, no simultáneos.

	Puntos	Máximo Por Año
Un (1) punto por cada uno de los cinco (5) primeros años de servicio... 5...	1	5

Medio (0,50) punto por cada año de adicional. 0,50 7

8.2 En instituciones del sector productivo vinculadas con la especialidad en la cual se desempeñe el docente, por cada año no Simultáneo con el ejercicio docente... 0,50 2,5

8.3 En jerarquías administrativas, por cada año:

8.3.1 Docente Coordinador...	0,10	0,8
8.3.2 Subdirector de plantel educacional...	0,15	1,2
8.3.3. Director de plantel educacional...	0,20	1,6

8.3.4. Supervisor...	0,25	2
8.4 Dirección y Asesoría en otras instituciones, por cada año de servicio:		
8.4.1. Por haber ejercido cargos de dirección en instituciones relacionadas con la educación, ciencia, cultura, artes o deportes...	0,25	2
8.4.2. Por participar como asesor de instituciones científicas y tecnológicas de reconocido prestigio...	0,15	1
9. OTROS MÉRITOS PROFESIONALES:	Puntos	Máximo
9.1. Méritos científicos, educativos, artísticos, y culturales:		
9.1.1. Ser Miembro de una Academia oficial venezolana o extranjera calificada...	0,50	1
9.1.2. Por participar en agrupaciones sinfónicas o corales de reconocido prestigio nacional, por cada año...	0,20	0,4
9.1.3. Por pertenecer a asociaciones científicas o culturales suficientemente reconocidas, por cada año...	0,15	0,3
9.1.4. Por pertenecer a una agrupación teatral de reconocido prestigio nacional, por año...	0,15	0,3
9.1.5. Por haber sido jurado en concursos o trabajos de ascenso...	0,20	2
9.2 Publicaciones:		
9.2.1. Por autoría de trabajo de investigación publicados en revistas especializadas de alta circulación, por cada trabajo...	0,50	3

9.2.2. Por autoría de ensayos y artículos en revistas y periódicos de alta circulación nacional, por cada uno... 0,10 3

9.2.3. Por autoría o coautoría de textos para los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, autorizados por resolución del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes... 1 5

9.3. Producción de medios y otros recursos instruccionales (TV, cine, radio, paquetes o módulos y demás estrategias y recursos), por cada producción elaborada, aplicada y evaluada, de acuerdo a los criterios establecidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes... 0,50 3

10. MÉRITOS GREMIALES Y SINDICALES EN ORGANIZACIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA DOCENCIA:

10.1. Por haber sido electo y ejercido la Presidencia de asociaciones gremiales y sindicales de carácter nacional. Por cada período completo: 1 2

10.2. Por pertenecer y colaborar eficazmente en comisiones relacionadas con la actividad gremial, designadas por las autoridades educativas competentes, con presentación del Informe, por cada comisión con Informe... 0,20 1

11. DISTINCIONES:

11.1. Por haber recibido condecoraciones otorgadas por organismos oficiales del país:

11.1.1. De carácter nacional, por cada clase... 0,50 1.5

11.1.2. De carácter estatal, por cada clase... 0,30 1

11.1.3. De carácter municipal, por cada clase...	0,30	1
11.1.4. De carácter institucional: planteles, corporaciones, etc., por cada clase...	0,20	1
11.1.5. De carácter internacional, con autorización de la Cámara del Senado de la República de Venezuela...	0,50	1

12. POR HABER EJERCICIO CARGOS DE REPRESENTACION POPULAR:

Por ejercicio durante todo el período constitucional. 1 2

13. ADEMÁS DE LOS FACTORES. ESTABLECIDOS, CUANDO SE TRATE DE LA EVALUACIÓN DE MÉRITOS PARA EL INGRESO A LA CARRERA DOCENTE, DEBERÁN TOMARSE EN CUENTA LOS SIGUIENTES ASPECTOS Y SUS RESPECTIVOS VALORES EN PUNTOS:

13.1 Menciones honoríficas de grado: Puntos Máximo

1.1. Cum Laude 0,50

1.2. Magna Cum Laude 0,75

1.3. Summa Cum Laude 1,00

1.4. Mejor alumno de la Promoción 1,00

13.2. Diplomas honoríficos por concepto de rendimientos distinguidos en asignaturas, seminarios y demás actividades académicas en los estudios de pregrado:

2.1 Por cada diploma: 0,25

13.3 Nivel de rendimiento académico alcanzado en los estudios de pregrado:

3.1 Promedio igual al 70% de la escala evaluación: 0,50

3.2. Por cada uno por ciento (1%) adicional 0,02

13.4. Realización de Preparadurías o Ayudantías de Cátedras, Laboratorios, Talleres:

4.1 Por cada año lectivo: 0,50 1

4.2 Por cada semestre: 0,25 1

13.5. Participación en actividades de extensión universitaria:

5.1 Participación como Integrante no accidental en grupos teatrales, equipos deportivos, orfeón, estudiantina y demás agrupaciones que actúen en representación oficial de la institución, por cada año:

0,25 0,60

5.1.1 Por cada año lectivo: 0,20 0,60

5.1.2 Por cada semestre: 0,10 0,60

5.2 Participación en eventos científicos, culturales, deportivos, artísticos, en representación oficial de la Institución:

5.2.1 Eventos Nacionales 0,10 1

5.2.2 Eventos Internacionales 0,20 1,5

13.6 Ejercicio de la representación estudiantil ante organismos universitarios; Consejo Nacional de Universidades; Consejo Universitario, Consejo de Facultad, Consejo Directivo y Consejo Académico:

6.1 Por cada año lectivo completo: 0,50 1

13.7 Realización de suplencias o interinatos en planteles oficiales o planteles privados inscritos en el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes:

7.1 Por cada año lectivo:	1	2
---------------------------	---	---

7.2 Por períodos de seis meses o más:	0,5	1
---------------------------------------	-----	---

13.8 Participación en campañas nacionales o regionales de carácter cultural, educativo, social o asistencial, en representación oficial de la Institución:

- Como participante:	0,20	1
----------------------	------	---

.- Como coordinador	0,30	1
---------------------	------	---

Capítulo IV

Del Régimen de Concursos para la Provisión de Cargos de la Carrera Docente

Sección Primera

Disposiciones Generales

Artículo 57. Todos los cargos de la carrera docente serán provistos mediante concurso de méritos o de méritos y de oposición, según el caso; en la forma y condiciones establecidas en la Ley Orgánica de Educación, en el presente Reglamento y en las normas que al efecto dicte la autoridad educativa competente.

Artículo 58. El concurso de méritos es el conjunto de actos y procedimientos mediante el cual se establece la confrontación de credenciales profesionales, con miras a proveer un

cargo, de acuerdo con la relación de factores contenida en la Tabla de Valoración de Méritos del presente Reglamento.

Artículo 59. El concurso de méritos y oposición es el conjunto de actos y procedimientos mediante el cual además de confrontar credenciales, se evalúan competencias, entre aspirantes a ocupar un cargo bajo condiciones uniformes y objetivas, a través de pruebas adecuadas para medir conocimientos, habilidades, hábitos, destrezas y técnicas, que demuestren aptitudes para el ejercicio del cargo de acuerdo con un programa previamente determinado.

Parágrafo Único: Las credenciales a que se refiere el presente artículo deben estar escritas en castellano, debidamente legalizadas cuando se trate de documentos expedidos por instituciones extranjeras y traducidas por un intérprete público, si están escritas en otro idioma.

Sección Segunda

De los Tipos de Concursos

Artículo 60. Los concursos para la provisión de cargos de la carrera docente proceden conforme a las especificaciones siguientes:

1. Concurso de Méritos:

- 1.- Para el ingreso a la carrera docente.

2.- Para el ingreso a la Jerarquía de Docente Coordinador.

2. Concurso de Méritos y Oposición:

1.- Para la promoción de los Profesionales de la docencia a la Dedicación Integral Nocturna y al Tiempo Completo.

2.- Para el ingreso a la Jerarquía de Docente Directivo y de Supervisión.

Artículo 61. Los concursos para la provisión de cargos docentes se realizarán cumpliendo las siguientes fases:

1.- Apertura del concurso.

2.- Convocatoria pública del concurso.

3.- Inscripción y presentación de credenciales de los aspirantes.

4.- Entrega a los aspirantes de los informativos, programas, calendarios y nombres de los integrantes del Jurado.

5.- Constitución de los Jurados.

6.- Evaluación de credenciales.

7.- Realización de pruebas de oposición cuando sea el caso.

8.- Veredicto del Jurado.

9.- Publicación de los resultados del concurso.

10.- Selección y ubicación del ganador o ganadores del concurso.

Artículo 62. El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, los Estados, los Municipios y demás entidades del sector oficial, llamarán a concurso para la provisión de cargos docentes, previa determinación de las necesidades de atención matricular, razones de servicio y disponibilidad presupuestaria.

Artículo 63. El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, los Estados, los Municipios y demás entidades del sector oficial, convocarán a todos los profesionales de la docencia interesados en concursar, mediante anuncio publicado en un diario, de circulación nacional, con una antelación no menor de diez (10) días consecutivos a la inscripción y presentación de credenciales.

Artículo 64. La convocatoria para la inscripción y presentación de credenciales, deberá indicar lo siguiente:

1. Lugar, fecha y hora.

2. Denominación, clasificación, identificación y ubicación geográfica del cargo.

3. Requisitos exigidos para el desempeño del cargo.

4. Condiciones que regirán para el concurso, conforme a la naturaleza de cada cargo.

5. Régimen de evaluación tanto de las credenciales como de las pruebas según se trate de concursos de méritos o de méritos y oposición.

6. Integrantes del Jurado designado.

Artículo 65. La inscripción de los aspirantes se realizará en la dependencia que expresamente se indique en la convocatoria del concurso dentro del lapso de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha que señale la convocatoria.

Artículo 66. Los aspirantes a participar en los concursos deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Ser venezolano.

2. Ser profesional de la docencia.

3. Ser de reconocida moralidad.

4. Poseer certificado de salud física y mental, expedido por un servicio oficial de salud.

Artículo 67. Al formalizar la inscripción los aspirantes deberán depositar su curriculum vitae y copia de los documentos probatorios correspondientes, previa presentación de los originales respectivos. Estos recaudos serán verificados por el funcionario designado para tal fin, quien expedirá el recibo y comprobante de inscripción.

Sección Tercera

De los Jurados Examinadores y de la Evaluación

Artículo 68. Los jurados examinadores estarán integrados por tres (3) miembros principales y tres (3) miembros suplentes propuestos por la Junta Calificadora Nacional, Zonal, Estatal o Municipal, según el caso, el Director General del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, el Jefe de la Zona Educativa, el Director de Educación del Estado o el Director de Educación Municipal respectivamente.

Los integrantes del jurado no deben estar vinculados a los aspirantes por lazos de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ni por relación matrimonial.

Artículo 69. Son requisitos para ser miembro de los jurados examinadores:

1. Ser venezolano.
2. Ser profesional de la docencia.
3. Tener una categoría académica igual o superior a la exigida para optar al cargo objeto del concurso.

Artículo 70. La aceptación de la asignación como miembro de un jurado examinador para lo cual reciba oportuna notificación de la Autoridad competente, es de carácter obligatorio, salvo que existan causas justificadas alegadas por el postulado y aceptadas por la junta calificadora.

Artículo 71. Son atribuciones del jurado examinador:

1. Recibir y evaluar todos los documentos relativos a la acreditación de méritos de los concursantes.
2. Realizar las pruebas a que se refieren los concursos de mérito y oposición, dentro del tiempo estipulado al efecto.
3. Calificar a cada uno de los aspirantes de acuerdo con las escalas de evaluación correspondientes.
4. Dejar constancia mediante actas, de todas sus actuaciones e incidencias del concurso.
5. Emitir su veredicto dentro del tiempo estipulado.

Artículo 72. El jurado examinador se constituirá dentro del lapso de los cinco (5) días siguientes a la fecha del cierre de la inscripción, previa convocatoria de la Junta Calificadora respectiva. Al constituirse procederá a:

1. Designar un coordinador, quien se encargará de planificar las actividades y efectuar las comunicaciones necesarias.
2. Evaluar las credenciales de los aspirantes en un lapso no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes a la constitución del jurado.
3. Realizar las pruebas de oposición, cuando se trate de concursos de méritos y oposición, en un lapso no mayor de diez (10) días hábiles adicionales. Este lapso sólo podrá ser prorrogado con autorización escrita de la junta calificadora regional o nacional.

Artículo 73. La evaluación de credenciales de los concursantes se realizará de acuerdo con la relación de factores y sus respectivos valores en puntos, contenida en la Tabla de Valoración de Méritos del presente Reglamentó.

Artículo 74. Cuando el concurso sea de méritos, se considerará ganador a quien haya obtenido la mayor puntuación, si se trata de un cargo, o ganadores quienes hayan obtenido mayor puntuación, si se trata de más de un cargo, definiendo las posiciones relativas a cada uno de ellos.

Cuando dos o más concursantes obtengan la misma puntuación, se declarará ganador a quien tenga mayor antigüedad en el plantel, y si persistiere el empate, el jurado realizará entrevistas individuales con cada uno de ellos, a fin de establecer claramente la posición relativa de los aspirantes y poder adjudicar los cargos respectivos.

Artículo 75. En los concursos de méritos y oposición, la evaluación de credenciales se realizará como una primera parte del proceso. La posición alcanzada por cada participante en esta evaluación se establecerá de acuerdo con la puntuación obtenida por cada uno de ellos.

Artículo 76. La prueba de oposición tendrá dos partes, una escrita y otra oral u oral-práctica, según la naturaleza del cargo a proveer.

Artículo 77. La prueba escrita tendrá una duración no mayor de tres horas y se realizará simultáneamente para todos los participantes en el concurso, con la presencia de los tres (3) integrantes del jurado examinador y versará sobre un mismo tema del programa, seleccionado al azar al iniciarse la prueba.

Durante la prueba los participantes en el concurso podrán usar materiales de apoyo y comunicarse exclusivamente con los integrantes del jurado examinador.

Artículo 78. En la prueba escrita el jurado examinador valorará además del dominio del tema demostrado por los concursantes, la redacción y la coherencia en su desarrollo, así como el rigor del análisis y pensamiento crítico.

Artículo 79. La prueba oral u oral-práctica tendrá una duración no mayor de una hora y será de carácter individual. En ella los jurados podrán hacer preguntas aclaratorias sobre los criterios sostenidos por el concursante en su prueba escrita y sobre otros aspectos programáticos que permitan evaluar las condiciones del aspirante para el tratamiento de situaciones, manejo de información, planificación, programación, evaluación y toma de decisiones.

Artículo 80. La prueba oral u oral-práctica será de carácter público y se realizará en un día distinto al de la prueba escrita. En caso de que el jurado examinador estime indispensable modificar la fecha y/o lugar de la prueba oral u oral-práctica, lo hará del conocimiento de los participantes mediante escrito que estará a la vista de los concursantes antes y durante el desarrollo de la prueba escrita.

Artículo 81. La prueba escrita y la prueba oral u oral-práctica serán calificadas separadamente, a base de la escala de 1 a 20 puntos, considerándola en términos de valores continuos. Las calificaciones obtenidas en la prueba escrita por los concursantes, serán publicadas en sitio visible, antes de iniciarse la prueba oral.

Artículo 82. Las calificaciones obtenidas por cada concursante en la prueba escrita y en la prueba oral serán promediadas. La calificación mínima aprobatoria del concurso será de quince (15) puntos.

Artículo 83. El jurado seleccionará al ganador o ganadores del concurso, según se trate de uno o más cargos, entre los aspirantes que hayan aprobado el concurso. Para ello utilizará como criterio de selección la posición alcanzada por cada uno de los aspirantes en la evaluación de credenciales. Cuando dos o más participantes tengan la misma puntuación de méritos, el jurado tomará el promedio de las calificaciones de la prueba de oposición para establecer claramente las posiciones relativas. Si subsiste el empate, entonces se decidirá, tomando en consideración los siguientes elementos, en este orden: 1.- Categoría académica, 2.- Tiempo de servicio en el plantel, 3.- Tiempo de servicio en la educación, 4.- Promedio de notas del pregrado.

Sección Cuarta

Del Veredicto del Jurado

Artículo 84. El jurado examinador deberá dictar su veredicto en relación con los resultados del concurso, en el término de los primeros cinco (5) días, contados en forma continua a partir de la fecha en que concluya la prueba oral u oral-práctica.

Artículo 85. El veredicto del jurado debe ser el resultado del acuerdo de sus integrantes. Cuando exista disparidad de criterios, las decisiones se tomarán por mayoría de sus miembros, dejándose expresa constancia en el acta respectiva de esta circunstancia.

Artículo 86. Dictado el veredicto del jurado examinador, el coordinador del mismo levantará por triplicado un acta que suscribirán los integrantes del jurado y en la que se asentará:

1. Nombres y apellidos de los concursantes con sus respectivas cédulas de identidad.
2. Resultado de la evaluación de credenciales.
3. Las pruebas efectuadas con indicación de las fechas de realización.
4. Los temas tratados o desarrollados.
5. Los resultados de las pruebas efectuadas, con los criterios para otorgar las calificaciones respectivas.
6. La calificación definitiva de cada participante.
7. El ganador o los ganadores del concurso.

8. Los demás hechos y circunstancias de los cuales debe o quiera dejar constancia cualquiera de los miembros del jurado.

Artículo 87. El coordinador del jurado examinador enviará original y copia del acta, junto con los demás documentos del concurso, a la Junta Calificadora correspondiente.

Artículo 88. La Junta Calificadora respectiva hará público los resultados de los concursos en el término de los primeros cinco (5) días continuos, siguientes a la recepción de los recaudos.

Artículo 89. La Junta Calificadora respectiva declarará desiertos los concursos cuando medie una de las siguientes circunstancias:

1. No haya inscripción de aspirantes.
2. Ninguno de los aspirantes concurren a una de las pruebas de oposición.
3. Ninguno de los aspirantes haya aprobado el concurso.

Sección Quinta

De las Apelaciones

Artículo 90. Cualquiera de los participantes podrá solicitar la nulidad de lo actuado por vicios de forma o de fondo. En tal caso, el escrito del recurso de apelación deberá consignarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación del veredicto, en la Junta Calificadora respectiva, quien decidirá definitivamente en los próximos diez (10) días hábiles.

Artículo 91. Sobre todo recurso intentado, la autoridad educativa, correspondiente deberá abrir las averiguaciones pertinentes y decidir al respecto, en un lapso no mayor de diez (10) días hábiles.

TÍTULO III

DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS PROFESIONALES DE LA DOCENCIA

Capítulo I

Del Sistema de Remuneraciones

Artículo 92. Las autoridades educativas correspondientes establecerán, en las normas y tablas que dicten al efecto, un

sistema de remuneraciones para los profesionales de la docencia, que comprenderá:

1° Un sueldo base de acuerdo a la categoría académica.

2° La prima correspondiente a la jerarquía administrativa de Docente Coordinador.

3° La prima correspondiente a la jerarquía administrativa de Docente Directivo, la cual será establecida de acuerdo a la clasificación del plantel.

4° La prima, correspondiente a la jerarquía administrativa de Docente Supervisor.

5° Primas por: hogar, hijos, residencia, lugar de trabajo en zonas indígena, rural y fronteriza, antigüedad en la categoría del Docente VI, y cualquier otra que pudiera ser establecida por la Autoridad competente.

6° Bonificaciones: de fin de año, de trabajo nocturno, vacaciones, alimentación, transporte y cualquier otra que pudiera ser establecida por la Autoridad competente.

Artículo 93. La remuneración de los profesionales de la docencia con Tiempo Integral. Diurno, con título docente de Licenciado o Profesor, con la Especialización o Mención

para Preescolar o Educación Básica de 1° a 6° grados, se establecerá en base a 33,33 horas docentes.

Capítulo II

De la Estabilidad de los Profesionales de la Docencia

Artículo 94. Se entiende por estabilidad en el ejercicio de la profesión docente, el derecho a gozar de la permanencia en los cargos que desempeñen, con la jerarquía, categoría, remuneración y garantías económicas y sociales que le correspondan de acuerdo con la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación, la Ley Orgánica del Trabajo, el presente Reglamento, las cláusulas contenidas en la contratación colectiva y demás normativa legal vigente.

Artículo 95. La Administración del Principio de Estabilidad corresponderá a:

- 1.- Las autoridades educativas correspondientes.
- 2.- La Comisión Nacional de Estabilidad.
- 3.- Las Comisiones Regionales de Estabilidad.
- 4.- La jurisdicción contencioso-administrativa.

Sección Primera

De la Comisión Nacional de Estabilidad

Artículo 96. Se crea la Comisión Nacional de Estabilidad y las Comisiones Regionales de Estabilidad, encargadas de velar por la recta aplicación del Principio de Estabilidad consagrado en la Ley Orgánica de Educación y en este Reglamento.

Artículo 97. Las Comisiones de Estabilidad estarán integrada por quince (15) miembros, de la siguientes manera.

Siete (7) miembros en representación del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

Siete (7) miembros en representación de las organizaciones de los profesionales de la docencia.

Un (1) miembro designado de mutuo acuerdo por los representantes del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y de las organizaciones de los profesionales de la docencia, quien presidirá la junta.

Artículo 98. La Comisión Nacional de Estabilidad tendrá su sede en Caracas, gozará de autonomía en el ejercicio de sus funciones y dictará su Reglamento Interno para regular su funcionamiento.

Artículo 99. Los miembros principales y suplentes de la Comisión Nacional de Estabilidad serán designados mediante Resolución del Ministro de Educación, Cultura y Deportes, realizarán sus funciones por un período de dos (2) año prorrogable por una sola vez.

Artículo 100. Para ser Miembro de la Comisión Nacional de Estabilidad se requiere:

1. Ser venezolano.
2. Ser profesional de la docencia, con categoría no menor de Docente IV.

Artículo 101. Son atribuciones de la Comisión Nacional de Estabilidad:

1. Dictar su Reglamento Interno.
2. Dictar el Reglamento General de Funcionamiento de las Comisiones Regionales.
3. Atender las consultas que en materia de su competencia le sean formuladas.
4. Estudiar y procesar los casos que por escrito le sean planteados por los docentes, organizaciones gremiales y sindica-

les de los profesionales de la docencia y demás organismos administrativos competentes en materia de estabilidad.

5. Interponer los recursos pertinentes por ante los organismos administrativos que corresponda, en los casos de resoluciones, normas y decisiones que afecten el Principio de Estabilidad.

6. Velar por la debida elaboración de los expedientes en casos de hechos que dieren lugar a la aplicación de sanciones disciplinarias.

7. Revisar, sustanciar y emitir su pronunciamiento sobre los expedientes sometidos a su consideración y remitirlos al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes o a la Comisión Regional, según el caso, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los mismos. Dicho plazo podrá ser prorrogado por cinco (5) días hábiles.

8. Informar al interesado, en su oportunidad, acerca del desarrollo del proceso y expedir copia certificada de sus decisiones, con el análisis de sus conclusiones y resultado de sus actuaciones, como órgano de vigilancia y control, del cumplimiento de la normativa y procedimientos reglamentarios.

9. Oír en alzada, las apelaciones que le sean formuladas por las Comisiones Regionales de Estabilidad, por las organizaciones sindicales y gremios que agrupen a profesionales de la docencia, y por el interesado.

10. Cualquier otra que le fuere atribuida por Resolución del Ministro de Educación, Cultura y Deportes.

Sección Segunda

De las Comisiones Regionales de Estabilidad

Artículo 102. De conformidad con el presente Reglamento se constituirá una Comisión Regional de Estabilidad en cada una de las Zonas Educativas del país.

Artículo 103. Las Comisiones Regionales de Estabilidad funcionarán en las sedes de la Zona Educativa respectiva, y estarán constituidas por cinco (5) miembros, en la forma siguiente: Dos (2) profesionales de la docencia, con sus respectivos suplentes postulados por la Zona Educativa correspondiente, dos (2) profesionales de la docencia, con sus respectivos suplentes, en representación de los sindicatos de los trabajadores de la educación de la región, y un (1) profesional de la docencia escogido de mutuo acuerdo por los representantes de la Zona y de los sindicatos, quien ejercerá la Presidencia. Durarán un (1) año en sus funciones. Su designación se hará mediante Resolución del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

Artículo 104. Para ser miembro de la Comisión Regional de Estabilidad se requiere:

1. Ser venezolano.

2. Ser profesional de la docencia, con categoría no menor de Docente III.

Artículo 105. Corresponde a las Comisiones Regionales de Estabilidad:

1. Estudiar los casos sometidos a su consideración por los profesionales de la docencia, cuando consideren lesionados sus derechos sobre estabilidad.

2. Emitir opinión razonada sobre los casos sometidos a su consideración dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de los mismos. Dicho plazo podrá ser prorrogado hasta por cinco (5) días hábiles.

3. Realizar las gestiones dirigidas al esclarecimiento de los hechos relacionados con el caso sometido a su estudio.

4. Expedir copia certificada de su opinión.

5. Remitir los expedientes y las opiniones emitidas a la Comisión Nacional, de existir apelaciones.

6. Las demás que le sean señaladas por la Comisión Nacional de Estabilidad.

Capítulo III

Del Régimen de Licencias

Disposiciones Generales

Artículo 106. Licencia o permiso es la autorización que otorga el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes al personal docente para no concurrir a sus labores por causa justificada y por tiempo determinado, conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 107. El disfrute de licencia o permiso no interrumpe la antigüedad en el servicio. El tiempo que duren los permisos o licencias será considerado y reconocido por la autoridad educativa para todos los efectos del escalafón y demás beneficios que correspondan al docente en razón de la antigüedad y de la prestación del servicio.

Artículo 108. El personal docente, al término de la licencia, conservará el derecho, a reincorporarse al cargo que venía desempeñando. El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes tomarán las previsiones necesarias a objeto de garantizar este derecho. En ningún caso se desmejorarán las condiciones de trabajo del profesional de la docencia en referencia, sujeto a la reincorporación.

Artículo 109. Cuando se compruebe que el docente solicitante del permiso adujo motivos falsos en ocasión de la peti-

ción del mismo, o que presentó documentos o comprobantes falsificados o alterados, o que utilizó el tiempo del permiso para una finalidad distinta de aquella para lo cual fue otorgado, o incumplió algunas de las obligaciones que al respecto impone el presente Reglamento, se considerará nulo en forma absoluta el correspondiente permiso o licencia y se aplicará lo previsto en el régimen disciplinario de la Ley Orgánica de Educación y de este Reglamento

Artículo 110. Si la causa que motiva la licencia cesare antes de la conclusión del tiempo concedido, el docente deberá reintegrarse a sus labores de acuerdo con lo previsto en el presente Reglamento.

Sección Primera

De los Tipos de Licencias

Artículo 111. Las licencias podrán ser de concesión obligatoria, de concesión potestativa y especial, remuneradas o no remuneradas.

Son de concesión obligatoria y remunerada:

1º En caso de enfermedad o accidente grave sufrido por el docente que no le produzca invalidez, hasta por el lapso que dure su recuperación, según el facultativo.

2° Por matrimonio del docente, ocho (8) días hábiles.

3° Por nacimiento de un hijo, dos (2) días hábiles.

4° En caso de comparecencia obligatoria ante autoridades legislativas, administrativas o judiciales, por el tiempo necesario.

5° Por estado de gravidez, ocho (8) semanas antes del alumbramiento y doce (12) semanas después del mismo, pudiendo ser acumulable o no, según juicio del facultativo, o por mayor tiempo a causa de alguna enfermedad debidamente comprobada que sea consecuencia del embarazo o del parto.

Esta licencia no incluye días de vacaciones, ni los no laborales, de acuerdo a lo establecido en la

Ley Orgánica del Trabajo.

6° En caso de adopción legal de un niño, la docente madre adoptiva gozará de licencia hasta que el niño adoptado alcance las doce (12) semanas de nacido.

7° En caso de enfermedad o accidente grave sufrido por ascendientes, descendientes en primer grado, cónyuge o concubino del docente hasta por quince (15) días hábiles.

8° En caso de enfermedad o accidente grave comprobado, ocurrido fuera del país a los ascendientes o descendientes en primer grado o cónyuge del docente y que éste tenga que trasladarse al lugar del hecho, hasta por veinte (20) días hábiles.

9° En caso de siniestro comprobado que afecte los bienes del docente por el tiempo necesario a juicio de la autoridad competente.

10° En caso de participación en eventos deportivos nacionales o internacionales, cuando sea solicitado por los organismos competentes, por el tiempo requerido para el traslado, enfrentamiento y participación.

Dichos permisos no pueden exceder de noventa (90) días hábiles en el lapso de un año según lo dispuesto en la Ley del Deporte.

11° En caso de participación en eventos científicos, culturales nacionales o internacionales, cuando sea solicitado por los organismos competentes por el tiempo requerido para el traslado y participación en el evento.

12° En caso de fallecimiento de ascendientes, descendientes o cónyuge o concubina hasta por cinco (5) días hábiles si el deceso ocurre en el país y hasta por siete (7) días hábiles si ocurriese en el exterior y el profesional de la docencia tuviera que trasladarse al lugar del hecho.

13° La labor docente cumplida en el medio rural, en localidades cuya condición geoeconómica sanitarias o de otra índole hagan difíciles o penosos el desempeño de la función docente, permitirá a quienes la realicen, la obtención de licencias hasta por treinta (30) días hábiles, por cada tres (3) años de servicios prestados.

14° Para dictar o asistir a cursos de capacitación o mejoramiento profesional que responden a los programas del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, por el tiempo requerido.

15° Para ejercer cargos directivos y de representación en las organizaciones gremiales y sindicales de los profesionales de la docencia, legalmente constituidas en el número, por el tiempo y en las condiciones establecidas por la Autoridad competente, conforme a la normativa legal vigente. Las otras que señalen las leyes.

Artículo 112. Serán de concesión obligatoria no remuneradas:

1° Para desempeñar cargos de representación popular o de libre nombramiento y remoción.

2° Para acompañar al cónyuge, cuando éste sea designado para cumplir funciones diplomáticas o cargos en organizaciones internacionales de rangos similares.

3° Para miembros de las Directivas Nacionales y Regionales de las organizaciones sindicales de los profesionales de la docencia.

4° Para cursar estudios de postgrado, en áreas de la educación o de su especialidad cuando el aspirante haya obtenido beca para efectuar dichos estudios.

Artículo 113. Serán de concesión potestativa, remuneradas o no:

1° Para cursar estudios de perfeccionamiento y/o actualización profesional, relacionados con el nivel o modalidad donde preste el servicio.

2° Para acompañar al cónyuge, cuando éste siga estudios en el exterior, hasta por tres (3) años.

3° Para asistir a conferencias, congresos, seminarios y similares, relacionados con la profesión docente, hasta por el tiempo de duración del evento.

4° Para cursar estudios de postgrado en áreas de la educación por el tiempo requerido para realizar los estudios respectivos, sin exceder de dos (2) años para la Maestría y tres (3) para el Doctorado, con prórroga de un año como máximo.

5° Para realizar labores de investigación pedagógica, cuando éstas respondan a objetivos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de la educación y a las prioridades establecidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, por el tiempo requerido.

6° Las concedidas a los docentes que sean requeridos por organismos públicos o privados nacionales o extranjeros, asignados a programas de cooperación técnica, en virtud de tratados o acuerdos de intercambio cultural bilaterales o multilaterales celebrados por la República, por el tiempo requerido.

Sección Segunda

De la Licencia Sabática

Artículo 114. Los miembros del personal docente podrán gozar de licencia no remunerada hasta por un año, cada siete años de servicio consecutivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Orgánica de Educación. Cuando el docente ejerza cargo diurnos y nocturnos simultáneamente, podrá hacer uso de dicha licencia para los dos cargos o para uno solo, si es de su voluntad.

Artículo 115. A los fines del cumplimiento del artículo 98 de la Ley Orgánica de Educación, el personal docente podrá gozar de licencia especial remunerada hasta por un año y uno de prórroga, siempre y cuando la licencia sea para realizar

labores de investigación o de perfeccionamiento y/o actualización en aquellas áreas de interés prioritario para la educación y para el país. En todo caso, los beneficiarios de licencia sabática remunerada deben, al término de la misma, continuar prestando sus servicios por un lapso no inferior a dos (2) años.

Artículo 116. Son compatibles con el beneficio de la licencia sabática no remunerada los programas de becas que establezca el Estado para el personal docente en sus áreas prioritarias.

Artículo 117. Para el otorgamiento de la licencia remunerada las autoridades educativas deberán observar los siguientes criterios: antigüedad en el servicio y méritos profesionales, y exigirán la presentación de un proyecto de estudio o de investigación a realizar, que incluya un plan de trabajo, con previsiones relativas al seguimiento, control y evaluación del mismo.

Artículo 118. Quien disfrute del año sabático con goce de la remuneración total, no podrá desempeñar actividades remuneradas.

Artículo 119. La autoridad educativa competente tomará las medidas administrativas pertinentes que se originen de la reincorporación al cargo del profesional de la docencia. En caso de que éste decida no reincorporarse, deberá notificarlo con un mes de anticipación a la autoridad respectiva.

Sección Tercera

De la Solicitud y Concesión de la Licencia

Artículo 120. A los fines de tramitación de las licencias, el profesional de la docencia deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1º Dirigir petición escrita al Director del plantel o al Jefe inmediato del servicio, con la debida anticipación a la fecha en la cual aspire disfrutar del correspondiente permiso.

2º Exponer las razones que fundamentan la petición.

3º Acompañarla petición con los recaudos que sean necesarios.

Artículo 121. Cuando por circunstancias excepcionales el Funcionario no tenga tiempo de solicitar previamente el permiso, dará aviso de tal situación a su superior inmediato en un término no mayor de setenta y dos (72) horas; al reintegrarse a sus funciones antes de los quince (15) días siguientes justificará por escrito su inasistencia y presentará las pruebas correspondientes.

Artículo 122. La simple solicitud de licencia no autoriza al profesional de la docencia para hacer uso de la misma, salvo que se trate de su estado de salud, maternidad, gravedad o

fallecimiento del cónyuge, ascendiente o descendiente, asuntos legales, así como por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados ante la autoridad competente.

Artículo 123. La concesión de la licencia o permiso corresponderá:

1° Al Director del plantel, cuando no exceda de tres (3) días hábiles.

2° Al Supervisor Jefe de Distrito, cuando la duración sea mayor de tres (3) días hábiles y no exceda de ocho (8) días hábiles.

3° Al Supervisor Jefe de la Zona Educativa, cuando la duración sea mayor de ocho (8) días hábiles y no exceda de quince (15) días hábiles.

4° Al Director de Área o a quien éste haya delegado dicha responsabilidad, cuando la duración sea mayor de quince días hábiles y no exceda de treinta días hábiles.

5° Al Ministro de Educación, Cultura y Deportes o a quien éste haya delegado el conocimiento de tales circunstancias, cuando exceda de treinta (30) días hábiles.

Artículo 124. Para la tramitación y decisión de las licencias por parte de la Autoridad competente, regirán los siguientes, lapsos:

1° Cuando se trate de casos que se formulen ante el mismo órgano, la decisión deberá ser notificada en un lapso que no podrá exceder de tres (3) días hábiles, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor, en cuyo caso la situación se resolverá inmediatamente quedando sujeta el solicitante a comprobación posterior de la causal.

2° Cuando se trate de casos cuya decisión corresponda a órganos superiores, distintos al señalado en el ordinal anterior, el lapso para la notificación de la decisión no podrá ser mayor de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de dicha solicitud, en la unidad competente para su otorgamiento. Esta decisión se comunicará al órgano que recibió la solicitud o al interesado según el caso.

Artículo 125. Las Licencias sólo podrán hacerse efectivas a partir de la fecha en que hayan sido válidamente otorgadas y si la causa que motiva la licencia cesare antes de la conclusión del tiempo concedido, el docente deberá reintegrarse a sus labores.

Sección Cuarta

De las Comisiones de Servicios

Artículo 126. La Comisión de Servicio es el cometido o misión especial que circunstancialmente ordena un organismo competente de la Administración Pública a un funcionario o profesional de la docencia pero que lo desempeñe, en la misma o diferente localidad, tanto en el país como en el exterior, en otro cargo de esa institución, o de otro Despacho de la Administración Pública.

Artículo 127. Los profesionales de la docencia que estando al servicio del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes reciban de éste, autorización para separarse del cargo, a fin de cumplir funciones docentes en otros organismos oficiales, serán declarados en comisión. El tiempo que transcurra en el desempeño de las mismas será computado a todos los efectos.

Artículo 128. El desempeño de una comisión de servicio no supone variación alguna en la remuneración total del docente, salvo el pago que se le haga por concepto de viáticos y de otras compensaciones, cuyo otorgamiento se efectuará de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Artículo 129. Cuando un profesional de la docencia sea requerido para desempeñar sus funciones en planteles, dependencias o servicios educativos adscritos a los Estados, a los

Municipios, a Institutos Autónomos o a las Empresas del Estado o cuando por necesidades de la administración educativa se le solicite para servir dentro de ella en actividades de naturaleza distinta a la docente, tendrá derecho a ser declarado en comisión por la autoridad educativa competente, con reconocimiento expreso de los años que permanezca en las gestiones, a los efectos del escalafón y demás beneficios vinculados a antigüedad, conservando el derecho a reincorporarse al cargo que desempeñaba o a otro equivalente, conforme a las condiciones de estabilidad previstas en este Reglamento.

Artículo 130. Una comisión de servicio puede ser ordenada para el desempeño de cargos cuyos titulares estén ausentes temporal o definitivamente. Cuando se trate de ausencia temporal, la comisión podrá conferirse hasta por el término de aquella y su de definitiva, hasta por un lapso máximo de tres (3) meses. Vencido este término, el comisionado cesará en el cargo de tales funciones y el cargo deberá proveerse mediante concurso.

Artículo 131. La actuación del profesional de la docencia durante la comisión de servicio deberá evaluarse y sus resultados incorporarse a la calificación de servicio que, en forma periódica, se le hará de conformidad con el presente Reglamento.

Artículo 132. El conferimiento de una comisión de servicio se notificará al profesional de la docencia, con expresión del

objeto de la misma, el cargo y su ubicación, duración y cualquier otra circunstancia que la autoridad juzgue necesaria. Se indicará también en forma expresa si la comisión se realizará bajo la dirección o supervisión de un funcionario distinto al supervisor inmediato, identificándolo en su caso, y si la misma envuelve o no la suspensión temporal de las funciones inherentes al cargo del cual es titular.

Capítulo IV

De los Traslados de los Profesionales de la Docencia

Artículo 133. El traslado es el cambio de un profesional de la docencia, de una dependencia a otra, para ejercer un cargo de la jerarquía de docente de aula, con el mismo tiempo de dedicación y categoría académica. El traslado se hará efectivo a partir de la fecha en que se haya concedido, por la autoridad competente y de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento.

Artículo 134. Los traslados se realizarán:

1. por solicitud del docente.
2. por cambio mutuo de destino entre docentes.
3. por necesidades de servicio.

Artículo 135. Los traslados a solicitud del profesional de la docencia, podrán ser concedidos por razones de salud, necesidad urgente del grupo familiar o por motivo de comprobada justificación por parte del interesado.

Artículo 136. Los traslados por cambios mutuos se podrán conceder, previa solicitud por escrito, cursada por los interesados y aceptada por la autoridad competente. No podrán efectuarse durante los tres últimos meses del año escolar.

Artículo 137. Las solicitudes de traslado se recibirán dentro del primer semestre del año escolar. La decisión al respecto entrará en vigencia durante el primer bimestre del siguiente año escolar. El traslado procederá siempre y cuando exista la disponibilidad presupuestaria correspondiente.

Artículo 138. El traslado del profesional de la docencia por necesidades de servicio podrá ocurrir por las siguientes causas:

1. Por reorganización de los planteles o servicios educativos, debido a reducción de secciones, cambio de nivel o modalidad educativa que se impartan y modificaciones en los planes y programas de estudio.
2. Por eliminación, fusión o reubicación del plantel o servicio educativo.

La reubicación en otra ciudad requiere el consentimiento previo y expreso del interesado.

Capítulo V

Del Perfeccionamiento de los Profesionales de la Docencia

Artículo 139. La actualización de conocimientos, la especialización de las funciones, el mejoramiento profesional y el perfeccionamiento, tienen carácter obligatorio y al mismo tiempo constituyen un derecho para todo el personal docente en servicio. Las autoridades educativas competentes, en atención a las necesidades y prioridades del sistema educativo, fijarán políticas establecerán programas permanentes de actualización de conocimientos, perfeccionamiento y especialización de los profesionales de la docencia con el fin de prepararlos suficientemente, en función del mejoramiento cualitativo de la educación. Asimismo, organizará seminarios, congresos, giras de observación y de estudio, conferencias y cualesquiera otras actividades de mejoramiento profesional.

Artículo 140. Las autoridades educativas competentes, a los fines de la aplicación de los programas permanentes de actualización de conocimientos, perfeccionamiento y especialización de los profesionales de la docencia, establecerán un régimen de estímulos y facilidades, así como sistemas espe-

ciales de acreditación, estudios a distancia, becas y créditos educativos.

Artículo 141. El ejercicio de la docencia en regiones fronterizas, medio rural o en las localidades cuyas condiciones geográficas, económicas, sanitarias o de otra índole hagan penoso o difícil el desempeño de sus funciones, constituye credencial de mérito en la selección de candidatos para la realización de cursos de mejoramiento profesional, organizados o patrocinados por las autoridades educativas y para la selección de candidatos a ser beneficiados en programas de becas para realizar estudios de postgrado.

TÍTULO IV

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL PERSONAL DOCENTE

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 142. Las disposiciones del presente capítulo regirán para los miembros del personal docente en servicio activo, en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo, excepto el de educación superior.

Artículo 143. Los miembros del personal docente que incurran en incumplimiento de sus deberes, serán sancionados disciplinariamente conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Educación, el presente Reglamento y demás normativa jurídica sobre la materia, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y administrativas que pudieran derivarse de los mismos hechos y de la sanción que le correspondiere por efecto de otras leyes.

Artículo 144. En el caso en que un docente incurra en más de una falta, se hará la investigación conforme al procedimiento previsto para la falta que merezca la sanción más grave, pero abarcará todas las faltas cometidas.

Artículo 145. Los miembros del personal docente están en la obligación de comunicar a la autoridad que corresponda, los hechos que merezcan sanciones disciplinarias conforme a la Ley y de los cuales tenga conocimiento con ocasión del ejercicio de su cargo.

Artículo 146. Para la aplicación de toda sanción se tomarán en cuenta los antecedentes del docente, la naturaleza de la falta, la gravedad de los perjuicios causados y las demás circunstancias relativas al caso. Ningún docente podrá ser sancionado disciplinariamente sino una sola vez por una misma causa.

Artículo 147. La Comisión Nacional de Estabilidad y la Comisión Regional de Estabilidad competente tienen el de-

ber de cuidar la debida elaboración de los expedientes en casos de hechos que dieran lugar a la aplicación de sanciones disciplinarias.

Artículo 148.

El Ministro de Educación Cultura y Deportes, el Director General del Ministerio, el Jefe o Director de la Zona Educativa, el Director de Educación, el Supervisor Jefe de Distrito, el Supervisor Jefe de Sector, o el Director del plantel o servicio educativo, son los funcionarios competentes para ordenar, con los recursos disponibles en su nivel o en los niveles jerárquicos inferiores, la apertura de averiguaciones de hechos que pudieran ser calificados como causales de sanción disciplinaria.

Capítulo II

De las Faltas y de las Sanciones

Sección Primera

De las Faltas

Artículo 149. A los efectos de aplicación de sanciones disciplinarias las faltas cometidas por el personal docente se clasifican en graves y leves.

Artículo 150. Los miembros del personal docente incurrir en falta grave en los siguientes casos:

1° Por aplicación de castigos corporales o afrentosos a los alumnos.

2° Por manifiesta negligencia en el ejercicio del cargo.

3° Por abandono del cargo sin haber obtenido licencia o antes de haber hecho entrega formal del mismo a quien deba reemplazarlo o a la autoridad educativa competente, salvo que medien motivos de fuerza mayor a casos fortuitos.

4° Por la inasistencia y el incumplimiento reiterado de las obligaciones que le corresponden en las funciones de evaluación del rendimiento estudiantil.

5° Por observar conducta contraria a la ética profesional, a la moral, a las buenas costumbres y a los principios que informan nuestra Constitución y las demás leyes de la República.

6° Por violencia de hecho o de palabras contra sus compañeros de trabajo, sus superiores jerárquicos o sus subordinados.

7° Por utilizar medios fraudulentos para beneficiarse de cualesquiera de los derechos que acuerde la Ley Orgánica de Educación y el presente Reglamento.

8° Por coadyuvar a la comisión de faltas graves cometidas por otros miembros de la comunidad educativa.

9° Por reiterado incumplimiento de obligaciones legales reglamentarias o administrativas.

10° Por inasistencia injustificada durante tres días hábiles o seis turnos de trabajo en el período de un mes.

Artículo 151. También incurren en falta grave los profesionales de la docencia en ejercicio de cargos de dirección o supervisión de la educación, cuando violen o amenacen la estabilidad de los educadores o dieren lugar a la aplicación de medidas legales contra éstos.

Artículo 152. Los miembros del personal docente incurren en falta leve en los siguientes casos:

1. Retardo reiterado en el cumplimiento del horario de trabajo.
2. Inasistencia injustificada al trabajo durante dos (2) días hábiles en el término de un mes.
3. Incumplimiento de las normas de atención debida a los miembros de la comunidad educativa.

4. Incumplimiento reiterado de las actividades docentes relativas a la planificación, desarrollo de la enseñanza, y uso y mantenimiento de las ayudas pedagógicas en el aula.

5. Retardo injustificado en la entrega de los recaudos relativos a la administración escolar.

Sección Segunda

De las Sanciones

Artículo 153. Las sanciones disciplinarias aplicables a los miembros del personal docente son:

1. Amonestación oral.
2. Amonestación escrita.
3. Separación temporal del cargo,
4. Destitución e inhabilitación para el ejercicio de la profesión docente.

De las Amonestaciones

Artículo 154. La amonestación oral consiste en la represión que hace el supervisor inmediato, en el lugar de trabajo, personal y privadamente, al docente objeto de la sanción.

Artículo 155. Son causales de amonestación oral:

1. Retardo injustificado y reiterado en el horario de trabajo.
2. Retardo en la entrega de recaudos de la planificación enseñanza o evaluación de los alumnos.
3. Falta de cortesía en el trato con miembros de la comunidad educativa.

Artículo 156. La amonestación escrita consiste en la represión que, extendida por escrito, hace el funcionario de mayor jerarquía dentro del servicio o plantel, al docente objeto de la sanción.

Artículo 157. Son causales de amonestación escrita:

1. Tres amonestaciones orales en el término de un año.
2. La inasistencia injustificada al trabajo durante un (1) día hábil, o dos turnos de trabajo, en el término de un mes.
3. La inasistencia injustificada al trabajo durante dos (2) días hábiles en el plazo de seis (6) meses, o durante tres (3) días hábiles en el plazo de un año.

Artículo 158. Tres amonestaciones escritas constituyen causal de separación del cargo, cuando se produzcan dentro del plazo de un año.

De la Destitución

Artículo 159. La destitución consiste en la separación definitiva del cargo o cargos que venía desempeñando el docente, con inhabilitación para el servicio en cargos docentes, durante un período de tres a cinco años, por decisión motivada del Ministro de Educación, Cultura y Deportes.

De la Separación del Cargo

Artículo 160. La separación del cargo consiste en la privación temporal de su ejercicio, sin remuneración ni consideración de tiempo de servicio.

La medida surtirá efecto desde su notificación al docente y se la hará del conocimiento de la Oficina de Personal, Comisión Nacional de Estabilidad y Junta Calificadora Nacional.

Artículo 161. El abandono injustificado del trabajo durante dos (2) días hábiles constituye causal de separación del cargo por un mes, cuando se produzca en el plazo de treinta (30) días continuos. La reincidencia es causal de separación por tres (3) meses, si se produce en el plazo de un año.

Artículo 162. Son causales de separación del cargo hasta por un lapso de once (11) meses, las siguientes:

1. Haber sido objeto de tres (3) amonestaciones escritas en el término de un año.
2. Incumplir en forma injustificada y reiterada con el tiempo destinado para el logro de los objetivos programáticos.
3. Incumplimiento injustificado en la entrega de los recaudos de la administración escolar.
4. Insubordinación reiterada a la autoridad educativa competente.

Artículo 163. La suspensión con goce de sueldo terminará, además de lo previsto en el artículo anterior, por revocatoria de la medida, o si se dictare decisión de sobreseimiento, o absolución en la averiguación efectuada, o si al funcionario le fuere impuesta una sanción con motivo del procedimiento disciplinario iniciado.

Artículo 164. Las faltas graves serán sancionadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes según la gravedad, con la separación del cargo durante un periodo de uno (1) a tres (3) años.

La reincidencia en la comisión de falta grave será sancionada con destitución e inhabilitación para el Ejercicio en cargos docentes o administrativos durante un período de tres (3) a cinco (5) años.

Artículo 165. Los miembros del personal docente que incurran en faltas leves, quedan sujetos a las siguientes sanciones disciplinarias:

1. Amonestación oral.
2. Amonestación escrita.
3. Separación temporal del cargo sin goce de sueldo, hasta por un lapso de once (11) meses.

Artículo 166. La amonestación oral y la amonestación escrita serán sancionadas por el Director del plantel, Jefe de Distrito, Jefe o Director de Zona Educativa, o Jefe del Servicio Educativo o dependencia administrativa a la cual esté adscrito el docente sancionado. La sanción de separación del cargo será aplicada mediante Resolución motivada, por el Ministro de Educación, Cultura y Deportes, quien establecerá, por la gravedad de la falta, el término de la sanción, de la siguiente manera: Hasta por once (11) meses en los casos de reincidencia o los previstos en los numerales 1 y 2 del artículo 161, y hasta por seis (6) meses los previstos en los numerales 2 y 4, del mismo artículo 161 de este Reglamento.

Contra las sanciones impuestas por faltas leves los docentes podrán intentar los recursos de reconsideración y jerárquico establecidos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Sección Segunda

De los Procedimientos Disciplinarios y de la Instrucción de Expedientes

Artículo 167. Cuando un docente presuntamente hubiere incurrido en un hecho que amerite amonestación oral, su superior inmediato, oído el docente, decidirá sobre su responsabilidad y aplicará la sanción si la considerare procedente.

Artículo 168. Cuando se hubiere cometido un hecho que amerite amonestación escrita, el funcionario de mayor jerarquía dentro del servicio o plantel educativo, oirá al docente, previa participación verbal del hecho que se le impute. Oído el funcionado se emitirá un informe que contendrá una relación sucinta de los hechos y de las conclusiones a que se haya llegado. Si resultase la responsabilidad del docente, se aplicará la sanción procedente.

Artículo 169. Realizada la amonestación oral o escrita, se comunicará por escrito a la Oficina de Personal y al Comité de Substanciación respectivo, para su registro en la Hoja de Servicio del docente sancionado.

Artículo 170. El funcionario facultado para aplicar la sanción podrá solicitar la colaboración de la Oficina de Personal y de la Contraloría Interna del Ministerio de Educación; Cultura y Deportes, según sea el caso, en la práctica de las diligencias que fueren necesarias para realizar la investigación.

Artículo 171. En aquellos casos en que, atendida la gravedad o la naturaleza de la infracción, un docente presuntamente hubiere incurrido en hechos que ameriten la separación del cargo, destitución e inhabilitación, el Ministro de Educación, Cultura y Deportes, el Director General del Ministerio, el Jefe o Director de la Zona Educativa, el Director de Educación, el Supervisor Jefe de Distrito, el Supervisor Jefe de Sector, o el Director de plantel o servicio educativo, ordenará llevar a cabo la respectiva averiguación administrativa inicial, la cual deberá realizarse dentro de un lapso de treinta (30) días hábiles a partir de la fecha en que se imparta la orden, prorrogables por una sola vez si fuere necesario.

Artículo 172. El funcionario designado para realizar la averiguación elaborará un expediente, foliado en letras y números, que contendrá las declaraciones del docente investigado, las actuaciones practicadas y, en general, todo el material probatorio para hacer constar los hechos, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación. En el informe final de la averiguación se especificará y motivará las conclusiones sobre la participación del docente en los hechos, que puedan dar origen a la apertura de expediente disciplinado.

Artículo 173. Para la averiguación y determinación de faltas presuntamente cometidas por miembros del personal docente, a los fines de la decisión correspondiente, se instruirá el expediente respectivo, de acuerdo al siguiente procedimiento:

1. El Director de Educación o de la Zona Educativa, al tener conocimiento del resultado de una averiguación administrativa inicial, en la que resulte presuntamente responsable de la comisión de faltas un docente, procederá a ordenar la emisión del Acta de Proceder, y designará al Instructor Especial para que dirija la averiguación del caso, suministrándole toda la información y documentos pertinentes.

2. El Director del plantel, Supervisor del sector, Jefe de Distrito, de Servicio o Director de Zona o Director de Educación, son los funcionarios competentes para emitir el Acta de Proceder que da inicio al procedimiento disciplinario.

3. El Instructor Especial, una vez analizada el Acta de Proceder y los recaudos o informes de los hechos presuntamente calificables como falta, dictará el Auto de Proceder, con la motivación de la decisión, indicación de los elementos de juicio tenidos en cuenta y la determinación de las normas que definen las faltas investigadas.

4. Una vez dictado el Auto de Proceder, el Instructor Especial lo notificará a la Comisión Regional de Estabilidad y citará al docente investigado a fin de que rinda Declaración

Informativa sobre los hechos presuntamente calificables como falta. Asimismo, citará a los denunciantes o testigos o personas que puedan tener conocimiento de los hechos. Con estas declaraciones deberá elaborar el Informe Preliminar con las conclusiones que permitan establecer, con certeza, si existen fundamentos para continuar la averiguación y determinar la presunta responsabilidad disciplinaria del docente.

5. Si hubiere méritos o indicios que hicieren presumir la comisión de una falta por parte de un docente, el Instructor Especial deberá citar al investigado, mediante Boleta de citación, para que comparezca a conocer de los hechos y su presunta participación en ellos.

Artículo 174. La Boleta de Citación deberá contener:

1. Identificación del organismo del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes que lleve a cabo la instrucción del expediente.
2. Identificación precisa y completa del docente citado a comparecer.
3. Lapso no inferior a cinco (5) días hábiles en el cual debe comparecer el docente citado.

El inicio del lapso de comparecencia no podrá fijarse antes del tercer día hábil siguiente a la citación personal, y a los quince (15) días hábiles si fuere hecha mediante cartel publi-

cado en prensa de amplia circulación en la región del plantel o servicio en el cual se desempeña el averiguado.

4. Horario de oficina dispuesto para el lapso de comparecencia.

5. Formulación completa y precisa de los hechos y cargos que se imputan al docente citado.

6. Indicación al citado de que puede contestar, aclarar o informar sobre los hechos, y sobre su responsabilidad en ellos, en el mismo acto de comparecencia, o dentro de un nuevo lapso de diez (10) días hábiles a contar desde el día de la comparecencia.

7. Indicación al citado de que puede negarse a declarar conforme al Principio Constitucional que lo protege, contestar los cargos verbalmente en el momento de la comparecencia, o presentar un escrito, o solicitar una prórroga por el mismo lapso de comparecencia para presentar un escrito de respuesta, rechazo, aceptación o descargo.

8. Lugar, fecha y hora de elaboración de la Boleta de Citación.

9. Identificación y firma del Instructor Especial.

Artículo 175. La citación del docente deberá hacerse personalmente, en su dependencia de trabajo o en su domicilio, en horario hábil para el ejercicio de la docencia.

Artículo 176. Cuando no fuere posible practicar la citación personalmente, o se negare el averiguado a firmar el recibo correspondiente, se procederá a citarlo por un único cartel publicado en prensa de amplia circulación en la región, con el señalamiento de que transcurridos quince (15) días desde la publicación, se entenderá consumada la citación para el acto de comparecencia a la formulación de los cargos imputados en su contra.

Artículo 177. Si el docente investigado no compareciere dentro del lapso fijado en la Boleta de Citación o en el Cartel publicado, se dejará constancia de ello en el expediente instruido.

Artículo 178. El día hábil siguiente a la terminación del lapso de comparecencia, el Instructor Especial procederá a fijar en el expediente el Auto de Apertura del lapso Probatorio dentro del procedimiento. El lapso de promoción de pruebas, en el cual el investigado podrá promover o solicitar las diligencias que considere necesarias y pertinentes, será de diez (10) días hábiles. Y el lapso para evacuar las pruebas promovidas, en el cual también podrá presentar nuevos informes o documentos, será de quince (15) días hábiles.

Artículo 179. El Instructor Especial deberá velar por el cumplimiento estricto de los lapsos y procedimientos probatorios y dará todas las facilidades posibles al docente averiguado, para la promoción y evacuación de todos los medios probatorios pertinentes, de acuerdo a los hechos y circunstancias objeto de investigación, orientando su actuación por la normativa vigente en la materia, en la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, el Código de Procedimiento Civil y el Código de Enjuiciamiento Criminal.

Artículo 180. Concluido el lapso probatorio, el Instructor Especial procederá a fijar, para el quinto (5º) día hábil siguiente, el Acto de Informe, en el cual el interesado podrá consignar escritos con las conclusiones y análisis sobre los hechos recogidos en el Expediente, que puedan ilustrar sobre el reconocimiento de la causa.

Artículo 181. El Instructor Especial levantará un Acta Final con el resumen de todas las circunstancias contenidas en el expediente y dejará constancia motivada de su opinión sobre la procedencia de medidas disciplinarias, con la fundamentación legal y reglamentaria correspondientes.

Artículo 182. El docente averiguado tendrá acceso al expediente que se esté instruyendo en todo momento y etapas del proceso, pudiendo leer y obtener copias certificadas por el Instructor. En todas sus actuaciones el docente podrá estar asistido de Abogado de su confianza.

Artículo 183. Concluidas todas las actuaciones, el Instructor Especial revisará el expediente, cuidando que esté debidamente foliado en letras y números, ordenado cronológicamente y firmadas y selladas todas las Actas y recaudos.

Artículo 184. En aquellos casos en que se desprenda la presunta responsabilidad de un docente en faltas que ameriten sanción disciplinaria con separación del cargo, destitución e inhabilitación para el ejercicio profesional, el Instructor Especial elaborará el Informe Final y remitirá el expediente al Ministro de Educación, Cultura y Deportes, a los efectos de su revisión en la Consultoría Jurídica, y elaboración de la Resolución con la decisión correspondiente. La Resolución motivada dictada por el Ministro de Educación, Cultura y Deportes, será notificada formalmente al docente, a través de la Zona Educativa, Dirección de Educación a Jefatura de la dependencia a la cual esté adscrito el docente.

Artículo 185. Los miembros del personal docente que hubieren sido sancionados de conformidad con las previsiones de la Ley Orgánica de Educación y el presente Reglamento, podrán ejercer el recurso de reconsideración contra las sanciones impuestas por el Ministro de Educación, Cultura y Deportes y el recurso jerárquico, por ante este funcionario, en contra de las sanciones impuestas por funcionarios de menor jerarquía, todo ello según lo previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

TÍTULO V

DE LAS VACACIONES DEL PERSONAL DOCENTE

Artículo 186. El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes establecerá en el calendario escolar el lapso de vacaciones del personal docente.

Las vacaciones del personal docente adscrito a los planteles educativos en función de enseñanza directa será de sesenta días hábiles, distribuidos en el año escolar, y en consideración de las peculiaridades de vida y las condiciones de trabajo de las distintas regiones geográficas del país.

De la Previsión Social

Artículo 187. El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, conjuntamente con las organizaciones gremiales y sindicales que agrupan a los profesionales de la docencia, organizará un sistema de Previsión y Asistencia Social que permita la ejecución de políticas que garanticen mejores condiciones de vida para los profesionales de la docencia y sus familiares. Este sistema abarcará, entre otras, las siguientes materias: servicio de salud integral, plan de viviendas, seguros de vida, hospitalización, cirugía y maternidad, ahorros, préstamos, becas, programas recreacionales y vacacionales.

TÍTULO VI

DEL EGRESO Y DEL REINGRESO DE LOS PROFESIONALES DE LA DOCENCIA

Capítulo I

Del Egreso del Personal de la Docencia

Artículo 188. El Egreso del servicio activo de los profesionales de la docencia, procederá en los siguientes casos:

1° Por renuncia escrita del funcionario, debidamente aceptada.

2° Por invalidez, incapacidad o por jubilación, conforme a lo dispuesto en las regulaciones legales pertinentes.

3° Por separación del cargo o destitución e inhabilitación para el servicio en cargos docentes o administrativos, conforme a lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Orgánica de Educación.

4° Por renuncia tácita, cuando el docente acepta un cargo que sea incompatible con el cargo que desempeñe, de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente.

5° Por haber sido jubilado.

Artículo 189. La renuncia a, un cargo ejercido por un profesional de la docencia, deberá ser notificada por el interesado a la autoridad educativa competente, dentro del lapso establecido en la normativa legal vigente. El renunciante deberá permanecer en el ejercicio de su cargo, hasta que reciba la notificación de la aceptación correspondiente.

Artículo 190. Tan pronto como la renuncia haya sido aceptada, o hubiere procedido la pensión o la jubilación, la Oficina de Personal del organismo respectivo procederá a tramitar de inmediato el pago de las prestaciones sociales que pudieran corresponderle al docente, de acuerdo a lo previsto en el artículo 87 de la Ley Orgánica de Educación.

Capítulo II

De la Jubilación del Personal Docente

Artículo 191. La jubilación y pensiones del personal docente constituyen un derecho irrenunciable e imprescriptible y una obligación para el Estado. El Fondo de Jubilaciones y Pensiones del personal docente regulará todo lo relativo a la concesión y disfrute de este derecho.

Artículo 192. Los profesionales de la docencia podrán ser designados asesores eméritos de los servicios oficiales respectivos o contratados para funciones especiales en el servicio educativo. En este sentido, el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes estimulará la organización de un servicio

permanente que, tenga como objetivo fundamental propiciar la participación y vinculación del jubilado, al proceso, y sistema educativos.

Artículo 193. Los derechos económicos originados por las jubilaciones y pensiones de los profesionales de la docencia son transferibles a sus causahabientes, de conformidad con la normativa legal.

Capítulo III

Del Reingreso al Servicio Docente

Artículo 194. Los profesionales de la docencia que hayan egresado del servicio activo por renuncia o por invalidez, podrán solicitar su reingreso, previo cumplimiento de las normas establecidas en este Reglamento para el ingreso a la carrera docente.

Artículo 195. Los profesionales de la docencia al reingresar al servicio activo, serán objeto de la correspondiente evaluación y clasificación a fin de establecer su ubicación o reubicación, conforme a la Tabla de Posiciones de la Carrera Docente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 196. El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, los Estados, los Municipios y demás entidades del sector oficial, que dispongan de servicios o planteles educativos, procederán a evaluar y a clasificar a los profesionales de la docencia, de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento, en el término de los doce (12) meses siguientes a la publicación de este Reglamento.

Artículo 197. El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, los Estados, los Municipios y demás entidades del sector oficial que patrocinen servicios o planteles educativos, tomarán las previsiones necesarias para ofrecer programas especiales para el mejoramiento y actualización profesional del personal docente.

Artículo 198. Hasta tanto se completa el proceso inicial de evaluación y clasificación de los profesionales de la docencia, previsto en este Reglamento, la exigencia relativa a la categoría académica establecida por los miembros de las Juntas Calificadoras, las Comisiones de Estabilidad y los Jurados de los concursos, será sustituida por un requisito de antigüedad no menor de diez (10) años de servicio en planteles del sector oficial.

Artículo 199. Los profesionales de la docencia que actualmente se desempeñan en los cargos de Docente Coordinador, Subdirector, Director o Supervisor, podrán continuar ejer-

ciendo sus respectivos cargos en las condiciones anteriores a la publicación de este Reglamento, siempre que cumplan con los requisitos mínimos establecidos. Para solicitar su respectiva clasificación académica o para optar a otro cargo de superior jerarquía, deberán someterse a las previsiones establecidas en el presente Reglamento. A tal efecto, ejercerán hasta por un período el cargo que desempeñan, de acuerdo a la duración estipulada para los cargos de Docente Coordinador, Docente Directivo y Docente Supervisor, contados a partir de la fecha de publicación del presente Reglamento.

TÍTULO VIII

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 200. Los profesionales de la docencia, a partir de la clasificación de que sean objeto de acuerdo con las tablas y normas que al efecto sean dictadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, gozarán de los beneficios establecidos en el presente Reglamento, sin desmejorar las condiciones que de manera permanente hayan alcanzado en la carrera docente.

Artículo 201. A los fines de garantizar el mejoramiento de la calidad del sistema educativo venezolano y la ampliación de su cobertura, el Ministro de Educación, Cultura y Deportes podrá dictar las medidas administrativas que juzgue necesarias.

Artículo 202. Se derogan todas las disposiciones normativas contenidas en Reglamentos, Resoluciones, y demás instrumentos jurídicos que colidan con lo dispuesto en el presente Reglamento. Dado en Caracas, a los cuatro días del mes de octubre de dos mil. Año 190° de la Independencia y 141° de la Federación. (L.S)

Alfonso J. Arena V.

Profesor en el subsistema de Educación Básica con mas de 10 años de Experiencia, Abogado, Especialista en Derecho Penal Internacional y Derecho Internacional Humanitario, Actualmente cursando estudios de Doctorado en Ciencias de la Educación.



“Los padres son los primeros y principales educadores de sus propios hijos, y en este campo tienen incluso una competencia fundamental: son educadores por ser padres. Comparten su misión educativa con otras personas e instituciones, como la Iglesia y el Estado. Sin embargo, esto debe hacerse siempre aplicando correctamente el principio de subsidiariedad”.

Juan Pablo II
Carta a las Familias (1994).